



ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS CONFLICTOS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES casos del **SUR**

Editado por Kumudini Samuel, Claire Slatter
y Vagisha Gunasekara para DAWN

**ECONOMÍA
POLÍTICA DE LOS
CONFLICTOS Y
VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES**

**casos
del** **SUR**

Editado por Kumudini Samuel, Claire Slatter
y Vagisha Gunasekara para DAWN

Kumudini Samuel, Claire Slatter y Vagisha Gunasekara, 2024. Economía política de los conflictos y violencia contra las mujeres: Casos desde el Sur. DAWN. Suva (Fiji).

© 2024 DAWN bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND 4.0)

Título original: Political Economy of Conflict and Violence Against Women: Cases from the South. Publicado en inglés en 2019 por Zed Books Ltd., The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK.

Foto de portada Rita Willaert, CC BY-SA 2.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>>, via Wikimedia Commons. Una mujer nuba en el pueblo de Nyaro, Kau, montañas Nuba, Sudán

Esta publicación puede utilizarse libremente sin modificaciones y citando claramente a las autor y a DAWN.

Traducción al español equipo CiSoe.

**Sigue caminando
por estos senderos
Se han trazado para ti
Tomando tu mano
Aquí estoy caminando
Estoy caminando¹**

A Vijay K. Nagaraj

Amigo y colega, creativo y provocador pensador y estratega, de espíritu libre ecléctico cuyo intelecto y sabiduría, activismo de base y trabajo internacional, y sobre todo, su humanidad, inspiraron a muchos tanto en el Sur como en el Norte. Será siempre recordado y se le extrañará profundamente.

1- Letra de “Chal Diye” de Zeb y Haniya y Javed Bashir, Coke Studio, Pakistán, traducida del urdu - muy querida por Vijay

CONTENIDO

Lista de ilustraciones 6

Sobre los editores 7

Sobre los colaboradores 8

Agradecimientos 10

Introducción : enmarcando el análisis de la guerra, el conflicto y la violencia contra las mujeres a partir del feminismo del sur — el valor de una mirada con el lente de la economía política 13

Kumudini Samuel y Vagisha Gunasekara

1 La construcción de la ‘mujer responsable’: violencia estructural en la implementación de la estrategia de posguerra en Sri Lanka 41

Vagisha Gunasekara y Vijay K. Nagaraj

2 Poner fin a la violencia contra las mujeres en la región de highlands de Papúa Nueva Guinea: el papel del estado, la sociedad civil local y las industrias extractivas 73

Elizabeth Cox

3 Mujeres rurales en Colombia: de víctimas a protagonistas 114

Cecilia López Montaña y María—Claudia Holstine

4 Debatiendo la territorialidad: patriarcado, acumulación y despojo. “arraigo de la periferia”: mujeres, economía política y el mito de la construcción de la paz en el noreste de la India 156

Roshmi Goswami

5 Reimaginar la subversión: agencia y activismo de las mujeres por la paz en el norte de Uganda 189

Yaliwe Clarke y Constance O’Brien

6 Prisma de la marginalización: economía política de la violencia contra las mujeres en Sudán y Sudán del Sur 220

Fahima Hashim

ILUSTRACIONES

Gráficos

- 3.1** Propiedad de la tierra en Colombia, 1901—2012
- 3.2** Desplazamiento forzado, 1985—marzo de 2017
- 3.3** Amenazas, 1985—marzo de 2017
- 3.4** Despojo de tierras, 1985—marzo de 2017
- 3.5** Otros actos victimizantes, 1985—marzo 2017
- 3.6** Violencia sexual, 1985—marzo 2017
- 3.7** Crecimiento del PIB colombiano, 1961—2016
- 3.8** La globalización se une al conflicto, 1965—2013
- 3.9** Aceite de palma y población desplazada, 1985—2009

Figuras

- 2.1** Las provincias de Papúa Nueva Guinea
- 2.2** Las siete provincias de la Región de Highlands de Papúa Nueva Guinea
- 3.1** La presencia de las FARC en las zonas rurales de Colombia
- 3.2** Las mujeres en los grupos armados
- 5.1** Flujo de género: desplazamiento de hombres y mujeres
- 6.1** Tipos de casos de orden público

Tablas

- 5.1** Perfil de diecisiete miembros del personal y de las fundadoras de seis organizaciones de paz de mujeres

SOBRE LOS EDITORES

Kumudini Samuel

Kumudini Samuel es miembro del Comité Ejecutivo de DAWN, participa en su labor transversal y se concentra en el ámbito de la reestructuración política y la transformación social. Vive y trabaja en Sri Lanka y es cofundadora y actual directora de programas e investigación del Women and Media Collective. Tiene un máster en Estudios de la Mujer por la Universidad de Colombo y ha escrito y trabajado sobre género y política, conflictos y transiciones, movimientos de mujeres y sexualidad.

Claire Slatter

Claire Slatter es miembro fundador y actual Presidenta de la Junta Directiva de DAWN. De nacionalidad fiyiana, tiene un máster en Estudios Políticos por la Universidad Nacional de Australia y un doctorado en Políticas Públicas por la Universidad de Massey, y ha enseñado política en la Universidad del Pacífico Sur durante 23 años. Ha escrito, participado en actividades de promoción y ha realizado trabajos de consultoría sobre cuestiones de interés regional como las reformas neoliberales, la liberalización del comercio, la democracia, los derechos humanos, el género y el desarrollo.

Vagisha Gunasekara

Vagisha Gunasekara es una investigadora de Sri Lanka y profesora titular del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Abierta de Sri Lanka. Está afiliada a la Asociación de Científicos Sociales (SSA) de Sri Lanka. Se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Purdue (EE.UU.). Adopta principalmente un enfoque de economía política para estudiar las interrelaciones particulares entre género y conflicto en situaciones que cambian rápidamente en la región del Sur de Asia.

SOBRE LOS COLABORADORES

Cecilia López Montaña

Cecilia López Montaña es economista, investigadora, profesora y política colombiana. Ha sido varias veces Ministra de Estado en distintos gobiernos y además fue Senadora de la República. Actualmente es presidenta y miembro fundador de la Fundación CiSoe. En su amplia trayectoria política en Colombia y América Latina, ha promovido la formulación y seguimiento a las políticas públicas sobre desarrollo económico, género y economía del cuidado. Ha sido directora de PREALC OIT y consultora de organismos internacionales como OIT, BID, Banco Mundial y CAF, entre otros.

La Dra. Constance O'Brien

La Dra. Constance O'Brien, ya jubilada, impartió anteriormente cursos de grado y postgrado en el Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Ciudad del Cabo. También fue coordinadora de investigación de posgrado durante varios años y actualmente supervisa a estudiantes de doctorado. Sus principales intereses se centran en la consolidación de la paz después de los conflictos y actualmente participa en un programa de desarrollo rural.

Elizabeth Cox

Elizabeth Cox es una activa colaboradora de las redes regionales y nacionales del Pacífico en organizaciones para acabar con la violencia contra las mujeres (EVAW), y tiene 40 años de experiencia y comprensión del desarrollo y el cambio en las comunidades melanesias de la región. Es asesora técnica y contratista en desarrollo de capacidades y producción de conocimientos en Papúa Nueva Guinea.

Fahima Hashim

Fahima Hashim es defensora y activista de los derechos de la mujer, investigadora y formadora. Es directora del Centro de Recursos para la Mujer de Salmmah, en Jartum (Sudán). Tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito del género y el desarrollo, con especial énfasis en los derechos de la mujer y la sexualidad, la violencia contra la mujer y el trabajo por la paz con mujeres y jóvenes en situaciones de conflicto y post conflicto.

María Claudia Holstine

María Claudia Holstine es arquitecta y politóloga con experiencia en comercio internacional, administración y operación financiera de empresas, género y conflicto colombiano. Es directora ejecutiva y Representante Legal de la Fundación CiSoe Colombia, así como Directora General de CiSoe Institute con sede en Washington, DC.

Michelle Kopi

Michelle Kopi es coordinadora de programas de desarrollo del Alto Comisionado de Nueva Zelanda en Papúa Nueva Guinea. Está especializada en seguridad y desarrollo de conflictos y tiene ocho años de experiencia laboral en gestión de proyectos, investigación, desarrollo social y comunitario en situaciones de conflicto, gobernanza, desarrollo organizativo, igualdad de género e inclusión social.

Roshmi Goswami

Roshmi Goswami es de Assam y es miembro fundador de la Red del Noreste. Fue responsable de programas de la Fundación Ford en Nueva Delhi durante varios años, sobre los derechos de la mujer, antes de pasar a ONU Mujeres en Nueva York. Fue pionera en el trabajo con mujeres en regiones de la India afectadas por conflictos, incluyendo la documentación y el análisis del impacto de la guerra y los conflictos en la vida de las mujeres.

Vijay K. Nagaraj

Vijay K. Nagaraj fue investigador, escritor, activista y profesor. Enseñó en el Instituto Tata de Ciencias Sociales de Bombay (India) y en un instituto de secundaria de Colombo. Trabajó con Amnistía Internacional, en India, con el Centro Internacional para la Política de los Derechos Humanos, en Ginebra, y con el Centro para el Análisis de la Pobreza y el Fideicomiso de Derecho y Sociedad, en Colombo, Sri Lanka. Trabajó en una serie de temas, desde el empoderamiento de las comunidades rurales en Rajastán hasta los desalojos y la militarización, la reforma constitucional y los derechos sociales, económicos y culturales y el derecho a la vivienda en el Norte, en Sri Lanka. Lamentablemente, Vijay falleció en 2017.

Yaliwe Clarke

Yaliwe Clarke es profesora de la Sección de Estudios de Género de la Escuela de Estudios Africanos y de Género, Antropología y Lingüística (Facultad de Humanidades) de la Universidad de Ciudad del Cabo. También es investigadora del Instituto Africano de Género. A lo largo de los años, Yaliwe ha interactuado con activistas de los derechos de las mujeres africanas y con profesionales de la construcción de la paz y la resolución de conflictos, y ha adquirido una amplia experiencia de formación continental en materia de género y construcción de la paz.

AGRADECIMIENTOS

Este libro está dedicado a Vijay K. Nagaraj, coautor del capítulo sobre Sri Lanka, que falleció trágicamente en un accidente de tráfico varios meses antes de que se finalizara su publicación.

El libro tuvo su génesis a principios de 2015 cuando DAWN discutió la posibilidad de iniciar un proceso de investigación que pudiera vincular la violencia de género y las causas fundamentales de un conflicto con la economía política. Pensamos que el marco sería nuevo, daría un matiz diferente y una mayor comprensión a las trilladas narrativas de la violencia contra las mujeres en tiempos de guerra, en particular, de la violencia sexual. Vijay ayudaba a DAWN a desarrollar una metodología de investigación para llevar a cabo conversaciones entre pares y fue una de las primeras personas con las que discutimos esta nueva idea. Se mostró inmediatamente interesado y entusiasmado. Entendió que los dos marcos —la violencia contra las mujeres en la guerra y el conflicto y la economía política feminista— no debían mantenerse separados, y así, comenzó un tiempo de discusión y reflexión que

condujo a la conceptualización inicial de este libro. En aquel momento, Vijay no esperaba escribir un capítulo, pero dedicó generosamente su tiempo y su inmensa curiosidad intelectual a desarrollar ese marco. La dedicatoria de este libro a Vijay viene acompañada de un profundo agradecimiento por las diversas maneras en que contribuyó al trabajo de DAWN.

Un libro como este se desarrolla a partir de una multitud de conversaciones e incurre en muchas deudas con las personas que ayudaron a darle forma. Entre las primeras conversaciones sobre el libro que tuvieron lugar en el seno de DAWN se encuentran las sostenidas con Vivienne Taylor, Celita Eccher y Zenebwerke Tadesse, parte de la Junta de DAWN junto con Claire Slatter. Estos diálogos nos permitieron afinar aún más nuestra conceptualización inicial, por lo que les estamos profundamente agradecidas. A medida que el proyecto avanzaba, DAWN contó con el apoyo de dos excelentes coordinadores: Ambika Satkunanathan que nos acompañó en la primera fase del trabajo hasta el taller inicial con los autores y Thakshala Tissera que se encargó de este trabajo en 2016 y quien nos ayudó a redactar los primeros borradores de los capítulos. Un proyecto de esta naturaleza requiere una coordinación paciente para garantizar el cumplimiento de los plazos y una diplomacia tranquila para empujar a los que se demoran. A ambos les agradecemos esta labor.

También hacemos extensivo nuestro sincero agradecimiento a Ayesha Imam que mientras formaba parte del Comité Ejecutivo de DAWN contribuyó diligentemente a este proyecto identificando posibles autores, ayudando a conceptualizar y facilitando el taller inicial que dio lugar a la investigación y redacción de los primeros borradores de los capítulos. Hibist Kassa, del Comité Ejecutivo de DAWN iba a ser inicialmente coeditora y realizó comentarios constructivos al capítulo sobre Sudán/Sudán del Sur antes de tener que retirarse para completar sus estudios de doctorado. Vagisha Gunasekara amablemente aceptó nuestra invitación a unirse al equipo editorial tras recibir las primeras críticas de los editores y trabajó incansablemente para llevar el libro hasta su finalización. Su contribución académica a este esfuerzo ha sido invaluable. También damos las gracias a Kamla Chandrakirana, Harini Amerasuriya, Dinushika Disanayake, B. Shanthakumar, Niyanthini Kadirgamar, Farzana Haniffa y Sarala Emmanuel que participaron generosamente en las reuniones que convocamos con los autores o revisaron los capítulos para hacernos comentarios críticos sobre

cada trabajo. Nuestro singular agradecimiento a Sarala Emmanuel por ayudarnos a enmarcar los debates finales y facilitar el segundo taller de autores.

Estamos en deuda con Seona Smiles que se encargó de la edición técnica de los capítulos y preparó el manuscrito final para su publicación, con los numerosos cambios editoriales y las limitaciones de tiempo que ello supuso. Le estamos especialmente agradecidos por haber trabajado hasta el final cuando se acercaba la fecha límite.

Por último, pero no por ello menos importante, agradecemos a todos los autores su cooperación durante la fase de edición, con especial aprecio a los que se incorporaron más tarde en el proceso y trabajaron con un plazo más corto. Extendemos nuestro profundo agradecimiento a Zed Books por publicar el libro y especialmente a Kim Walker, Directora Editorial, que creyó en este proyecto, nos animó y aceptó el manuscrito para su publicación. Nuestro agradecimiento también a Dominic Fagan que trabajó con nosotros en ausencia de Kim.

Como siempre, el apoyo prestado a DAWN por la Fundación Ford hizo posible todo esto —la investigación, el análisis, la redacción y la publicación— y dejamos constancia de nuestro más sincero agradecimiento. Finalmente, este libro no habría sido posible sin la ayuda incondicional e inestimable que hemos recibido de las coordinadoras de DAWN Gita Sen y María Graciela Cuervo, del Comité Ejecutivo de DAWN y del personal de la Secretaría de DAWN; en particular de Sharan Sindhu y Damien Gock, que apoyaron la coordinación final.

Kumudini Samuel
Claire Slatter
Vagisha Gunasekara

Editores

INTRODUCCIÓN¹

Enmarcando el Análisis de La Guerra, el Conflicto y la Violencia Contra las Mujeres a Partir del Feminismo del Sur — El Valor de una Mirada con el lente de la Economía Política

**Kumudini Samuel
y Vagisha Gunasekara**

En 2009, DAWN inició un proceso de exploración del activismo y la agencia de las mujeres a través de una serie de estudios de caso autorreflexivos escritos por activistas feministas de Indonesia, Sri Lanka, Nepal y la India, que publicamos como monografía titulada *Women Transforming Peace Activism in a Fierce New World: South and Southeast Asia* (Samuel, 2012).² El hilo conductor de estas narraciones fue la experiencia cotidiana de las mujeres en tiempos de guerra y la violencia relacionada con los conflictos. Casi todos los estudios de caso registraron experiencias de violencia sexual, incluso a través de testimonios personales. Sin embargo, al igual que en investigaciones recientes, la omnipresencia de la violencia sexual en la guerra, la naturaleza de los autores y las variaciones dentro de los conflictos y a través de ellos a menudo desmentían las explicaciones sencillas (Cohen et al., 2013). Los análisis de la violencia sexual y de otro tipo durante la guerra y el conflicto parecían asumir una ‘frontera’ imaginaria entre la guerra y los límites temporales de la ‘preguerra’ y la ‘posguerra’. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres durante la guerra y el conflicto tendía a tener una naturaleza ‘excepcional’.

Sin embargo, las narraciones revelaron que las experiencias de violencia e inseguridad de las mujeres estaban mediadas por una serie de estructuras sociales y económicas en constante cambio —cultura, religión, familia, división sexual del trabajo y del poder, desigualdades en las oportunidades de empleo e ingresos, prácticas de desarrollo, identidad, sexualidad y género— que se entre tejen a través de los tiempos, antes y después, como también durante la guerra y el conflicto. El referente de la seguridad tampoco era meramente el individuo, sino las relaciones sociales que mediaban la vida humana. Las mujeres de los relatos se encontraron con este complejo nexo y lo desafiaron al tratar de lidiar con la vida cotidiana en situaciones de guerra y conflicto (Samuel, 2012). Los estudios de caso también reflejaron los numerosos procesos globales/locales que confluyeron para crear ‘formas plurales de poder y control de género’ sobre las mujeres, que configuraron ‘nuevos riesgos’ y formas de inseguridad para ellas y sus comunidades (Wieringa et al., 2006). “Estos riesgos de género para las mujeres se manifestaron no solo en la *brutalización* del cuerpo y la impunidad en el ámbito de la violencia, sino también en la dislocación de la vida cotidiana y el aumento de la carga de las mujeres en el ámbito del cuidado y la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones en el ámbito de la vida política” (Samuel, 2012: 11).

Lo que quedó claro fue que la guerra y el conflicto involucran complejas dimensiones político —económicas internas y globales de múltiples capas. Este entramado subyacente de procesos político— económicos de conflicto está estrechamente ligado a la naturaleza de las relaciones entre la economía nacional y la global en los Estados nación poscoloniales del Sur Global. Por tanto, al igual que estos procesos están profundamente imbricados en

las causas y consecuencias de la guerra y el conflicto, también dan forma a la transición del posconflicto, reconstrucción, recuperación y paz. Estas ricas y variadas percepciones nos obligaron a cuestionar los marcos de análisis existentes para entender la violencia contra las mujeres en los conflictos y la guerra. Nos dimos cuenta de que nuestras propias formas de pensar sobre la violencia contra las mujeres durante la guerra y los conflictos necesitaban ser sacudidas para ir más allá de las simples explicaciones. En muchos sentidos, esta colección de estudios de caso es un modesto intento de retornos a nosotras mismas a ‘leer’ o ‘mapear’ cómo se producen y reproducen los patrones de violencia contra las mujeres en las relaciones más amplias entre la economía nacional y global, así como en las relaciones políticas (y militares) del conflicto configuradas por los paradigmas ideológicos y políticos, internos y externos predominantes, y las contiendas geopolíticas. Al hacerlo, también deseamos realizar análisis más complejos y simultáneamente reunir los estudios existentes sobre la violencia contra las mujeres y los conflictos, especialmente los trabajos feministas sobre seguridad y economía política.

Nuestro punto de partida: las miradas dominantes sobre la violencia en el establecimiento y construcción de paz³

Partimos de nuestras propias experiencias en procesos formales de pacificación y justicia transicional, en los que la participación de las mujeres está restringida y la violencia contra ellas suele quedar fuera de las estructuras patriarcales y los términos de referencia de los procesos de negociación.

También queremos señalar que históricamente ni los tribunales nacionales ni los internacionales, ni los procesos formales de justicia y reparación, han sido capaces de proporcionar una justicia adecuada a las víctimas de violaciones y delitos sexuales, ni en tiempos de guerra y conflicto, ni en tiempos de paz (Fitzpatrick, 1994; Charlesworth et al., 1991). La lucha feminista por sacar la violencia sexual y la violación del ámbito privado consiguió politizar la violencia sexual como un acto relacionado con el poder social. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como delito en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU de 1993, es uno de esos momentos de victoria del activismo feminista transnacional. Aproximadamente al mismo tiempo, las feministas —tanto académicas como activistas— se enfrentaron a la brutalidad sin precedentes de las violaciones en los conflictos que siguieron a los genocidios de la antigua Yugoslavia y Ruanda, obligando a la comunidad internacional, a través del Estatuto de Roma, a reconocer determinados aspectos de la violencia contra las mujeres como ‘crímenes contra

la humanidad'; entre ellos se incluía la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Como resultado de los relatos de víctimas y testigos que se dieron en los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros lugares, la violencia sexual se estableció como parte integral de la guerra, no solo como un efecto de esta (Henry, 2014; Copelon, 1995; Charlesworth y Chinkin, 2000).

La Academia Feminista develó además los vínculos entre los procesos de militarización, globalización y guerra y la forma en que las relaciones de género se entrelazan con ellos (Elias, 2015; Moran, 2010; Enloe, 1989; 2000; Chenoy, 2004; Meintjes et al., 2002; Cockburn y Zarkov, 2002). Esta articulación y la atención excepcional a la violencia sexual en tiempos de guerra, a pesar de su importancia crítica, dentro de los discursos feministas y de derechos y del derecho penal internacional (Lorentzen y Turpin, 1998; Skjelsbæk y Smith, 2001; Moser y Clark, 2001; Manchanda, 2005; Giles y Hyndman, 2004) han tenido 'consecuencias imprevistas' (Henry, 2014: 97) que merecen un estudio más profundo. Los esfuerzos concertados de las feministas a nivel local y global para convencer a los organismos políticos nacionales e internacionales de que reconozcan la violencia contra las mujeres como un delito, también han dado lugar a una crítica en desarrollo de cómo se enmarca la violencia en el contexto de la guerra y el conflicto. La continua fijación en la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos por parte del derecho penal internacional imputa una jerarquía de gravedad a algunos delitos sobre otros y silencia 'narrativas alternativas' (Henry, 2014). También da lugar a que se eludan otros tipos de violencia física y psicológica directa y la violencia estructural. La crítica de Nicola Henry a la creciente criminalización de la violencia sexual contra las mujeres en tiempos de guerra señala que los 'contextos específicos', la 'diversidad de las víctimas' y las 'intersecciones de la marginalización' no se reflejan en la fijación de la violación como la 'experiencia universal' de las mujeres en tiempos de guerra (ibíd.).

Marcar la sexualidad de las mujeres como raíz de la opresión sirve para reforzar el 'cuerpo sexuado' como objetivo predecible de la violencia sexual. A esta crítica también le preocupa que las mujeres se vean reducidas a víctimas pasivas de la violencia y a objetos que necesitan la protección de la ley, donde sus identidades "se definen en lugar de cuestionarse por esta subyugación." Otra crítica es que se cede poder y "legitimidad a la ley como fuente de conocimiento y verdad y como otorgante y protector de la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres" (Henry, 2014: 97). En este proceso los problemas críticos asociados con la posibilidad y la imposibilidad de enjuiciamiento por violación se dejan en su mayoría sin abordar, mientras que algunas formas de violación se toman como excepcionales por el derecho internacional (Copelon, 1995) y se establece una 'jerarquía de daño' (Henry, 2014).

También se ha argumentado que los agravios éticos y políticos y la injusticia sistémica dentro de los contextos socioeconómicos más amplios de la guerra y el conflicto, así como el impacto del capitalismo global en las causas y consecuencias de la guerra, son poco reconocidos o tratados por el derecho penal internacional y los juicios rara vez administran justicia sustantiva para las mujeres que buscan la recuperación después de la guerra (Bell y O'Rourke, 2007; Rees y Chinkin, 2016).

Además, esta crítica también refleja la filosofía subyacente a los acuerdos político-económicos promovidos por los modelos neoliberales de pacificación y desarrollo, apoyados e introducidos por los Estados y los donantes bilaterales y multilaterales (Rees y Chinkin, 2016). Las resoluciones de la ONU y los procesos de paz nacionales se basan a menudo en una concepción de la seguridad centrada en el Estado. Este mismo concepto se convierte en una consideración clave a la hora de definir los procesos de resolución de conflictos y establecimiento de la paz en situaciones de transición y posconflicto. De ahí que el énfasis se centre en la reforma estatal e institucional. Esto a menudo implica ocultar los efectos adversos generados por los modelos neoliberales de desarrollo, que tienden a ser las piedras angulares de la reconstrucción posbélica y los esfuerzos de construcción de paz (Bergeron et al., 2017). Este trabajo se ve eclipsado en general por los enfoques un tanto sobre determinados de 'las mujeres, la paz y la seguridad', en los que tienden a prevalecer las perspectivas de los estudios de seguridad y se aborda la violencia —a menudo la violencia sexual en la guerra, las sexualidades militarizadas y la violencia de género en la posguerra— sin prestar demasiada atención a las causas subyacentes y a las consecuencias de la guerra (ibíd). El discurso sobre las mujeres, la paz y la seguridad que se basa principalmente en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y en las resoluciones temáticas posteriores, no aborda el reto de los arreglos político-económicos inherentes a la construcción de paz neoliberal que seriamente impiden la paz sostenible (Cohn, 2012; Duncanson, 2016; True, 2016; Turshen, 2016). Tampoco cuestiona los supuestos de reconstrucción posbélica y desarrollo económico que ofrecen los modelos neoliberales de paz.

La agenda sobre mujeres, paz y seguridad promovida por el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido señalada de ser "cómplice en la promoción de la construcción de paz y la reconstrucción posconflicto neoliberal" (Basu, 2017: 724). Apartándose de los marcos feministas de la 'paz positiva y transformadora' como algo más que la mera ausencia de guerra (que sirvieron de base para la defensa concertada que condujo a la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2000), las actuales intervenciones de construcción de paz sancionadas por las Naciones Unidas se basan ideológicamente en la 'lógica neoliberal' que entiende que "las políticas de desarrollo

económico impulsadas por el mercado son la panacea para los conflictos y la reconstrucción posconflicto” (ibíd.: 725).

Además, las resoluciones sobre mujer, paz y seguridad están políticamente vinculadas a la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU que enmarca el enfoque internacional más amplio de la paz y la seguridad, y este enfoque se basa en reforzar “la fuerza militar y los Estados *securitizados*” (Otto, 2016: 10). Esta concepción de paz se limita a “buscar la participación de las mujeres en las estructuras de toma de decisiones de los marcos de guerra existentes, apoyar el desarme solo a nivel local en las comunidades post conflicto e instar a reformas legales y prácticas destinadas a hacer que los conflictos armados sean más seguros para las mujeres” (ibíd.). El estudio global de las Naciones Unidas en el que se examinaron quince años de aplicación de sus resoluciones sobre mujer, paz y seguridad encuentra que la participación oficial de la mujer en el establecimiento de la paz era temporal o simbólica, más que sustantiva, y que su influencia se veía directamente obstaculizada por las normas culturales (Coomaraswamy, 2015). Más aún, las resoluciones no abordan en absoluto el papel del orden político y económico mundial, ni las estructuras de género que conducen a su discriminación económica y la forma en que estas configuran y repercuten en la violencia que sufren las mujeres. Tampoco prestan atención a las desigualdades sociales, políticas y económicas de género que determinan la vulnerabilidad a la violencia de las mujeres (Rees y Chinkin, 2016). Fundamentalmente, la ONU debe dar prioridad la prevención de los conflictos en lugar del uso de la fuerza y debe examinar críticamente las medidas para abordar las profundas causas de la guerra y los motores estructurales de los conflictos como “la exclusión, la discriminación, los ataques a la dignidad y la desigualdad estructural” (Coomaraswamy, 2015: 15).

Las feministas identifican las intervenciones económicas neoliberales inherentes a la pacificación internacional contemporánea y a la reconstrucción posbélica como un desafío crítico para la paz sostenible que debe incluir una agenda de género transformadora. A la luz de esto, ahora debemos matizar este análisis para incluir un lente de economía política que es parte integral de cómo se ve y se aborda la seguridad de género. Dado que la reconstrucción posconflicto a menudo se enmarca en la reintegración global de las economías devastadas por la guerra, a través de un proceso de reforma del mercado y liberalización económica, la economía política feminista señala que esto solo sirve para exacerbar la pobreza relacionada con la guerra y aumentar la marginación económica y las cargas, como el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico para las mujeres (Peterson, 2005; Ní Aoláin et al., 2011). Tanto los conflictos armados prolongados como los modelos de recuperación económica y desarrollo en el postconflicto engendran la acumulación de riqueza y poder resultante de diversos procesos económicos que incluyen el acaparamiento

de tierras, el despojo, el extractivismo y la privatización (Bergeron et al., 2017). Estas formas de violencia económica estructural solo sirven para exacerbar las desigualdades de género, la marginación, la exclusión y deben abordarse junto a la violencia física directa (Ní Aoláin et al., 2011).

Las feministas se aventuran a consolidar este debate de forma más proactiva desarrollando nuevos modelos económicos para la construcción feminista de la paz (Bergeron et al., 2017). Las alternativas a los modelos económicos neoliberales “se basan en una ética feminista del cuidado y la sostenibilidad para desafiar la lógica dominante centrada en el mercado y su afirmación de que todos estamos sujetos a una lógica capitalista invariable; en su lugar, destacan una diversidad de formas económicas como las prácticas cooperativas, las economías comunitarias, las economías domésticas y reproductivas y las iniciativas de economía solidaria” (ibíd.: 718). Esta investigación analiza los retos de las economías devastadas por la guerra y de la recuperación posconflicto donde se incluyen las realidades vividas por las mujeres, las desigualdades arraigadas y las estrategias de supervivencia. De ahí que el propósito de este libro es utilizar un marco o lente de economía política para estudiar la violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta las desigualdades estructurales, para así contribuir a matizar y mejorar la comprensión de la violencia de género contra las mujeres en situaciones de conflicto o guerra y para darles respuestas más eficaces.

La necesidad de un marco de análisis de economía política

Para superar el actual punto muerto en el que se encuentra nuestra comprensión de la violencia contra las mujeres durante la guerra y los conflictos, el primer paso es pensar de forma diferente sobre la guerra y los conflictos. Incluso hoy en día, existe un consenso significativo sobre la idea de que esos eventos son una aberración de lo ‘normal’, que estas condiciones indican una ‘perturbación’ de procesos políticos, económicos, sociales y culturales que, de otro modo, se desarrollarían sin problemas y se presumirían no violentos. Aunque tiene sus salvedades, la tesis de la guerra o el conflicto como estado excepcional no capta a menudo legados de violencia más arraigados y tiende a ocultar el hecho de que la violencia contra las mujeres y la violencia sexual también son características arraigadas en sociedades que no están en conflicto. Además, no reconoce que como consecuencia dicha violencia puede perdurar, y de hecho perdura, tras la guerra o el conflicto, que la acumulación productiva (y no productiva) casi siempre implica coerción y rara vez está exenta de fuerza (Moore, 2015; Agamben, 1998; Petchesky, 2002). El hecho de no establecer estas conexiones también lleva a considerar el conflicto y la guerra únicamente como aberraciones de lo normal y no da cuenta de la violencia que también es inherente a

los acuerdos económicos y políticos ‘normales’. Por el contrario, las situaciones de conflicto violento son simultáneamente una ruptura de lo normal y parte de un continuo de violencia de género, tanto directa como estructural. Esta visión también asume a menudo que la violencia se limita a los espacios de combate. Con su interpretación en blanco y negro del tiempo y el espacio de la guerra, también clasifica fácilmente a víctimas y perpetradores en categorías mutuamente excluyentes, a menudo basándose en una lectura ahistórica que no suele tener en cuenta la continuidad de la violencia estructural cuando estas categorías no son tan claras. Cuando la guerra y el conflicto se tratan de esta manera, la ‘recuperación posconflicto’ implica automáticamente alcanzar unas ‘condiciones normales de la economía’ que se suponen no violentas.

En este punto nos inspiramos en David Moore (2015) y Karl VonHoldt (2014) que ofrecen un marco de la guerra que tiene en cuenta la naturaleza estructural de la violencia. Sus ideas son similares en el sentido de que conciben la guerra y el conflicto como momentos de erupción en “un curso continuo de formación de clase, ideológica y política, en el contexto de los procesos de acumulación” (Moore, 2015: 2). Moore (ibíd.) nos recuerda que tanto la democracia como los procesos de acumulación pueden fomentar y reproducir condiciones violentas, ofreciendo un correctivo muy necesario a tales nociones de normalidad. Von Holdt (2013) afirma además que “la democracia puede configurar las relaciones de poder de tal manera que las prácticas violentas sean parte integrante de ellas” (Von Holdt, 2013: 592). Tomando a Sudáfrica como ejemplo, Von Holdt (ibíd.) sostiene que la propia democracia del país coexiste con muchas de las fallas o fisuras existentes que profundizan su ya extrema desigualdad. Y a medida que estas fracturas se activan y se expanden a lo largo de las líneas de identidad étnica, de género y de otro tipo, el resultado son múltiples formas de violencia (Von Holdt, 2013: 591; también citado en Moore, 2015). El proceso paralelo de acumulación primitiva o primaria, o “la creación del capitalismo a partir del feudalismo u otros modos de producción ‘tradicionales’, nunca ha estado exento de fuerza” (Moore, 2015: 8). Estos procesos de acumulación, la coerción y violencia inherentes también están profundamente ligados al género.

Al aplicar un análisis crítico de economía política feminista sobre la guerra y los conflictos, poner en primer plano las relaciones políticas y económicas nos ayuda a explorar más a fondo cómo estas relaciones condicionan y aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. En general, las narrativas de economía política del conflicto y la violencia de género en tiempos de guerra se han posicionado en torno a la “lo barato de la violencia sexual en tiempos de guerra” (Kirby, 2012: 808), en el contexto de las estrategias económicas y de acumulación de recursos de una o más de las partes en conflicto. Kirby hace referencia al comentario de Eve Ensler quien afirma que “la violación es un método

de guerra muy barato. No hace falta comprar misiles scud ni granadas de mano” para ilustrar el hecho de que la violación en tiempos de guerra se utiliza como estrategia económica de acumulación de recursos en la República Democrática del Congo (ibíd.). Esto se ve especialmente agravado por el hecho de que muchas guerras y conflictos en todo el mundo también tienen su origen en luchas de poder por el control de la tierra o los recursos naturales. Sin embargo, el vínculo entre las causas de los conflictos y la violencia sexual se discute menos en el contexto de las desigualdades estructurales mediadas por el patriarcado en el ámbito del hogar o de la comunidad, y en las economías políticas globales durante o después de la guerra y los conflictos. Por lo tanto, es fundamental considerar los conflictos y la violencia sexual en tiempos de guerra como violencia política con una serie de dimensiones políticas y económicas “relacionadas tanto con el patriarcado privado como con los impactos diferenciales de género de la globalización económica” (True, 2012: 45). Un análisis de este tipo puede arrojar luz sobre la dinámica de las relaciones sociales y de género en las políticas afectadas por la guerra y los conflictos, y desarrollar estrategias para transformarlas. Esto es muy importante, ya que los estudios dominantes sobre las relaciones internacionales y la seguridad feminista también parecen preocuparse por la violencia sexual en la guerra y los conflictos, pero rara vez se ocupan de otras formas de violencia, como el carácter endémico de la violencia doméstica o la violencia económica, o incluso de las formas en que las violaciones de los derechos socioeconómicos en “tiempos de paz” se agravan en los conflictos armados y sitúan a las mujeres en coyunturas de vulnerabilidad a la violencia de género.

La economía política feminista es útil para desentrañar la naturaleza de género de la violencia inherente a las estructuras domésticas y de economía política global, en su relación con la guerra y los conflictos (True, 2012). Para empezar, cuestiona la posición dominante de etiquetar a las mujeres como simples víctimas de la guerra, considerándolas más bien como participantes y actores que negocian en el contexto de un sistema político—económico militarizado con dimensiones supralocales, si no globales (Nordstrom, 2004). Al discutir las investigaciones más recientes sobre las propias mujeres como agentes violentos, o como partidarias y facilitadoras de la violencia Ní Aoláin et al. escribe: “La investigación que examina la superposición entre los roles de las mujeres y las economías de guerra ha empezado a explorar las relaciones subterráneas que entrelazan el trabajo agrícola e industrial de las mujeres, así como su funcionamiento dentro de la economía sumergida que acompaña a la guerra, como relevantes para posibilitar las condiciones que conducen al mantenimiento de los ciclos de interacción violenta” (Ní Aoláin et al., 2011: 6). También son significativos los análisis de género de la economía política de la guerra que destacan las relaciones históricas y contemporáneas, locales y globales, políticas y económicas que forman, producen y reproducen la violencia, así como la forma en que las guerras magnifican y remodelan las identidades de género (véase Raven—Roberts, 2013).

Las revisiones de la acumulación por desposesión por parte de las feministas críticas invocan el argumento de que la globalización del capital debe ser re—entendida como un momento de acumulación primitiva, que está significativamente diferenciada por género (Mies, 1987; Federici, 2004; Hartsock, 2006; 2011; Keating et al., 2010; LeBaron y Roberts, 2010). Maria Mies (1987), por ejemplo, identifica a las mujeres, la naturaleza y la población de países empobrecidos como lugares de extracción y desposesión. Sostiene que estos grupos constituyen la base sobre la que se han establecido históricamente los procesos de acumulación capitalista, y que su subordinación y explotación siguen siendo premisas esenciales para la reproducción del modelo actual, por lo que es crucial comprender las interacciones, tanto históricas como actuales, entre las divisiones sexual, social e internacional del trabajo. Para este análisis, es importante comprender que la violencia está en el centro de la organización social, y que las relaciones de género y la violencia son mutuamente constitutivas. (Confortini, 2006). La subordinación y la discriminación de género, también se traducen en violencia contra las mujeres, al igual que las vulnerabilidades inherentes a identidades múltiples y entrecruzadas como clase, etnia, religión, sexualidad y otras categorías socioculturales que también exacerban dicha violencia. Por lo tanto, resulta necesario estudiar la economía política de la violencia cotidiana que sufren las mujeres, su normalización y continuidad, antes, durante y después del cese de la guerra y los conflictos. Como articula True (2012: 44), “el poder opera no solo a través de la coerción directa, sino también a través de las relaciones estructuradas de producción y reproducción que rigen la distribución y el uso de los recursos, los beneficios, los privilegios y la autoridad dentro del hogar y la sociedad transnacional en general.”

Un análisis de economía política nos obliga a comprender cómo las múltiples crisis generadas por la globalización y el desarrollo económico, las políticas macroeconómicas resultantes, la liberalización del comercio y la desregulación económica, junto con las crisis financiera y climática y la militarización, plantean nuevos retos, en particular para las mujeres (Seguino, 2010; Sen y Durano, 2014). Estas realidades del orden político—económico mundial suelen estar ausentes o pasarse por alto en los análisis de la violencia contra las mujeres. Debe entenderse que la seguridad de las mujeres también está inseparablemente vinculada a la base material de las relaciones que rigen la distribución y el uso de los recursos, los derechos y la autoridad dentro del hogar, la comunidad y el ámbito transnacional (True, 2012). Un análisis de economía política también puede incorporar una comprensión de cómo la subordinación política, económica y social de las mujeres las hace vulnerables a la violencia, y una comprensión de que la violencia contra las mujeres no es simplemente una consecuencia de la agresión de los hombres en la esfera privada o pública. Este complejo nexo se refleja en ejemplos en los que el acto violento de la violación hace que las mujeres pierdan el acceso a la propiedad por el estigma social

y el pánico moral, asociados a la violación, y el consiguiente ostracismo de las víctimas, mientras que los agresores a menudo suelen quedar impunes.

Dos destacadas académicas feministas — Yakin Ertürk (2009) y Jacqui True (2012)— proponen tres elementos de un método de economía política que podrían ser fundamentales para analizar la violencia contra las mujeres, basándose en las estructuras político-económicas que sustentan la desigualdad de género y la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. Los dos en los que coinciden son: **la división del trabajo en función del género** dentro de la esfera familiar/privada y la esfera pública; y **la macroeconomía global contemporánea** en la que la competencia capitalista alimenta la búsqueda de fuentes baratas de mano de obra, que a menudo es femenina.

El tercer elemento de Ertürk se centra en las dimensiones de género de la guerra y la paz, que están relacionadas con **el patriarcado y los efectos diferenciales de género de la globalización** (2009: 11-12). Sostiene además que los conflictos violentos, que buscan controlar el poder y los recursos productivos, a menudo “normalizan la violencia y la extienden por toda la sociedad” (ibid.: 12). El tercer elemento de True ligeramente diferente son las **identidades masculina protectora y femenina protegida** asociadas a la guerra y al militarismo, y la división del ‘frente de guerra’ y el ‘frente doméstico’ asociado al conflicto armado y sus secuelas.

True también pide que se exploren los lugares estratégicos en los que entran en juego fuerzas económicas estructurales que intensifican las condiciones y aumentan la magnitud de la violencia contra las mujeres. Llama la atención sobre la explotación inherente a la migración transnacional de trabajadoras de los países en desarrollo a los hogares ricos y de clase media alta del mundo desarrollado; la expansión del comercio sexual en torno a las zonas de libre comercio; y el aumento de los niveles de violencia contra las mujeres durante la liberalización financiera y las crisis económicas. En el contexto de los conflictos armados y la guerra, argumentamos que estos lugares estratégicos podrían incluir, entre otras cosas, la reestructuración neoliberal que intensifica la precariedad de los medios de subsistencia de las mujeres; la reacción de los hombres ante la pérdida de un empleo seguro; el desplazamiento; el aumento de los hogares encabezados por mujeres; el crecimiento del comercio sexual en tiempos de guerra; el sexo transaccional forzado para sobrevivir; y el impacto de los esfuerzos de reconstrucción tras el conflicto. Los estudios de caso que forman los capítulos de este libro amplían e ilustran la violencia incrustada en los acuerdos políticos y económicos de algunos de estos lugares estratégicos y los analizados por True (2012), especialmente en el contexto de la guerra y los conflictos.

Un marco de economía política feminista argumenta de forma persuasiva que los programas de recuperación posconflicto no pueden abogar sin crítica por un retorno a los acuerdos económicos y políticos ‘de siempre’ que son inherentemente violentos y con implicaciones de género. Como señalan las autoras en este libro, su enfoque de la violencia de género durante la guerra, los conflictos y sus secuelas consiste en ver las continuidades e interrupciones de las dimensiones de género vinculadas al patriarcado y los impactos de los acuerdos económicos y políticos diferenciales, más allá de la temporalidad de la guerra. Sin embargo, la aplicación de la economía política para comprender y mapear la violencia contra las mujeres en la guerra y los conflictos no es uniforme en los capítulos. Algunas autoras se inclinan por el pensamiento avanzado por los estudios feministas sobre la paz y la seguridad, mientras que otras intentan realizar análisis basados en la economía política feminista. Algunas autoras sitúan inicialmente sus argumentos en uno de los enfoques, pero se mueven entre los dos a lo largo del capítulo. En conjunto, los capítulos de este libro abogan por matizar y hacer más complejas estas perspectivas, lo que a su vez refuerza los análisis sobre la violencia contra las mujeres y los conflictos.

Este libro

Este libro reúne el trabajo de un grupo de feministas del Sur Global. Las autoras son diversas en cuanto a su formación, experiencia y orientaciones académicas y disciplinarias. Trabajan en diferentes contextos políticos, económicos, sociales y culturales, y algunas han escrito sobre la economía política de la violencia contra las mujeres en sus propios países, tanto (o más) desde la experiencia vivida y sus percepciones, como desde la investigación formal o académica, lo que consideramos totalmente válido y acorde con la epistemología feminista.

Algunas de las autoras se han resistido a proyectar imágenes estereotipadas basadas en los enfoques dominantes de académicos externos sobre sus contextos —el mundo anteriormente colonizado— al intentar describir o interpretar las experiencias de las mujeres en la guerra y los conflictos. Otras autoras trabajan principalmente en lenguas distintas del inglés, y aunque están bien versadas en la literatura feminista existente, leen, piensan y articulan el feminismo de otras maneras. Ello se debe a que sus narraciones se basan en sus propias experiencias, pensamientos, reflexiones y años de activismo en diversas luchas feministas. En cierto sentido, este libro refleja lo que Donna Haraway denominó ‘conocimientos situados’, relatos de la violencia de género a través de la “epistemología y la política del posicionamiento comprometido y responsable” (1988: 590). Esto no quiere decir que las narraciones de estas autoras estén libres de privilegios, jerarquías o factores externos; más bien, adoptan una perspectiva relativamente ‘más cercana’ al analizar la violencia contra las mujeres en contextos de guerra o conflicto.

Los tres años que ha durado la elaboración de esta colección permiten ver que es mucho lo que se puede ganar si se reconocen y abordan formas alternativas de conocer y producir conocimiento. No se trata de suscribir la noción de que el conocimiento está “ligado a la cultura” (‘verdadero’ —o ‘producible y reproducible’— solo en una sociedad o conjunto regional de sociedades). En lugar de aceptar una dicotomía arraigada entre el Sur y el Norte en cuestiones de producción de conocimiento y políticas feministas emancipadoras pretendemos afirmar las condiciones habilitantes para la solidaridad, tanto en la producción de investigación como en la lucha feminista.

Los capítulos de este libro exigen situar la violencia contra las mujeres dentro de las estructuras y relaciones políticas y económicas históricas y contemporáneas tanto a nivel nacional/subnacional como global. El capítulo sobre Colombia ofrece una comprensión de la economía política de la larga y compleja guerra del país rica en texturas, sus dimensiones de clase y las marcadas diferencias entre los tres protagonistas armados, arrojando luz sobre el importante papel, aunque no bien reconocido, de las mujeres rurales como protagonistas cruciales durante la guerra y como agentes de cambio. El estudio de caso sobre Papúa Nueva Guinea se centra en el papel de las industrias extractivas, de propiedad extranjera y devastadoras para el medio ambiente que han exacerbado la desigualdad de género entre comunidades y han facilitado la acumulación de armas y conflictos, con terribles implicaciones para las mujeres. El capítulo sobre Sri Lanka demuestra que el ‘icono’ de la ‘mujer autoempleada de la zona afectada por la guerra’ forma parte del impulso global hacia la financiarización y rastrea la violencia inherente a los procesos de ‘responsabilidad’ de género, que a su vez, refuerzan determinadas ideologías de género. El caso de la región Noreste de la India pone de relieve la represión estatal, la militarización, la ‘otredad’ y la violencia cultural como modos de control y violencia de género en tres conflictos subnacionales con sus prolongados procesos de paz. El estudio de caso sobre Sudán y Sudán del Sur analiza la complejidad impuesta por las múltiples y superpuestas estructuras religiosas y consuetudinarias de control social. El capítulo sobre las iniciativas comunitarias de paz de las mujeres del Norte de Uganda examina los cambios socioeconómicos y políticos de género que se produjeron como resultado de la guerra, así como las formas en que la acción de las mujeres intentó subvertir las normas patriarcales.

De los capítulos se desprenden una serie de temas que se comentan brevemente a continuación.

Militarización: violencia de género en un “estado de excepción”

En la mayoría de los estudios de caso, las autoras observan que el poder patriarcal y las prerrogativas territoriales sobre los cuerpos de las mujeres confluyen con destacadas formas de poder y control inherentes a las luchas por las reivindicaciones territoriales, que a su vez, producen y reproducen una violencia estructural claramente sexista. La militarización es uno de estos modos de control. Ese conflicto y la militarización que conlleva también se ven reforzados por situaciones jurídicas que suspenden el estado de derecho normal con la introducción de poderes de emergencia y legislación represiva” (DAWN, 2011: 2).⁴ Esto crea un ‘estado de excepción’ en el que los ciudadanos se ven reducidos a la ‘vida desnuda’, despojados de los derechos ordinarios de ciudadanía (Agamben, 2005), lo que a largo plazo repercute negativamente en derechos democráticos como la libertad de expresión, de asociación y de movilidad, entre otros. En estos entornos militarizados, tanto los Estados como los grupos militantes suspenden la ley, el orden y la gobernanza responsable con fines militares, imponiendo sus propios códigos de conducta e instituyendo un estado de excepción como norma (DAWN, 2011: 2). Así pues, la militarización está “íntegramente ligada a la violencia sistémica” (Laurie y Petchesky, 2007: 3). Junto con los conflictos armados y la guerra civil, la militarización ha desempeñado un papel fundamental en la configuración y el cambio de la vida de las mujeres. “Las guerras contemporáneas se producen en los lugares donde existen las divisiones sociales más graves,” generando al mismo tiempo “múltiples formas de crisis”(Ibíd.).

En su estudio del caso del conflicto Naga en el Noreste de la India, Goswami sostiene que la violencia sexual contra las mujeres se ha visto facilitada en particular por la aplicación de la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958 (AFSPA). Esta ley concede poderes extraordinarios a cualquier oficial militar para utilizar la fuerza letal si lo considera necesario, para detener sin orden judicial utilizando la fuerza, e incluso el asesinato, y también entrar y registrar cualquier local bajo mera sospecha. Esta ley también protege a las fuerzas de seguridad de la detención y el enjuiciamiento penal mediante disposiciones de inmunidad legal. Goswami sostiene que estas disposiciones legales han dado rienda suelta al personal militar para emplear la violación como arma para someter al pueblo Naga. Al utilizar la violación, el Estado indio y las fuerzas de seguridad han violado los derechos de las mujeres y han destruido el sentido de sí mismas y de la valía de la comunidad Naga, han pisoteado la masculinidad de sus hombres y han conseguido convertir en otras a las personas de la periferia que difieren de las que viven en la ‘India continental’.

El capítulo sobre Papúa Nueva Guinea (PNG) nos recuerda la compatibilidad de la militarización desplegada como modo de control dentro de una economía extractiva en

la búsqueda del crecimiento económico nacional (Cox). El rostro de la militarización en Papúa Nueva Guinea no es solo el soldado uniformado y armado o el policía que vigila las minas, es también el mercenario privado contratado por una empresa extractiva, o un joven armado en una guerra tribal. Del mismo modo, el capítulo sobre el conflicto colombiano describe diversas formas de violencia contra las mujeres en un contexto fuertemente militarizado en el que guerrillas, paramilitares y el ejército colombiano estaban inmersos en economías políticas estratificadas (López Montaña y Holstine).

Entrelazadas con la militarización en algunas situaciones de conflicto están las ideologías patriarcales que presentan a las mujeres como proveedoras de la pureza cultural de una comunidad y las someten a las formas más brutales de violencia y control cuando se considera que transgreden ciertos límites personales y sociales.

El cuerpo sexuado y el “otro” en la guerra y los conflictos

Muchos de los capítulos analizan cómo la guerra y los conflictos configuran y refuerzan formas históricas y arraigadas de sexualidad. En Papúa Nueva Guinea, la cultura del ‘hombre grande’ valoriza a los hombres y la violencia armada sigue siendo la norma para resolver conflictos antiguos y nuevos. La violación perpetrada por guerreros, cónyuges enfurecidos y anfitriones oportunistas de poblaciones desplazadas persiste como arma, y los marcos de justicia introducidos por las nuevas normas de paz parecen incapaces de disuadir las arraigadas prácticas de masculinidad militarizada que sancionan el uso de la violencia física y sexual para controlar a las mujeres (Cox). Una forma extrema de este control se refleja en los crímenes de odio por razón de género que consisten en la tortura sexualizada y en los asesinatos colectivos de mujeres que se considera que transgreden los límites y a las que se acusa de practicar la brujería (Ibíd.). Durante el conflicto en Sudán del Sur, la realidad de la violencia de género incluyó la violación, la ‘compensación a las niñas’, la prostitución forzada y la esclavitud sexual. Este tipo de violencia se basa en la identidad masculina vinculada al robo de ganado, el precio de la novia y a prácticas tradicionales que exigen una compensación por la violación.

Los capítulos sobre el Noreste de la India y Colombia ponen de relieve el uso de la violación en tiempos de guerra y el peso sobre las mujeres violadas durante la guerra por parte de perpetradores estatales o no estatales que van desde señores de la guerra tribales a grupos militantes, unidades paramilitares financiadas con fondos privados por jefes de empresas y hombres que controlan los mercados y los recursos productivos. Las autoras hablan también de la impunidad generalizada que rodea a esta violencia sexual militarizada, a menudo sancionada por los marcos de honor, la culpabilización de la sexualidad, la ‘transgresión’ de las mujeres y el pánico moral. En el Noreste de la India, la violación

es utilizada como arma de dominación tanto por entidades estatales como no estatales. Históricamente, los Nagas de la región Noroeste de la India tenían una estructura de defensa y una jerarquía para proteger a las mujeres y los niños de las tribus beligerantes. Las mujeres eran las posesiones más preciadas como guardianas de la cultura y la identidad de la tribu y protegerlas de los forasteros es un rasgo definitorio de la masculinidad de los hombres Naga. De ahí que el fracaso de ‘proteger a sus mujeres’ de la violación tenga un alto valor psicológico en este contexto, con normas socioculturales arraigadas de ‘propiedad’ masculina sobre las mujeres de su hogar y una estricta vigilancia del cuerpo de las mujeres. Se culpa a las mujeres violadas de emitir ‘señales sexuales’. Los autores de la violencia sexual escapan a la justicia, mientras que sus víctimas soportan el castigo del estigma y el ostracismo (Goswami).

López Montaña y Holstine analizan cómo se utilizó la violación como estrategia de desposesión económica en Colombia. La *Apertura*, iniciativa de globalización del gobierno colombiano en 1990, socavó la producción campesina y los grandes terratenientes movilizaron fuerzas paramilitares financiadas con fondos privados para despojar a los campesinos. Estas fuerzas paramilitares violaron públicamente a las mujeres campesinas para desmoralizar y desempoderar a los hombres. Señalan que la violación física y sexual de las mujeres rurales se utilizó como una estrategia eficaz de control para destruir la masculinidad y el orgullo de los hombres, disminuyendo su respetado papel de protectores y haciéndolos débiles e inútiles por su incapacidad para proteger a las mujeres de la violencia. Como tal, la violación se utilizó eficazmente dentro de una economía política distinta para expulsar a los grupos de productores agrícolas pobres del campo rural, de modo que la tierra quedara libre para el uso de los grandes terratenientes. Posteriormente, los grupos paramilitares se beneficiaron directamente del programa de descentralización (que acompañó la *Apertura*), presentando candidatos para hacerse al control de las pequeñas ciudades y los fondos descentralizados, y utilizando su poder para imponer códigos de vestimenta y otros controles patriarcales a las mujeres. Las autoras muestran como el machismo, una característica definitoria de la descentralización mantuvo la cohesión entre las tropas y estableció una clara demarcación entre las nociones de *mis mujeres* y *las mujeres de mis enemigos*. Los paramilitares reforzaron valores patriarcales y religiosos arcaicos mediante este control sistemático de todos los aspectos de la vida de las mujeres.

El capítulo sobre el Noreste de la India centra nuestra atención en la violencia dirigida contra el cuerpo sexuado del “otro”. Goswami sostiene que la “periferialidad” de los Naga en el Noreste de la India fue una de las razones de la intensa violencia sexual contra las mujeres Naga, especialmente por parte de los militares. La “otredad” de los Naga era fácil,

ya que su aspecto, hábitos alimentarios, cultura y religión los diferenciaban de la “India continental”. La autora sostiene que las mujeres “otras periféricas” siguen siendo las “otras” más vulnerables.

El género en las economías de guerra

Algunos capítulos se alejan del enfoque sobredimensionado de la violencia sexual, étnica y militarizada contra las mujeres, que es la narrativa predominante de la violencia experimentada por las mujeres en la guerra y los conflictos. Las autoras llaman la atención sobre la globalización neoliberal, que ha transformado los procesos de acumulación por desposesión, dando lugar a múltiples formas de violencia estructural de género en tiempos de guerra y paz. Estos capítulos alejan la discusión del marco esencial de las mujeres como víctimas de la violencia y la guerra y de los hombres como perpetradores.

Los capítulos sobre Colombia y Sri Lanka problematizan la noción de ‘crecimiento en medio de la guerra’ que parece cuestionar la idea convencional de que la guerra debilita las economías. Demuestran el papel de las economías que prosperan gracias a la guerra y el papel de las mujeres en ellas. López Montaña y Holstine analizan el crecimiento económico paradójico que mantuvo la economía de guerra de Colombia. Hablan de la disminución de la pobreza en el sector rural, aunque con disparidades económicas cada vez mayores entre lo urbano y lo rural, entre ricos y pobres, y sobre la importancia del narcotráfico para apoyar a las FARC en su lucha contra el ejército colombiano en los últimos treinta y cinco años de guerra. Señalan que fue una lucha a la que las mujeres rurales se unieron voluntariamente, a menudo para escapar de las agresiones verbales y físicas dentro de sus familias y para disfrutar de una nueva libertad. La promesa (por parte de las FARC) de igualdad de derechos y tareas para hombres y mujeres combatientes también abrió sus mentes a nuevas posibilidades. El capítulo sobre Sri Lanka (Gunasekara y Nagaraj) describe cómo el trabajo productivo de las mujeres ha apoyado y mantenido las economías de guerra y posguerra del país. Las autoras sostienen que el trabajo de las mujeres impulsa modos de acumulación por desposesión y ofrecen ejemplos de su contribución a la economía como trabajadoras de plantaciones, de fábricas de confección en zonas francas, empleadas domésticas, trabajadoras sexuales y ‘empresarias’ autoempleadas en el hogar.

Los capítulos sobre Sudán (Hashim) y Uganda (Clarke y O’Brien) identifican la violencia de género en los acuerdos laborales en el contexto del desplazamiento. Destacan la contribución económica de las mujeres a la producción de cultivos de subsistencia, como agricultoras, jardineras, productoras de alimentos y vendedoras en el mercado, a pesar de los insuperables riesgos asociados al desplazamiento. Hashim habla del precario trabajo de las mujeres desplazadas del Sur de Sudán, Darfur y las montañas Nuba, que se ven obligadas a trabajar de manera informal en la venta de alimentos y a recurrir a la

elaboración de bebidas alcohólicas o al trabajo sexual para garantizar su supervivencia y la de sus familias, siendo víctimas de los castigos de las leyes Sharia que prohíben ambas ocupaciones. Además, habla de la importante contribución de las mujeres Darfuri al mercado y a la economía, incluso como trabajadoras agrícolas y de la construcción, y señala que las mujeres tienen campos y almacenes de grano más grandes que los hombres y que cultivan cosechas estables para el mantenimiento de las comunidades devastadas por la guerra.

El capítulo sobre el Norte de Uganda analiza cómo la guerra desestabilizó la dependencia socioeconómica de las mujeres de la agricultura de subsistencia, sobre todo en las zonas rurales, donde los desplazamientos forzados y la amenaza de secuestro y violencia sexual redujeron la actividad de las mujeres en la agricultura de subsistencia (Clarke y O'Brien). También en Colombia se produjo un éxodo masivo de hombres, mujeres y niños del campo a pueblos y ciudades que no estaban preparados para recibirlos. Aunque no fue una transición fácil para las familias rurales, las mujeres estuvieron a la altura de las circunstancias y se dedicaron a los servicios de cuidado. Estas mujeres trabajadoras se enfrentaron entonces a nuevas formas de violencia en el hogar cuando los hombres rurales desplazados, frustrados y desempleados vieron cómo las campesinas empoderadas ganaban autonomía económica y asumían rápidamente el papel de proveedoras dejando atrás a los hombres.

Muchas de las autoras discuten cómo la opresión y la dominación se producen en economías lícitas e ilícitas que continúan incluso después de que la violencia armada haya terminado oficialmente. Demuestran que las economías ilícitas nacionales y mundiales están entrelazadas con las economías formales, lo que repercute negativamente en las mujeres atrapadas en una economía de supervivencia. Este nexo se ilustra a través de relatos de mujeres que se involucran en el sexo transaccional cuando no pueden devolver los préstamos obtenidos (de prestamistas formales) para trabajar por cuenta propia, la vía más común de generación de ingresos disponible para las mujeres en las zonas afectadas por la guerra (Gunasekara y Nagaraj). El capítulo de Sri Lanka rastrea la violencia en las economías morales que ponen a las mujeres en un doble aprieto: se espera de ellas que mantengan económicamente a sus familias mediante el autoempleo, sin comprometer sus deberes como cuidadoras ni transgredir los límites sexuales. Mientras tanto, a las que sobreviven gracias a préstamos precarios se les 'responsabiliza' de sus vidas como deudoras sumisas, maleables y obedientes, mientras siguen atrapadas en la pobreza. El mantenimiento de estas economías morales suele garantizarse mediante relaciones de violencia espacial, económica, subjetiva y sexual.

En todos los capítulos está presente, explícita e implícitamente, el hecho de que la acumulación sigue estando respaldada por ideologías de género que mantienen el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres en el hogar, que es un prerrequisito para la productividad de los hombres en la esfera pública. Estas estructuras y procesos de género producen y reproducen la violencia al restringir la participación pública de las mujeres y promover su subordinación y desigualdad, tanto en el hogar como en la sociedad, haciéndolas así más vulnerables a la violencia directa y estructural.

La división sexual del trabajo, la familia y el hogar y el hombre proveedor

Es bien sabido que durante los conflictos y las guerras se desmantela el *statu quo* de las familias y las comunidades, lo que provoca cambios en el poder y el estatus dado que las mujeres asumen funciones y responsabilidades que tradicionalmente se consideraban exclusivas de los hombres. A medida que las mujeres se convierten en cabezas de familia de *iure o de facto*, asumiendo nuevas responsabilidades económicas y sociales para garantizar la supervivencia de sus hogares, se ven obligadas a enfrentarse a valores patriarcales arraigados que se resisten a aceptar su nueva situación como proveedoras económicas y cabezas de familia. Esto ocurre especialmente cuando los hombres ven erosionado su papel masculino de ‘proveedores’ y perciben una impotencia que va en contra del comportamiento normativo. El capítulo sobre Uganda analiza las múltiples vulnerabilidades de las mujeres, así como la desestabilización del dominio masculino y la apertura de espacios de poder parcial para las mujeres, pues los cambios de roles y responsabilidades relacionados con el conflicto reconfiguraron las estructuras familiares y crearon espacios de agencia para las mujeres. Las mujeres secuestradas con hijos nacidos en cautiverio que regresaron a sus comunidades pusieron en tela de juicio las redes familiares patrilineales, pues se vieron obligadas a sustituir el papel (anteriormente) dominante de los hombres como proveedores materiales y protectores de la familia (Clarke y O’Brien).

En Sudán del Sur, donde el 45% de las niñas se casan antes de los dieciocho años y la poligamia se practica de forma generalizada, las mujeres rara vez pueden solicitar el divorcio en una cultura en la que los hombres se arrogan el derecho de poner fin a los matrimonios y se espera que la familia de la esposa devuelva el precio de la novia, lo que hace que las mujeres dependan económicamente de los maridos y sean vulnerables a la violencia y la explotación (Hashim). Tradiciones como el precio de la novia atan a las mujeres a contratos laborales distintos, particularmente en los confines de sus propios hogares. Para la familia del marido, una esposa (o una futura esposa) es una fuente de trabajo no remunerado, algo que ya se ha pagado con el precio de la novia. La violencia dentro del hogar a menudo se oculta por la ideología familiar que obliga al silencio

y normaliza la violencia contra las mujeres con impunidad. Las normas del hombre protector y la mujer protegida también se manifiestan de forma insidiosa durante la guerra y los conflictos, y dan lugar a otras formas múltiples e interrelacionadas de violencia y discriminación contra las mujeres. Aunque la violencia sexual relacionada con la guerra está mejor documentada y las iniciativas formales e informales que tratan de abordar la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones informan ahora algunos procesos de transición posteriores a los conflictos, se presta menos atención a las repercusiones estructurales a largo plazo de esta violencia sobre las mujeres. Entre ellas, son fundamentales el estigma y el repudio que sufren las mujeres por parte de sus familias y comunidades debido a las violaciones provocadas por el conflicto, la esclavitud sexual o la mera percepción de transgresión, como la entrada de mujeres en espacios masculinos de combate, como se ilustra en el capítulo sobre Uganda. Este estigma a menudo hace que las familias deshereden a las mujeres, se nieguen a aceptarlas en sus hogares y comunidades, se divorcien o las abandonen y, por lo tanto, las obliguen a empobrecerse y agraven aún más su vulnerabilidad a la violencia (Clarke y O'Brien).

A pesar del importante número de hogares encabezados por mujeres a causa de la guerra, en las comunidades Naga, la posición o las perspectivas tanto de las mujeres como de los hombres permanecen inalteradas ya que las costumbres patriarcales son más fuertes que nunca. Los hombres se resienten de la impotencia que implica este cambio de papel, y a menudo son incapaces de aceptar la disminución de su valor como principales proveedores y protectores de las mujeres y las familias. Esto, a su vez, conduce a un aumento de la violencia contra las mujeres en el hogar (Goswami). Del mismo modo, en Papúa Nueva Guinea, la violencia proliferada por la economía política de las industrias extractivas ha convertido a hombres contra hombres en conflictos locales y a hombres contra mujeres en violencia familiar y conyugal (COX). En algunos capítulos se discuten temas derivados del refuerzo de las leyes consuetudinarias, a las que a menudo se da primacía sobre las leyes generales, en particular en lo que respecta a la propiedad de la tierra y los asuntos relacionados con la familia. Por ejemplo, la Constitución India permite a Estados como Mizoram y Nagaland elaborar sus propias leyes de forma que se ajusten a sus leyes consuetudinarias patriarcales. Esto ha supuesto que a las mujeres se les niegue la igualdad de derechos de herencia y de la toma de decisiones, justificando y legitimando la violencia estructural (Goswami). En Papúa Nueva Guinea, los derechos de las mujeres a la propiedad, el acceso y uso de la tierra no están codificados en la ley. Las prácticas patriarcales solo reconocen a los hombres como propietarios de la tierra y, por tanto, excluyen a las mujeres de la percepción directa de rentas y cánones por las tierras consuetudinarias que han sido apropiadas o arrendadas por las industrias extractivas. Además, las mujeres son las últimas y las peor pagadas en los sistemas de distribución de

pagos en efectivo controlados por los hombres (COX). Las autoras señalan el peligro de pasar por alto los cambios en las estructuras familiares y las economías domésticas durante la guerra y los conflictos. Sostienen que el refuerzo de las leyes y prácticas históricas (que asumen estructuras familiares tradicionales basadas en el hombre proveedor) durante y después de los conflictos empuja a las mujeres al borde de la vulnerabilidad. De forma mutuamente constitutiva, la división sexual del trabajo en el ámbito privado ha servido para constreñir la participación pública de las mujeres, ya que las ideologías de género cargan a las mujeres con la responsabilidad del trabajo de cuidado no remunerado y las obligan a realizar trabajos precarios y mal remunerados en el hogar. Esto les impide acceder a mejores oportunidades económicas, lo que se traduce en un poder de negociación desigual y un mayor riesgo de violencia tanto dentro como fuera del hogar (True, 2012; Gunasekara y Nagaraj).

Mujeres, violencia y construcción de paz

Varios estudios de caso de este libro analizan procesos de construcción de paz en los que se la violencia tiene un significado que va más allá de la violencia sexual contra las mujeres. El capítulo sobre Papúa Nueva Guinea trata de las iniciativas de paz de las mujeres en la provincia de Jiwaka, en Highlands, y detalla cómo las mujeres han desafiado las tradiciones machistas de mediación de conflictos, negociación y planificación del desarrollo futuro. Al negarse a contribuir al pago de los impuestos de guerra de los que se apropian los hombres, las mujeres han asegurado sus ahorros frente a las constantes demandas de sus maridos para la compra de armas y municiones para continuar la guerra tribal. Mediante “estrategias de género inteligentes y caseras”, las mujeres han empezado a controlar sus propios ingresos, dando prioridad al “gasto para pagar la justicia en los casos de los tribunales de las aldeas, buscando el divorcio de maridos violentos, [y] devolviendo el precio de la novia para acabar con el control de los hombres sobre sus vidas y cuerpos” (COX). Al vincular la violencia contra las mujeres con los acuerdos políticos y económicos que mantienen el conflicto a través de los flujos de dinero distorsionados de las industrias extractivas, las mujeres han pasado a facilitar la mediación informal de conflictos, garantizando que las indemnizaciones exigidas por violencia familiar y sexual no sean exorbitantes, que los desplazados internos puedan regresar a sus hogares y a sus tierras, y que se evite la violencia tribal a gran escala. Así, las mujeres han logrado avances significativos en la mediación de conflictos gestionada exclusivamente por hombres y han detenido o evitado nuevos estallidos de guerra tribal (ibíd.).

En el Norte de Uganda, las complejidades que acompañan a las iniciativas de paz de las mujeres se reflejan en sus esfuerzos por establecer grupos de apoyo comunitario que aborden las consecuencias socioeconómicas y psicológicas de la guerra más que las

tensiones étnicas, una estrategia que se interpreta como una respuesta a las necesidades inmediatas. Lejos de carecer de importancia, estas iniciativas se ocuparon de la reconfiguración de las familias, en las que las mujeres regresaban embarazadas con niños que no tenían padres o vínculos de clan conocidos o reconocidos, y las mujeres tenían que asumir responsabilidades en las nuevas configuraciones familiares, negociar los límites étnicos y de clan y posibilitar ‘masculinidades pacíficas’, al tiempo que cubrían las necesidades materiales de sus familias y cuidaban de los más vulnerables. Estas eran las soluciones más fáciles para las mujeres, mientras que las tensiones étnicas o la propiedad de la tierra por parte de las mujeres seguían siendo innegociables según los sistemas y costumbres inflexibles de los clanes. Por lo tanto, “aunque [las mujeres] obtuvieron algunos beneficios al ocupar espacios anteriormente masculinizados, como ser proveedoras materiales, se les impidió cambiar la dinámica de poder inherente a la propiedad de la tierra” (Clarke y O’Brien). Parece, por tanto, que los esfuerzos comunitarios de las mujeres por construir paz, si bien dieron lugar a algunos cambios económicos y políticos, les brindaron la oportunidad de subvertir el patriarcado y disputar algunos espacios dominados por los hombres. En el Norte de Uganda, los esfuerzos de construcción de paz de las mujeres, con los consiguientes cambios económicos y políticos, les brindaron la oportunidad de cuestionar diversos espacios patriarcales. Sin embargo, la “tensión entre agencia y estructura es evidente una vez más. La agencia se ve constantemente subvertida por realidades estructurales que pueden dar la impresión de cambiar a nivel superficial, pero que permanecen profundamente inamovibles y arraigadas a otros niveles” (Clarke y O’Brien). López Montaña y Holstine defienden enérgicamente el reconocimiento de la agencia de las mujeres en tiempos de guerra, cuando se pasan por alto sus nuevas funciones y en particular “su necesaria, pero a menudo ignorada, participación en la guerra y en la paz”. El capítulo contrasta la casi ausencia de mujeres en el proceso de negociación y en la ‘primera línea’ de la reconstrucción posconflicto con sus contribuciones decisivas, especialmente aquellas de las mujeres rurales para conseguir la reforma agraria mediante movilizaciones y luchas al margen del proceso formal de paz. El capítulo celebra su activismo a muchos niveles: la creación de “redes complejas o movimientos a favor de la paz” contra la violencia; la promulgación de leyes progresistas, en particular sobre la reforma agraria y la redistribución; y la resistencia de las mujeres rurales a la hora de asegurar el sustento económico en el contexto del desplazamiento a las ciudades. De este modo, el capítulo sitúa a las mujeres como actores políticos importantes, tanto durante la guerra como en la recuperación posconflicto, algo que se ha subestimado e ignorado en gran medida en los procesos formales de pacificación y construcción de paz.

Conclusión

Este libro hace especial énfasis en la centralidad de la violencia en la organización social y su papel en la producción y reproducción de un orden de género, y a la inversa, en cómo el orden de género a su vez justifica y reproduce relaciones de poder desiguales y violentas en la sociedad, que están firmemente ancladas en patriarcados superpuestos. Los capítulos establecen un contexto para las relaciones políticas y económicas que abarcan modos históricos de acumulación y desposesión centrándose en los que sustentan la guerra y los conflictos contemporáneos que continúan tras la guerra, para argumentar que el conflicto y la guerra no pueden tratarse de forma simplista como una desviación de lo ‘normal’. Algunas de las autoras también argumentan de forma persuasiva que la recuperación posconflicto no puede abogar por un retorno a los acuerdos económicos y políticos ‘normales’ que son inherentemente violentos y sexistas. Como señalan las autoras, su enfoque de la violencia de género durante el conflicto y después de él consiste en ver las continuidades de las dimensiones de género vinculadas al patriarcado y los impactos de los acuerdos políticos y económicos diferenciales más allá de la temporalidad de la guerra. A su vez, Ní Aoláin et al. hacen eco de la opinión de que la condición de segunda clase de las mujeres perdura tras el conflicto con escasa referencia en los acuerdos de paz y las estructuras de transición, profundamente sexistas y masculinas, “basándose en prácticas culturales, jurídicas y políticas existentes que están fuertemente arraigadas en todas las sociedades y culturas” (2011: 7). Esta es precisamente la razón por la que a las autoras que escriben sobre Sri Lanka les preocupa cómo se debate la ‘violencia’ en los actuales procesos de justicia transicional del país. Sostienen que el énfasis en la violencia sexual dentro de los procesos de justicia transicional conduce invariablemente a individualizar la responsabilidad y a las víctimas y corre el riesgo de fragmentar la ‘posibilidad de luchas políticas colectivas’ que deberían abordar las condiciones estructurales que producen dicha violencia (Gunasekara y Nagraj). Todas las autoras señalan lo inadecuado de pensar en una ‘transición’ en la vida de las personas de la guerra a la ‘posguerra’ si la violencia continúa en circunstancias diferentes. En su lugar, reclaman un tipo de justicia que sea transformadora, así como estrategias y mecanismos que puedan contribuir a la reconfiguración del poder más allá de los relatos o experiencias individuales.

En muchos sentidos, este libro es un intento de retornos a nosotras mismas como feministas del Sur a emplear diferentes formas de pensar la violencia de género en la guerra y los conflictos. Ciertos modos de poder y control son dominantes en cada contexto, y aquí es donde se fija el punto de vista de las autoras. En algunos casos, el modo de control más destacado es la militarización; en otros, la financiarización. Cada escritora feminista se adscribe a un modo particular de poder y control, lo que determina su forma de ‘leer’ y

‘mapear’ la violencia. No todos los capítulos pretenden llevar a cabo análisis de economía política feminista. Sin embargo, sí utilizan ciertos elementos de un ‘método de economía política’ para analizar la violencia en ‘lugares estratégicos’ (Ertürk, 2009; True, 2012). Las autoras analizan cómo las condiciones de la guerra y los conflictos modifican la división del trabajo en función del género en el seno de la familia y las comunidades, así como la violencia asociada a dicha modificación. Al analizar los medios de subsistencia y el autoempleo de las mujeres después de la guerra, demuestran no solo cómo se explota el trabajo de las mujeres, sino también cómo su función de reproducción social se mantiene eficazmente gracias a la financiarización de la economía global contemporánea. Muchos de los capítulos también enmarcan las guerras y los conflictos armados contemporáneos como intrínsecamente relacionados con el control de los recursos productivos (Ertürk, 2009), lo que a su vez reproduce y normaliza la violencia de género inherente a las relaciones económicas. Por lo tanto, se defiende un análisis de economía política feminista de la guerra y los conflictos ya que nos permite comprender cómo las relaciones económicas y políticas producen y perpetúan la continuidad de la violencia a la que se enfrentan las mujeres antes, durante y después de la guerra. Los estudios de caso desentrañan las relaciones de violencia en determinados lugares estratégicos, todos ellos con la guerra y el conflicto como telón de fondo, producen relatos ricos y contextualizados que describen las múltiples desigualdades que controlan la sexualidad y el estatus de las mujeres en la sociedad y que afianzan su marginación política y económica. Los detallados relatos que ofrecen los estudios de caso no solo enriquecen la bibliografía general sobre género y conflicto, sino que también cuestionan con pruebas empíricas las nociones convencionales de que las mujeres son meras víctimas de la guerra. El capítulo sobre Colombia, por ejemplo, en su análisis de las ‘mujeres en armas’ (dentro de las FARC) cuestiona la noción mundialmente aceptada que califica de ‘víctimas’ a todas las mujeres de las sociedades desgarradas por la guerra. Las autoras cuestionan la suposición de que las mujeres suelen ser ‘obligadas’ a desempeñar papeles de combate. Por el contrario, sostienen que la mayoría de las mujeres de las FARC participaron voluntariamente en el combate y negociaron activamente sus derechos tras el conflicto. Del mismo modo, la mayoría de los capítulos se alejan de la categorización de las mujeres en contextos afectados por la guerra como ‘víctimas’. En su lugar, las autoras contribuyen a un posicionamiento más complejo de las mujeres que negocian constantemente dentro de configuraciones políticas y militarizadas cambiantes a nivel global y local, y dentro de acuerdos económicos y relaciones de género concomitantes (True, 2012). Por lo tanto, las autoras sostienen críticamente que no se puede ignorar la importancia de la violencia estructural, la opresión a largo plazo, la discriminación y el empobrecimiento en la vida de las mujeres que son los rasgos distintivos de la violencia estructural. Tampoco puede ignorarse la realidad de que el final de los conflictos y las guerras rara vez se pone fin a estas complejas formas de violencia contra las mujeres.

Notas

- 1- Agradecemos a Ambika Satkunanathan y Ayesha Imam su contribución a los primeros borradores de este capítulo. Ayesha Imam ayudó a coordinar las primeras fases de este proyecto y participaron en el taller inicial en el que se debatió el marco de la investigación en el que se basa este libro.
- 2- La monografía, editada por Kumudini Samuel (2012), fue publicada por DAWN como libro electrónico.
- 3- Peacemaking (establecimiento de la paz) suele referirse a los procesos de paz, y Peacebuilding (construcción de la paz) suele referirse al trabajo de paz posterior a un acuerdo/convenio. Para las definiciones de ONU en el contexto del mantenimiento de la paz, véase <https://peacekeeping.un.org/en/terminology>: “El establecimiento de la paz suele incluir medidas para abordar los conflictos en curso y normalmente implica una acción diplomática para llevar a las partes hostiles a un acuerdo negociado”, mientras que “La construcción de la paz tiene como objetivo reducir el riesgo... de que se produzcan conflictos”. Los capítulos de este libro se refieren a ambos procesos.
- 4- Véase DAWN (2011).

Referencias

- Agamben, G. 1998. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press.
- Agamben, G. 2005. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.
- Basu, S. 2017. ‘The UN Security Council and the Political Economy of the WPS Resolutions’, *Politics and Gender* 13 (4): 721–7.
- Bell, C. and O’Rourke, C. 2007. ‘Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice?’, *International Journal of Transitional Justice* 1 (1): 23–44.
- Bergeron, S., Cohn, C. and Duncanson, C. 2017. ‘Rebuilding Bridges: Toward a Feminist Research Agenda for Postwar Reconstruction’, *Politics and Gender* 13 (4): 715–21
- Charlesworth, H. and Chinkin, C. 2000. *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*. Manchester: Manchester University Press.
- Charlesworth, H., Chinkin, C. and Wright, S. 1991. ‘Feminist Approaches to International Law’, *American Journal of International Law* 85: 613–45.
- Chenoy, A. M. 2004. ‘Gender and International Politics: The Intersections of Patriarchy and Militarisation’, *Indian Journal of Gender Studies* 11 (1): 27–42.
- Cockburn, C. and Zarkov, D. (eds). 2002. *The Postwar Moment: Militaries, Masculinities and International Peacekeeping. Bosnia and the Netherlands*. London: Lawrence and Wishart.
- Cohen, D. K., Green, A. H. and Wood, E. J. 2013. ‘Wartime Sexual Violence: Misconceptions, Implications, and Ways Forward’. Washington DC: United States Institute of Peace, www.usip.org/sites/default/files/resources/SR323.pdf
- Cohn, C. 2012. *Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures*. Cambridge: Polity Press.
- Confortini, C. 2006. ‘Galtung, Violence, and Gender: The Case for a Peace Studies’, *Feminism Alliance, Peace and Change* 31 (3): 333–67.
- Coomaraswamy, R. 2015. *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*. New York: UN Women.

- Copelon, R. 1995. 'Gendered War Crimes: Reconceptualizing Rape in Time of War' in Peters, J. S. and Wolper, A. (eds), *Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*. New York: Routledge.
- DAWN. 2011. 'Submission to the CEDAW Committee: Day of General Discussion on General Recommendation on Women in Armed Conflict & Post—conflict Situations, 18 July 2011'. Manila: Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/Womenconflictsituations/DevelopmentAlternativesWomenNewEra.pdf
- Duncanson, C. 2016. *Gender and Peacebuilding*. Cambridge: Polity Press.
- Elias, J. 2015. 'The Everyday Gendered Political Economy of Violence', *Politics and Gender* 11 (2): 424–9.
- Enloe, C. 1989. *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. Berkeley: University of California Press.
- Enloe, C. 2000. *Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives*. Berkeley: University of California Press.
- Ertürk, Y. 2009. 'Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development. Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences'. Human Rights Council, Eleventh Session, Agenda Item 3, A/HRC/11/6/Add.6, 23 June, www.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/A.HRC.11.6.Add.6.pdf
- Federici, S. 2004. *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. New York: Autonomedia.
- Fitzpatrick, J. 1994. 'The Use of International Human Rights Norms to Combat Violence against Women' in Cook, R. (ed.), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Giles, W. and Hyndman, J. (eds). 2004. *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones*. Berkeley: University of California Press.
- Haraway, D. 1988. 'Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective', *Feminist Studies* 14 (3): 575–99.
- Hartsock, N. 2006. 'Globalization and Primitive Accumulation: The Contributions of David Harvey's Dialectical Marxism' in *David Harvey: A Critical Reader*. Oxford: Blackwell.
- Hartsock, N. 2011. 'A New Moment of Primitive Accumulation'. Inaugural Inkrit Conference.
- Henry, N. 2014. 'The Fixation on Wartime Rape: Feminist Critique and International Criminal Law', *Social and Legal Studies* 23 (1): 93–111.
- Keating, C., Rasmussen, C. and Rishi, P. 2010. 'The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered Economy', *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 36 (1): 153–76.

- Kirby, P. 2012. 'How Is Rape a Weapon of War? Feminist International Relations, Modes of Critical Explanation and the Study of Wartime Sexual Violence', *European Journal of International Relations* 19 (4): 797–821.
- Laurie, M. and Petchesky, R. 2007. 'Gender, Health, and Human Rights in Sites of Political Exclusion', www.who.int/social_determinants/resources/gender_health_human_rights_wgkn_2007.pdf
- LeBaron, G. and Roberts, A. 2010. 'Towards a Feminist Political Economy of Capitalism and Carcerality', *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 36 (1): 19–44.
- Lorentzen, L. A. and Turpin, J. (eds). 1998. *The Women and War Reader*. New York: New York University Press.
- Manchanda, R. 2005. 'Women's Agency in Peace Building: Gender Relations in Post—conflict Reconstruction', *Economic and Political Weekly* 44/45: 4737–45.
- Meintjes, S., Pillay, A. and Turshen, M. 2002. *The Aftermath: Women in Post—conflict Transformation*. London: Zed Books.
- Mies, M. 1987. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*. London: Zed Books.
- Moore, D. 2015. 'Conflict and After: Primitive Accumulation, Hegemonic Formation and Democratic Deepening', *Stability: International Journal of Security and Development* 4 (1): 1–21.
- Moran, M. 2010. 'Gender, Militarism, and Peace—building: Projects of the Postconflict Moment', *Annual Review of Anthropology* 39: 261–74.
- Moser, C. and Clark, F. (eds). 2001. *Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence*. London: Zed Books.
- Ní Aoláin, F., Haynes, D. F. and Cahn, N. R. 2011. *On the Frontlines: Gender, War and the Post—conflict Process*. Oxford: Oxford University Press.
- Nordstrom, C. 2004. *Shadow Wars: Violence, Power and International Profiteering in the Twenty—first Century*. Berkeley: University of California Press.
- Otto, D. 2016. 'Women, Peace and Security: A Critical Analysis of the Security Council's Vision'. London: LSE, <https://blogs.lse.ac.uk/wps/2017/01/09/women—peace—and—security—a—critical—analysis—of—the—security—councils—vision/>
- Petchesky, R. P. 2002. 'Phantom Towers: Feminist Reflections on the Battle between Global Capitalism and Fundamentalist Terrorism', *Development* 45: 40–5.
- Peterson, S. 2005. 'How (the Meaning of) Gender Matters in Political Economy', *New Political Economy* 10: 499–521.
- Raven—Roberts, A. 2013. 'Women and the Political Economy of War' in Cohn, C. (ed.), *Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures*. Cambridge: Polity Press.
- Rees, M. and Chinkin, C. 2016. 'Exposing the gendered Myth of Post—conflict Transition: The Transformative Power of Economic and Social Rights', *New York University Journal of International Law and Politics* 48 (4): 1211–26.

- Samuel, K. (ed.). 2012. *Women Transforming Peace Activism in a Fierce New World: South and Southeast Asia*. Philippines: Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), www.dawnnet.org/sites/default/files/articles/analyses_final_full_prst_book_2012-mar.pdf
- Seguino, S. 2010. 'The Way Forward in the Wake of the 2008 Global Economic Crisis: Does the Stiglitz Commission Report Go Far Enough?' Concept paper prepared for DAWN Development Debates.
- Sen, G. and Durano, M. 2014. 'The Remaking of Social Contracts: The Promise of Human Rights' in Sen, G. and Durano, M. (eds). *The Remaking of Social Contracts: Feminist in a Fierce New World*. London: Zed Books.
- Skjelbæk, I. and Smith, D. (eds). 2001. *Gender, Peace and Conflict*. London: Sage.
- True, J. 2012. *The Political Economy of Violence against Women*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- True, J. 2016. 'Explaining the Global Diffusion of the Women, Peace and Security Agenda', *International Political Science Review* 37 (3): 307–23.
- Turshen, M. 2016. *Gender and the Political Economy of Conflict in Africa*. London and New York: Taylor and Francis.
- Von Holdt, K. 2013. 'South Africa: The Transition to Violent Democracy', *Review of African Political Economy* 40 (138): 589–604, <https://doi.org/10.1080/03056244.2013.854040>
- Von Holdt, K. 2014. 'On Violent Democracy', *Sociological Review* 62 (2): 129–51.
- Wieringa, S., Chhachhi, A. and Truong, T. 2006. *Engendering Human Security: Feminist Perspectives*. New Delhi: Woman Unlimited

1

**LA CONSTRUCCIÓN
DE LA 'MUJER
RESPONSABLE':
VIOLENCIA
ESTRUCTURAL EN
LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO
DE POSGUERRA
EN SRI LANKA**

Vagisha Gunasekara
y Vijay K. Nagaraj



Punto de partida

Sri Lanka se encuentra en la cúspide de una transición hacia una tercera era republicana, con procesos de reforma constitucional y justicia transicional actualmente en curso. Cuando empezamos a pensar en escribir este capítulo, en 2015, los debates en torno a estos procesos estaban en pleno apogeo. Sin embargo, no lograron estimular la atención sobre la naturaleza estructurada de la violencia de género inherente a los acuerdos políticos y económicos que atravesaron los periodos de preguerra, guerra y posguerra. Los debates y las luchas en curso¹, principalmente en el ámbito de los derechos humanos, sobre la violencia contra las mujeres relacionada con la guerra siguen centrándose en ciertos tipos de daños, especialmente la violación y la violencia sexual, mientras que la violencia de género reproducida por las estructuras políticas y económicas sigue quedando al margen. Al mismo tiempo, los discursos sobre las mujeres y el desarrollo económico y la reparación tras la guerra, que se centran en derechos concretos, especialmente en los medios de subsistencia, a menudo no han tenido en cuenta cómo se reproduce el heteropatriarcado como marco de abuso a través de estas estructuras y acuerdos políticos y económicos.

A pesar de las nuevas teorías que ofrecen una comprensión más matizada de los cambios y las continuidades en las estructuras políticas, económicas, sociales e ideológicas en relación con los conflictos armados, el análisis de género es escaso en la bibliografía. Un puñado de estudios se centran en los vínculos económicos de género que operan durante la guerra (Nordstrom, 2004), mientras que otros señalan que necesitamos entender no solo qué les ocurre a las mujeres dentro de las economías políticas de la guerra, sino también por qué (Raven—Roberts, 2013). El punto es vincular el género y la economía política de forma que tengan sentido feminista, no solo las formas atroces de violencia contra las mujeres — en cuyo vértice se sitúan aparentemente la violación y la violencia sexual — sino también la violencia cotidiana, que incluye la violencia sexual, experimentada o reproducida a través de las relaciones político-económicas cotidianas. Durante la guerra en Sri Lanka, y especialmente después de su finalización, ha habido una multiplicidad de relatos sobre la violencia que la guerra y el conflicto ejercieron sobre las mujeres y las niñas. Pero, en su mayor parte, estos se han centrado en un relato sexualizado y ‘etnicizado’ de la violencia, especialmente de la violación (Satkunanathan, 2017; Jayawardena y Pinto—Jayawardena, 2017), y forman parte de una atención muy globalizada a la violación y la violencia sexual en el contexto de la guerra. Gran parte de esta atención a la violación y la violencia sexual contra las mujeres y las niñas es en gran medida

el resultado de las luchas feministas, especialmente en el ámbito del derecho penal internacional. Sin embargo, como sugiere Ní Aoláin (2012), estas luchas feministas han llevado a enmarcar los objetivos políticos en estrategias de justicia penal centradas en categorizar a las víctimas y a los perpetradores. También señala que esto ha llevado a dar prioridad a ‘determinadas cuestiones (en concreto, la verdad, la justicia, las prácticas conmemorativas y las reparaciones)’, pero a restar importancia a otras, ‘como la igualdad social y económica, la salud y las decisiones sobre su vida reproductiva, la identidad cultural y el resto de las identidades entrelazadas en sociedades conflictivas o represivas’ (ibíd.).

Es precisamente en el punto de esta crítica donde situamos el análisis previo. Entendemos por violencia estructural “la expropiación de recursos económicos e inmateriales vitales y el funcionamiento de sistemas de estratificación o categorización social que subvierten las posibilidades de supervivencia de las personas” (Anglin, 1998). En los contextos afectados por la guerra, como Sri Lanka, la lucha de las personas por negociar su supervivencia se sitúa a lo largo de muchas líneas divisorias sociales, económicas y políticas enemigas. Estas líneas divisorias no solo operan a nivel de género, clase, casta y etnia, sino también en relación con el capital y el trabajo, el mercado y el Estado, y el centro y la periferia (Murray, 2001).

Situar las relaciones político-económicas de género en el centro, en lugar de la guerra y el conflicto en sí, nos permite situar estos dos últimos en perspectiva, en lugar de concederles el estatus como determinante del que tan a menudo disfrutaban en contextos como el de Sri Lanka. Basado en el contexto de posguerra de Sri Lanka, este capítulo sostiene esencialmente que las dinámicas de acomodación y constitución mutuas que involucran el género y la violencia pueden mapearse en términos de relaciones de violencia diferenciadas y de género y de modos específicos de acumulación y desalojo, así como de ciertos modos de poder y control. Esperamos que este enfoque o marco de trabajo sea útil para comprender la naturaleza mutuamente constitutiva de la violencia de género y las relaciones político-económicas en el contexto de la guerra y los conflictos.

La violencia en la economía política del conflicto

Partimos de la idea de que la guerra y el conflicto son momentos de erupción en ‘un curso continuo de formación de clase, ideológica y política en el contexto de los procesos de acumulación’ (Moore, 2015). Esto va en contra de la idea dominante de

que la guerra y el conflicto son rupturas en el tejido ‘normal’ del desarrollo (Nagaraj, 2015), que ha sido cuestionada por muchos. Por ejemplo, Taghdisi Rad (2015) señala: La economía neoclásica considera la guerra y el conflicto como factores temporales y exógenos, cuya intensidad se mide por el número de muertes relacionadas con la batalla y que, a su vez, son ‘demasiado excepcionales’ para merecer un marco de análisis económico independiente. Se asume que el conflicto implica un aplazamiento de las actividades económicas ‘normales’, un funcionamiento anormal de las instituciones y una paralización del proceso de acumulación de capital; por lo tanto, cualquier análisis económico concreto de la situación se aplaza para la fase ‘postconflicto’. Este punto de vista, que tiende a equiparar el caso de los países en conflicto y los que no lo están, no solo tiene un poder explicativo extremadamente limitado, sino que además aporta poca información sobre el contexto de las relaciones dinámicas entre conflicto y economía.

El tratamiento de la guerra y el conflicto como una desviación de lo ‘normal’ conlleva la asociación de la ‘recuperación posconflicto’ con la consecución de ‘condiciones normales de la economía’. Este punto de vista, que defiende la ‘vuelta a la normalidad’, no tiene en cuenta la violencia que impregna los acuerdos económicos y políticos ‘normales’. Presenta la violencia como un fenómeno producido únicamente por la guerra o el conflicto, borrando así las huellas de la continuidad de la violencia estructural que preceden a los límites temporales de los tiempos de guerra. Esta mirada también produce una imagen distorsionada de las disposiciones espaciales de la violencia, que a menudo la limita a espacios de combate. Esta descripción de la guerra y el conflicto, que con frecuencia constituye la base de la postguerra y la reconstrucción posconflicto, no tiene en cuenta cómo las condiciones de la guerra y el conflicto reproducen las relaciones espaciales, económicas y subjetivas de la violencia. Es esta visión de la guerra y el conflicto la que enmarca la trayectoria de Sri Lanka en términos del mercado dualismo del ‘crecimiento en medio de la guerra’.

Venugopal se opone a este marco dualista y afirma que “el conflicto en el Norte ha sido, de distintas maneras, un factor que ha permitido el controvertido proceso de reforma económica en el Sur” (Venugopal, 2003). El desarrollo de las reformas económicas en Sri Lanka coincide con el advenimiento del marco neoliberal que integra la liberalización económica, la globalización, el libre comercio, la democratización y la gobernanza, encabezado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)². Las dislocaciones sociales derivadas del proceso de liberalización se institucionalizaron en la guerra civil.³ Las geografías de la guerra estaban separadas físicamente de los lugares de producción. Desde el punto de vista espacial, esto

condujo a una separación geográfica entre el principal escenario de la guerra, en el Norte y el este, y los principales escenarios de la producción, situados en el oeste, las colinas centrales de y el Sur del país.⁴ En realidad, la guerra amortiguó algunos de los efectos negativos de las reformas, en parte porque el sector de la seguridad absorbió mano de obra⁵ debido a la rápida expansión de las oportunidades de empleo.⁶ La liberalización de la economía, aliviada por unos niveles de ayuda exterior sin precedentes, no puso fin a la búsqueda de rentas con sesgo étnico por parte del sector estatal. Por el contrario, se extendió a nuevos grupos que se beneficiaron del entorno de mayor tensión y autoritarismo (Dunham y Jayasuriya, 2001). Mientras que la liberalización dio un impulso muy necesario al sector exportador en el sur, la producción agrícola en el norte, que dependía del consumo interno, sufrió una fuerte caída de los precios. La naturaleza desigual del desarrollo regional, unida a la distribución desigual de las inversiones del sector público y a la aceleración de los planes de riego y asentamiento demográficamente sensibles, intensificó los antiguos agravios del pueblo tamil. La culminación de estos factores condujo a una creciente *etnización* de la competencia económica a la sombra de un Estado autoritario y mayoritario, y fomentó un conflicto horizontal de carácter étnico. El partidismo político en el seno del movimiento sindical transformó gradualmente las luchas laborales, de tal forma que el centro de atención pasó de la defensa de las reformas estructurales relativas a los derechos de los trabajadores a la preocupación principal de ganar poder político para el partido con el que estaban alineados. Los sindicatos se convirtieron en una vía para que los partidos políticos expresaran sus rivalidades entre sí, dejando al movimiento obrero prácticamente desvirtuado.

Considerar la guerra civil de Sri Lanka como un estallido particular incrustado en los procesos gemelos de formación del Estado y desarrollo (o acumulación) y poner en primer plano las relaciones políticas y económicas, aplicando el análisis económico político feminista crítico a la guerra y el conflicto, nos ayuda a explorar más a fondo cómo estas relaciones condicionan y aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. La economía política feminista es útil para desentrañar la naturaleza de género de la violencia inherente a las estructuras económicas políticas nacionales y mundiales (True, 2012). Las revisiones de la acumulación por desposesión, por parte de las feministas críticas, invocan el argumento de que la globalización del capital debería volver a entenderse como un momento de acumulación primitiva, que es significativamente de género (Mies, 1987; Federici, 2004; Hartsock, 2006; 2011; Keating et al., 2010; LeBaron y Roberts, 2010). Maria Mies (1987), por ejemplo, identifica a las mujeres, la naturaleza y la población de los países empobrecidos como lugares de extracción y desposesión. Sostiene que estos grupos constituyen la

base sobre la que se han establecido históricamente los procesos de acumulación capitalista, y que su subordinación y explotación siguen siendo premisas esenciales para la reproducción del modelo actual; por lo tanto, es fundamental comprender las interacciones, tanto históricas como actuales, entre las divisiones sexual, social e internacional del trabajo.

Pero estas divisiones suelen representar jerarquías, tanto del trabajo como de los trabajadores atrapados en relaciones de violencia. La más cruda de estas jerarquías está representada por los tamiles de Hill Country (también conocidos como tamiles de Malaiyaha), casta oprimida traída por los británicos desde el Sur de la India a principios del siglo XIX para trabajar en sus plantaciones de café, que más tarde se convirtieron en plantaciones de té. El té ha sido durante mucho tiempo uno de los principales ingresos de exportación de Sri Lanka; el más alto en su momento, y sigue siendo el segundo después de los ingresos por exportación de textiles y prendas de vestir, y representa más de la mitad de todas las exportaciones agrícolas en términos de ingresos.⁷ Durante las décadas de guerra, el sector de las plantaciones siguió siendo una periferia interior generadora de valiosos ingresos en divisas que ayudaron a estabilizar la economía.

Sin embargo, los tamiles de Hill Country, que sufrieron condiciones laborales de servidumbre y esclavitud y quedaron apátridas y desprotegidos por el nuevo Estado independiente de Sri Lanka, apenas han disfrutado de estos beneficios y son los más desfavorecidos en cuanto a niveles de desarrollo económico y social de los cuatro principales grupos étnicos de Sri Lanka. Durante décadas después de la independencia, las plantaciones de té de Hill Country siguieron siendo enclaves de dominio empresarial con una presencia mínima del Estado; de hecho, incluso ahora existen limitaciones en el alcance y el poder de las autoridades. Las mujeres tamiles de Hill Country, que constituyen prácticamente la totalidad de la mano de obra de las plantaciones de té, se encuentran en lo más bajo de esta jerarquía y sufren la violencia patriarcal y étnica, no solo como trabajadoras, sino también como mujeres tanto de fuera como de dentro de la comunidad.

La violencia también es inherente a la división del trabajo entre la esfera pública y la privada en función del género, que responsabilizan principalmente a las mujeres del trabajo, a menudo invisible, no remunerado o mal remunerado, en la esfera privada (Okin, 1991; Federici, 2004; True, 2012). Esto es fundamental para los procesos de acumulación, ya que “la productividad del ama de casa es la condición previa para la productividad del trabajador (masculino asalariado)” (Maria—Rosa Dalla Costa (Dalla

Costa y Fortunati, 1977), citado en Mies, 1987). Estas estructuras y procesos de género producen y reproducen la violencia al limitar la participación pública de las mujeres y su acceso a los mercados; esto, a su vez, crea desigualdades en los hogares, atrapando a las mujeres en entornos violentos en el hogar y en el trabajo (True, 2012). Como observa True (ibíd.), algunas mujeres de los países desarrollados eluden las situaciones patriarcales, y potencialmente violentas, en el ámbito doméstico, delegando el trabajo de cuidados en mujeres pobres, especialmente mujeres migrantes del Sur Global. Esto se refleja en el propio Sur Global, donde el trabajo del cuidado precario se delega en mujeres de la periferia. Aunque algunas de estas ocupaciones de cuidados se encuentran en el mercado laboral ‘público’, son similares al trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres realizan tradicionalmente en el hogar y, en consecuencia, se desvaloriza (Okin, 1991). En Sri Lanka, lo que actualmente se conoce como ‘trabajo doméstico’ — principalmente para mantener el hogar, cocinar y cuidar a los miembros de la familia — es un derivado de género de las estructuras feudales históricas. El trabajo doméstico suele ser realizado por mujeres pobres de las plantaciones o de otras zonas rurales empobrecidas del país; las mujeres de los asentamientos urbanos marginados también se encargan de cocinar y limpiar en los hogares urbanos. Con la incorporación de cada vez más mujeres de las clases medias de Sri Lanka a la fuerza

Recolectoras en una plantación de té ecológico en Sri Lanka.



Foto: Dennis Keller

de trabajo formal, las mujeres tamiles de las zonas rurales de Hill Country o Sinhala han pasado a desempeñar el papel de ama de casa. Este ‘proceso de ama de casa’, como observó Mies (1987) en el contexto de las plantaciones coloniales, ‘nunca fue un proceso Pacífico’, dado que implicaba explotación y violencia física, sexual y emocional ejercida sobre las mujeres tanto por los hombres como por las mujeres del hogar de la clase alta.

El trabajo doméstico subraya el hecho de que la opresión y la dominación se producen y reproducen no solo en las economías legales y formales, sino también en las informales e ilícitas. Como escribe Raven—Roberts (2013), las economías ilícitas, tanto nacionales como globales, se entrelazan con los restos de la economía formal, creando condiciones a través de las cuales las personas, en su mayoría mujeres, quedan atrapadas en una economía de supervivencia. Es aquí donde destacamos dos sectores o esferas de trabajo dominados por mujeres, pero en dos extremos opuestos del espectro de la legitimidad: el trabajo sexual, por un lado, y, por otro, el autoempleo basado en préstamos de las mujeres de las comunidades afectadas por la guerra en el Norte y el este. Ambos forman parte de la economía política de la guerra en Sri Lanka y del desarrollo de posguerra. Aunque se sitúan en dos extremos del espectro de la legitimidad, comparten la característica de estar atrapados en economías morales distintas: en el caso del primero, como transgresora y peligrosa, mientras que, en el caso del segundo, como deudora obediente y sumisa.

Durante los años de guerra en Sri Lanka, los procesos de globalización económica derivados del neoliberalismo transformaron la naturaleza del propio trabajo remunerado. Los actuales procesos de acumulación por desposesión impulsan la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y, a través de este, la creación de la clase trabajadora feminizada que requiere la acumulación flexible capitalista contemporánea (Hartsock, 2006). Para ello es fundamental la renegociación del contrato social y la redefinición de las relaciones sociales a favor del capital, lo que a su vez también transforma los procesos de reproducción social y el conjunto de relaciones sociales que los conforman (ibíd.). Las zonas francas del país, el centro de la industria textil y de la confección, en las que el 70% de la mano de obra es femenina, son un legado tanto del giro neoliberal en la orientación de la política económica de Sri Lanka, que se produjo en 1977, como de los años de guerra. Las zonas francas se convirtieron en un elemento fundamental para asegurar el lugar de Sri Lanka en la cadena de valor mundial de la confección, pero a costa de convertirse en un enclave privilegiado de capital exento de los regímenes fiscales y laborales normales. Como documenta Caitrin Lynch (2007), ‘*gahenu—juki, pirimi—thuwakku*’ (‘máquinas de

coser *juki* para las mujeres, armas para los hombres’) era un tropo destacado, o una llamada ideológica (y de género) a ‘servir a la nación’, que se acomodaba cómodamente a la necesidad de formar parte de las cadenas de producción global para seguir financiando una guerra civil. Esto preparó el terreno para otro conjunto de enclaves en los que el contrato social se sustentaba en la coerción y la violencia, especialmente de mujeres jóvenes procedentes en su mayoría de las zonas rurales y periurbanas del interior, que entraron a las zonas francas en masa en busca de seguridad económica para sus familias en un ambiente de precariedad generalizada y guerra. La emigración a gran escala de mujeres trabajadoras como mano de obra doméstica a Oriente Medio, rico en petróleo, formó otro enclave laboral durante los años de la guerra. A medida que la producción nacional se desplomaba en la era de la liberalización posterior a 1977, las remesas se convirtieron en la principal fuente de ingresos en divisas para el país, compensando cerca del 70% del déficit comercial y ayudando a reducir la balanza de cuenta corriente a niveles manejables durante los años de la guerra (Almeida, 2017). Las mujeres siguieron emigrando a países de la región del Golfo incluso después de la guerra, aunque el número ha disminuido debido a la prohibición específica por sexo que restringe a las mujeres con hijos menores de cinco años.

El análisis anterior sitúa la guerra civil de Sri Lanka, comúnmente considerada en el contexto de la formación del Estado poscolonial, dentro del proceso igualmente violento y en curso del desarrollo neoliberal. Centrándonos en este último, hemos esbozado varios “enclaves” de producción que fueron fundamentales para la economía política de la guerra. El papel desempeñado por las mujeres que ocupaban — y estaban atrapadas en — estos enclaves cuestionan la posición dominante de etiquetar a las mujeres simplemente como víctimas de la guerra. Es evidente que el trabajo de las mujeres contribuyó sustancialmente a mantener los hogares — y la economía nacional — a flote durante los años de guerra. Por lo tanto, esto reitera la opinión de que las mujeres son participantes y actores que negocian en el contexto de un sistema político—económico militarizado con dimensiones supralocales, si no globales (Nordstrom, 2004). Considerar el trabajo de las mujeres como un elemento central de la economía política de guerra contrasta claramente con la opinión generalizada según la cual la contribución de las mujeres a la economía es ‘insuficiente’. También son significativos los análisis de género de las economías políticas de guerra que ponen de relieve las relaciones históricas y contemporáneas, locales y globales, políticas y económicas que forman, producen y reproducen la violencia, así como la forma en que las guerras magnifican y remodelan las identidades de género (véase Raven—Roberts, 2013).

A partir del análisis anterior, nuestro enfoque de la violencia de género durante y después de la guerra de Sri Lanka consiste en ver las continuidades en las dimensiones de género más allá de la temporalidad de la guerra y reconocer que están vinculadas al patriarcado y a los impactos diferenciales de la globalización económica (True, 2012). En lugar de aceptar la narrativa según la cual la violencia contra las mujeres y las niñas en tiempos de guerra es excepcional, tratamos de redibujar las vías de continuidad de la violencia estructural inherente a los acuerdos políticos y económicos que preceden a los límites temporales de la guerra y ver dicha violencia simplemente como diferentes manifestaciones de opresión y dominación de sexo/género. Con este encuadre, también intentamos producir una contra narrativa al zumbido constante — ‘no hay suficientes mujeres en la fuerza laboral’ — desplegado fácilmente por políticos masculinos de mediana edad ‘con visión de futuro’ y otros grupos con orientaciones neoliberales (incluidos los que defienden el ‘derecho de las mujeres a trabajar’).

Acumulación por desposesión de género: el caso de las mujeres autoempleadas en Passikudah, Sri Lanka

Intentamos demostrar la violencia de género en los acuerdos políticos y económicos que impregnan los tiempos de guerra y de paz examinando un enclave de género en el actual panorama político y económico de Sri Lanka: el autoempleo de las mujeres, que lleva el sello distintivo de los ‘medios de subsistencia de posguerra’. Los enclaves de género no se limitan en absoluto al autoempleo de las mujeres en las zonas afectadas por la guerra, ni a los otros cinco enclaves mencionados brevemente en la sección anterior: las zonas francas, las trabajadoras migrantes, las plantaciones de té, el trabajo sexual y el trabajo doméstico. A efectos de este capítulo, nos centraremos en el trabajo por cuenta propia, que cuenta con una base empírica relativamente más sólida en el momento de redactar este documento. El autoempleo de las mujeres en las zonas afectadas por la guerra y en toda la isla en general, es la estrategia de desarrollo de posguerra del Estado para sacar a los hogares de la pobreza y empoderar a las mujeres. Argumentamos que el impulso del autoempleo, con su base en el mundo del capital financiero, es un modo de acumulación por desposesión. Utilizando pruebas empíricas cualitativas recopiladas de forma intermitente a lo largo de un período de tres años desde 2014 en Passikudah, una pequeña ciudad costera en el litoral oriental de Sri Lanka, demostramos la naturaleza mutuamente constitutiva de la violencia de género y los acuerdos y estructuras políticas y económicas, tanto durante como después de la guerra, en lo que respecta al autoempleo de las mujeres.

El autoempleo como política neoliberal

El autoempleo a través de medios de vida y microempresas en casa es una parte importante de la visión política económica de posguerra, especialmente para las mujeres. Ser 'emprendedora' se considera actualmente una estrategia de supervivencia. Sin embargo, esta visión no es totalmente nueva. Alailima (2002) señala que el Estado de Sri Lanka promovió activamente programas de autoempleo en el período posterior a 1977 para paliar los efectos de la estrategia de liberalización en las zonas rurales. El autoempleo formaba parte de un paquete más amplio de programas de ajuste estructural (PAE) cuyo objetivo era crear oportunidades de empleo en los sectores modernizados de la economía, al tiempo que se quitaba al Estado la carga de la creación de empleo, una característica anterior a 1977 (Ruwanpura, 2000). Partiendo del supuesto de que el autoempleo conduciría a un 'crecimiento equilibrado', el Estado puso en marcha dieciséis programas de desarrollo rural integrado (PDRI), un modelo de desarrollo basado en la comunidad promovido por el Banco Mundial en muchas regiones del mundo en aquella época. En un principio, los PDRI se centraron en la provisión de infraestructuras, pero posteriormente pasaron a ayudar a las comunidades rurales a emprender actividades generadoras de ingresos, principalmente a través del autoempleo (Alailima, 2002).

Los PAE conceptualizaban a las mujeres como 'amortiguadoras'; se esperaba que sirvieran de amortiguador contra los efectos adversos de los PAE^s, mediante una mayor participación en las actividades económicas y la gestión comunitaria (Elson, 1989; Sparr, 1994; Lakshman, 1996; Rafeek y Samaratinga, 2000). El autoempleo se impuso suavemente a las mujeres y se hizo atractivo ofreciéndoles ayuda financiera a través de varios créditos y otros planes de promoción gestionados por bancos estatales y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG). Las mujeres también recurrieron a diversos programas de autoempleo, entre otras cosas porque los telares manuales y otras industrias artesanales que funcionaban según un modelo cooperativo cerraron como consecuencia de las reformas económicas (Lakshman, 1996; Rafeek y Samaratinga, 2000). En el modelo de cooperativa de telares manuales, las mujeres realizaban ciertas tareas en casa, por su cuenta; sin embargo, formaban parte de un proceso de producción colectivo más amplio en el que se controlaban las normas de calidad y se planificaba bien la comercialización y las ventas en colaboración con el Estado. El modelo posterior de autoempleo que se impuso a las mujeres las atomizó como productoras y las abandonó a su suerte en lo que respecta al control de calidad, la comercialización y las ventas. La única 'ayuda' que se introdujo a la fuerza fue financiera, principalmente a través de microcréditos. A pesar de que en la década de 1990 varios estudios cuestionaron la eficacia de los programas de autoempleo como

estrategia de alivio de la pobreza en Sri Lanka (Lakshman, 1996; Senanayake, 2002) y que una revisión del PNUD (1990) concluyó que estos programas eran ineficaces, los programas de autoempleo junto con las iniciativas de microcrédito siguieron siendo resistentes, pertinentes y comunes en la práctica del desarrollo. Esta estrategia de desarrollo de la 'base de la pirámide' continuó y amplió su alcance tras el tsunami del océano Índico de 2004 y en el período de posguerra determinado arbitrariamente después de 2009. Se rebautizó como 'estrategia de desarrollo de posguerra', una forma de salir de la pobreza para los afectados por la guerra y, en particular, para los hogares encabezados por mujeres en el norte y el este de Sri Lanka. Los medios de subsistencia y las microempresas basados en el hogar son promovidos por el Estado y por ONG internacionales y locales, como estrategia para reforzar los medios de subsistencia de los hogares vulnerables. El microcrédito y la microfinanza son una modalidad clave, a través de la cual se apoyan los planes de autoempleo y, en el período posterior a 2009, las zonas afectadas por la guerra de Sri Lanka han sido testigos de una rápida financiarización del desarrollo, con el Gobierno y las ONG, así como los bancos y otras instituciones comerciales, promoviendo activamente la idea.

Desplazamiento de la producción primaria

Las mujeres de las zonas afectadas por la guerra se ven obligadas a convertirse en empresarias. Hay varias fuerzas en juego que desencadenan esta compulsión. Es necesario hacer una pequeña digresión para explicar la naturaleza de estas fuerzas y cómo contribuyen a empujar a las mujeres hacia el autoempleo como única estrategia de subsistencia. Passikudah, el foco de este capítulo, se caracteriza por la imposición de una economía turística intensiva en capital sobre un paisaje de producción primaria precaria en los sectores de la pesca y la agricultura, que padece de desigualdades locales y carga el legado de la guerra y la destrucción provocada por el tsunami. La economía de los complejos turísticos ha hecho atractivo el trabajo asalariado para su mano de obra, incluso cuando — o precisamente porque — socava otras formas de producción primaria (por ejemplo, la pesca, la agricultura, el trabajo en las plantaciones de coco) como medio de vida seguro. Esto se debe tanto al privilegio que le otorga el Estado y a la falta de apoyo a los productores primarios como a otros factores medioambientales, como la disminución de las capturas de peces y las constantes inundaciones durante los monzones. El privilegio asignado al turismo — y, en el caso de Passikudah, al turismo de resorts de alto nivel — es una estrategia de desarrollo económico propia de la posguerra, derivada de la actual filosofía económica de Sri Lanka. Esta filosofía, como bien dice Abbink, impulsa a Estados y pueblos enteros a 'producir bienes comercializables, desarrollar el comercio, monetizar todo, invertir en el crecimiento material, construir instalaciones y adquirir dinero y riqueza' (Abbink, 2009).

**Playa de Passikudah**

El menoscabo de la producción primaria también está inextricablemente ligado a cuestiones de acceso a los bienes comunes. El uso de la playa por los pescadores, por ejemplo, choca con el hecho de que sea virgen y esté reservada a los turistas. Algunos pescadores siguen utilizando la franja cercana a los complejos turísticos por problemas con el embarcadero oficial, que está más lejos y es más pequeño, pero los complejos turísticos los presionan constantemente para que se trasladen. Como hemos escrito en otro lugar (Gunasekara et al., 2016), en Passikudah hoy en día, la integración de los productores primarios en la cadena de suministro local se produce generalmente en la parte inferior de la cadena de valor, y la naturaleza precaria de la pesca hace que los pescadores se enfrenten a riesgos desproporcionados en comparación con otros medios de subsistencia, que también están en la parte inferior de la cadena. Esta precariedad y sus riesgos asociados empujan a la gente hacia el trabajo asalariado en la economía turística y otras formas alternativas de empleo. Para las mujeres de Passikudah, trabajar en el sector turístico conlleva ciertos riesgos para su reputación, ya que los complejos turísticos, los hoteles y las casas de huéspedes son mal vistos por la comunidad local. Son vistos como espacios que acogen los vicios humanos, especialmente los de los ‘otros’ varones, lo que genera temores de contagio étnico y

cultural (ibíd.). Los temores sociales que suscita la confraternización de las mujeres tamiles locales con hombres de negocios musulmanes, cingaleses o extranjeros, obstaculizan el acceso de las mujeres al trabajo asalariado disponible en la industria turística. En este contexto, el autoempleo se ha convertido en el medio de vida de facto para las mujeres, y también para algunos hombres, en Passikudah. Aunque este tipo de trabajo se denomina ahora ‘espíritu empresarial’, muy pocas de las mujeres autónomas que conocimos en Passikudah pertenecían a la categoría por excelencia de ‘buscadoras de empleo’. Su negocio es una actividad a tiempo parcial para sobrevivir. A diferencia del afán de crecimiento y expansión que asociamos a los empresarios, estas mujeres no están interesadas en convertir su microempresa en un negocio más rentable. Toda su atención se centra en la supervivencia, asegurando la subsistencia y diversificando el riesgo.

Preparadas para el fracaso

Como ya se ha dicho, el microcrédito y la microfinanza son una modalidad clave a través de la cual se apoyan los planes de autoempleo y, en el período posterior a 2009, las zonas afectadas por la guerra de Sri Lanka han sido testigos de una rápida financiarización del desarrollo, con el Gobierno y las ONG, así como los bancos y otras instituciones comerciales, promoviendo activamente la idea. El autoempleo basado en el microcrédito se presenta como un espacio económico inherentemente *empoderador* y generador de confianza para quienes lo persiguen. Aunque el desembolso del microcrédito es rápido y eficiente, hay muy poca orientación útil sobre lo que se debe producir. Los futuros empresarios reciben una formación mediocre sobre la fabricación de artículos que ya abundan en el mercado, como jabón, bolas de alcanfor o varitas de incienso, o se les enseña a fabricar artesanías que tienen poco o ningún valor en el mercado. Sin una orientación adecuada sobre las necesidades del mercado ni una formación de calidad, estas mujeres acaban produciendo lo que pueden, a su manera.

Si una mujer empieza a fabricar velas, es probable que todas sus vecinas empiecen a hacer lo mismo. Es habitual que las mujeres que trabajan por cuenta propia pasen de fabricar un producto a otro en un plazo de seis meses. Cuando conocimos a Rama⁹, fabricaba jabón en casa; siete meses después, pasó a fabricar *murukku* (un aperitivo frito local) porque no podía vender ninguna de sus pastillas de jabón. Estas mujeres suelen encontrarse con la falta de demanda de sus productos por parte de los consumidores, dado que la base de clientes es su propio barrio empobrecido. Varias empresarias nos contaron que aventurarse fuera de su pueblo conlleva riesgos, ya que

los mercados son un terreno de género. Navegar y negociar en los mercados implica enfrentarse a diversas formas de violencia de género y control social. Por ejemplo, una vendedora de cacahuets dijo que muchos hombres se le insinúan sexualmente cuando está en espacios públicos haciendo negocios. A veces, las insinuaciones son agresivas y llegan a la agresión sexual.

Las mujeres también tienen que negociar con sus maridos o parejas masculinas para llevar a cabo negocios fuera de casa. Varias mujeres nos contaron que planifican la actividad comercial fuera de casa cuando su marido no está. La misión diaria de Valli es vender sus dulces caseros lo antes posible y volver a casa antes de que su marido regrese de su jornada laboral. En las ocasiones en que vuelve tarde a casa, la disciplina de su marido llega en forma de golpes y patadas. Muchas otras mujeres relataron esta realidad, admitiendo que toman grandes precauciones para no provocar a sus maridos en sus intentos de ganarse la vida. En medio de la violencia, la humillación y el daño a la reputación que suponen estos incidentes, solo unas pocas mujeres siguen 'en el juego' para hacer viable el autoempleo. No es de extrañar que la mayoría de los proyectos de autoempleo fracasen, atrapando a las mujeres en círculos viciosos de endeudamiento que las hundan aún más en la pobreza. Estas empresarias también

Trabajos preparatorios para Murukku



Foto: Thamizhpparithi Maari

están aisladas de la actividad del mercado en general y carecen del capital social y del acceso a las redes de patrocinio necesarias para acceder a los mercados más allá de su zona de residencia. Y, como ya se ha dicho, la producción local en las zonas afectadas por la guerra, al igual que en la mayoría de las zonas rurales, se ve constantemente desplazada por actores económicos más grandes que consideran estas zonas geográficas como mercados sin explotar.

Hay pruebas recientes de que algunas han abrazado el autoempleo y, aprovechando una combinación de microcréditos, apoyo de otras fuentes y sus propias habilidades, han sido capaces de sacar provecho de integrarse en la economía local. Una pequeña minoría de emprendedoras ha aprovechado el apoyo del Estado para desarrollar sus capacidades para el autoempleo y para ampliarlo más allá de la subsistencia. Sin embargo, incluso en el puñado de casos relativamente exitosos, el autoempleo ha funcionado principalmente para permitir la diversificación y distribuir el riesgo en lugar de permitir la acumulación de capital para facilitar una transición fuera de la precariedad (Gunasekara et al., 2016). La gran mayoría de las emprendedoras *de facto* están atrapados en una batalla interminable para asegurarse unos ingresos estables. Prueban suerte en diversas empresas caseras porque llegar a fin de mes con el trabajo asalariado diario — el único trabajo que tienen a su disposición en Passikudah — se ha convertido en una ardua batalla. Estas realidades cuestionan algunos de los supuestos subyacentes del espíritu empresarial y la promesa de prosperidad en relación con el autoempleo de las mujeres.

La construcción de la “mujer financieramente responsable” (Macleay, 2012) está muy presente, ya que las mujeres son las destinatarias favoritas de los microcréditos; las ONG, los bancos, las instituciones financieras y el Estado han puesto en marcha iniciativas de microfinanzas solo para mujeres. En algunas ocasiones, observamos a funcionarios de campo en motocicletas visitando las aldeas donde conceden préstamos y cobran los reembolsos.¹⁰ Las reuniones relativas a los préstamos colectivos seguían un código o repertorio particular. Un grupo de unas diez o a veces quince mujeres (en su mayoría) se reunía y se sentaba en círculo, alrededor del joven agente de crédito. A veces, la reunión comenzaba con un juramento de las mujeres en el que se comprometían a utilizar el dinero para el bienestar de sus familias y a devolverlo a tiempo. A continuación, el funcionario recaudaba las cuotas semanales. Se alegraba cuando todas las cuotas se pagaban íntegramente y daba consejos sobre lo que debían producir luego, recordando cosas que le habían llamado la atención durante su viaje a Colombo o a otras ciudades. Esta reunión solía terminar con la concesión de nuevos préstamos a su grupo y la petición a las mujeres de que trajeran a otras personas que

quisieran participar en los planes de préstamo. Observamos aquí el modo de control, la financiarización, representada por el funcionario de campo de la compañía financiera o de la ONG. Este repertorio impone una construcción particular de la mujer financieramente responsable. Está intrínsecamente ligado a la carga reproductiva que recae sobre la mujer, que también está incorporada en el juramento que prestan. Como observó Stephen Young en el caso de la India (2010), en esta actuación también participa el hombre, el ejecutor con conocimientos financieros, la encarnación de la responsabilidad y la movilidad financiera.

Sin embargo, cuando sus proyectos de subsistencia en el hogar fracasan y las mujeres son incapaces de devolver los préstamos, se les tacha de ‘incompetentes’ y la inferioridad de las capacidades de las mujeres se esgrime fácilmente como causas del fracaso (Gunasekara et al., 2016). Las tendencias globales de utilizar los microcréditos para el consumo y el ‘intercambio de préstamos’ son muy evidentes en Sri Lanka, y las ‘narrativas del analfabetismo financiero’ o la falta de capacidad de las mujeres ocultan ‘la dimensión estructural más profunda de la financiarización del desarrollo y los programas de autoempleo y medios de vida impulsados por la deuda, cuya aparición está inextricablemente vinculada al fin virtual del empleo remunerado, seguro y a largo plazo o la producción primaria’ (ibíd.). Las consecuencias del endeudamiento son graves e incluso trágicas. Las noticias de las zonas afectadas por la guerra que relacionan los suicidios con el endeudamiento se han convertido en habituales (Wijedasa, 2014; Guganeshan, 2015).

La proliferación de empresas financieras en las zonas afectadas por la guerra en el período posterior a 2009 ha introducido nuevas dimensiones en este ámbito inherentemente violento de la deuda. Las mujeres que se retrasan en los pagos se enfrentan a menudo a la intimidación y el acoso de los cobradores de préstamos de las empresas financieras, que suelen practicar el marketing puerta a puerta y el cobro de préstamos (Gunasekara et al., 2016; 2015). Los favores sexuales a cambio de retrasos en los pagos se han convertido en una práctica habitual. Por este motivo, en algunas zonas los agentes de crédito llegan a cobrar los pagos a deshoras. Además de las dimensiones física y psicológica de este tipo de violencia, también tiene una dimensión subjetiva menos explorada. Las mujeres se enfrentan a riesgos para su reputación porque la intimidación y el acoso tienen lugar en su propia puerta, en la comunidad en la que viven. Este tipo de violencia alcanzó niveles tan crónicos en la Provincia Oriental que, en 2014, el secretario de Distrito de Batticaloa prohibió las visitas semanales a los domicilios para cobrar las cuotas de los préstamos.

Es importante algunos de los repertorios integrados en el espacio económico del autoempleo basado en el microcrédito. En el desempeño de la responsabilidad financiera con el ejemplo del hombre prestamista y las mujeres prestatarias, observamos un refuerzo particular de los roles de género. El agente de crédito masculino encarna la promesa de financiación para la mujer y su familia, junto con un arsenal de mecanismos, tanto materiales como simbólicos, para hacerla responsable de los fondos prestados. A la mujer prestataria se la responsabiliza de crear una empresa viable de autoempleo y de garantizar y priorizar el bienestar de su familia en los roles prescritos de madre y esposa. Observamos en el mismo lienzo la violencia doméstica que algunas de estas mujeres experimentan a manos de sus maridos cuando han traspasado los límites de la conducta aceptada en su papel de esposa y madre, y los encuentros violentos con los matones contratados por las compañías financieras en caso de retraso o no pago del préstamo. En conjunto, estos repertorios describen las dimensiones de género del parentesco que se privilegian (tanto cultural como violentamente) en la construcción de la mujer financieramente responsable. La construcción de la mujer financieramente responsable es una dinámica de las políticas neoliberales, que adopta hábilmente la retórica de la responsabilidad individual para enmascarar el creciente desmantelamiento de los servicios estatales (por ejemplo, programas de redes de protección, cupones de alimentos) y entregar la reproducción social por completo a las familias individuales, en este caso a las mujeres, o vender los servicios estatales en el mercado. Es una estrategia para maximizar el rendimiento del trabajo no remunerado de la reproducción social dentro de la familia y el gasto limitado del salario social fuera del hogar (Vogel, 2000). La construcción de la mujer económicamente responsable, en este caso, se convierte en un elemento central de los procesos de acumulación.

Una situación en la que todos ganan

Los únicos ganadores constantes en el juego del autoempleo y la micro financiación son los prestamistas, muchos de los cuales cobran tasas de interés exorbitantes que a veces alcanzan hasta el 200 o el 250% anual. Aunque la mayoría de los prestatarios son conscientes de las tasas de interés, recurren a la microfinanza como la única opción que tienen. La conveniencia de los microcréditos en términos de no requerir garantías o papeleo no se encuentra en otros planes de crédito seguro.

Mientras que los pequeños prestamistas son tachados de ‘usureros’ por sus condiciones de préstamo similares, los proveedores de microfinanzas se enorgullecen de ser socios del desarrollo. De hecho, uno de los prestamistas que conocimos llevaba una insignia que decía ‘Dream achiever’. Se coronan con un halo moral encontrando nuevas alianzas en las ONG. Como muestran Gunasekara, Philips y Nagaraj (2016), la

mayoría de las ramas de micro financiación de los bancos consideran que asociarse con las ONG es una situación en la que todos salen ganando.

En palabras del director de un banco de la provincia Oriental: “Esta colaboración nos ayuda a promover su causa humanitaria y, al mismo tiempo, a hacer negocios con las comunidades. Cuando promueven el acceso al crédito y la microfinanza como parte de sus programas, puedo abrir más cuentas y ofrecer préstamos a la gente. Así que es bueno para el negocio”¹¹. De ahí que la combinación de autoempleo y microfinanza se haya convertido en un mecanismo socialmente aceptado para extraer riqueza y recursos de los pobres, en particular de las mujeres. Se trata de una elegante estrategia de desarrollo de posguerra que promete la erradicación de la pobreza sin amenazar los acuerdos políticos y económicos existentes. Promete la transformación de vidas y comunidades sin el desorden de las luchas de clases, castas o etnias; y garantiza que se puede salvar a los pobres al tiempo que se obtienen beneficios de ellos.

Relaciones de violencia: espacial, económica, subjetiva y sexual

A partir de los relatos sobre la violencia de género en el autoempleo, identificamos cuatro relaciones de violencia interconectadas, aunque distintas, contra las trabajadoras en este ámbito de la economía: espacial, económica, subjetiva y sexual. Postulamos que la organización espacial del trabajo de las mujeres determina su visibilidad, produciendo así formas específicas de vulnerabilidad. Aquí observamos dos tipos de organización espacial del trabajo de las mujeres dentro de la economía política de la guerra. En primer lugar, durante la guerra, los centros de producción se concentraron en zonas geográficas alejadas del Norte y el este de Sri Lanka. Como en otros escenarios de guerra, toda la vida económica de Passikudah — principalmente la pesca y la agricultura — tuvo que enfrentarse a los combates entre el Ejército de Sri Lanka y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (TLET), en tierra y mar. Nadie escapaba a los regímenes de vigilancia desplegados por el Ejército de Sri Lanka, los TLET y otras facciones armadas. La actividad económica era de alto riesgo, sobre todo porque tenía que organizarse en torno a un régimen complejo e impredecible de puestos de control, toques de queda, zonas de seguridad y pases. El acceso a los mercados era irregular, lo que ocasionaba importantes pérdidas a los productores primarios. En un entorno de miedo en tiempos de guerra, en el que los hombres eran vulnerables a los secuestros, los asesinatos y el reclutamiento forzado, las mujeres podían sortear mejor los puestos de control para acceder a los mercados (Bohle y Funfgeld, 2007; Fernando y Moonesinghe, 2012; Goodhand et al., 2000). Pero los riesgos que esto conllevaba para las mujeres hacían que tampoco fuera siempre un

canal fiable o seguro. En consecuencia, la producción primaria, basada en la pesca o la agricultura, se convirtió en una economía de subsistencia o supervivencia, muy dependiente de factores externos y de la situación de seguridad.

En segundo lugar, el trabajo de las mujeres se organizó espacialmente de forma que permitiera una vigilancia y un control estrictos, dos aspectos que se consideran necesarios para el proceso de producción. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres de Passikudah recurrieron al autoempleo o al trabajo doméstico. Las mujeres trabajaban en los confines del hogar, bajo la atenta mirada de sus maridos y otros parientes varones, o de los *'mahath— thayas'* y *'nonas'*¹² de los hogares de clase media y alta, en su mayoría de etnia Cingalesa. Como muestra el caso de Valli (ilustrado en la sección anterior), los modos de control y poder arraigados en estos espacios hacen que las mujeres sean vulnerables a los abusos verbales, físicos y sexuales, y no ofrecen mecanismos de reparación. Silencian la voz de la mujer, como trabajadora y como ser humano. Observamos que esta organización espacial del trabajo de las mujeres, a la vez que permite formas de vigilancia y control necesarias para el proceso de producción, invisibiliza a la trabajadora e impide la intervención de terceros. También desde el punto de vista físico, los hogares mantienen estrictos códigos de privacidad. Al estar *'fuera de la vista, fuera de la mente'*, las trabajadoras disponen de mecanismos limitados para responsabilizar a los autores de cualquier tipo de violencia.

Las relaciones económicas violentas están profundamente arraigadas en estos modos de producción en las cadenas de valor del autoempleo. En el autoempleo de las mujeres de Passikudah, los rendimientos financieros son bajos, los acuerdos laborales precarios y las condiciones de trabajo peligrosas y a veces indecentes. La jornada laboral de una trabajadora doméstica o de una mujer que lucha por mantener su hogar a través de una microempresa es de más de veinte horas. Las leyes que imponen un salario mínimo y prestaciones a los empleados (es decir, las contribuciones al Fondo de Previsión de los Empleados y al Fondo Fiduciario de los Empleados) no se aplican a los empresarios de facto. Aunque un salario estable parece un lujo para las mujeres autoempleadas, también suelen quedar fuera de los programas estatales de redes de protección como Samurdhi.¹³ Parece que, a medida que disminuye la visibilidad del modo de acumulación, también disminuye el nivel de intervención estatal para proporcionar seguridad básica. Los préstamos, o el mundo de las finanzas, se convierten entonces en el lugar donde estas personas acceden a los fondos para satisfacer sus necesidades básicas. Como se ha explicado en detalle en la sección anterior, el endeudamiento es grave entre las mujeres autoempleadas.

Si consideramos el trabajo de las mujeres como parte de la economía moral, observamos relaciones subjetivas o psicosociales de violencia. La 'economía moral' podría definirse como un tipo de investigación centrada en cómo las actividades económicas de todo tipo se ven influidas y estructuradas por disposiciones, valores y normas morales, y cómo estas, a su vez, se ven reforzadas, moldeadas, comprometidas o anuladas por las presiones económicas. El orden moral se refiere a las normas (informales y formales), las convenciones, los valores, las disposiciones y los compromisos sobre lo que es justo y lo que constituye un buen comportamiento en relación con los demás, e implica ciertas concepciones más amplias del bien y del bienestar. Las formas en que la economía moral se desarrolla en la sociedad tienen violentos efectos subjetivos y psicosociales que dejan cicatrices permanentes en las mujeres.

Por ejemplo, en la economía moral, los significados que las relaciones y responsabilidades económicas tienen para las mujeres afectan el modo en que estas creen que debe realizarse y reconocerse su trabajo. El 'ritual' del juramento, por ejemplo, afirmaba diferentes etiquetas de valor para las identidades de las mujeres como madres y como productoras. La presión a la que se ven sometidas las mujeres para que generen ingresos para el mantenimiento de sus hogares significa invariablemente que, en cierta medida, su papel de madres se ve comprometido. Las formas en que esto ocurre afectan la textura moral del empleo. En este sentido, se fomentan los medios de vida de las mujeres en el hogar, ya que contienen a la mujer dentro del hogar y, por lo tanto, se consideran actividades que no afectan sus funciones como madres. Sin embargo, al confinar a la mujer a la domesticidad a través de los medios de subsistencia basados en el hogar, aumenta el riesgo de violencia doméstica. Y, como han demostrado los estudios, la disciplina o el control físico y psicológico de las mujeres por parte de sus maridos se suma a la carga de obtener ingresos y cuidar del hogar que tienen que soportar las mujeres, creando de hecho una carga triple (Jayasekara y Najab, 2016). Una tendencia emergente entre las mujeres endeudadas que trabajan por cuenta propia es que dedican horas de su día a intentar localizar a otras mujeres de su grupo que han dejado de pagar sus préstamos. Algunas de las mujeres que conocimos dedicaban al menos dos días a la semana a localizar a las morosas, ya que el no pago afecta a todas las demás del grupo de préstamo. Durante esos dos días, no hacen otra cosa que pasear por sus pueblos y zonas colindantes. Poopathy nos contó que no puede pedir más préstamos a menos que las demás paguen sus cuotas. Esto supuso un grave problema para ella, ya que utilizaba los fondos de este grupo concreto para los gastos del hogar. Redujo considerablemente el número de velas que producía a la semana, por lo que sus ingresos se vieron afectados. También

la distanció de sus amigas y de otras mujeres de la comunidad. Las que habían dejado de pagar eran sus amigas y familiares, y su incapacidad para devolver los préstamos afectó la supervivencia de Poopathy y de otras mujeres del grupo. Esto había provocado enemistades entre ella y otras personas que antes estaban cerca de ella. Este relato pone de manifiesto una economía moral de las finanzas para los empresarios *de facto*, en la que los valores que impulsan esta relación económica están conduciendo lentamente a la ruptura de los lazos sociales y de parentesco en el campo de Sri Lanka.

El trabajo de las mujeres fuera de casa suele provocar reacciones y ansiedades más generalizadas o un estado de pánico moral (Goode y Ben—Yehuda, 2009; Krinsky, 2008), y el pánico moral permite una mayor vigilancia de las mujeres. Las mujeres que trabajan en estos espacios se enfrentan a graves riesgos para su reputación basados en el pánico moral en torno a la confraternización sexual. Aunque algunas mujeres pueden sobrepasar estos límites a pesar de los cotilleos malintencionados y la difamación, la mayoría se atiene a las normas de la economía moral para mantener su reputación de mujer ‘buena’ y ‘virtuosa’. Las mujeres que trabajan por cuenta propia se han convertido en blanco de este pánico moral, sobre todo a causa del sexo transaccional como moneda de cambio para negociar el acceso al capital de trabajo, los insumos de producción, el crédito y los mercados. Como ya se ha mencionado, algunas trabajadoras autónomas de Passikudah se vieron atrapadas en transacciones sexuales altamente explotadoras en las que negociaban el sexo como pago de la deuda y de los intereses de los préstamos.

La financiarización: un modo de poder y control

Nuestro enfoque para desentrañar las relaciones de violencia de género (espacial, económica, subjetiva, sexual) frente a un modo concreto de acumulación y desposesión — el autoempleo — fue un intento de iluminar ciertas fuerzas económicas, políticas e ideológicas más amplias que están enredadas en este entramado complejo y que reproducen continuamente la violencia. En el relato anterior, presentamos la ‘financiarización’ y la ‘responsabilización’ como ‘modos de poder y control’ de género sobre las poblaciones empobrecidas de las zonas de Sri Lanka afectadas por la guerra. El contexto en el que existen actualmente estos modos de control es lo que conocemos como ‘globalización neoliberal’.

A través del modo de control al que nos referimos como ‘responsabilización’, el trabajo de la mujer en la esfera pública sigue llevando el sello del trabajo subestimado,

informal y no remunerado que realiza en la esfera privada. En el contexto de Estados Unidos, Susan Thistle observa que:

Los economistas reconocen desde hace tiempo... que el desarrollo de nuevas regiones y la conversión de trabajadores no asalariados en asalariados pueden generar grandes beneficios, llevando a las empresas a establecer fábricas en el extranjero... debemos darnos cuenta de que un proceso lucrativo similar estaba ocurriendo dentro de los propios Estados Unidos... A medida que el mercado llegaba a cocinas y dormitorios convirtiendo muchas tareas domésticas en trabajo remunerado la productividad aumentaba enormemente. (Thistle, 2006)

La mujer ‘responsable’, motor ideológico del microcrédito, trabaja en un contexto no regulado y libre de leyes laborales y, al igual que el trabajo doméstico dentro del hogar, este contexto es interminable y funciona a lo largo de las veinticuatro horas del día. La mayor visibilidad pública de las mujeres trabajadoras ha creado a su vez una ansiedad generalizada sobre la sexualidad femenina y ha contribuido a aumentar la violencia contra las mujeres. El aumento de la incidencia de violaciones y agresiones sexuales, aunque está asociada a la mercantilización generalizada de la sexualidad, también debe interpretarse como una expresión de mecanismos más profundos de disciplina y violencia laboral.

La financiarización es el patrón de cómo los lugares y las poblaciones se han repositionado estratégicamente en relación con las oportunidades o los riesgos que presentan para los flujos mundiales de capital (Mitchell y Beckett, 2008). Esta financiarización del espacio pretende ampliar y acelerar la movilidad del capital para que se desplace con facilidad por todo el mundo. Apoyada en supuestos de analfabetismo e incompetencia fiscal en los países en desarrollo, la ‘financiarización’ vende la promesa de sacar de la pobreza a los hogares mediante iniciativas de microcrédito y microfinanza. Los recortes del gasto se hacen parecer ‘fiscalmente responsables’, invisibilizando y legitimando el impulso de contratar mano de obra (femenina) más barata para los hospitales y escuelas del sector público. También genera flujos de trabajadoras migrantes procedentes de zonas rurales y empobrecidas de un país para realizar las tareas de cuidado de las mujeres trabajadoras. Estas ‘circulaciones’ deben entenderse en “relación dinámica con la globalización financiera” (Young, 2010). Coinciden con la huida paralela del capital estatal y empresarial debido a la liberalización de los mercados y los recortes del gasto público, y la producción de flujos financieros en forma de remesas que las trabajadoras envían a sus hogares para mantener a sus familias (ibíd.).

En este contexto, la microfinanza se convierte menos en una herramienta política para apoyar los derechos de las mujeres en caso de reestructuración de las políticas industriales estatales (como en el caso de SEWA en Gujarat, India). Más bien, como muestra Heloise Weber (2006), la microfinanza, con su énfasis en la iniciativa empresarial y la autosuficiencia, se creó a partir de los Fondos Sociales de Emergencia del Banco Mundial para ayudar a las poblaciones que experimentaban dificultades temporales como resultado de los programas de liberalización impuestos por el FMI en la década de 1980. El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP) fue rápidamente movilizadado por el Banco Mundial como misioneros que difundían la palabra de la microfinanza en el mundo en desarrollo. La idea de la microfinanza como inyección temporal para aliviar las penurias financieras lleva el trasfondo de la opinión del inversor (Warren Buffett) de que la volatilidad económica ofrece oportunidades de obtener beneficios. Así pues, se fomenta la microfinanza y el autoempleo, con el supuesto de que existe un mundo de ‘oportunidades infinitas’ para los pobres y, en la mayoría de los casos, para las mujeres. Sin embargo, los relatos de las mujeres autónomas y endeudadas de Passikudah ponen en tela de juicio estos supuestos y el mundo de esperanza que introducen estos programas.

Hoy en día, la industria de la microfinanza es una empresa de miles de millones de rupias, y muchas instituciones registran más del 100% de beneficios. En 2016, Sanasa Development Bank, uno de los principales proveedores de micro financiación, registró un beneficio neto de mil millones de rupias por primera vez en su historia (Lanka Business News, 2016). En el ejercicio fiscal de 2015, los beneficios aumentaron un 48%. Como ya se ha comentado, la demanda de préstamos no se debe simplemente a las pérdidas financieras de las familias durante la guerra, sino que es el resultado de un proceso más amplio de austeridad fiscal que trasladó la carga del mantenimiento del hogar a las mujeres.

Como ya se ha dicho, aunque la movilidad limitada de las mujeres dificulta considerablemente el éxito y la vida útil de su microempresa, para las empresas de microfinanzas, como señala Jonathan Morduch (1999), esto es una ventaja (ya que disminuye la probabilidad de ‘riesgo moral *a posteriori*’) el temor a que los clientes ‘cojan el dinero y salgan corriendo’. El doble ataque de la microfinanza y el autoempleo refuerza los límites a la movilidad de las mujeres mediante la incorporación de la perspectiva de género en las actividades empresariales (por ejemplo, la gestión de pequeñas tiendas, la costura de ropa o la cría de ganado, etc.) y hace hincapié en la necesidad de que las mujeres sean Anagi¹⁴ (valiosas), ‘buenas madres’ empoderadas que trabajan para la mejora de sus familias. La financiarización, de la que la

microfinanza no es más que un producto, promueve la responsabilización de diversos tipos que ‘tienden a reproducir ideologías de género en relación con los tipos de trabajo, remunerado y no remunerado, que realizan las mujeres, y la espacialidad de este trabajo’ (Young, 2010). Esto supone un obstáculo a la hora de cuestionar las estructuras de dominación más amplias.

Conclusión

La característica más llamativa de la narrativa del desarrollo de posguerra en Sri Lanka es el acoplamiento de dos ideologías de género aparentemente contradictorias. Una es la ideología de la mujer como madre que ‘dedica su vida a criar a los hijos, gestionar el presupuesto familiar y garantizar la paz en la familia’ (Departamento de Planificación Nacional, 2010) que se adoptó como política oficial del Gobierno. Una de las primeras consecuencias fue la introducción de políticas para restringir el número de mujeres, especialmente de mujeres casadas, que emigraban al extranjero en busca de trabajo, lo que se convirtió en un objetivo político clave en la Sri Lanka posterior a la guerra.¹⁵ En los casos en los que el Gobierno ha promovido la actividad económica de las mujeres, ha tendido a ser en actividades confinadas en gran medida a sectores de la economía de subsistencia o autoempleo en el domicilio, o en relaciones laborales precarias. Esto ha continuado hasta bien entrado el décimo año de desarrollo de ‘posguerra’, con ‘Enterprise Sri Lanka’ (iniciado en 2018), otro plan de préstamos con su propio subprograma orientado al ‘empoderamiento económico de las mujeres’. Lo que viene con Enterprise Sri Lanka es otra ideología de género que promueve a las mujeres como ‘el motor del crecimiento económico’ (Ministro de Finanzas, 2017). Enterprise Sri Lanka llegó en un momento de desempleo continuado, trabajo precario (como ya se ha comentado) e importantes problemas de endeudamiento de los hogares.

La brillante idea del Gobierno de Sri Lanka parece ser introducir más préstamos y animar a la gente a ser los emprendedores ‘naturales’ que son (ibíd.). El fomento de la empresa, a través del autoempleo, se presenta como la política del Estado (y también lo promueven fácilmente las organizaciones no gubernamentales de desarrollo), no solo como una forma de alcanzar objetivos económicos (es decir, pasar a ser un país de ingreso medio), sino también como una vía hacia la reconciliación, a través de la prosperidad económica en las comunidades afectadas por la guerra. Nuestro trabajo de campo en Passikudah, como se ha comentado anteriormente, ha demostrado cómo la esperanza del Estado en esta estrategia no se encuentra cómoda con las realidades de supervivencia y seguridad de las mujeres.

En este capítulo también señalamos un escollo en los discursos contemporáneos sobre justicia y derechos, en los que la violación y la violencia sexual contra las mujeres ocupan un lugar destacado en los debates sobre justicia transicional y reforma constitucional en Sri Lanka. Lo que no se tiene tan en cuenta en estos discursos son los regímenes de género y sexuales integrados en las relaciones económicas políticas y la violencia inherente a su mantenimiento. Nuestro principal argumento es que las economías de autoempleo examinadas en este capítulo se basan en regímenes de género y de orden y seguridad sexual que se mantenían — y se mantienen — mediante la coerción y la violencia. Pero considerar la coerción y la violencia de forma aislada, por ejemplo, como actos discretos de violencia sexual o violencia contra las mujeres y las niñas, como hace la mayoría de las veces la agenda de la justicia transicional, falla, en primer lugar, al abordar las condiciones estructurales que producen dicha violencia. En segundo lugar, este planteamiento acaba basándose casi exclusivamente en la individualización de la responsabilidad y la victimización y, de hecho, corre el riesgo de fragmentar la posibilidad de llevar a cabo luchas políticas colectivas para resistir y transformar estas condiciones.

Estos regímenes de orden y seguridad sexual no son en absoluto fijos ni unidimensionales en cuanto a la naturaleza de su enfoque sobre el cuerpo femenino. Los cambiantes contextos y dinámicas político-económicas, así como los límites y posibilidades de la violencia, hacen que estos regímenes cambien de enfoque y encarnen complejas relaciones internas. En el período de posguerra, las mujeres del Norte y el este, que son las destinatarias preferidas de los préstamos de microfinanzas y otros planes de autoempleo basados en el endeudamiento, se ven obligadas a entrar en un espacio socioeconómico en el que las ideas profundamente sexistas de que las mujeres son prestatarias más fiables, responsables y cumplidas las han atado al empleo en casa, dejándolas vulnerables a múltiples capas de violencia estructural.

Los órdenes y regímenes sexuales también tienen claras dimensiones espaciales. Una comparación con los otros ejemplos mencionados al principio de este capítulo es útil a este respecto. Mientras que las plantaciones y las zonas francas son zonas de excepción delimitadas físicamente, el trabajo doméstico y el autoempleo basado en préstamos de la posguerra se territorializan de forma diferente: mujeres individuales encerradas en relaciones específicas con el capital en el hogar. Las trabajadoras sexuales se encuentran dentro de una economía de la criminalización y, aunque omnipresentes, su visibilidad es tensa y siempre va acompañada de violencia física y sexual directa. También está claro que estos modos de acumulación por desposesión son, de hecho, porosos entre sí. Por ejemplo, muchas mujeres tamiles de Hill Country se ven

obligadas a trabajar en el servicio doméstico o en fábricas de zonas francas; el trabajo sexual no se limita en absoluto a las trabajadoras sexuales, ya que los trabajadores de las zonas francas recurren a él; y las trabajadoras domésticas o las mujeres endeudadas pueden verse 'obligadas' a transar con sexo. Por lo tanto, observamos la explotación sexual como una relación que existe en varios modos de acumulación y desposesión. En la medida en que este capítulo esboza la economía política de la violencia contra las mujeres, incluida su naturaleza sexualizada, en Sri Lanka en relación con la guerra, es importante señalar que las mujeres no son meras víctimas de un patrón inexorable, y serían especialmente significativas las relaciones entre mujeres que desafían o marcan una salida de los contratos sexuales heteropatriarcales estándar. Los órdenes y regímenes sexuales explorados anteriormente no se limitan a las relaciones económicas o a los espacios de producción. De hecho, la violencia estructural que encarnan subraya que dichas relaciones y espacios de producción están a su vez firmemente anclados en patriarcados superpuestos. Y se mantuvieron y reprodujeron durante y después de la guerra a través de la violencia, tanto física como estructural. Las mujeres han sido y siguen siendo explotadas, pero también valoradas como sustento y reproducción de la familia, la raza y la nación, y esa violencia contra ellas siempre ha estado y sigue estando legitimada por una combinación de regímenes jurídicos de impunidad y regímenes morales de responsabilización. A la sombra de la atención prestada a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, en particular la violación, en el contexto de la justicia transicional en relación con la guerra, hay muchas narrativas de violencia silenciadas, incluidas formas de violencia sexual distintas de la violación. Este capítulo es un intento, por limitado que sea, de encontrar formas de romper este silencio.

Notas

1- Se debe tener en cuenta que procesos como el Grupo Consultivo sobre Mecanismos de Reconciliación y el Comité de Representación Pública intentaron incluir los derechos socioeconómicos en debates más amplios sobre la reforma constitucional. Aunque los derechos económicos y sociales se consideraron urgentes e importantes, ninguno de los dos procesos puso en primer plano estas cuestiones en relación con las atrocidades cometidas durante la guerra.

2- El desarrollo de la industria hizo de la liberalización económica una condición clave de los préstamos concesionarios en el marco de los programas de ajuste estructural (PAE) ofrecidos para salvar las economías en declive del Sur Global. La suscripción de Sri Lanka a los PAE durante este período provocó un giro en la política exterior hacia el bloque estadounidense, que a su vez dio lugar a una ola de proyectos de inversión del sector público patrocinados por la ayuda extranjera. Contrario a la expectativa de que el grado de agitación y conflicto disminuiría como resultado de la reducción de la intervención estatal y el consiguiente aumento del empleo y las oportunidades económicas, hubo una intensificación del conflicto político durante este período de transición que finalmente culminó en una guerra civil en 1983.

3- Después de dos décadas de una economía impulsada por políticas de sustitución de importaciones, Sri Lanka entró en un período transición económica y política entre 1977-83 con la elección del gobierno liderado por el Partido Nacional Unido (UNP). Dirigido por J. R. Jayawardene, el gobierno puso fin a la sustitución de importaciones e instituyó un amplio programa de liberalización del comercio, desregulación del sector privado y suspensión de muchas disposiciones de bienestar que históricamente fueron empleadas por la élite gobernante para comprar y mantener la paz social (Dunham y Jayasuriya, 2001). Este período de transición, marcado por una ruptura significativa de los acuerdos económicos y políticos, no solo heredó, sino que también reprodujo muchos de los legados políticos y económicos de las décadas de 1950 y 1960. La transición de una economía basada en la exportación de plantaciones a una economía de sustitución de importaciones basada en el sector público a mediados de la década de 1950 coincidió con el enfrentamiento entre cingaleses y tamiles por el desarrollo desigual y el poder político (Venugopal, 2003). Las dos décadas de regulación gubernamental (1956-76) de las empresas del sector privado, la banca y el comercio exterior, y la nacionalización de industrias clave como las finanzas, los puertos y el petróleo, condujeron a una dependencia del patrocinio del Estado para acceder a las escasas oportunidades de empleo, contratos y permisos del sector privado, y determinaron la ubicación de las industrias del sector público, los proyectos de irrigación y reasentamiento de las zonas secas (Gunasinghe, 1984).

4- Las zonas francas (FTZ) y las plantaciones de té, ambas dependientes del trabajo femenino, y la mayoría de los destinos turísticos ubicados principalmente en el oeste y el Sur estaban bien aislados de los efectos directos de la guerra.

5- El gobierno del UNP tuvo dificultades para mantener el ritmo inicial de liberalización. A medida que el crecimiento económico se desaceleraba, el Estado se convirtió en el «empleador de último recurso» y la expansión del sector de la seguridad empujó a los jóvenes cingaleses de las comunidades campesinas y pesqueras a alistarse en el ejército (Venugopal, 2003: 32). El aumento de la militarización del Estado en condiciones de guerra alimentó los poderes autoritarios del Estado para sofocar cualquier disturbio político grave (ibíd.). Estas condiciones y la ausencia de transparencia en muchas transacciones crearon vías para la extracción de rentas a gran escala en la economía de guerra (Athukorala y Jayasuriya, 2012:11). Como resultado, muchas medidas de privatización se ejecutaron de maneras que favorecían a las empresas con vínculos con el estado y los funcionarios del gobierno que se dedicaban a prácticas corruptas (es decir, a las comisiones).

6- En 2001, este sector representó más del 5% del empleo total y un porcentaje mucho mayor del empleo en el sector estructurado de los hombres cingaleses (Venugopal, 2003:32).

7- Véase www.cbsl.gov.lk/pics_n_docs/latest_news/press_20150507ea.pdf (consultado el 30 de junio de 2018).

8- Estos efectos incluyeron una reducción del gasto del sector público, con la reducción de los subsidios para la producción agrícola y la distribución de alimentos, una elevada inflación, recortes, etc.

9- Todos los nombres de los encuestados han sido reemplazados por seudónimos para proteger sus identidades.

10- Esto es similar a lo que Stephen Young encontró en 2010 en Andhra Pradesh.

11- Entrevista con un hombre, 4 de marzo de 2015, en Gunasekara et al. (2016).

12- Los términos «mahaththaya» y «nona» (cingalés) pueden traducirse libremente como «caballero» y «dama», pero en este contexto implican el poder que los miembros de los hogares tienen sobre las trabajadoras domésticas.

13- Samurdhi es un programa de protección social patrocinado por el Estado. «Samurdhi» (cingalés) significa «prosperidad». El programa incluye componentes de bienestar, desarrollo rural y microfinanzas que incluyen cupones de alimentos, seguro social y financiación para ayudar a superar la pobreza. El foco de estos programas ha sido «empoderar» a los pobres y proporcionar una «red de seguridad» para superar la pobreza.

14- «Anagi» es también el nombre de una cuenta de ahorro para mujeres, ofrecida por el Banco Comercial de Sri Lanka.

15- La prohibición casi de iure de que las mujeres con hijos menores de 5 años emigren al extranjero para trabajar (Informe de Antecedentes Familiares 2013, circular del Gobierno No. El MFE/RAD/1/3) fue una de una serie de medidas adoptadas por el Estado para limitar el derecho de la mujer al trabajo remunerado. Esto se refleja en la fuerte disminución de las mujeres migrantes desde los años de guerra hasta la posguerra. En 1997, durante el apogeo de la guerra civil de Sri Lanka, las mujeres representaban el 75% de toda la mano de obra migrante, contribuyendo sustancialmente a los ingresos en divisas del país; sin embargo, en 2015, esta cifra había descendido al 35% (Arambepola, 2018). A pesar de un cambio de gobierno en 2015, el Estado sigue ejerciendo una política «proteccionista» hacia el trabajo de las mujeres. La retórica oficial es que la reducción del número de mujeres enviadas al extranjero para trabajar (con un aumento simultáneo de los hombres que emigran para trabajar) reducirá los problemas domésticos que ocurren una vez que las mujeres salen al extranjero (Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, 2013). Esta opinión no tiene en cuenta la complejidad de las razones por las que las mujeres emigran para trabajar: pobreza, falta de apoyo y manutención por parte de los hombres de la familia y, en algunos casos, violencia doméstica.

Referencias

- Abbink, J. 2009. 'Suri Images: The Return of Exoticism and the Commodification of an Ethiopian "Tribe"', *Cahiers d'Études Africaines* 49 (196): 893–924.
- Alailima, P. 2002. 'The Impact of Public Policy on the Poor in Sri Lanka: A Study of Policies Relating to Incomes, Assets and Living Standards and their Effects on the Poor, 1970–84'. PhD thesis, University of Bradford.
- Almeida, K. 2017. 'Importance of Remittance to Sri Lanka and its Future in Digital World', *Daily Mirror*, 7 April, www.dailymirror.lk/article/Importance-of-remittance-to-Sri-Lanka-and-its-future-in-digital-world-126985.html
- Anglin, M. K. 1998. 'Feminist Perspectives on Structural Violence', *Identities: Global Studies in Culture and Power* 5 (2): 145–51.
- Arambepola, C. 2018. 'Is There an Alternative to the Family Background Report?', *Sunday Times*, 3 September, www.sundaytimes.lk/180930/business-times/is-there-an-alternative-to-the-family-background-report-313453.html
- Athukorala, P. and Jayasuriya, S. 2012. 'Economic Policy Shifts in Sri Lanka: The Post-conflict Development Challenge'. Working Paper 2012/15. Canberra: Australian National University, https://acde.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/acde_crawford_anu_edu_au/2016-10/wp_econ_2012_15_athukorala_sisira.pdf
- Bohle, H. G. and Funfgeld, H. 2007. 'The Political Ecology of Violence in Eastern Sri Lanka', *Development and Change* 45 (4): 665–87.
- Dalla Costa, M. and Fortunati, L. 1977. *Brutto Ciao*. Rome: Edizioni delle Donne.
- Department of National Planning. 2010. *Mahinda Chinthana, Vision for the Future: The Development Policy Framework of the Government of Sri Lanka*. Colombo: Department of National Planning.
- Dunham, D. M. and Jayasuriya, S. 2001. 'Liberalisation and Political Decay: Sri Lanka's Journey from a Welfare State to a Brutalised Society'. The Hague: Institute of Social Studies.
- Elson, D. 1989. 'The Impact of Structural Adjustment on Women: Concepts and Issues' in Onimode, B. (ed.), *The IMF, the World Bank and the African Debt. Vol. II: The Social and Political Impact*. London: Zed Books.
- Federici, S. 2004. *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. New York: Autonomedia.
- Fernando, P. and Moonesinghe, S. 2012. 'Livelihoods, Basic Services and Social Protection in Sri Lanka'. Working Paper 6. London: SLRC.
- Goode, E. and Ben-Yehuda, N. 2009. *Moral Panics: The Social Construction of Deviance*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Goodhand, J., Hulme, D. and Lewer, N. 2000. 'Social Capital and the Political Economy of Violence: A Case Study of Sri Lanka', *Disasters* 24 (4): 390–406.

- Guganeshan, M. 2015. 'Rise of Financial Institutions and Northern Province Debt Trap', *Colombo Telegraph*, 31 July, www.colombotelegraph.com/index.php/rise-of-financial-institutions-northern-province-debt-trap/
- Gunasekara, V., Najab, N. and Munas, M. 2015. *No Silver Bullet: An Assessment of the Effects of Financial Counseling on Decision-making Behavior of Housing Beneficiaries in Jaffna and Kilinochchi*. Colombo: Centre for Poverty Analysis (CEPA).
- Gunasekara, V., Philips, M. and Nagaraj, V. 2016. *Hospitality and Exclusion: A Study about Post-war Tourism in Passikudah*. London: Overseas Development Institute.
- Gunasinghe, N. 1984. 'The Open Economy and its Impact on Ethnic Relations in Sri Lanka' in Committee for Regional Development, *Sri Lanka: The Ethnic Conflict: Myths, Realities and Perspectives*. New Delhi: Navrang.
- Hartsock, N. 2006. 'Globalization and Primitive Accumulation: The Contributions of David Harvey's Dialectical Marxism' in *David Harvey: A Critical Reader*. Oxford: Blackwell.
- Hartsock, N. 2011. 'A New Moment of Primitive Accumulation'. Inaugural Inkrit Conference.
- Jayasekara, P. and Najab, N. 2016. *The Political Economy of Violence: Women's Economic Relations in Post-war Sri Lanka*. London: Overseas Development Institute.
- Jayawardena, K. and Pinto—Jayawardena, K. 2017. *Search for Justice: The Sri Lanka Papers*. New Delhi: Zubaan.
- Keating, C., Rasmussen, C. and Rishi, P. 2010. 'The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered Economy', *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 36 (1): 153–76.
- Krinsky, C. 2008. 'Introduction: Moral Panic Concepts' in *The Ashgate Research Companion to Moral Concepts*. Abingdon: Ashgate Publishing.
- Lakshman, W. D. 1996. 'Socio-economic Impact of Structural Adjustment Policies in Sri Lanka'. Discussion Paper 6. Perth: Edith Cowan University, Centre for Development Studies.
- Lanka Business News. 2016. 'Sanasa Bank PBT Tops Rs. 1 bn with Impressive Growth', *Lanka Business News*, 25 April, www.dailynews.lk/2016/04/25/business/79647
- LeBaron, G. and Roberts, A. 2010. 'Towards a Feminist Political Economy of Capitalism and Carcerality', *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 36 (1): 19–44.
- Lynch, C. 2007. *Juki Girls, Good Girls: Gender and Cultural Politics in Sri Lanka's Global Garment Industry*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Maclean, K. 2012. 'Banking on Women's Labour: Responsibility, Risk and Control in Village Banking in Bolivia', *Journal of International Development* 24 (1): 100–11.
- Mies, M. 1987. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*. London: Zed Books.
- Minister of Finance. 2017. 'Budget Speech'. Sri Jayawardenapura Kotte: Parliament of Sri Lanka.
- Mitchell, K. and Beckett, K. 2008. 'Securing the Global City: Crime, Consulting, Risk, and Ratings in the Production of Urban Space', *Indiana Journal of Global Legal Studies* 15 (1): 75–100.

- Moore, D. 2015. 'Conflict and After: Primitive Accumulation, Hegemonic Formation and Democratic Deepening', *Stability: International Journal of Security and Development* 4 (1): 1–21.
- Morduch, J. 1999. 'The Microfinance Promise', *Journal of Economic Literature* 37: 1569–614.
- Murray, C. 2001. *Livelihoods Research: Some Conceptual and Methodological Issues*. Manchester: CPRC.
- Nagaraj, V. K. 2015. 'War, Conflict and Development: Towards Reimagining Dominant Approaches', *Economic and Political Weekly*, 28 February.
- Ní Aoláin, F. 2012. 'Advancing Feminist Positioning in the Field of Criminal Justice', *International Journal of Transitional Justice* 6: 205–28.
- Nordstrom, C. 2004. *Shadow Wars: Violence, Power and International Profiteering in the Twenty-first Century*. Berkeley: University of California Press.
- Okin, S. M. 1991. *Justice, Gender and the Family*. New York: Basic Books.
- Rafeek, M. I. M. and Samaratunga, P. A. 2000. *An Analysis of Competitiveness of the Rice Sector in Sri Lanka*. Peradeniya: Socio Economic and Planning Center, Department of Agriculture.
- Raven—Roberts, A. 2013. 'Women and the Political Economy of War' in Cohn, C. (ed.), *Women and Wars: Contested Histories Uncertain Futures*. Cambridge: Polity Press.
- Ruwanpura, K. 2000. *Structural Adjustment, Gender and Employment: The Sri Lankan Experience*. Geneva: International Labour Organization.
- Satkunanathan, A. 2017. 'Sri Lanka: The Impact of Militarization on Women' in Ní Aoláin, F., Cahn, N., Haynes, D. F. and Valji, N. (eds), *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Senanayake, S. M. P. 2002. 'An Overview of the Micro Finance Sector in Sri Lanka', *Savings and Development* 26 (2): 197–222.
- Sparr, P. 1994. *Mortgaging Women's Lives: Feminist Critiques of Structural Adjustment*. London: Zed Books.
- Sri Lanka Bureau of Foreign Employment. 2013. 'Circular on the Family Background Report'. Colombo: Government of Sri Lanka.
- Taghdisi Rad, S. 2015. 'Political Economy of Aid in Conflict: An Analysis of Pre— and Post—Intifada Donor Behaviour in the Occupied Palestinian Territories', *Stability: International Journal of Security and Development* 4 (1): 1–18.
- Thistle, S. 2006. *From Marriage to the Market: The Transformation of Women's Lives and Work*. Berkeley: University of California Press.
- True, J. 2012. *The Political Economy of Violence against Women*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1990. 'Employment and Poverty Alleviation Project', 3 volumes. Colombo: mimeo.

- Venugopal, R. 2003. 'The Global Dimensions of Conflict in Sri Lanka'. Paper presented at the conference on 'Globalisation and Self-Determination Movements', Pomona College, 21-22 January.
- Vogel, L. 2000. *Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory*. Chicago: Haymarket Books.
- Weber, H. 2006. 'The Global Political Economy of Microfinance and Poverty Reduction: Locating "Livelihoods" in Political Analysis' in Fernando, J. (ed.), *Microfinance: Perils and Prospects*. London and New York: Routledge, Taylor and Francis.
- Wijedasa, N. 2014. 'North in Debt Trap', *The Sunday Times*, 7 December, www.sundaytimes.lk/141207/news/north-in-a-debt-trap-131679.html
- Young, S. 2010. 'The "Moral Hazards" of Microfinance: Restructuring Rural Credit in India', *Antipode* 42 (1): 201-23.

2

PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA REGIÓN DE HIGHLANDS DE PAPÚA NUEVA GUINEA: EL PAPEL DEL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL LOCAL Y LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Elizabeth Cox¹



Introducción

Este capítulo analiza la economía política de la violencia contra las mujeres en Hela y Jiwaka, dos provincias de reciente creación y afectadas por el conflicto en la región de Highlands de Papúa Nueva Guinea (PNG). Examina el papel del Estado, la sociedad civil y la industria extractiva a la hora de abordar los legados post—independentistas del patriarcado, el conflicto violento y la violencia contra las mujeres en la región de Highlands de PNG. En estas “nuevas provincias”, el Estado tiene la tarea de construir infraestructuras públicas, una administración pública eficaz y la prestación de servicios, prácticamente desde cero. El capítulo traza un mapa de los conflictos y la violencia contra las mujeres en ambas provincias y afirma que la nula responsabilidad del Estado, la ausencia de sociedad civil y la incapacidad para negociar la paz o aplicar leyes que protejan a las mujeres y las niñas son la cara del desarrollo impulsado por la extracción, detrás del cual se esconden relaciones violentas multidimensionales.

Los redactores de la Constitución de PNG se basaron en las normas y estándares de derechos humanos, así como en las lecciones aprendidas de las economías africanas y latinoamericanas, ricas en recursos e impulsadas por la industria extractiva. Pidieron cautela y moderación en la explotación de la vasta riqueza de recursos naturales de PNG, para evitar la destrucción del medio ambiente, la enajenación de tierras de propiedad consuetudinaria y el abandono del prometedor sector agrícola. Predijeron que las industrias extractivas no reguladas dejarían a las generaciones futuras desposeídas y propensas al conflicto (Comité de Planificación Constitucional de Papúa Nueva Guinea, 1974). Sin embargo, desde la independencia de Papúa Nueva Guinea en 1975, una sucesión de gobiernos nacionales y locales dominados por hombres han forjado una economía dependiente de las industrias extractivas que ha exacerbado la brecha rural urbana y la corrupción de alto nivel, y han dado prioridad al desarrollo de infraestructuras en las capitales que causan “admiración y envidia” y a la organización de costosos eventos internacionales, mientras que una gran parte de la población rural languidece en la penuria por la “escasez de fondos para bienes y servicios muy necesarios” (Sawang, 2017).

Los ingresos de la industria extractiva han dado lugar a un gasto público irresponsable que no se han traducido en un desarrollo más equitativo e integrador. A pesar de varias “décadas de bonanza”², una elevada proporción de ciudadanos de las zonas rurales y remotas de Highlands siguen viviendo sin carreteras, electricidad o suministro de agua potable. Las tasas de mortalidad materna e infantil, analfabetismo, corrupción y delitos de violencia contra las mujeres en PNG se encuentran entre las más altas

del mundo. Las remotas provincias de Highlands que albergan industrias extractivas, siguen estando gravemente subdesarrolladas, son propensas a los conflictos y figuran entre los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres. La determinación del Estado de acelerar la explotación de los recursos naturales sigue intacta, a pesar de las continuas crisis de manejo fiscal, las oleadas mortales de nuevas formas de conflicto armado entre tribus y grupos terratenientes y las recientes catástrofes naturales que han devastado aldeas remotas e insuficientemente atendidas, en un espacio enorme alrededor de los emplazamientos clave de las industrias extractivas ‘más rentables’ de PNG.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (UNCEDAW) y la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer (UNSRVAW) han instado al Gobierno de PNG a acelerar la implementación de leyes centradas en la violencia de género y a hacer frente al resurgimiento de los conflictos armados y de muchas formas extremas de violencia contra la mujer, especialmente frecuentes en las provincias de Highlands. Durante casi tres décadas, la ayuda y los asesores externos australianos han liderado los esfuerzos para reforzar los sistemas judiciales y legales de PNG, incluida la financiación de instalaciones dedicadas a la violencia de género, VAW — en los sistemas policial y sanitario, y el pilotaje de una estrategia nacional para prevenir y responder a la violencia de género. La ayuda a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales que abordan la VAW es indirecta y se canaliza a través de ONG internacionales y unas pocas ONG locales selectas que cuentan con un considerable patrocinio empresarial.

La aparición, el crecimiento y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) son muy desiguales en las distintas provincias de Papúa Nueva Guinea. Pocas provincias cuentan con organizaciones progresistas de defensa de los derechos de la mujer suficientemente interconectadas, informadas y dotadas de los recursos necesarios para traducir los estándares globales sobre los derechos de la mujer y las recientes leyes y políticas sobre violencia contra ella en educación local, promoción y exigibilidad de responsabilidades al Estado. Pocas organizaciones locales progresistas tienen acceso a financiación directa y a la autonomía, agencia y la voz necesaria para defender e influir en el Estado o en poderosas empresas.

Patriarcado, conflicto y violencia de género: perdurable y reincidente

Papúa Nueva Guinea se compone de un Distrito Capital Nacional (la capital y sede del Gobierno), veinte provincias mayoritariamente rurales y una antigua provincia (ahora la Región Autónoma de Bougainville o AROB, en el posconflicto); esta última afectada por una guerra civil relacionada con la minería, ha tardado décadas en recuperarse y actualmente se prepara para un referéndum sobre la independencia del Estado de PNG (véase el Recuadro 2.1).³ Jiwaka y Hela son las dos ‘nuevas provincias’ de PNG, creadas en 2012. Se suman a las cinco provincias existentes que constituyen la populosa región interior de Highlands, donde actualmente operan y está previsto un número significativo de los mayores proyectos con recursos de PNG (véanse las figuras 2.1 y 2.2).

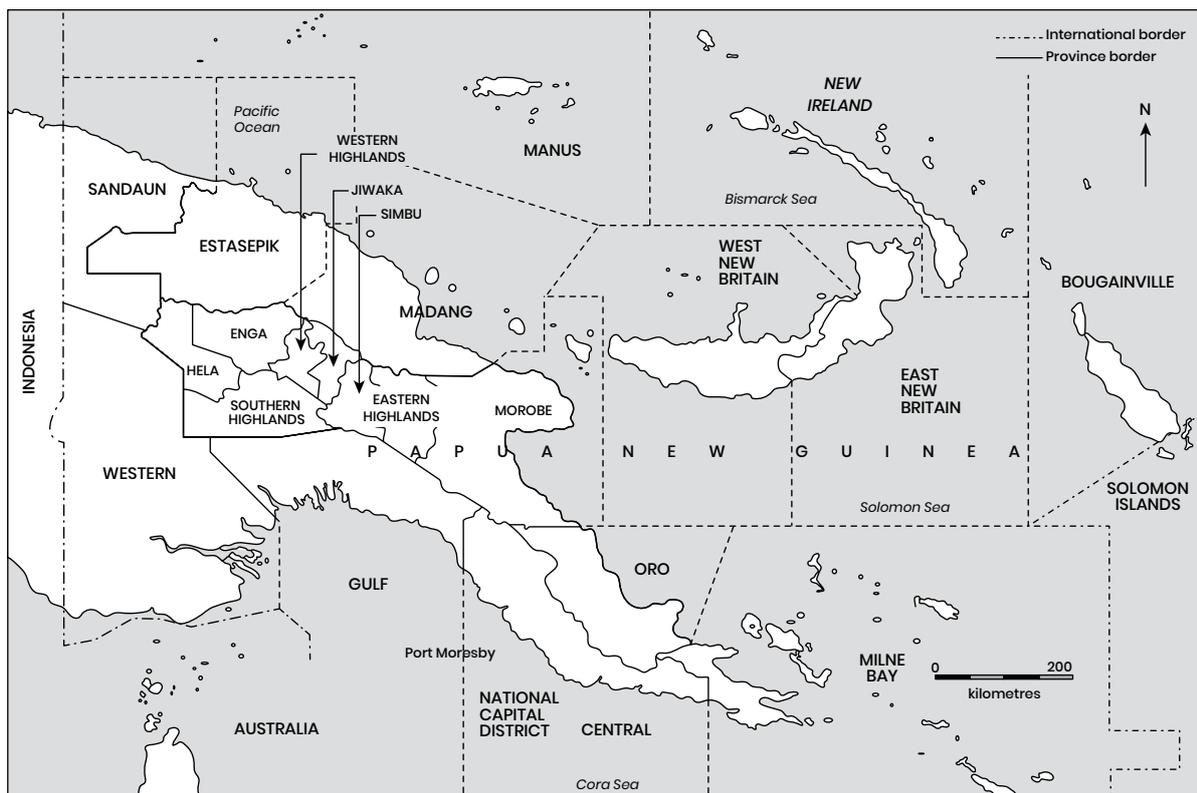


Figura 2.1 Las provincias de Papúa Nueva Guinea

Las siete provincias de la región de Highlands de Papúa Nueva Guinea albergan el 40% de la población total del país, que supera los 8 millones de habitantes. El interior montañoso fue ‘explorado’ por los ‘buscadores de oro’ a principios del siglo XX, pero la administración colonial australiana no se estableció en la región sino hasta después de 1950. La administración colonial prohibió las luchas tribales y los misioneros cristianos contribuyeron a la ‘pacificación’ pero la introducción del café, y posteriormente de las industrias extractivas, crearon nuevas bases de rivalidad y competencia entre hombres. Poco después de la independencia (1975), los hombres de la región de Highlands fabricaban pistolas caseras y luego compraban armas pequeñas de fábrica. Ni los conflictos violentos ni los delitos de violencia pudieron ser contrarrestados por una fuerza policial y un sistema judicial débiles. A principios de la década de 1990, la ayuda australiana apoyaba programas para reforzar la policía, en ocasiones mediante respuestas de mano dura al conflicto y la delincuencia de Highlands. El despliegue de escuadrones policiales móviles especializados en los puntos conflictivos de Highlands se tradujo a menudo en que los agentes estatales arrasaran aldeas, mataran ganado y violaran mujeres. Varios casos de derechos humanos llegaron a los más altos tribunales y, durante un tiempo, se restringió el uso de los escuadrones móviles.

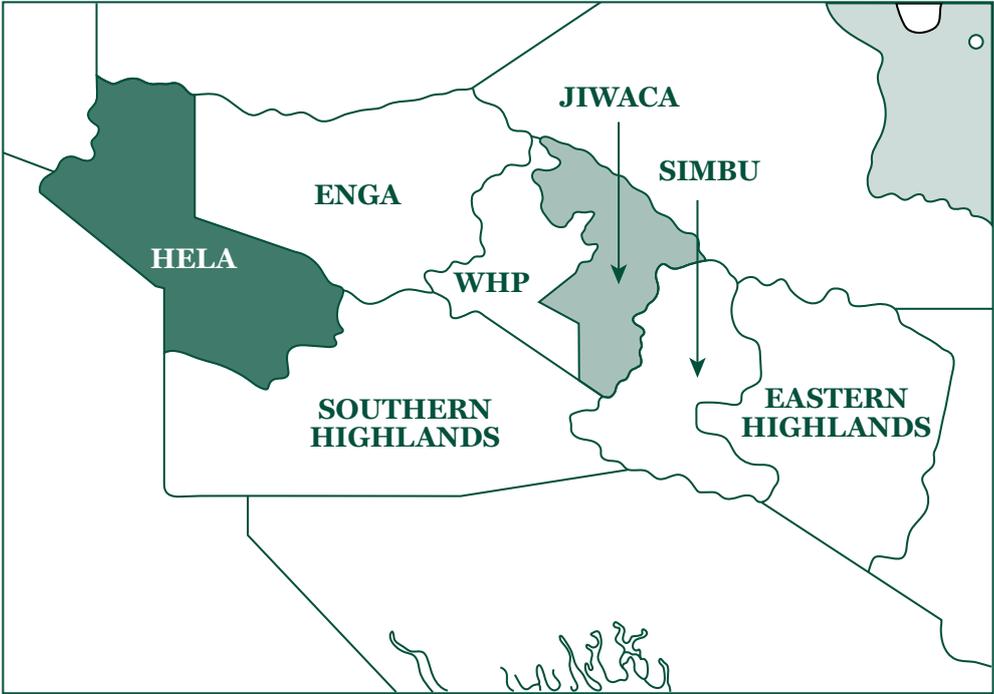


Figura 2.2 Las siete provincias de la región de Highlands de PNG

El Estado conoce desde hace tiempo los alijos comunitarios de armas letales de fabricación casera y de gran potencia que se introducen de contrabando en la región de Highlands (Alpers, 2004; 2005). Los sucesivos gobiernos han hecho caso omiso de las recomendaciones urgentes de acción estatal para desarmar a los ciudadanos de a pie, a los jóvenes delincuentes y a los guerreros de Highlands. Pero las armas y los bloques tribales han cobrado importancia en las campañas políticas y las elecciones. Las tribus y comunidades también almacenan armas como forma de seguridad, porque los ciudadanos no confían en los sistemas policiales, legales y judiciales del Estado. Las lealtades tribales son fuertes, están interiorizadas y sirven para movilizar a los hombres en una serie de conflictos locales que siguen socavando la paz, la justicia, la democracia y el desarrollo en las sociedades contemporáneas de Highlands. En el marco de estos conflictos, las mujeres son cada vez más objeto de ataques, violaciones y asesinatos que tradicionalmente no estaban permitidos (Chandler, 2014).⁴

La mayor parte de la tierra de Papúa Nueva Guinea (97%) sigue siendo de propiedad consuetudinaria. La mayoría de los conflictos se resuelven de forma tradicional y los pequeños delitos civiles y penales se juzgan en tribunales tradicionales. El patriarcado no está codificado en la ley y es contrario a las disposiciones constitucionales fundamentales sobre igualdad de derechos y participación, pero sigue siendo la norma más poderosa en el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas contemporáneas, incluidas las negociaciones con las industrias extractivas y los acuerdos de reparto de beneficios con los terratenientes tradicionales. Las sociedades de Highlands posteriores a la independencia, y sus estructuras y procesos de gobernanza y desarrollo han acomodado, con impunidad, al patriarcado y han fortalecido los conflictos tribales, la proliferación de armas y la creciente normalización de la violencia perpetrada contra las mujeres.

Colonialismo tardío, Estado débil, patriarcado y violencia normalizados

Las regiones costeras e insulares de Papúa Nueva Guinea sufrieron casi un siglo de administración colonial de mano dura, pacificación forzosa y conversiones cristianas significativas. Con el tiempo, interiorizaron nuevas normas y valores y adoptaron nuevos sistemas políticos, administrativos y judiciales. Como resultado, se redujeron progresivamente los conflictos tribales violentos y las costumbres tradicionales que deshumanizan o perjudican a mujeres y niñas.

En la década de 1930, cincuenta años después de la colonización de las regiones costeras e insulares de PNG, buscadores de oro y exploradores coloniales dirigieron

las primeras expediciones al interior montañoso, ahora conocido como la región de Highlands. Allí se encontraron con sociedades grandes, patriarcales y agro culturales, con culturas complejas construidas sobre ciclos de guerra, paz, compensación e intercambio. El dominio colonial australiano llegó a la región de Highlands dos décadas más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial.⁵

En la densamente poblada región de Highlands, la pacificación impuesta por la colonia y los esfuerzos por acabar con la coerción violenta y el control sobre las mujeres duraron poco. Durante dos décadas antes de la independencia en 1975, los hombres de Highlands que persistían en las luchas tribales fueron arrestados y encarcelados con regularidad. Los infractores de la ley eran juzgados en ‘tribunales nativos’ presididos por oficiales coloniales australianos, a menudo mal preparados para comprender, intervenir o juzgar adecuadamente en casos de complejos ciclos tradicionales de conflicto violento y violencia de género. Los hombres de Highlands llevados ante los tribunales coloniales desarrollaron estrategias para evitar las penas de prisión o, al menos, minimizar el impacto del encarcelamiento en las actividades y obligaciones políticas y económicas consuetudinarias, que estaban íntegramente ligadas a la propiedad de la tierra, al control de las mujeres y a las transacciones de valiosa moneda tradicional (Reay, 2014).

Los estudios antropológicos entre las tribus de las (nuevas) provincias de Hela y Jiwaka comenzaron a finales de la década de 1940 y ofrecen una importante instantánea de las relaciones de género tradicionales. En ellos se informa de matrimonios caracterizados por un alto grado de control masculino violento sobre la fecundidad y el trabajo productivo de las mujeres. A los hombres poderosos de Highlands tradicionalmente se les permitía tener muchas esposas y flirteos. Padres y hermanos concertaban los matrimonios de niñas púberes con hombres que podían tener ya muchas esposas y ser ancianos, si ofrecían un alto precio por la novia y vínculos económicos y políticos estratégicos para los parientes masculinos de la joven novia. Las mujeres y niñas desafiantes, resistentes e inconformes eran objeto de castigos violentos por parte de la familia del marido y de estigmatización y destierro de su propia familia y comunidad (Harvey—Kelley, 1997; Reay, 2014; Wardlow, 2006). Las mujeres acusadas de adulterio, imaginario o real eran castigadas con brutales palizas, violaciones maritales y violaciones en grupo. El suicidio femenino no era poco común. (Reay, 1959; 1966; 2014; Read, 1965; Strathern, 1972; Josephides, 1975).

Impartir justicia a las mujeres en los “tribunales nativos” coloniales resultó demasiado complejo y tenso para los jóvenes e inexpertos magistrados coloniales (Read, 1965; Harvey—Kelley, 1997; Reay, 2014) y el rudimentario sistema colonial de bienestar



Hombres portando un arma de fuego y un arco y flechas

social introducido en las zonas costeras apenas afectó a Highlands. Los conflictos violentos, el control coercitivo de las mujeres, los matrimonios infantiles y la poligamia han persistido tras la independencia, facilitados por la transición progresiva a una economía monetizada que comenzó con la colonización.

Los combatientes de Highlands fabrican pistolas y compran armas de asalto de tipo militar (Alpers, 2004; 2005; CICR, 2017b). El desplazamiento interno debido a los conflictos es generalizado y puede durar décadas. Los desplazados internos que se ven obligados a buscar refugio en las tierras de tribus vecinas “amigas” dependen de los recursos de sus anfitriones para sobrevivir y contraer deudas. El endeudamiento aumenta la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas a la violencia de los depredadores sexuales oportunistas de la comunidad de acogida. Cuando se desplazan, los hombres se centran en conseguir dinero para comprar armas (ilegales) para vengarse, reclamar sus tierras y medios de subsistencia y redimir su masculinidad. Entre los hombres desplazados surgen autodenominados señores de la guerra que exigen impuestos a los miembros de su tribu para comprar armas, obligan a los hombres ‘de la tribu’ (y a los niños) a unirse a las luchas de venganza y presionan a mujeres y niñas para que recauden fondos y se dediquen al comercio ilegal de municiones (Be’Soer, 2012).⁶

Los conflictos tribales en Highlands provocan la pérdida masiva de bienes y recursos económicos y la pérdida directa e indirecta de vidas humanas. Los pequeños incidentes relacionados con el reparto de las rentas y beneficios de las industrias extractivas, y la disputa de los resultados electorales, avivan antiguas rencillas y enemistades. La resolución tradicional de conflictos puede durar hasta diez años cuando la pacificación se basa en la exigencia de indemnizaciones exageradas en efectivo. Miles de miembros productivos de las comunidades agrícolas de Highlands pueden verse desplazados internamente, sus plantaciones de café y pequeños negocios destruidos y su acceso a grandes extensiones de tierra productiva negado. La producción agrícola de las mujeres es vital para la subsistencia, la seguridad alimentaria y el comercio local, pero los conflictos Inter tribales pueden transformar sus huertos en zonas prohibidas y prácticamente en tierras abandonadas durante décadas. Las repercusiones económicas y sociales son enormes y los elevados niveles de trauma se pasan por alto en gran medida.

Algunas mujeres líderes locales y sus organizaciones han documentado los impactos de género y los costos sociales y económicos del conflicto durante al menos una década. Destacan la reducción de la movilidad, de la productividad agrícola y de la autonomía financiera, y su mayor vulnerabilidad a los delitos de violencia sexual.⁷ Solo recientemente se ha reconocido la alta prevalencia y los largos periodos de desplazamiento interno derivados del conflicto intercomunitario en Highlands. La expansión de las industrias extractivas plantea retos adicionales para poner fin al conflicto y a la violencia contra las mujeres en Highlands. El goteo de dinero en efectivo hacia los hombres locales aumenta el acceso al comercio de armas ilegales, exacerba el conflicto e intensifica el terror y la victimización de las mujeres.

Industrias extractivas, conflictos entre hombres y marginación de las mujeres

En 2018, 33 empresas operaban proyectos de la industria extractiva (IE) en Papúa Nueva Guinea, muchos de ellos a gran escala y ubicados en zonas remotas y subdesarrolladas del país. Las operaciones ‘Fly-in fly out’ (FIFO) cuentan con un gran número de empleados expatriados y nacionales, de gran movilidad y predominantemente masculinos. Los enclaves de alta seguridad de la IE están rodeados de comunidades de terratenientes desplazadas que esperan importantes rentas y regalías, y de asentamientos improvisados de inmigrantes oportunistas interprovinciales de la IE: comerciantes informales, mineros de aluvión, mineros de residuos, proxenetas y trabajadoras sexuales.

Los contratistas globales que proporcionan seguridad a las plantas y empresas de las IE subvencionan en gran medida las operaciones de la policía local ordinaria (transporte, alojamiento, comidas, uniformes, vehículos y combustible), pero a menudo se ven desbordados por el aumento de los conflictos locales que surgen cuando las tribus locales armadas se disputan la propiedad de la tierra y compiten por los beneficios, y con frecuencia, ‘se ven superados’ por el armamento de alta potencia utilizado por los manifestantes de la comunidad circundante (Alpers, 2004; 2005; Main, 2017). A medida que el Estado se hace más dependiente del flujo de ingresos de las industrias extractivas, invoca con frecuencia los poderes del estado de emergencia para impedir la interrupción de sus operaciones. Regularmente se despliegan unidades móviles especiales de policía y personal militar para proteger las plantas de las IE y sofocar las protestas y los conflictos que resurgen, pero su impacto es limitado y de corta duración, y las causas profundas de la violencia siguen sin resolverse. Algunos de los mayores proyectos de las EI en Highlands operan actualmente bajo continuos estados de emergencia y con una fuerte presencia militar.

El desarrollo basado en la extracción perpetúa la marginación y coerción de las mujeres. Mecanismos y procesos estatales que tratan con las industrias extractivas consideran a los hombres (únicamente) propietarios consuetudinarios de la tierra, lo que justifica la exclusión de las mujeres de la recepción directa de regalías y beneficios que contribuyan a la equidad. El Estado y las empresas de las IE han normalizado el lugar de las mujeres como, en el mejor de los casos, las últimas y las peor pagadas en los injustos sistemas de distribución de las regalías en efectivo dentro de cada clan, controlados por los hombres. Los programas ‘Mujeres en la minería (MEM)’ financiados por el Banco Mundial se propusieron como respuesta a las preocupaciones planteadas por las mujeres de las comunidades afectadas por las IE. Dos décadas de esfuerzos de estos programas canalizados a través del sector privado y de entidades estatales no han logrado apoyar la formación de organizaciones de mujeres, locales e independientes. Por el contrario, las empresas de las IE tienden a ‘construir’ artificialmente organizaciones de mujeres dirigidas por sus empleadas o por líderes locales favorecidas.

Los programas MEM están esencialmente orientados al bienestar y se basan en nociones anticuadas de la familia y la dinámica de poder basada en el género (Wardlow, 2014; Macintyre, 2011). Suelen impartir formación anticuada y conservadora para pacificar y domesticar a las mujeres locales, en lugar de proporcionar información, educación y comprensión de su sociedad y economía en

rápida evolución. No fortalecen la voz y la agencia de las mujeres para identificar, articular y defender eficazmente sus prioridades, necesidades y preocupaciones — (incluida su exclusión del reparto de beneficios y su deseo de poner fin a los conflictos violentos en los ámbitos público y privado. La ventanilla de ayuda a la igualdad de género de Australia financia actualmente varias iniciativas de asociación en las que participan empresas mineras, sus departamentos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ONG internacionales, y tienen como objetivo una mayor inclusión de las mujeres en la toma de decisiones sobre el reparto de beneficios de las IE y las formas de abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Estos esfuerzos *a posteriori* pueden ser demasiado escasos y llegar demasiado tarde, y es poco probable que tengan éxito si no se apoya a largo plazo la aparición, el crecimiento y la sostenibilidad de organizaciones fuertes de defensa de los derechos de la mujer y de una sociedad civil local que las apoye. La formación de capital humano en el cambiante contexto de las industrias extractivas llevará décadas, y los mejores catalizadores son las líderes locales más dinámicas, apoyadas y vinculadas a redes de solidaridad e intercambio de conocimientos con las organizaciones locales de mujeres y los defensores de los derechos humanos que más han avanzado en la erradicación de los conflictos y la violencia contra las mujeres. En ninguno de los distritos que actualmente albergan industrias extractivas a gran escala se puede encontrar un apoyo arraigado al empoderamiento ascendente de las mujeres líderes y activistas locales y de sus organizaciones y redes.

El triple trauma de Hela: extractivas, conflicto armado y violencia contra las mujeres

En 2012, la provincia de Hela se separó de Southern Highlanders de Papúa Nueva Guinea, región rica en petróleo, donde el desarrollo de la infraestructura se aceleró gracias a varias décadas de apoyo a las obras públicas por parte de una unidad especial de ingeniería de las Fuerzas de Defensa australianas. En los últimos veinticinco años, el pueblo de Hela (antes de Southern Highlanders) ha acogido varios proyectos de petróleo y gas a gran escala y de alta tecnología, sostenidos en enclaves remotos, lejos del escrutinio público. Diversas estrategias empresariales de relaciones con la comunidad y las intervenciones estatales de seguridad han mantenido sus operaciones, a menudo turbulentas, fuera de la mirada pública. La población local ha sido testigo de sucesivos despliegues de fuerzas especiales, policiales y militares, para sofocar los disturbios y protestas de los terratenientes; estos se han tratado como ‘luchas tribales’

que amenazaban la seguridad y la continuidad de las plantas de petróleo y gas, que proporcionan ingresos estatales muy importantes y alimentan la mayor mina de oro de Papúa Nueva Guinea en la vecina provincia de Enga. Las elecciones nacionales en la Provincia de Southern Highlanders fueron violentas en 1992 y 1997 y fracasaron en 2002. En 2006 se declaró el estado de emergencia y se desplegó el ejército para restablecer el orden y supervisar las elecciones de 2007. Un gran número de habitantes ha emigrado a la capital. Las elecciones de 2012 se vieron envueltas en disturbios y, tras las de 2017, la inestabilidad ha persistido en la capital provincial, la ciudad de Mendi, rehén una vez más de hordas armadas de votantes descontentos.

La persistencia de los conflictos y la proliferación de armas se ha subestimado gravemente en los informes de RSC y de desarrollo comunitario de las industrias extractivas (Burton y Onguglo, 2018). Los programas de desarrollo comunitario corporativo (DCC) en torno a los yacimientos petrolíferos en Southern Highlanders, involucraban asociaciones corporativas de las IE en la ‘creación de arriba hacia abajo’ de organizaciones locales de mujeres y una ONG. Estas iniciativas pretendían dar a las mujeres un mayor acceso a los beneficios, pero no apoyaban su empoderamiento ni les daban agencia o voz. Una alta representante femenina del Departamento de Petróleo y Energía de Papúa Nueva Guinea señaló las repercusiones negativas en materia de género de los mayores proyectos petroleros de Southern Highlanders (Yuyuge, 2003). A finales de la década de 1990, la prestación de servicios estatales había disminuido considerablemente en las zonas de Southern Highlanders afectadas por las IE y el principal promotor, Oil Search, asumió la responsabilidad corporativa de la prestación de casi todos los servicios básicos de salud.

La creación de la provincia de Hela en 2012, que abarca tres distritos que antes pertenecían a la provincia de las Southern Highlanders, fue el resultado de treinta y seis años de defensa por parte de los líderes locales varones, justificada por una cosmovisión religiosa y profética indígena específica y por aspiraciones de unidad e identidad (Zurenuoc y Herbert, 2017). Los primeros pasos hacia la transición política a una nueva provincia coincidieron con las negociaciones para poner en marcha el proyecto de gas natural licuado de Papúa Nueva Guinea (PNG LNG) en las tierras de propiedad consuetudinaria de Hela y se vieron reforzados por ellas. EXXONMOBIL, Oil Search y Santos,⁸ socios de la empresa conjunta del proyecto PNG LNG, prometieron enormes y ‘transformadores’ beneficios económicos para el Estado, la provincia (empleo) y los terratenientes en la fuente del gas (regalías y rentas). A principios de 2018, EXXON anunció sus planes de casi duplicar la capacidad de exportación de la instalación a 16 millones de toneladas al año, junto con sus socios.

Mientras tanto, están acelerando los esfuerzos para comenzar a producir, a partir de las reservas de gas cercanas para 2023 o 2024, con el fin de abastecer rápidamente la demanda creciente de GNL en Asia, alimentada por la falta de nuevos proyectos en otras partes del mundo.

La provincia de Hela alberga varios grupos étnicos, pero predomina el pueblo Huli. Los informes sobre el primer contacto (hacia 1934) y los primeros relatos antropológicos de la sociedad Huli describían suelos pobres, inseguridad alimentaria, una “naturaleza inestable y conflictiva” (Allen y Frankel, 1991) y guerras endémicas. Los Huli, Duna y otros grandes grupos étnicos comparten ancestros y mitología. Sus profecías incluyen “una fuerte sensación de declive y deterioro de la tierra y de decadencia cultural hacia la anarquía y la inmoralidad” (ibíd.). La cooperación étnica y el compromiso con las antiguas creencias y vínculos culturales, costumbres y ceremonias se han visto alterados por las decisiones de las tribus Huli en los últimos veinticinco años de ceder tierras a proyectos de oro y gas.⁹

El municipio de Tari es la ‘capital’ provincial y centro administrativo de la nueva provincia de Hela. En la década de 1980 era un animado distrito centro y sede de

Huli Wigmen desde atrás. Tari, Highlands



una prometedora y emprendedora asociación de mujeres. Sin embargo, la unidad, el éxito empresarial y las aspiraciones de las mujeres organizadas de Tari se vieron violentamente socavados durante una breve, perturbadora y abrumadora fiebre del oro a finales de la década de 1980. El caos y la anarquía iniciales de la minería aluvial se vieron desplazados por los esfuerzos altamente impugnados y finalmente abortados por el gigante minero Conzinc Riotinto de Australia (CRA), junto con socios de empresas conjuntas, para poner en marcha la mina de oro Mount Kare. La casa de té/casa de huéspedes de las mujeres Tari, de bajo costo, se convirtió en una casa de tránsito fronterizo para hombres mineros de oro de aluvión procedentes de toda Papúa Nueva Guinea. Las dirigentes y miembros de la emprendedora Asociación de Mujeres Tari se dividieron cuando las facciones se enfrentaron por los posibles beneficios de las IE y presionaron a las mujeres para que se aliaran con ‘sus hermanos’ de tribus de terratenientes rivales.

En 2009, Rex Tillerson, entonces CEO de EXXONMOBIL, dirigió las negociaciones para crear una empresa conjunta que explotara las enormes reservas de gas natural de Hela, para exportarlas a China y Japón. La construcción del proyecto de GNL en Papúa Nueva Guinea comenzó rápidamente, una vez alcanzado un acuerdo entre el Estado, un gobierno provincial en formación, los gobiernos locales apenas existentes y los propietarios tradicionales de la tierra, identificados por ellos mismos (y ahora muy cuestionados). El Estado y el operador principal (EXXON) prometieron que el GNL transformaría la economía nacional, impulsando el PIB a través de los ingresos por exportación, el empleo local y los contratos derivados, y proporcionando regalías, infraestructura social y económica y servicios a los terratenientes. El proyecto, de 19 billones de dólares, importó una gran cantidad de mano de obra extranjera calificada (80%) y construyó una impresionante planta de procesamiento de gas y 700 kilómetros de gasoductos terrestres y submarinos en un tiempo récord. Durante esta ‘fase de construcción’, el personal nacional (20%) desempeñó en su mayoría funciones de corto plazo no cualificadas y de seguridad. El Estado reiteró el potencial transformador del proyecto y preparó una nueva visión y estrategia de desarrollo nacional centrada en los ingresos previstos por PNG LNG. Los salarios de los trabajadores, las indemnizaciones por el uso de la tierra y la reubicación se pagaron rápidamente en esta fase de construcción y habrían impulsado la adquisición por parte de los hombres Huli de armas de alta potencia de tipo militar, introducidas de contrabando a través de las fronteras de Papúa Nueva Guinea con Indonesia y Australia y, supuestamente, suministradas también a través de políticos locales, empresarios y policías deshonestos.

La proliferación de armas ha creado un mayor estado de anarquía en el subdesarrollado centro administrativo de Hela, la ciudad de Tari. La policía local se ve desbordada y ‘superada’, por lo que a menudo solicita refuerzos estatales — tanto militares como policiales. A finales de 2016, la ciudad de Tari entró en crisis con la desafiante exhibición pública de armas en manos de jóvenes locales. Los repetidos tiroteos que obligaron a cerrar tiendas y bancos, la pista de aterrizaje, el hospital y las escuelas llevaron a las empresas y funcionarios locales a plantearse abandonar Tari para siempre. El Estado respondió con el despliegue de 150 soldados y 150 policías de unidades móviles especiales. Una amnistía de armas, que pretendía sobre todo proteger y evitar costosos trastornos de las operaciones de PNG LNG y las inminentes elecciones (2017), costó K11 millones (aproximadamente US\$3,4 millones de dólares) en dos meses y fue en gran medida infructuosa. Los líderes electos, que monopolizan los negocios locales, incluidos los coches de alquiler y las casas de huéspedes, fueron los más beneficiados por los recurrentes despliegues estatales de fuerzas especiales de seguridad. La incapacidad de garantizar unas bases sólidas para la ley y la justicia estatales en la nueva provincia de Hela, ha provocado que cada vez más personas compren armas para salvaguardar sus vidas y propiedades.¹⁰

Las exportaciones de GNL de Papúa Nueva Guinea comenzaron antes de lo previsto a mediados de 2014. Sin embargo, no se actuó con la diligencia debida y el Estado no identificó a los auténticos propietarios de las tierras ni facilitó la constitución obligatoria de grupos de propietarios. En 2018, PNG LNG estaba alcanzando la plena producción, pero la propiedad de la tierra estaba muy disputada y el Estado no podía confirmar quién debía recibir las regalías y las acciones y qué forma de distribución de los beneficios en efectivo evitaría la escalada del conflicto (Filer, 2016; Main, 2017).¹¹ El importe total de las regalías pendientes de pago que se adeuda actualmente a los terratenientes de Hela asciende a billones, pero el Estado no cumple y los propietarios locales de los recursos están cada vez más enfadados y frustrados.

Hela es la provincia más rica en recursos de Papúa Nueva Guinea, pero una de las de peor rendimiento en desarrollo social y económico. La Encuesta sobre Armas Ligeras realizada en 2005 en Papúa Nueva Guinea informaba que todos los hombres Huli tienen un arma; la mayoría son de fabricación casera, pero entre ellas había 2.500 armas de gran potencia (Alpers, 2004; 2005). Una década después, con el proyecto GNL de Papúa Nueva Guinea en plena producción, nadie sabe realmente cuántas armas de gran potencia poseen los hombres Huli. En 2017, los jóvenes locales armados estaban cometiendo ataques aleatorios sin precedentes contra comunidades rurales, aterrorizando y desplazando a poblaciones remotas. En 2018, la presencia administrativa del Estado y los servicios bancarios se redujeron a operaciones

esqueléticas, custodiadas por personal militar. Las mujeres denunciaron altos niveles de terror y violencia, ataques de francotiradores, ejecuciones y menor acceso a la justicia y a asistencia médica cuando eran objeto de violencia.

Antes del inicio del proyecto GNL, OXFAM llevó a cabo una investigación participativa sobre el conflicto violento y la violencia de género contra las mujeres en Tari, la capital de la provincia de Hela. El informe confirmó los bajos niveles de educación en la sociedad de Hela (30% de alfabetismo entre las mujeres, 41% entre los hombres), las limitaciones en el transporte, carencia de comunicaciones y de bienes y servicios básicos, altos niveles de conflictos armados mortales entre los hombres y crímenes de extrema violencia cometidos con impunidad por los hombres contra las mujeres. El sistema judicial del pueblo no funcionaba, no había servicios judiciales de distrito, la policía y los recursos humanos y financieros eran insuficientes, y la prisión estaba abandonada y no operaba. Los jueces, los ministros del Estado y los representantes de los donantes que visitaban la ciudad de Tari necesitaban escoltas de seguridad armadas del Estado. Con frecuencia se desplegaban fuerzas policiales móviles para proteger los proyectos de las IE existentes. Los datos hospitalarios confirmaron que los traumatismos físicos eran la causa más común de hospitalización y muerte en Tari, y muchos sobrevivientes necesitaban urgentemente asesoramiento postraumático. Las lesiones traumáticas de los hombres se produjeron durante la resolución violenta de disputas y conflictos tribales, mientras que las de las mujeres se debieron a que sus maridos, padres, hermanos y esposos cometieron lesiones corporales graves, como apuñalamiento y amputación de miembros (Kopi, 2011). Un segundo informe encargado por OXFAM y varias organizaciones profesionales se ocupaba de las repercusiones y amenazas a la seguridad humana durante la fase de construcción del GNL en Papúa Nueva Guinea. El informe ponía de relieve la necesidad de más tiempo y espacio para que el Estado y la sociedad civil trabajasen juntos en la construcción de la paz en su nueva provincia y en el fortalecimiento del desarrollo humano y la mejora de la situación de las mujeres, mucho antes de que la embestida de los impactos de las IE las dejara más al margen (McIlraith, 2012).

Los hallazgos de OXFAM sobre los altos niveles de violencia en Tari y los deficientes servicios de salud estatales impulsaron a la ONG humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) a establecer presencia en el hospital local. El personal médico del gobierno carecía de recursos para la atención quirúrgica de urgencia y para la cirugía mayor y menor, por lo que MSF estableció estas instalaciones y un centro de hospitalización con treinta camas. Hasta una cuarta parte, de las entre 80 y 100 intervenciones quirúrgicas que se realizaban mensualmente, eran por lesiones

causadas por traumatismos físicos, como cuerpos cortados con hachas y dedos y miembros amputados con machetes, perpetrados por hombres contra hombres en conflictos locales y por hombres contra mujeres en casos de violencia familiar y conyugal. MSF acumuló más pruebas del terrible impacto de los conflictos tribales armados y de la violencia física y sexual contra mujeres y niñas, y confirmó que la furia de los hombres Hela es un factor que contribuye significativamente a la alta incidencia de nuevas formas de guerra y horribles crímenes de violencia, cometidos por hombres contra sus familiares mujeres.

En 2009, MSF creó un centro especializado de apoyo a las familias¹² en el hospital de Tari para ofrecer primeros auxilios psicológicos y médicos, profilaxis del VIH y anticoncepción de emergencia a mujeres y niñas sobrevivientes. En el centro de apoyo familiar de Tari se tratan cada año muchos miles de casos de violencia familiar y sexual, pero, tras la atención hospitalaria, no hay refugios ni servicios de apoyo disponibles para las mujeres sobrevivientes. La continua falta de seguridad para el personal de MSF en el hospital de Tari, a menudo provocó la amenaza de cierre del hospital y, tras ocho años de servicios dedicados, MSF abandonó la provincia de Hela en 2015 (MSF, 2011; 2016).

En los últimos seis años, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado y respondido a la escalada de los enfrentamientos tribales en Hela, volando dentro y fuera, sobre todo en misiones humanitarias postconflicto para apoyar a los desplazados internos. El CICR considera que el aumento de los conflictos tribales se asemeja más a una guerra a pequeña escala, en la que cada vez más combatientes armados atacan a civiles no combatientes, mujeres y niños, y destruyen casas, huertos, cultivos comerciales, ganado y posesiones domésticas, así como iglesias y servicios de salud y educación. El CICR informa a las comunidades locales sobre el derecho internacional humanitario para desalentar el aumento de los ataques contra los no combatientes, personas y bienes, y el asesinato de mujeres y niños.

Hay pocas ONG locales activas en Hela. La Asociación de Mujeres de Tari, que fue muy activa en la década de 1980, ha desaparecido en gran medida. Young Ambassadors for Peace (YAP), creada en 2003 para la provincia de Southern Highlanders, está asociada a una iglesia local y ha trabajado con OXFAM y ahora con el CICR en Tari. El YAP, dirigido por hombres, pretende lograr un cambio cultural entre las tribus de Hela a través de la construcción de paz y el desarrollo de capacidades para la intervención temprana y la mediación, con el fin de evitar que las pequeñas disputas se conviertan en conflictos tribales. En 2008, antes del inicio de PNG LNG, el YAP contribuyó a la

firma de un acuerdo de paz entre treinta y dos clanes enfrentados en Tari. En 2017, los líderes de YAP afirmaron sentirse abrumados por la normalización del conflicto y las armas, la falta de responsabilidad del Estado para negociar la paz y la falta de recursos para llevar a cabo sus propios programas locales (CICR, 2017a).

Las ONGs internacionales — MSF, CICR y OXFAM — no han apoyado la formación y el crecimiento de las organizaciones locales de mujeres. Los operadores de PNG LNG han construido nuevas infraestructuras en Tari al amparo de planes de crédito fiscal, pero en otros municipios previstos no se han materializado. Los barracones de los trabajadores han sido saqueados y los nuevos centros de recursos para mujeres han sido incendiados en protestas de los terratenientes.¹³ Las mujeres de Hela viven de la tierra en aldeas remotas, asentadas en mercados precario y sucios mercados donde vender a cambio de pequeños ingresos en efectivo y sufren enormemente la violencia ejercida por hombres, cada vez más descontentos a medida que disminuyen los rudimentarios servicios de que disponen.

La violencia de los hombres contra las mujeres en la provincia de Hela es una de las peores de Papúa Nueva Guinea, comparable a las peores regiones del mundo afectadas por conflictos. Entre 2015 y 2017 hubo muchos conflictos tribales violentos y muchas muertes en Hela. La ciudad de Tari y la provincia de Hela se consideran ahora demasiado peligrosas para que las ONG internacionales o los voluntarios residan y operen allí. Tras la salida de MSF de Hela en 2015, Oil Search Foundation (OSF), la rama de RSC de la empresa conjunta Oil Search,¹⁴ asumió la gestión del hospital de Tari y, posteriormente, la prestación de servicios rurales de salud. En el proceso, se perdió a parte del personal local mejor formado en asesoramiento sobre traumas de violencia de género, y pasó a trabajar en una biblioteca infantil, otra iniciativa de desarrollo comunitario de OSF en Tari.

Las mujeres de Hela se han excluido política y económicamente de la planificación de los proyectos locales de las IE y del reparto de beneficios. Ahora deben enfrentarse a múltiples capas y niveles crecientes de trauma — conflictos armados mortales y violencia extrema, a menudo mortal, contra las mujeres y las niñas. Esta situación de pesadilla se convirtió en un infierno en febrero de 2018, cuando un potente terremoto de magnitud 7,5 sacudió las zonas más remotas, escarpadas y menos desarrolladas de las Southern Highlanders de Papúa Nueva Guinea. Con epicentro en las principales plantas de gas de EXXON, los sismos desencadenaron derrumbes de tierra que sepultaron aldeas y destruyeron infraestructuras. Se calcula que murieron 150 personas, cientos resultaron heridas y miles quedaron traumatizadas — desposeídas

y desplazadas (Davidson, 2018). Las personas ya desplazadas por los enfrentamientos tribales se vieron desplazadas una vez más cuando se destruyeron las viviendas de los pueblos que los acogen. Las réplicas se prolongaron durante tres meses y 270.000 personas quedaron necesitadas de ayuda urgente, entre ellas 125.000 niños (Noticias ONU, 2018a). El conflicto armado y los ataques contra las mujeres resurgieron en este período, desbordando los planes humanitarios y de la ONU para crear espacios seguros para que las mujeres se recuperaran (Noticias ONU, 2018b). Oil Search restableció rápidamente sus operaciones de petróleo y gas, y OSF movilizó sus recursos —especialmente de infraestructura y transporte— para liderar una respuesta humanitaria a gran escala.

En 2017, cuando la violencia armada se recrudeció en Hela, se produjeron ataques aleatorios en aldeas remotas dirigidos por hombres jóvenes con armas de alta potencia, que buscaban cualquier excusa para ejecutar a civiles inocentes¹⁵. La policía local estimó que un tercio de la población había sido desplazada por este terrorismo. Valientes mujeres líderes locales se unieron para dirigir una campaña a lo largo y ancho del país durante los dieciséis días de ‘Activismo contra la violencia hacia las mujeres’. Trabajaron día y noche, documentaron con fotografías y videos, y redactaron un comunicado de prensa con el que esperaban alertar al Estado y al resto del mundo sobre su difícil situación. Pero estaban patrocinadas por EXXON, y el comunicado de prensa fue editado y su publicación retrasada. El impacto previsto no se hizo realidad y las mujeres Hela se sintieron profundamente decepcionadas. Nada cambió.

En 2018, tras el terremoto que azotó a Hela, la violencia armada juvenil volvió a escalar. Las acciones de ayuda humanitaria que requerían que las personas —especialmente las mujeres— se congregaran las hicieron más vulnerables a las bandas armadas itinerantes y a los francotiradores. Se cerraron iglesias, escuelas y centros de salud. Se suspendieron la mayoría de los programas de ayuda, y solo continuaron las actividades humanitarias de socorro. Las mujeres Hela buscaban desesperadamente una luz al final del túnel. Sus socias llamaron la atención del Gobierno australiano, de las ONG australianas y de Oil Search sobre su situación. Presentaron una propuesta para establecer un intercambio gradual de solidaridad y aprendizaje entre comunidades, con Voice for Change y el Movimiento de Defensoras de los Derechos Humanos de Southern Highlanders como anfitriones y mentores. El presupuesto total para un programa intensivo de doce meses era inferior a la mitad del costo de un consultor externo. Tras un breve intercambio de cartas y una expresión de interés por esta estrategia ‘fuera de lo común’ dirigida localmente, de nuevo no ocurrió nada. Y las mujeres de Hela volvieron a sentirse decepcionadas. Nada cambió.

Donde no hay actividades extractivas las mujeres de Highlands construyen la igualdad, el desarrollo y la paz

La autopista Highlands de Papúa Nueva Guinea asciende y atraviesa el país, desde la ciudad industrial y portuaria de Lae a través de la provincia de Eastern Highlands, la provincia de Simbu, la provincia de Jiwaka y la provincia de Western Highlands. Construida en la década de 1960 para facilitar la aceleración de la administración colonial y la agricultura, en la actualidad une las siete provincias de la Región de Highlands. La autopista es una ruta de suministro vital para las industrias extractivas de Enga, Southern Highlanders y Hela, pero se considera demasiado peligrosa para el movimiento del personal de las IE, que entra y sale en vuelos fletados. Mount Hagen, en Western Highlands, es la tercera ciudad más grande de Papúa Nueva Guinea y un centro de tránsito de empleados locales y de las IE, camioneros y migrantes de las IE, en su mayoría procedentes de otras provincias de Highlands. La ciudad de Mount Hagen es famosa por sus altos niveles de delincuencia y violencia, tráfico de drogas, sexo y comercio ilegal de marihuana, oro y armas. En este caótico contexto, las mujeres locales enfrentan múltiples formas de violencia en el transporte público, los mercados públicos y las calles. Los programas eclesiásticos establecidos y las OSC locales y ONG internacionales luchan por coordinar sus esfuerzos para contrarrestar los conflictos violentos y la violencia contra las mujeres.

Al oeste se encuentran las tres provincias más remotas de las siete provincias Highlands (Enga, Southern Highlands y Hela), todas ellas fuertemente afectadas por proyectos de oro, petróleo o gas a gran escala que el Estado y los inversores suelen calificar como de ‘clase mundial’ y ‘motores dinámicos’ de la economía de Papúa Nueva Guinea. Desde finales de los años ochenta, apenas una década después de la independencia de Papúa Nueva Guinea, estas provincias han experimentado un resurgimiento de los conflictos tribales protagonizados por jóvenes guerreros con armas cada vez más potentes. Los desencadenantes, la motivación y las consecuencias de estos conflictos son muy diferentes a los de la guerra tradicional (Banks et al., 2018; Burton y Onguglo, 2018; Wiessner, 2006; Wiessner y Pupu, 2012). Las reglas tradicionales de enfrentamiento han cambiado a medida que una generación de jóvenes culturalmente desarraigados se ‘adueñan’ de las luchas y adquieren un temible estatus de ‘pistoleros a sueldo’, ‘héroes’ y ‘señores de la guerra’ — dueños de la lucha, francotiradores y verdugos.

Al este se encuentran tres provincias de Highlands (Eastern Highlands, Simbu y Jiwaka) en las que no hay industrias extractivas y en las que, desde principios de la década de 1990, las ONG locales dirigidas por mujeres han logrado avances significativos en la lucha contra el patriarcado, los conflictos armados, la discriminación y la violencia multidimensional contra ellas. En la última década, las organizaciones locales de mujeres de estas tres provincias se han asociado con ONG internacionales y han crecido en capacidad, alcance y coordinación dentro y entre las provincias de Highlands. Las activistas y líderes más valientes están unidas por el Movimiento de Defensoras de los Derechos Humanos de Highlands, que se extiende por las tres provincias, reforzando las redes de seguridad locales y provinciales para las mujeres. Cada vez se escuchan más sus demandas de respuesta policial rápida y mejor acceso a la justicia. Han conseguido involucrar a los hombres de la zona en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en su seguridad cotidiana. Las repercusiones de los conflictos, desde el punto de vista del género, se abordan en todas sus mediaciones de estos, una intervención crítica temprana en la que las mujeres participan ahora activamente, junto a sus homólogos masculinos.

Las provincias de Highlands que no tienen industrias extractivas (con la excepción de las Western Highlands) están obteniendo mejores resultados que muchas provincias costeras, porque trabajan de forma estratégica, sistemática y unida para acabar con los conflictos y la violencia contra las mujeres. Se enfrentan a las continuidades históricas del patriarcado y el conflicto tribal y a la proliferación contemporánea de armas de alta potencia y de la producción, el consumo y el comercio de marihuana. Esto se pone claramente de manifiesto en la provincia de Jiwaka, que se estableció simultáneamente con la de Hela y es la más reciente de las provincias libres de actividad extractiva de Highlands. Jiwaka está situada en el centro de la región de Highlands y se extiende a ambos lados de la autopista de Highlands. Se creó para dar al pueblo Waghi una mayor representación política y un mejor acceso a la administración, los bienes y los servicios del Estado. La creación de Jiwaka también pretendía aumentar las oportunidades de desarrollo de la mayoría de las comunidades remotas, rurales y agrícolas.

La industria cafetera de Jiwaka, establecida antes de la independencia, se desarrolló como un dominio masculino, afianzando una división de género entre cultivos comerciales y cultivos alimentarios en la agricultura de Highlands. Su objetivo era acelerar la entrada de los pequeños propietarios en la economía monetizada, pero los ‘grandes hombres’ tradicionales pronto se convirtieron en ‘barones del café’ locales, consolidando los minifundios y sembrando el capitalismo en la sociedad de Highlands (Donaldson y Good, 1998; MacWilliam, 2013).

Las mujeres de Jiwaka lideran la producción y el comercio de alimentos de la provincia, que son dinámicos y en continua diversificación. Esta es la columna vertebral de la economía local de Jiwaka, del sustento familiar y del comercio interprovincial a lo largo de la autopista Highlands hasta los enclaves mineros remotos y hasta las dos ciudades más grandes de Papúa Nueva Guinea. Los mayores recursos productivos de Jiwaka son las tierras fértiles de propiedad consuetudinaria, las agricultoras laboriosas y competentes y el acceso por carretera a los mercados interprovinciales. Pero esta productividad económica se considera informal y rara vez se contabiliza.

Los proyectos a gran escala de las IE, que se llevan a cabo en las provincias vecinas desde finales de la década de 1980, han tenido una serie de repercusiones negativas indirectas en los distritos que ahora forman la provincia de Jiwaka. Estos impactos se producen a través del empleo de algunos hombres locales, que se convierten en maridos y padres ausentes, a menudo desatendiendo a sus esposas e hijos. Los hombres de Jiwakan (y de otras provincias) que trabajan en industrias extractivas tienen dinero y son muy móviles. Cuando regresan a casa de vacaciones, suelen emborracharse con sus amigos y parientes varones, lo que altera a las familias y a las

Mujeres en el mercado, Highlands



comunidades, y supone un derroche de dinero. También contribuyen a inflar los pagos por el precio de la novia, que a menudo están relacionados con las novias infantiles y la poligamia. Los camioneros transitorios de las carreteras compran sexo y novias jóvenes, lo que aumenta significativamente las altas tasas de transmisión del VIH en Highlands (McCallum, 2012; Voice for Change, 2015).

A pesar de estos impactos externos, ser una provincia libre de industrias extractivas es una bendición para Jiwaka, ya que sus dirigentes, funcionarios y ciudadanos se dedican a imaginar y construir su nueva provincia. Jiwaka tiene la oportunidad de desarrollar su capital humano y aprender sobre su constitución, los derechos humanos, la legislación nacional y las políticas de desarrollo del Estado. La sociedad civil está surgiendo y uniéndose para apoyar el desarrollo humano y complementar el trabajo del gobierno provincial en formación, para construir la infraestructura y la maquinaria de gobernanza provincial y local de Jiwaka. La sociedad civil de Jiwaka incluye organizaciones religiosas activas desde hace muchos años en el ámbito de la salud (incluido el VIH y el SIDA), la educación de adultos y algunas organizaciones de mujeres y jóvenes. En el contexto de Jiwaka, ‘libre de extractivas’, las ciudadanas — muchas de ellas sobrevivientes de conflictos y violencia familiar e interpersonal — se organizan y se erigen en líderes, permitiendo a la población de su provincia trabajar en pro de una visión colectiva de un futuro libre de conflictos y de violencia contra las mujeres.

La ONG local de Jiwaka, Voice for Change (VFC), es una organización laica de derechos de la mujer, fundada en 2003 por una agricultora de Jiwaka. Con experiencia en cuestiones de género en la política, los programas y los mercados agrícolas en la región de Highlands, sabía cómo los conflictos violentos perturban y desplazan a las comunidades, impidiendo que los agentes de extensión agrícola lleguen de forma rutinaria a las mujeres y les presten un apoyo técnico y comercial vital. En el curso de su trabajo, tanto las trabajadoras de extensión agrícola como las agricultoras o las comerciantes de larga distancia, que deben viajar con frecuencia por las remotas zonas rurales de Jiwaka, corren constantemente el riesgo de sufrir agresiones sexuales violentas. Los ingresos de las mujeres mantenían a sus familias y sostenían las obligaciones culturales, incluidos los pagos por el precio de la novia y las compensaciones por la justicia restaurativa y la pacificación. Pero las mujeres de los mercados locales soportaban condiciones peligrosas e inseguras y múltiples niveles de explotación y acoso. Los hombres utilizaban su dinero disponible, procedente sobre todo del café, para viajes locales, ocio y placer. La fundadora de VFC también sabía muy bien que en la sociedad de Highlands el trabajo agrícola productivo y el comercio

de las mujeres no se reconocían ni se tenía en cuenta, y que los organismos y servicios gubernamentales debían ser más conscientes y sensibles a las cuestiones de género para que las mujeres pudieran participar directamente en el desarrollo y el cambio, y beneficiarse de ellos. Además, la persistencia de los conflictos violentos y la violencia contra las mujeres en los ámbitos privado y público impedirían que la nueva provincia prosperara.

Poco a poco, VFC se fue convirtiendo en una sólida organización de defensa de los derechos de la mujer. Los primeros programas ofrecían asesoramiento técnico sobre producción de cultivos alimentarios, comercio y clubes de ahorro informales que permitían a las mujeres gestionar y controlar sus ingresos. Se descubrió que muchas de sus miembros eran sobrevivientes de la violencia física y psicológica sistémica cometida por sus maridos, incluso de la negligencia, fruto de la poligamia y el ausentismo. La experiencia compartida como ‘sobrevivientes’ del conflicto, la violencia y la poligamia estimuló la determinación de los miembros de ahorrar sus ingresos para poder acceder a la justicia en los tribunales del pueblo. Los magistrados de los tribunales de las aldeas exigen unos honorarios por sesión y, si las mujeres solicitan el divorcio, suelen ser condenadas a devolver el precio de la novia.

Muchos miembros del VFC habían sufrido largos años de desplazamiento interno como consecuencia de los continuos conflictos tribales. Habían sobrevivido a acoso, violaciones y matrimonios forzados mientras vivían como desplazadas internas en tierras y recursos de otras tribus. Luchaban por controlar sus propios ingresos o ahorrar, porque sus maridos y familiares varones a menudo se apoderaban de su dinero para comprar armas y munición para ataques de venganza o para financiar ceremonias de paz dirigidas por hombres, extravagantes pagos por el precio de la novia, indemnizaciones y campañas políticas. En 2008, los líderes de VFC estaban adquiriendo nuevos conocimientos sobre el impacto del conflicto tribal de Highlands en las mujeres y la economía local. Se organizaron, trazaron estrategias y abogaron por poner fin a las guerras locales, la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, y adoptaron conscientemente el llamamiento posterior a Beigin del movimiento feminista mundial — igualdad de género, desarrollo y paz — porque reflejaba lo que más deseaban las mujeres de Jiwakan (Be’Soer, 2012).

En 2012, cuando se declaró la nueva provincia de Jiwaka, el VFC estaba ampliando su programa provincial. VFC analizó los ciclos de conflicto de Jiwaka, la acumulación de armas, la exclusión, la alienación y la ira de los jóvenes varones y las múltiples formas de violencia que se cometen contra las mujeres y las niñas. Al mapear las formas de

violencia denunciadas por las mujeres de Jiwaka, incluyeron los múltiples efectos negativos de los hombres de la localidad que entran y salen de los enclaves de las IE — su gran movilidad, sus largas ausencias y sus frecuentes relaciones polígamas —, así como los efectos del dinero de los terratenientes ricos y los empleados de las IE.

Durante los últimos seis años, mientras se establecían los sistemas administrativo, legal y judicial de Jiwaka, VFC creó un grupo de mujeres (y hombres) mediadoras de conflictos y asesoras en traumas que se extendió por los distritos rurales y remotos. Cada vez más, las mujeres participan en la intervención temprana para evitar que disputas menores se conviertan en luchas tribales armadas a gran escala. Las mujeres Jiwaka, con el apoyo cada vez mayor de sus comunidades, abogan por limitar el precio de la novia y los pagos compensatorios consuetudinarios para que las mujeres no queden atrapadas en matrimonios violentos y para que se restablezca rápidamente la paz y la normalidad tras el conflicto, se reduzca en gran medida la duración de los desplazamientos internos y prospere la producción agrícola y el comercio. Poco a poco, estas se están convirtiendo en las nuevas normas y estándares, y algunas comunidades se están comprometiendo a establecer normas para prevenir los conflictos y la violencia contra las mujeres.

VFC ha conseguido trabajar de forma que une a las organizaciones comunitarias de base, (CBOs), FBO y una serie de pequeñas ONGs locales preexistente — un logro significativo ante la continua escasez de recursos para financiar a la emergente sociedad civil local. El VFC ha demostrado su capacidad para recaudar y gestionar subvenciones modestas y para crear asociaciones estratégicas con ONG locales, organizaciones comunitarias y organizaciones confesionales, así como con agentes estatales de los sectores de la justicia, el desarrollo comunitario y la salud. VFC forma a magistrados de tribunales locales, mediadores de paz y líderes electos del gobierno local, y está derribando progresivamente las barreras de género para aumentar la participación política de las mujeres. VFC ayuda a las comunidades a elaborar sus propios estatutos, que están en consonancia con las normas de derechos humanos, la Constitución de Papúa Nueva Guinea y las leyes nacionales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia.

Unos fondos modestos canalizados a través de ONG internacionales asociadas y una red fiable de apoyos técnicos y morales han permitido a VFC desarrollar la estrategia provincial de Jiwaka para prevenir y responder a la violencia de género. Su aplicación efectiva requiere ahora que el gobierno provincial reconozca la contribución y el papel vital de la sociedad civil local, y que asigne las partidas presupuestarias adecuadas.

La formalización de asociaciones estratégicas entre el Gobierno y las OSC y los compromisos prioritarios para eliminar los ciclos perturbadores de las luchas tribales armadas y la violencia persistente contra las mujeres son necesarios para construir sobre los cimientos que VFC ha dotado a esta nueva provincia.

En la provincia de Jiwaka no hay industrias extractivas y, a pesar de su ‘novedad’ y su lucha, no figura entre las provincias seleccionadas para beneficiarse del amplio programa financiado por Australian Aid para reforzar los sistemas de derecho y justicia. Ser una nueva provincia libre de industrias extractivas es una bendición porque proporciona un espacio para que las mujeres líderes ilustradas se alcen y forjen vínculos con las redes feministas nacionales y regionales, y asociaciones con ONG internacionales que les permiten acceder a financiación para un desarrollo y un cambio transformador. Los avances de Jiwaka para acabar con los conflictos armados y la violencia contra las mujeres se basan en el liderazgo local y en estrategias y conocimientos propios. La estrategia provincial de Jiwaka para prevenir y responder a la violencia de género se desarrolló localmente, a través de un proceso dirigido por las ONG, sin FIFO ni expertos muy bien pagados ni aportes de ayuda de alto costo. Una subvención de la ONU de 300.000 dólares a lo largo de tres años (2013–15) permitió a VFC empezar a ampliar su alcance. La ayuda holandesa canalizada a través de una ONG australiana mantuvo ese nivel de financiación durante otros tres años. Con 100.000 dólares al año — el equivalente al salario anual de un consultor internacional — el VFC de Jiwaka ha desarrollado un programa y un campus de formación que sensibiliza y capacita a miles de ciudadanos — hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de zonas urbanas y rurales, religiosos y laicos, trabajadores del gobierno, de organizaciones confesionales y de la sociedad civil —. Juntos están dando forma a una visión compartida para que Jiwaka sea una nueva provincia próspera, libre de conflictos violentos y de violencia contra las mujeres.

No hay un caso comparable de una sociedad civil dirigida por mujeres comprometidas a poner fin a los conflictos violentos y a eliminar la violencia contra las mujeres en ninguna de las tres sociedades de Highlands con industrias extractivas. En comparación, las intervenciones de RSC y CCD lideradas por consultores RSC y FIFO de las IE son costosas e insostenibles. Se ven entorpecidas e inhibidas por problemas de seguridad corporativa e individual y sus operaciones se suspenden con regularidad. Carecen de un marco profundo de derechos humanos y del estilo de liderazgo feminista de Highlands que se encuentra en los programas exitosos de las provincias libres de industrias extractivas de Highlands.

Las organizaciones de RSE de la industria extractiva: Estado de facto, sociedad civil sustituta

La mayoría de las mujeres de Papúa Nueva Guinea sufren violencia interpersonal y sexual y son objeto de muchas formas de violencia en el ámbito público. Sin embargo, poner fin a la violencia contra las mujeres no se considera una prioridad en la planificación, las políticas o los presupuestos nacionales o locales. Las leyes actuales para cumplir con este objetivo son el resultado de la defensa y la acción a largo plazo dirigidas por organizaciones locales no gubernamentales de defensa de los derechos de las mujeres, y no el resultado de la voluntad política y el apoyo presupuestal del Estado.¹⁶ En las dos últimas décadas, los programas para reforzar la aplicación estatal de las leyes y políticas de violencia contra las mujeres de Papúa Nueva Guinea que tanto costó conseguir, dependieron en gran medida de los donantes, dado que los recursos estatales siguen destinándose a garantizar la exploración, explotación y expansión de los proyectos de minería, gas y petróleo y la rápida modernización de la ciudad capital. A través de la expansión de los planes de desgravación fiscal y las asociaciones público—privadas emergentes, las industrias extractivas contribuyen directamente a la expansión de infraestructuras modernas al servicio de las élites locales y la mano de obra internacional, impulsando la imagen de Papúa Nueva Guinea como nación joven y próspera. En los últimos años, han colaborado con donantes, otros socios del sector privado y Femili PNG, una ONG nueva y en rápida expansión, para promover iniciativas de alto nivel destinadas a acabar con la violencia contra la mujer en las ciudades de Papúa Nueva Guinea. Mientras tanto, los conflictos armados y el control brutal de las mujeres se normalizan en las ‘provincias de origen’.

El Estado ignora las pruebas cada vez más numerosas de que la violencia contra las mujeres y las niñas es peor en las comunidades afectadas por el conflicto armado y que tanto los conflictos violentos como la violencia contra las mujeres se ven exacerbados por las industrias extractivas. Estudios recientes sobre las actividades de CCD implementadas en zonas de impacto minero en Papúa Nueva Guinea descubrieron que se centran en ‘la ley y el orden, las actividades de las mujeres, los servicios locales de salud, los programas de medios de subsistencia y el apoyo al desarrollo empresarial’ (Banks et al., 2018). Los aportes de los CCD son en su mayoría técnicos, materiales y de infraestructura. Algunos son más grandes que los programas de los grandes donantes, pero son más conservadores desde el punto de vista social y cultural, ‘defensivos’ y ‘despolarizadores’ (ibíd.). Las iniciativas de los CCD están en constante

tensión con los cambios más orgánicos y desordenados ('desarrollo inmanente') que se producen a medida que las comunidades acceden a nuevas oportunidades económicas y flujos de efectivo. Algunos CCD tienen el potencial de proporcionar apoyo a largo plazo, pero 'las actividades sostenibles exitosas son raras'. Por lo general, los CCD de las industrias extractivas no se basa en las lecciones aprendidas ni en las buenas prácticas documentadas y compartidas en la corriente principal del desarrollo. Dichos programas no están sujetos a monitoreos estándar o a evaluaciones obligatorias y las empresas tienen una capacidad (o voluntad) limitada para influir en la trayectoria a largo plazo del cambio social y económico de la comunidad en torno a sus proyectos (ibíd.: 208—23).

Burton y Onguglo (2018) analizan las respectivas responsabilidades del Estado y las empresas de las IE con las comunidades de Papúa Nueva Guinea frente a los compromisos asumidos en los 'mundos del desarrollo desconectado' de la agenda de sostenibilidad de la industria minera global, de la agenda de desarrollo global y de la agenda nacional de planificación del desarrollo sostenible de Papúa Nueva Guinea. El 82% de las 33 empresas mineras que operan actualmente en Papúa Nueva Guinea no informan sobre indicadores de sostenibilidad. Solo dos empresas informan sobre indicadores relativos a sus relaciones con las poblaciones indígenas y su impacto sobre ellas, incluidas las quejas que los propietarios de las tierras puedan tener sobre las operaciones mineras. Los informes de las empresas de las IE revelaron 'un historial de ofuscación y negación por parte de las empresas' incluyendo ocultar operaciones policiales y de las fuerzas de defensa en los barrios mineros para expulsar a los 'señores de la guerra' y hacer frente a los problemas y protestas pendientes y volátiles en materia de reasentamiento. Por ejemplo, hubo una negación inicial y luego un largo retraso en la respuesta a múltiples incidentes de violación y violación en grupo perpetrados por personal de seguridad empleado por la empresa canadiense Barrick, que explota la mina de oro de Porgera en la provincia de Enga, en Highlands (ibíd.: 274—7).

Los gestos de responsabilidad empresarial de las industrias extractivas, incluso los que afirman promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer son en su mayoría cínicos y simbólicos (Macintyre, 2011; Wardlow, 2006). A las mujeres que sufren exclusión económica y altos niveles de violencia en los ámbitos privado y público se les 'regalan' centros de recursos prefabricados y clases de costura y cocina — esta fórmula simbólica de 'Mujeres en la Minería' (WIM, por sus siglas en inglés) carece de relevancia para las luchas de las mujeres en la vida real. El Banco Mundial y los programas del fondo de ayuda no proporcionan información ni reflexiones objetivas

sobre los problemas sociales, políticos y económicos críticos, ni sobre el cambio de las normas de género en las comunidades afectadas por las IE. Por ejemplo, no capacitan a las mujeres de las comunidades afectadas para desafiar el flujo de regalías a los poderosos hombres locales que reclaman derechos de propiedad de la tierra, pero a menudo se fugan de forma corrupta sin distribuir los beneficios entre los miembros de su clan o su familia — o el goteo a los hombres de estatus inferior que gastan su dinero en armas o más esposas, con poca consideración por los derechos y necesidades de las mujeres y niños afectados.

Oil Search Limited el socio más destacado de EXXONMOBIL en el proyecto de gas de Hela. OSF, su rama de RSC, tiene como objetivo ‘establecer el estándar para la contribución del sector privado al desarrollo sostenible’ y ha llevado el papel de la RSC de las IE en el desarrollo local y nacional a un nivel completamente nuevo. En el resumen de resultados de 2016, OSF reportó éxito en su labor de cabildo ante el Estado para que las exportaciones de petróleo y gas quedaran exentas del impuesto sobre bienes y servicios y para que se mantuviera y ampliara un controvertido plan de créditos fiscales para las empresas de las IE, utilizado para financiar (principalmente) proyectos de infraestructuras en todas las provincias de Papúa Nueva Guinea. La OSF realiza una contribución socioeconómica total de US\$284 millones, incluidos US\$32,2 millones en proyectos de infraestructura que gestiona en nombre del Estado, en el marco del plan de crédito fiscal para infraestructura. Entre ellos figuran infraestructura vial, remodelación de hospitales y escuelas en las provincias de Hela y Southern Highlands, viviendas para la policía en Southern Highlands, mejoras en los hospitales provinciales de Hela y operaciones de centros de apoyo familiar. La OSF ha asumido la gestión del hospital de Hela desde la marcha de MSF, y con apoyo militar desde los recientes terremotos. La OSF se atribuyó el mérito de apoyar el tratamiento especializado de 1.000 sobrevivientes de violencia familiar y sexual en 2016 (Oil Search Foundation, 2017). La OSF colabora estrechamente con iniciativas de financiación bilaterales australianas y contrata a seleccionadas ONG nacionales para que entren y salgan de Hela, impartiendo formación para fortalecer a los representantes locales del Estado y a la sociedad civil e instándoles a colaborar en el desarrollo de la estrategia provincial de Hela para acabar con la violencia contra las mujeres. Pero estos insumos son intermitentes y se prolongan durante años porque están dirigidos por consultores que no pueden viajar en épocas de agitación civil o catástrofes naturales.

A través de un sistema de crédito fiscal en expansión, Oil Search se está convirtiendo en un actor nacional cada vez más influyente, construyendo infraestructuras políticas

y económicas claves en la capital, la más reciente es una nueva oficina para el primer ministro y un enorme recinto y carreteras nuevas para impresionar a los asistentes al Foro de Cooperación Económica Asia—Pacífico (APEC). Los críticos de los sistemas de crédito fiscal aluden a la pérdida de ingresos fiscales y a la escasa adecuación de las infraestructuras a los planes y políticas del gobierno, a menudo construidas para servir a una élite política y eludiendo la planificación y los procedimientos fiscales adecuados. La RSC actúa cada vez más como gobierno local de facto en zonas remotas afectadas por las IE, pero, a diferencia del Estado, estas industrias no son responsables ante las obligaciones constitucionales o de los tratados internacionales, ni tienen el mandato o los medios para dar prioridad a poner fin a los conflictos tribales y a la violencia contra las mujeres.

El Estado continúa negando los enormes desafíos de la ley, el orden y el desarrollo social en Hela (y de otras provincias de Highlands dominadas por las IE) y solo interviene ocasionalmente para declarar el estado de emergencia si los proyectos de petróleo y gas se ven amenazados o las elecciones son inminentes. Mientras tanto, Oil Search está ampliando su papel en el mantenimiento de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios de salud, educación y comunitarios en la provincia de Hela. Oil Search mejoró enormemente su reputación cuando asumió rápidamente un papel de liderazgo en las operaciones de socorro del terremoto de Hela en 2018, proporcionando los suministros de socorro y el transporte necesarios para llegar a miles de personas en comunidades remotas. OSF está produciendo un documental sobre su nuevo papel en la ayuda humanitaria y ha recibido elogios del Estado, premios de la comunidad internacional y el agradecimiento de las comunidades desesperadas, traumatizadas y confundidas. Se especula que el Estado opte por utilizar algún tipo de estrategia de asociación público—privada para transferir aún más de sus obligaciones y deberes a OSF, por ejemplo, para la recuperación a largo plazo tras el terremoto, y posiblemente incluso para diseñar y aplicar una estrategia equitativa que permita superar el enorme retraso de años en el pago de regalías, que actualmente se adeuda a los propietarios de tierras de Huli (Filer, 2016).

Las intervenciones financiadas por fondos de ayuda y empresas en materia de desarrollo social son remotas, irregulares y dependen de consultores internacionales FIFO o de ONG patrocinadas por empresas. En este contexto, la voluntad política, el espacio y los recursos para apoyar la aparición y el crecimiento de la sociedad civil local son limitados. A menos que se aborden intencionalmente las continuidades históricas del patriarcado y la violencia masculina y se adopte un enfoque basado en los derechos, no habrá oportunidades para que las mujeres lideren las organizaciones locales y la movilización de la comunidad por la justicia y la paz.

Las mujeres de Hela observan que ‘los vastos yacimientos de petróleo y gas que fluyen bajo nuestro suelo se extraen y exportan para beneficio de las empresas de las IE, mientras la sangre del pueblo de Hela fluye por la superficie’.¹⁷ Oil Search promociona su imagen como ciudadano corporativo benevolente y socio importante para el desarrollo. Pero allí de donde proceden sus beneficios empresariales, los conflictos violentos y las relaciones de género se agravan, oprimen y castigan a las mujeres, niñas y niños atrapados en nuevas formas de guerra armada y protesta armada masculina. Mujeres líderes y activistas experimentadas de Hela, que trabajan independientemente del patrocinio de EXXON o de las subvenciones de OSF, critican la falta de financiación sostenida de la RSC de las IE para apoyar la formación de organizaciones locales de defensa de los derechos de las mujeres en Hela. Reclaman financiación inicial específicamente para permitir que las organizaciones de mujeres autónomas desarrollen su propia agenda. Quieren establecer vínculos y aprender de la experiencia de los movimientos liderados por mujeres para poner fin a los conflictos violentos y a la violencia contra las mujeres en las provincias de Highlands libres de actividades extractivas y donde se han logrado avances considerables. Pero las estrategias de bajo presupuesto que proponen caen en oídos sordos.

Conclusión

La provincia de Hela no podrá alcanzar la paz, la igualdad y el desarrollo sostenible mientras el Estado ignore su conflicto armado y la violencia extrema contra las mujeres. El CCD y la RSC de las industrias extractivas pueden reconocer los daños colaterales en las comunidades afectadas por las IE, pero no detendrán sus operaciones altamente rentables para garantizar la paz y un desarrollo social inclusivo y dirigido localmente. Sus servicios humanitarios o de salud no pueden sustituir la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos para poner fin a los conflictos armados y a la violencia contra las mujeres. Corren un alto riesgo de encubrir el incumplimiento de sus funciones por parte de un gobierno corrupto. Las industrias extractivas pueden seguir colaborando con programas de ayuda a gran escala, complacer a un Estado corrupto e impulsar la rentabilidad de miles de empresas australianas que ahora hacen negocios en Papúa Nueva Guinea, pero condenarán a las mujeres de Hela a una espiral de terror, muerte y destrucción, dejando la provincia como un enorme agujero negro de anarquía y violencia sobre el que se trazan planes para proyectos de gas, oro y petróleo cada vez más grandes.

Recuadro 2.1 Lecciones de la experiencia de Bougainville

Michelle Kopi

La mina de cobre de Bougainville, la primera gran mina de Papúa Nueva Guinea posee una de las mayores reservas de cobre del mundo. Desarrollada por primera vez por la administración colonial australiana a finales de la década de 1960 y operada posteriormente por Bougainville Copper Limited (BCL), la mina proporcionó hasta el 45% de los ingresos nacionales de exportación de Papúa Nueva Guinea. El Gobierno de Papúa Nueva Guinea poseía una participación del 19%. A pesar de este gran flujo de ingresos nacionales, la población local estaba descontenta con la forma en que se distribuían los beneficios de la mina y la destrucción que estaba causando. Aldeas enteras fueron reubicadas, mientras que la pérdida de tierras, la degradación medioambiental y la afluencia de forasteros causaron otros problemas. La población local se convirtió en espectadora, impotente en su propia tierra (Regan, 2017). Los efectos sobre las mujeres fueron mucho peores. En Bougainville, una de las pocas culturas indígenas predominantemente matrilineales de Papúa Nueva Guinea, donde las mujeres son las titulares de los derechos sobre la tierra, los parientes masculinos que actuaban como representantes en las negociaciones públicas cambiaron en gran medida la dinámica de poder dentro de la estructura social existente y socavaron la autoridad tradicional de las mujeres (O'Callaghan, 2002).

La frustración se fue acumulando a lo largo de los años, a medida que no se atendían las quejas locales ni se satisfacían las demandas. Esto acabó provocando que los terratenientes emprendieran acciones contra la mina, forzando su cierre en mayo de 1989, con lo que se cortó una fuente vital de ingresos para el Estado. Se desplegaron unidades móviles de la policía y, más tarde, las Fuerzas de Defensa de Papúa Nueva Guinea, que actuaban como fuerza de seguridad personal de la corporación, con órdenes directas del BCL de utilizar la fuerza que fuera necesaria para reabrir la mina (PNG Mine Watch, 2017). Utilizaron duras tácticas de intimidación, encendiendo y alimentando antiguos sentimientos secesionistas que se remontan a 1975. Esto suscitó un mayor apoyo de los isleños, que tomaron las armas para defenderse, y acabó desembocando en una guerra civil que duró una década (Tierney et al.,

2016). El conflicto se intensificó hasta convertirse en el mayor conflicto armado en el Pacífico desde la Segunda Guerra Mundial.

Se calcula que se produjeron 20.000 muertes, en su mayoría civiles, violaciones generalizadas de los derechos humanos, la destrucción de propiedades y medios de subsistencia y el desplazamiento de más de un tercio de la población local. Los jóvenes recurrieron a una violencia excesiva e incontrolable mientras toda la isla se sumía en la anarquía (Akanon, 2013). Una cultura de impunidad alimentó la violencia contra las mujeres perpetrada por agentes estatales y no estatales. Los informes van desde agresiones sexuales individuales a violaciones en grupo en centros de atención, mujeres asesinadas tras ser violadas, mujeres que se suicidaron tras ser violadas y personas intimidadas y agredidas sexualmente durante semanas (Tierney et al., 2016).

En medio del dolor y las penurias, las mujeres siguieron resilientes y demostraron un gran valor. Las mujeres se organizaron y utilizaron su papel tradicional para negociar la paz entre las facciones enfrentadas. Finalmente se alcanzó un alto al fuego en 1999, seguido de la firma del Acuerdo de Paz de Bougainville en 2001, que establecía Bougainville como región autónoma. Los muchos años de guerra reforzaron la identidad de Bougainville y el llamamiento a la secesión. Como parte de las negociaciones de paz, se acordó que Bougainville celebraría un referéndum para decidir su futuro político antes de 2020.

El futuro de la minería en Bougainville

En 2015, el Gobierno Autónomo de Bougainville (GAB) aprobó la Ley de Minería de Bougainville, que otorgaba efectivamente los derechos de propiedad de los minerales a los propietarios consuetudinarios. Esto significa que ninguna mina podrá operar en Bougainville sin una licencia social. Actualmente hay conversaciones para reabrir la mina de Panguna, con diversas opiniones al respecto. Para muchos, se trata de la autosuficiencia económica de un pueblo que desea su independencia política y económica. Sin embargo, las mujeres de Bougainville insisten en que la tierra no puede compararse con el dinero (Wilson, 2011). En junio de 2017, las manifestantes de Panguna bloquearon la mina de cobre para impedir la firma de un memorando de

entendimiento entre el GAB y el BCL. Su mensaje era sencillo y no negociable: “No a la BCL, no a la minería”. Las mujeres reclamaban que nunca se les había consultado sobre la reapertura de la mina y que no lo permitirían (Masiu, 2017).

Estos desacuerdos han provocado una moratoria indefinida sobre la mina y la negación de la solicitud de BCL de prorrogar su licencia de exploración. Desde entonces, BCL ha llevado el asunto a los tribunales con la esperanza de encontrar una vía de retorno a Panguna. Irónicamente, y para complicar las cosas, ABG tiene un interés comercial en la mina, con una participación del 36,4% en BCL. Sin embargo, pase lo que pase, lo que está claro es que el futuro de la minería en Bougainville está ahora en manos de los habitantes de Bougainville.

¿Cuáles son las lecciones?

Bougainville representa una oportunidad única y valiosa para que Papúa Nueva Guinea reflexione sobre lo que salió mal y cómo evitar a toda costa una catástrofe humana y medioambiental similar. Sin embargo, mirando hacia atrás, ¿cuánto hemos aprendido realmente de la experiencia de Bougainville?

Interés público vs intereses privados

La industria extractiva sigue siendo la principal fuente de ingresos de Papúa Nueva Guinea; en 2017 representó el 86% de los ingresos por exportaciones del país.¹⁸ La experiencia de Bougainville demuestra que la gran dependencia de la mina de Panguna comprometió la posición del Estado, permitiendo que la BCL influyera en sus decisiones. En una demanda contra la mina en la que se alegaban crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, el ex primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Sir Michael Somare, firmó una declaración jurada en la que afirmaba que, debido a la influencia financiera de la empresa en el país, ‘la empresa controlaba al Gobierno’ (PNG Mine Watch, 2017). Lo que estamos presenciando son intereses corporativos globales cada vez más fuertes, que dictan la política y socavan al Estado. Los intereses financieros y comerciales del Estado en las industrias extractivas cuestionan su capacidad para mantenerse imparcial en su papel de regulador de la industria para proteger los intereses de su pueblo. De hecho, a los ojos de los habitantes

de Bougainville que cerraron la mina de Panguna, el problema residía en la ‘mafia blanca’ que controlaba la economía de Papúa Nueva Guinea (Akanon, 2013). Se consideraba que el poder del Estado había sido capturado por extranjeros y estaba sujeto a influencias externas (Rolfe, 2010).

A la luz de este riesgo creciente y de los numerosos problemas asociados a las actividades extractivas, cabría pensar que el gobierno consideraría la extracción de recursos como una última opción y no como la primera. Sin embargo, la explotación de los recursos en nombre del crecimiento económico se está llevando a cabo más que nunca. Hemos olvidado lo que nuestros antepasados inscribieron con sabiduría en la Constitución —practicar la moderación y poner a la gente primero.

Género en el discurso del extractivismo

La experiencia de Bougainville pone de relieve la naturaleza masculina de las industrias extractivas, de la política y la guerra. Durante demasiado tiempo, las decisiones sobre el sector de los recursos en Papúa Nueva Guinea se han seguido tomando sin la debida consulta y consideración de los impactos perjudiciales en la vida y el bienestar de las mujeres. Ellas son las que menos se benefician de estas decisiones y, sin embargo, son las más afectadas. Incluso ahora, casi dos décadas después de la crisis de Bougainville, las mujeres siguen sufriendo los efectos de la guerra. Se dice que la violencia de género y otros problemas sociales son mucho peores ahora que antes de la guerra (Tierney et al., 2016). Los problemas de salud mental no resueltos y los traumas derivados de la experiencia de la guerra siguen afectando al hogar y a la comunidad en forma de abuso de sustancias, consumo excesivo de alcohol, violencia doméstica, agresiones sexuales, depresión y falta de compromiso con la sociedad (ibíd.). Estos efectos a largo plazo aún no se han tratado adecuadamente y como resultado, muchas mujeres en esta situación siguen cargando con el dolor y reviviendo el terror de la guerra en su vida cotidiana. Las mujeres piden ahora al GAB que sea transparente en los asuntos mineros, y han solicitado a sus líderes que tengan en cuenta la voz de las mujeres en todas las decisiones que se tomen (Masiu, 2017). Reconociendo el importante papel de las mujeres, el GAB ha realizado esfuerzos deliberados para aumentar la voz y la participación de las mujeres en todos los niveles. Y aunque llevará

tiempo que las mujeres participen plena y significativamente en estos espacios, lo importante por ahora es que están ahí.

La experiencia vivida por las mujeres a raíz de la mina y del conflicto de Bougainville, que duró una década, ofrece una gran lección sobre los peligros del extractivismo. Impulsada por la demanda mundial de recursos, la búsqueda de beneficios por parte de las empresas y la adicción del Estado a las rentas de los recursos, la mina de Panguna creó condiciones de desigualdad, así como el despojo y destrucción medioambiental que, en última instancia, desembocaron en violencia, represión militar y guerra que afectaron sobre todo a las mujeres.

Notas

- 1- Las informantes clave de este capítulo fueron Alice Arigo (mujer policía) de la provincia de Hela y Lilly Be'Soer (activista feminista y fundadora de Voice for Change) de la provincia de Jiwaka, ambas defensoras de los derechos humanos comprometidas a poner fin a los conflictos violentos y la violencia contra las mujeres en sus nuevas provincias.
- 2- A lo largo de las cuatro décadas transcurridas desde la independencia, Papúa Nueva Guinea ha experimentado una serie de «auge de recursos» cuando nuevos proyectos y altos precios de las materias primas han aumentado drásticamente el PIB. El primer auge se produjo gracias al petróleo y el gas y proyectos en Southern Highlands durante la década de 1990, pero fue de corta duración, pues la corrupción de alto nivel y la mala gestión financiera vaciaron las arcas del gobierno estatal y provincial, por líderes corruptos y sus compinches. Tras una dolorosa recuperación económica, los altos precios del oro y el cobre y la expansión de los campos de gas apoyaron un segundo auge en 2002-12. A pesar del aumento del PIB, una vez más los ingresos de la industria extractiva no se tradujeron en un desarrollo equitativo e integrador (Howes et al., 2014; Howes y Fox, 2016).
- 3- La Región Autónoma de Bougainville (AROB), anteriormente la Provincia de Salomón del Norte, fue sede de la primera gran operación minera post-independencia de Papúa Nueva Guinea, iniciada por la administración australiana saliente y destinada a proporcionar ingresos nacionales sustanciales para el presupuesto del nuevo Estado independiente en 1975. La dislocación social y cultural, la contaminación y los beneficios inadecuados para la comunidad local fueron algunos de los factores desencadenantes de un levantamiento armado de terratenientes que condujo a una guerra civil de una década con el estado del PNG. Bougainville es el único lugar en el mundo donde la violencia comunitaria ha resultado en el cierre a largo plazo de una mina a gran escala.
- 4- A. Arigo, comunicación personal, 2017.
- 5- Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla de Nueva Guinea fue un lugar clave de la guerra del Pacífico y finalmente para la rendición del ejército japonés.
- 6- L. Be 'Soer, comunicación personal, 2017.
- 7- L. Be'Soer, comunicación personal, 2017; A. Arigo, comunicación personal, 2018.
- 8- Los socios del proyecto del LNG PNG eran ExxonMobil (el 33,2 por ciento y operador), Búsqueda de Petróleo (el 29,0 por ciento), Santos (el 13,5 por ciento), National Petroleum Company de PNG (Gobierno de PNG) (el 16,8 por ciento), JX Nippon Oil y Gas Exploration Company (el 4,7 por ciento) y Mineral Resources Development Company (2,8%).
- 9- Duna, el segundo grupo étnico más grande de Hela, alega que los Huli han abandonado tanto los proyectos rituales regionales que antes promovían fuertemente como los lazos que hicieron posible tales actuaciones cooperativas. En lugar de preocuparse por preservar la sustancia fértil del núcleo de la tierra, los Duna ven a los Huli (en la provincia de Hela) y a los Ipili (en Porgera) como saqueadores. Consideran que el oro, el petróleo y el gas que se extraen en Porgera, Monte Kare, Nogoli, Moran, Kutubu y Gobe son ejemplos de esta sustancia fértil, e insisten en que los Huli consumen arbitrariamente sustancias fértiles que deben conservarse para sostenerlos a ellos y al mundo.
- 10- A. Arigo, comunicación personal, 2017.
- 11- Filer (2016) desentrañó el intratable problema de la identificación de los propietarios a través de un análisis histórico de los problemas actuales de los beneficios no pagados a los propietarios en los proyectos HIDES y PNG LNG. Esencialmente, el Estado está encerrado en un pragmático «método de patrulla» que fue posible a través de enmiendas a las leyes coloniales. El sistema supone que los representantes de los terratenientes seleccionados tendrán interés en mantener la estabilidad en torno a los sitios de las IE, pero no hay garantía de una distribución equitativa a un grupo mayor de propietarios, en particular por género y edad.
- 12- Los centros de apoyo a la familia (CAF) son instalaciones de «ventanilla única» establecidos en los hospitales para recibir y tratar a las víctimas/sobrevivientes de la violencia de género contra la mujer. Los primeros CAF fueron establecidos con el apoyo de ONG y luego por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia con el Comité de Violencia Sexual y Familiar del Papúa Nueva Guinea. MSF perfeccionó aún más sus protocolos y servicios y los incorporó en las directrices nacionales. El establecimiento de CAF en todos los hospitales principales es ahora política nacional, y las juntas hospitalarias tienen el mandato de asignar un presupuesto anual para su establecimiento y sus operaciones. Ahora hay CAF en todo PNG, la mayoría financiados con ayuda australiana.
- 13- Información proporcionada por los líderes y miembros de Hela Women Never Give Up, en las conversaciones sostenidas con la autora durante cuatro noches de los dieciséis días de «Activismo contra la violencia contra las mujeres» (25 November-10 diciembre de 2017).
- 14- Oil Search Limited es la compañía de exploración y desarrollo de petróleo y gas más grande de Papúa Nueva Guinea, y opera todos los campos petrolíferos del país.
- 15- A. Arigo, comunicación personal, 2018.
- 16- Cinco años después de la independencia, el máximo órgano del Papúa Nueva Guinea para las mujeres expresó indignación por los altos niveles de violencia doméstica normalizada y las crecientes tasas de violencia sexual cometida con virtual impunidad. Trabajaron directamente con la Comisión de Reforma Legislativa para llevar a cabo investigaciones a nivel nacional, campañas populares y promoción directa ante el parlamento de leyes específicas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia. Un Estado insensible e intransigente tardó treinta años en aprobar las reformas legales recomendadas.
- 17- A. Arigo, comunicación personal, 2018.
- 18- Véase <https://eiti.org/papua-new-guinea#extractive-industries-contribution>

Referencias

- Akanon, C. 2013. 'Papua New Guinea and Bougainville Conflict: Women in Peace and Reconciliation', www.uaf.edu/.../Papua—New—Guinea—Bougainville—Conflict—Akanoa—C.—3—21—13.pdf (consultado el 7 de abril de 2018).
- Allen, B. and Frankel, S. 1991. 'Across the Tari Furoro' in Schieffeline, E. and Crittenden, R. (eds), *Like People You See in a Dream: First Contact with Six Papuan Societies*. Stanford: Stanford University Press.
- Alpers, P. 2004. 'Gun Violence, Crime and Politics in the Southern Highlands Community: Interviews and a Guide to Military—style Small Arms in Papua New Guinea'. Background Paper for Special Report 5. Geneva: Small Arms Survey, http://apo.org.au/files/Resource/alters_sas_png_background_paper.pdf (consultado en diciembre de 2017)
- Alpers, P. 2005. *Gun—running in Papua New Guinea: From Arrows to Assault Weapons in the Southern Highlands*. Special Report 5. Geneva: Small Arms Survey, www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/C—Special—reports/SAS—SR05—Papua—New—Guinea.pdf (consultado en diciembre de 2017).
- Banks, G., Kuir—Ayi, D., Kombako, D. and Sagir, B. F. 2018. 'Dissecting Corporate Community Development in the Large—scale Melanesian Mining Sector' in Filer, C. and Le Meur, P.—Y. (eds), *Large—scale Mines and Local—level Politics: Between New Caledonia and Papua New Guinea*. Canberra: ANU Press, <https://press.anu.edu.au/publications/series/asia—pacific—environment—monographs/large—scale—mines—and—local—level—politics> (consultado el 1 de mayo de 2019).
- Be'Soer, L. 2012. 'Leveraging Women's Rural Leadership and Agency'. Fifty— sixth Session of United Nations Commission on the Status of Women, New York, 27 February—9 March, www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw56/panels/panel2—Lilly—Be—Soer.pdf (consultado el 3 de diciembre de 2017).
- Burton, J. and Onguglo, J. 2018. 'Disconnected Development Worlds: Responsibility towards Local Communities in Papua New' in Filer, C. and Le Meur, P.—Y. (eds), *Large—scale Mines and Local—level Politics: Between New Caledonia and Papua New Guinea*. Canberra: ANU Press, <https://press.anu.edu.au/publications/series/asia—pacific—environment—monographs/large—scale—mines—and—local—level—politics> (consultado el 1 de mayo de 2019).
- Chandler, J. 2014. 'Violence against Women in PNG: How Men Are Getting Away with Murder', Lowy Institute, August, www.lowyinstitute.org/publications/violence—against—women—png—how—men—are—getting—away—murder (consultado el 1 de mayo de 2019).
- Davidson, H. 2018. 'Papua New Guinea Earthquake: Death Toll Rises as Disease Threat Grows', *The Guardian*, 15 March, www.theguardian.com/world/2018/mar/15/papua—new—guinea—earthquake—death—toll—rises—disease—threat—grows
- Donaldson, M. and Good, K. 1998. *Articulated Agricultural Development: Traditional and Capitalist Agricultures - Papua New Guinea*. Aldershot: Gower.
- Filer, C. 2016. 'The Intractable Problem of Landowner Identification in the PNG LNG Project: An Historical Perspective'. State, Society and Governance in Melanesia SSGM) seminar, 12 September, https://devpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/events/attachments/2016—09/sml_i_seminar_sept_2016.pdf (accessed 10 January 2017).

- Harvey—Kelley, L. 1997. *Toropo: Tenth Wife*. Port Melbourne: Heinemann
- Howes, S. and Fox, R. 2016. 'PNG's Resource Boom: A Fiscal Retrospective', Development Policy Centre, http://devpolicy.org/Events/2016/PNG—Update/1a_Howes_Fox.pdf (consultado el 6 de noviembre de 2017).
- Howes, S., Mako, A. A., Swan, A., Walton, G., Webster, T. and Wiltshire, C. 2014. *A Lost Decade? Service Delivery and Reforms in Papua New Guinea 2002– 2012*. Canberra: National Research Institute and the Development Policy Centre.
- ICRC. 2017a. 'Spears to Semi—automatics: The Human Cost of Tribal Conflict in Papua New Guinea', International Committee of the Red Cross (ICRC), www.youtube.com/watch?v=wo4uf-fXsUk (consultado en diciembre de 2017).
- ICRC. 2017b. 'The Old Ways Are Gone: Papua New Guinea's Tribal Wars Become More Destructive', International Committee of the Red Cross (ICRC), <https://medium.com/@ICRC/the-old-ways-are-gone-papua-new-guineas-tribal-wars-become-more-destructive-ade38205196f> (consultado en diciembre de 2017).
- Josephides, L. 1975. *The Production of Inequality: Gender and Exchange among the Kewa*. New York and London: Tavistock.
- Kopi, M. 2011. *Violence and Insecurity in the Southern Highlands of Papua New Guinea*. Auckland: Oxfam, www.oxfam.org.nz/sites/default/files/reports/Tari-report-final_2011.pdf (consultado el 6 de septiembre de 2017).
- Macintyre, M. 2011. 'Modernity, Gender and Mining: Experiences from Papua New Guinea' in Lahiri—Dutt, K. (ed.), *Gendering the Field: Towards Sustainable Livelihoods for Mining Communities*. Canberra: ANU Press.
- MacWilliam, S. 2013. *Securing Village Life: Development in Late Colonial Papua New Guinea*. Canberra: ANU Press, <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p223381/pdf/book.pdf?referer=402> (consultado el 7 de octubre de 2017).
- Main, M. 2017. 'Papua New Guinea Gets a Dose of Resource Curse as ExxonMobil's Natural Gas Project Fosters Unrest', Australian Broadcasting Corporation, 10 March, www.abc.net.au/news/2017-03-10/png-gets-a-dose-of-resource-curse-from-exxonmobils-lng-project/8343090?WT.mc_id=newsmail&WT.tsrc=Newsmail (consultado el 5 de diciembre de 2017).
- Masiu, R. 2017. 'No Mining and No BCL, Women Say', *Post Courier*, 4 June.
- McCallum, I. 2012. *Tingim Laip Social Mapping Report: Highlands Highway*. Madang: Tingim Laip, https://issuu.com/loumcc/docs/tl_social_mapping_highlands_highway (consultado en octubre de 2017).
- McIlraith, J. 2012. *The Community Good: Examining the Influence of the PNG LNG Project in the Hela Region of Papua New Guinea*. Dunedin: National Centre for Peace and Conflict Studies, University of Otago, www.oxfam.org.nz/report/the-community-good-examining-the-influence-of-the-png-lng-project-in-the-hela-region-of-papua-new-guinea (consultado el 5 de septiembre de 2017).
- MSF. 2011. *Hidden and Neglected: The Medical and Emotional Needs of Survivors of Family and Sexual Violence in PNG*. Port Moresby: Médecins Sans Frontières (MSF), www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2011/06-15-Papua-New-Guinea-Sexual-Domestic-Violence%20report.pdf (consultado el 5 de septiembre de 2017).

- MSF. 2016. *Return to Abuser: Gaps in Services and a Failure to Protect Survivors of Family and Sexual Violence in Papua New Guinea*. Amsterdam: Médecins Sans Frontières (MSF), www.msf.org.au/sites/default/files/attachments/msf-pngreport-def-lrsingle.pdf (consultado el 5 de septiembre de 2017).
- O'Callaghan, M. 2002. 'The Origins of the Conflict' in Garasu, L. and Carl, A. (eds), *Accord. Weaving Consensus: The Papua New Guinea-Bougainville Peace Process*. London: Conciliation Resources and Bougainville Inter-Church Women's Forum.
- Oil Search Foundation. 2017. 'Performance Summary', Oil Search, www.oilsearch.com/sr-report-2016 (consultado el 1 de febrero de 2018).
- Papua New Guinea Constitutional Planning Committee. 1974. 'Constitutional Planning Committee Report 1974', www.pacii.org/pg/CPCReport/Cap2.htm (consultado el 7 de noviembre de 2017).
- PNG Mine Watch. 2017. 'Mothers Unite Against Re-opening Bougainville Panguna Mine', <https://ramumine.wordpress.com/tag/mekamui/> (consultado el 27 de noviembre de 2017).
- Read, K. E. 1965. *The High Valley*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Reay, M. 1959. *The Kuma: Freedom and Conformity in the New Guinea Highlands*. Carlton: Melbourne University Press.
- Reay, M. 1966. 'Women in Transitional Society' in Fiske, E. K. (ed.), *New Guinea on the Threshold: Aspects of Social, Political, and Economic Development*. Canberra: ANU Press.
- Reay, M. O. 2014. *Wives and Wanderers in a New Guinea Highlands Society: Women's Lives in the Waghi Valley*. Canberra: ANU Press, <http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p303901/pdf/book.pdf?referer=468>
- Regan, A. 2017 'Bougainville: Origins of the Conflict, and Debating the Future of Large-Scale Mining' in Filer, C. and Le Meur, P.-Y. (eds), *Large-scale Mines and Local-level Politics: Between New Caledonia and Papua New Guinea*. Canberra: ANU Press.
- Rolfe, J. 2010. 'The Melting Pot: Ethnicity, Identity, and Separatism in Bougainville, Papua New Guinea' in Wirsing, R. G. and Ahrari, E. M. (eds), *Fixing Fracture Nations: The Challenge of Ethnic Separatism in the Asia-Pacific*. New York: Palgrave Macmillan.
- Sawang, K. 2017. 'Who Actually Pays for PNG LNG Royalties?', *The Papua New Guinea Women*, 15 January, <https://ramumine.wordpress.com/2017/01/16/who-actually-pays-for-the-png-lng-royalty-and-project-development-levy-benefits/> (consultado en diciembre de 2017).
- Strathern, M. 1972. *Women in Between: Female Roles in a Male World - Mount Hagen, New Guinea*. London: Seminar Press.
- Tierney D. et al. 2016. 'The Mental Health and Psychosocial Impact of the Bougainville Crisis: A Synthesis of Available Information', *International Journal of Mental Health Systems* 10, <https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13033-016-0054-x> (consultado el 15 de abril de 2018).
- UN News. 2018a. 'UNICEF Scales Up Psychosocial Support for Papua New Guinea's Children after Devastating Quakes', 28 March, <https://news.un.org/en/story/2018/03/1006151> (consultado el 1 de mayo de 2019).

- UN News. 2018b. 'Papua New Guinea: A Month after Deadly Quake, UN on the Ground Delivering Life-saving Aid', 26 March, <https://news.un.org/en/story/2018/03/1005921> (consultado el 13 de mayo de 2019).
- Voice for Change. 2015. 'Violence against Women and Girls in Jiwaka Province, Papua New Guinea'. Voice for Change Community Survey Report, https://iwda.org.au/assets/files/20160203-Voice-for-Change-WEB_FinalSmall.pdf (consultado el 5 de noviembre de 2017).
- Wardlow, H. 2006. *Wayward Women: Sexuality and Agency in a New Guinea Society*. Berkeley: University of California Press.
- Wardlow, H. 2014. 'Paradoxical Intimacies: The Christian Creation of the Huli Domestic Sphere' in Choi, H. and Jolly, M. (eds), *Divine Domesticities: Christian Paradoxes in Asia and the Pacific*. Canberra: ANU Press.
- Wiessner, P. 2006. 'From Spears to M—16s: Testing the Imbalance of Power Hypothesis among the Enga', *Journal of Anthropological Research* 62 (2):165–91.
- Wiessner, P. and Pupu, N. 2012. 'Toward Peace: Foreign Arms and Indigenous Institutions in a Papua New Guinea Society', *Science* 337 (6102): 1651–4, <http://doi.org/10.1126/science.1221685> (consultado en noviembre de 2017).
- Wilson, C. 2011. 'Papua New Guinea: Women Call the Shots on Mega Copper Mine', Inter Press Service, 16 October, www.ipsnews.net/2011/10/papua-new-guinea-women-call-the-shots-on-mega-copper-mine/ (consultado el 22 de abril de 2018).
- Yuyuge, E. 2003. 'Women Forgotten in the Race for Benefits in the Petroleum Sector'. Paper presented to the 'Women in Mining Conference: Voices for Change', Madang, PNG, 3–6 August.
- Zurenuoc, M. and Herbert, F. 2017. 'The Creation of Two New Provinces in Papua New Guinea: A Story of False Starts and Near Fatal Collisions'. SSGM Discussion Paper 2017/2. Canberra: State, Society and Governance in Melanesia (SSGM), Australian National University.

3

MUJERES RURALES EN COLOMBIA: DE VÍCTIMAS A PROTAGONISTAS

Cecilia López Montaña
y María—Claudia Holstine



Introducción

Con frecuencia, el conflicto colombiano se describe como complejo, de larga duración, y por tanto, es difícil de definir. Incluso ahora, a medida que avanza la fase de posconflicto entre éxitos y fracasos, los analistas tienen interpretaciones disímiles sobre sus causas y dimensiones, así como sobre los costos de la guerra y los beneficios de la paz. Sin embargo, no hay disenso frente a situación de las mujeres porque Colombia parece seguir el libreto: su experiencia es extraordinariamente similar a la de las mujeres en medio de otras guerras. Los prejuicios de género negativos sobre las mujeres víctimas de la guerra, su contribución, los costos que soportan, sus nuevos roles, y desde luego, su necesaria pero a menudo ignorada participación tanto en la guerra como en la paz son parte de la desigualdad universal que prevalece entre mujeres y hombres en todo el mundo.

Stewart (2010) repasa las numerosas formas en que las mujeres participan y se ven afectadas por los conflictos armados; hechos que a menudo pasan desapercibidos para los analistas que limitan su atención a los abusos sexuales a los que se ven sometidas esas mujeres. Las condiciones económicas, sociales y políticas en las que ellas viven, suelen dejarse de lado bajo la falsa hipótesis de que desempeñan un papel mínimo en sus sociedades.

De los muchos documentos escritos por expertos nacionales e internacionales sobre la guerra de esta nación, pocos abordan las causas intrínsecas detrás de la violencia de género contra las mujeres colombianas, y solo se limitan a la definición tradicional de violencia sexual: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etc. De hecho, la violencia de género contra las mujeres (GBVAW) rara vez es considerada en su concepción más amplia, porque esos análisis tienden a pasar por alto aspectos económicos, sociales, políticos y culturales relacionados con la situación de las mujeres en la guerra.

Dejando de lado el hecho de que los estudios feministas tradicionales se centran primero en la mujer, esta investigación toma las anteriores variables como punto de partida. Tan solo con ampliar el espectro de análisis para incluir el enfoque de economía política redefine los costos que han pagado las mujeres en la guerra y su contribución a la construcción de paz. Solo de esta manera pueden comprenderse plenamente la GBVAW y valorar realmente las acciones de las mujeres durante un conflicto. Este es el objetivo principal de esta investigación: mirar a las mujeres en la guerra desde un ángulo diferente.

Las mujeres colombianas desempeñaron un papel muy importante y poco reconocido durante este largo conflicto. No fueron solo víctimas —como exclusivamente se consideran—; eran también civiles, combatientes e incluso perpetradoras. Pero sobre todo, eran protagonistas cruciales en la guerra. Este último rol es probablemente inédito en otros conflictos armados alrededor del mundo, porque la característica predominante en las guerras es la histórica subestimación de la situación real de las mujeres.

Una rápida mirada al conflicto colombiano

En medio de la cobertura mundial tras la firma del Acuerdo Final con las FARC,¹ Colombia comenzó su largo camino hacia la paz sin que muchos entendieran realmente el contexto de la guerra, sus raíces, sus actores, o qué tan profundamente sus facetas hirieron a los colombianos, y especialmente, en cómo impactó a sus mujeres. Increíblemente, no son los únicos, porque la “sociedad colombiana no ha establecido un consenso sobre la naturaleza y orígenes del conflicto armado” (González, 2004: 11). Lo que parece incontrovertible es que el conflicto es largo, muy complejo, siempre cambiante y con tantos actores involucrados que es difícil de concebir.

Los colombianos todavía sufren frente a “las complejidades de un conflicto interno de sesenta años en el que el narcotráfico y el terrorismo actúan como uno solo, en el que un cambio significativo en los valores de la población va de la mano con la corrupción gubernamental, con innumerables actores nacionales e internacionales involucrados, y con considerables intereses económicos y políticos en juego... factores nunca vistos al mismo tiempo en la historia de ningún otro país” (Cueter, 2015: 24). Todas estas son razones claves para valorar el duro camino que le queda por recorrer a la paz en Colombia; un camino en el que las mujeres deben desempeñar un papel definitivo para la sostenibilidad futura de la paz. Sin embargo, las mujeres poco participaron en las negociaciones, a pesar de representar más del 50% de las víctimas. Hoy, las líderes femeninas están ausentes de la primera línea de acción del posconflicto o solo marginalmente incluidas en el seguimiento y evaluación de la implementación del acuerdo.² Esto es producto de la sistemática ignorancia de su importancia durante el conflicto, su importante rol en la transición de la guerra al posconflicto y su gran potencial para contribuir a la paz.

Este análisis confronta una importante contradicción. Por un lado, asume que las mujeres no son solo víctimas, sino protagonistas esenciales; por otro, que las acciones

emprendidas para apoyar la recién encontrada paz contrarrestan esa premisa al excluirlas de ese importante proceso. La pregunta clave aquí es: ¿dónde se genera esa brecha? Para responderla, hay que empezar por comprender el pasado.

¿Cuándo empezó todo?

Quizás uno de los temas más controvertidos al rededor del conflicto es su inicio. Este es un factor central porque solo al precisar sus tiempos pueden identificarse las razones detrás de la guerra y realmente resolverse (Call, 2012). Para entender este país, hay que comenzar por reconocer la naturaleza violenta de su pasado. Por ejemplo, numerosas guerras civiles entre las élites políticas liberales y conservadoras³ caracterizaron el siglo XIX. La transición al siglo XX vivió la Guerra de los Mil Días (1899–1903), cuando el “malestar económico y los disensos en las filas conservadoras envalentonaron a los liberales para iniciar otra revuelta que duró tres años” (Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 2013: 34). Hoy en día, la mayoría cree que la guerra negociada y finalizada recientemente en Colombia duró cincuenta años, aunque unos pocos sostienen que ha sido un conflicto de sesenta años. Ninguna de las dos opiniones es correcta: los últimos vinculan el inicio de la guerra con la fundación de las FARC como grupo comunista revolucionario en 1964, y los primeros lo asocian al final de *La Violencia* (1948-58).

La verdad es que la semilla del surgimiento de la guerrilla en Colombia creció como resultado de los feroces ataques perpetrados por los *Chulavitas* —policía militar secreta del gobierno conservador de Ospina que inició *La Violencia*— contra los liberales. Como respuesta, simples campesinos liberales se armaron para proteger sus comunidades y tierras, pero no eran guerrilleros *per se*. Guzmán et al. (1962: 405) describen este período como “una época de crueldad bipartidista en la que la violencia se convirtió en un proceso social; en la que las élites políticas... eliminaban a quienes discrepaban de sus puntos de vista.” Esa guerra terminó como finalizan las guerras modernas hoy: con la firma del *Frente Nacional*, un acuerdo de paz entre aquellos involucrados, aunque aún pocos lo identifican como un tratado de paz. El *Frente Nacional* (1958-74) descaradamente repartió por dieciséis años el poder gubernamental entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, excluyendo cualquier otra ideología de la arena política.

Cueter (2015: 19) cree que en ese momento, “las acciones de las élites conservadoras y liberales, apoyadas por la Iglesia Católica, convirtieron la violencia en un proceso social que abandonó los valores morales tradicionales... solo para permanecer en el poder... La política se convirtió en un arma de guerra para justificar los asesinatos en

masa, mientras las Fuerzas Militares de la nación ejecutaban las órdenes provenientes de los más altos rangos del Gobierno colombiano.”

En un período fuertemente influenciado por la guerra fría estadounidense, el comunismo fue marginalizado en todo el mundo, a cualquier costo. Colombia no fue diferente. A pesar de que durante el primer gobierno del Frente Nacional, el presidente liberal Alberto Lleras Camargo (1958-62) designó como policía militar rural a los grupos armados de campesinos liberales, bajo el gobierno conservador siguiente, Guillermo León Valencia (1962-66) ordenó un despiadado ataque con 16,000 soldados colombianos y estadounidenses que devastó Marquetalia, donde residía el grupo de combatientes de izquierda: un total de cincuenta hombres y dos mujeres (Verdad Abierta, 2013). Los cinco sobrevivientes huyeron para regresar meses después, completamente armados, y con hasta setenta y cinco hombres para anunciar la conformación de FARC. El año era 1964 (Figura 3.1).

Una sola mirada al violento pasado de esta torturada nación, deja una cosa clara. La exclusión política ha sido —y sigue siendo— el epicentro de los conflictos de Colombia. Todo se enmarca en los esfuerzos del partido en el poder por excluir a cualquier otro. Por lo tanto, insinuar que la guerra colombiana ha durado cincuenta o sesenta años es incorrecto porque: (1) “exclusión política y persecución gubernamental de una ideología no implica que el país esté en guerra” (Cueter, 2015: 190); y (2) esas dos fechas se sitúan ambas dentro del período del Frente Nacional, ese proceso de paz que duró dieciséis años. La exclusión política no es una razón común utilizada para explicar por qué la paz ha sido más la excepción que la regla en Colombia. Por lo tanto, es un error subestimar otros hechos históricos que muestran la naturaleza maleable del conflicto nacional así como los numerosos y diversos factores que lo encienden.

Poco después de anunciar su formación, el nuevo grupo FARC desapareció: no se conocen ni se han registrado sus actos de guerra desde 1968 hasta principios de la década de 1980. La razón detrás de lo que se creyó su desmonte fue la falta de financiación por parte de los países comunistas que apoyaban fuerzas revolucionarias en el mundo.

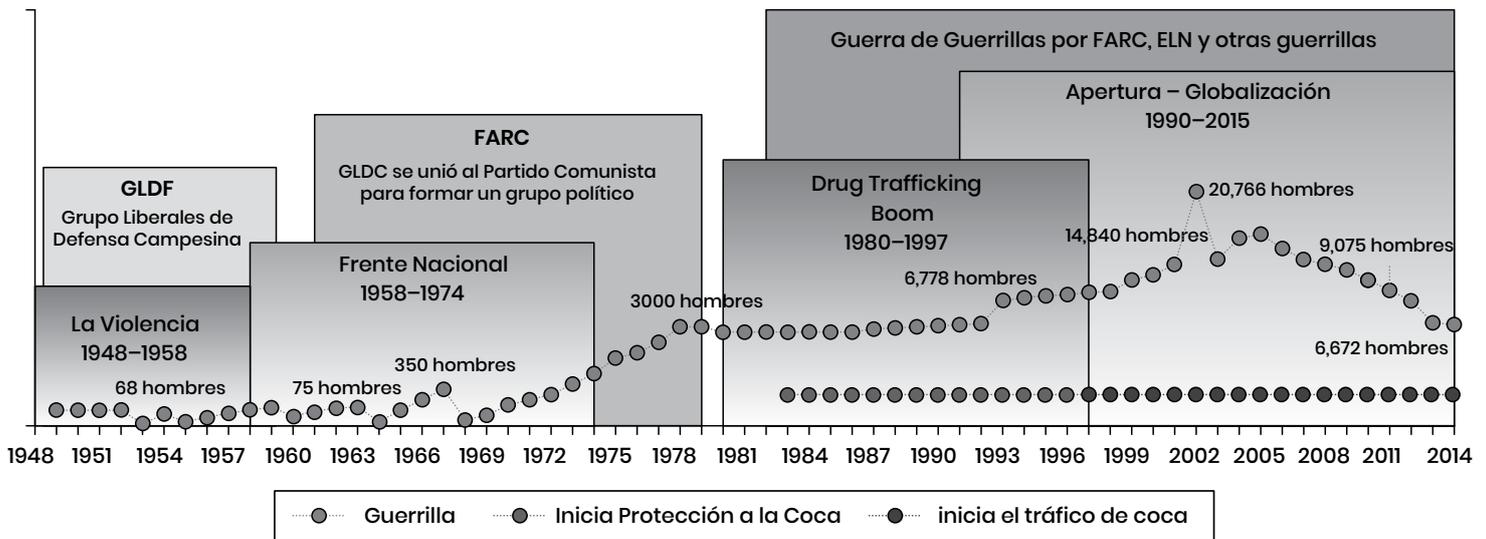


Figura 3.1 La presencia de las FARC en la Colombia Rural.

Fuente: Cueter (2015)

Sin embargo, en 1982, las FARC volvieron más fuertes que antes, con 3,000 hombres en sus filas, y dispuestos a combatir a los militares colombianos. Sus acciones ya no eran solo ideológicas, también estaban incentivadas por el deber de proteger el negocio de su financiador —el narcotráfico— y sus valiosas rutas de salida de Colombia. A partir de ese momento, salvaguardar las rutas de la coca se convirtió en la razón detrás de la supervivencia ideológica y nueva fuerza de las FARC. Nació entonces un conflicto diferente; uno ya no solo político, sino con una fuerte motivación financiera que duró treinta y cinco años. Este conflicto es el más conocido en el mundo y hay un consenso general sobre cuándo comenzó y por qué (Cueter, 2015). Durante este período, las decisiones económicas del gobierno también cimentaron el camino para el regreso de los paramilitares, otra fuerza violenta ya conocida.

Al identificar estas dos diferentes etapas del conflicto colombiano es evidente por qué es tan difícil ponerse de acuerdo sobre cuándo comenzó la guerra, pero la explicación más coherente tiene que ver los cambios en la guerrilla, el único actor constante a lo largo de los diferentes momentos históricos del pasado violento de la nación. Muy pocos ven la mutación de su naturaleza y de las características de sus acciones, y menos aún, la evolución del grupo mismo que pasó de campesinos liberales armados, a policía militar rural del gobierno, y finalmente, a grupo revolucionario financiado por el narcotráfico.

Los análisis de otros expertos aumentan la confusión: algunos creen que “la desigualdad dentro de la sociedad colombiana es un factor determinante del conflicto. La desigualdad es una causa ampliamente citada... desde economistas y académicos de instituciones internacionales hasta el colombiano promedio” (Colombia Reports, 2015a). Adicionalmente, por ser el campo colombiano la zona de batalla de la guerra, la tierra también se ha señalado como raíz de este prolongado conflicto.

Stewart (2002: 9) opina que “la tierra tiene una enorme importancia donde la agricultura representa la mayor parte de la producción y el empleo, pero la pierde a medida que avanza el desarrollo,” enfatiza que el acceso a la tierra es imperativo para el bienestar y la sostenibilidad de los individuos y su grupo social, y más importante aún es que dicha disparidad puede contribuir a prolongar una guerra.

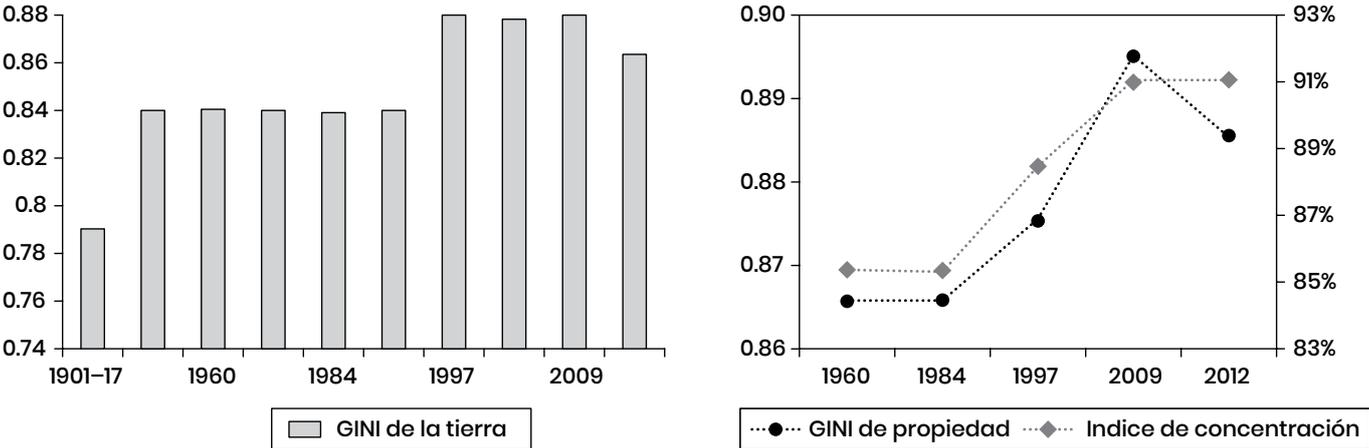


Gráfico 3.1 Propiedad de la tierra en Colombia 1901 – 2012.
Fuente: Cuter (2015)

Aunque su teoría parece aplicable a Colombia, el hecho de que mucho antes del inicio del conflicto, en 1901-17 el coeficiente de Gini para la propiedad de la tierra era excepcionalmente alto, y se mantuvo en niveles similares hasta 1984 (Gráfico 3.1), contradice esa creencia. Por otro lado, no se puede refutar que la tierra rural siempre es parte de los debates en el país. Sin embargo, algunos mitos sobre por qué la tierra es central al conflicto deben ser derrumbados. Para empezar, la desigualdad y la concentración de la tierra en manos de muy pocos son características que siempre han sido intrínsecas a Colombia, y por lo tanto, no son la causa del conflicto. Se trata

de una afirmación atrevida por donde se le mire, pero una que puede aceptarse si se comprende el comportamiento detrás de las acciones de los grupos en el epicentro de la guerra.

La respuesta está en diferenciar la *propiedad de la tierra del control territorial*. La falta de presencia del Estado permitió el acceso irrestricto de la guerrilla a los baldíos, tierras pertenecientes al Estado. Los grupos guerrilleros y paramilitares ejercieron *control territorial* sobre vastas extensiones de tierra [de propiedad privada]; su razón no era la apropiación de esas tierras, sino el paso seguro de cargamentos de cocaína a través de ellas. La constante presión militar obligó a que ambos grupos cambiaran a menudo dichas rutas para eludir redadas. *Poseer tierra* menoscababa su objetivo de moverse con rapidez y seguridad entre zonas. Su necesidad de control territorial es lo que verdaderamente encendía el conflicto actual (Cueter, 2015: 192).

Tantas facetas y actores diferentes dificultan ver dónde caben las mujeres en el conflicto colombiano. Por esa razón, para entender mejor cómo la guerra afectó a las mujeres se debe partir de analizar la actuación de los diferentes grupos armados y de cómo decisiones del Estado alimentaron su violencia y sus métodos. En la mayoría de los estudios se hace referencia a los grupos combatientes que luchan directamente en la guerra como actores; en este análisis se identifican esos grupos armados como perpetradores o victimarios.

¿Quién lucha contra quién?

Para analizar realmente la violencia de género contra las mujeres en Colombia es importante diferenciar claramente los grupos en guerra y qué circunstancias específicas motivaron sus acciones violentas en contra de ellas. Un enfoque simplista y generalizado establece un solo enemigo en este conflicto —guerrillas, todas ellas⁴— y los ‘buenos’ son las fuerzas militares colombianas. Sin embargo, este es otro concepto errado que oculta las verdaderas razones detrás del dolor de muchos. Crandall (1999: 223) correctamente afirma que “incluso quienes hacen una carrera de seguir los acontecimientos en este país andino, se sienten incapaces de diferenciar claramente entre los grupos beligerantes actualmente activos, para no hablar de sus objetivos, sus fuentes de financiación y el grado de apoyo popular que tienen.” Es por ello por lo que tal vez uno de los problemas más difíciles de entender no es solo el rol de todos los perpetradores involucrados, sino sobre todo, cómo cada grupo se movía rápidamente de amigo a enemigo y viceversa, según la situación geográfica o el estatus social de la persona a la que se le pregunte por un grupo. Sin embargo, todos comparten una característica: el número de víctimas que dejaron atrás.

Un victimario clave y poco reconocido es el ejército colombiano. Desde épocas de *La Violencia* con sus *Chulavitas* hasta la segunda etapa de esta guerra donde el enemigo es esa guerrilla protectora de rutas de droga, las víctimas relatan ejemplos de crímenes atroces cometidos por las fuerzas militares contra la población rural sin razón ni explicación.

A pesar de lo anterior, el grupo más despiadado surgió cuando sectores de las élites, incluidas empresas multinacionales, financiaron fuerzas paramilitares para proteger sus tierras y actividades de impuestos de la guerrilla o para evitar secuestros. Una verdad oculta es que los grupos paramilitares son incluso más antiguos que la guerrilla más vieja del mundo. A lo largo de la historia, estos asesinos a sueldo han adoptado diferentes nombres y han actuado en diferentes territorios, pero las personas a las que protegen y sus crueles métodos para controlar a la población han cambiado muy poco. Establecer claramente que la guerrilla no fue el único enemigo en esta guerra es clave para comprender plenamente la violencia contra las mujeres en el conflicto colombiano, ya que las mujeres sufrieron la crueldad y diferentes formas de brutalidad a manos de por lo menos otros dos grupos armados.

Dadas las diferencias tácitas y las interrelaciones entre estos tres grupos armados, en este capítulo los dividimos en dos categorías específicas de perpetradores de GBVAW. Las fuerzas militares y los paramilitares comparten su apoyo al establecimiento, pero sobre todo, se destacan los valores patriarcales en sus acciones. Por el contrario, la guerrilla —opuesta al gobierno— promueve un discurso de género más igualitario no siempre respaldado por sus acciones que siguen siendo patriarcales.

Hombres patriarcales, mujeres sin rostro

No hay nada novedoso al afirmar que en las sociedades con estructuras patriarcales los hombres son proveedores y las mujeres cuidadoras. Pero el concepto adquiere una nueva dimensión cuando se trata de la Colombia rural donde dos elementos no relacionados con el conflicto son inherentes a la vida ordinaria. El primero es el nivel de violencia intrafamiliar inusual que se ha convertido en norma para la mayoría de las campesinas.⁵ El segundo es el Gobierno —sus leyes, sus políticas sociales y económicas—, y sus instituciones con su limitada comprensión de los valores patriarcales.

La extremadamente común violencia intrafamiliar que siempre ha existido en los hogares rurales es sistemática, realizada en privado, a puerta cerrada. Desde muy

pequeñas, las mujeres rurales son sometidas a algún tipo de abuso físico por parte de padres, hermanos, maridos o de otros hombres conocidos (INML, 2015). En sus mentes, el abuso que reciben es normal, un tipo menor de violencia, pero que de igual manera crea angustia y donde no hay espacio para tratar las consecuencias físicas o mentales. De por sí, esto ya es bastante serio; peor aún, cuando las políticas gubernamentales entran en estos escenarios, las vidas de las mujeres rurales se vuelven aún más invisibles y su dolor inexistente.

Hasta 1988, las mujeres rurales no podían poseer tierras. A pesar de políticas y leyes para facilitar la producción de las mujeres, en realidad las instituciones rara vez —o nunca— ayudan a las mujeres en actividades económicas en las zonas rurales. Por ejemplo, los préstamos eran —y siguen siendo— para hombres y no para mujeres, y la asistencia técnica ignoraba la posibilidad de que ellas también pudieran necesitarla o estar interesadas en recibirla. En otras palabras, las instituciones rurales siguen siendo tan patriarcales como los hombres rurales. Adicionalmente, las políticas sociales públicas también enfatizan el rol de las mujeres como débiles e indefensas cuidadoras que no pueden valerse por sí mismas sin sus hombres, reforzando el papel de los hombres como necesarios protectores más que como proveedores. Como resultado, muy pocas mujeres rurales realizan tareas agrícolas, pero sí están sobrerrepresentadas en servicios informales (DNP, 2015b). Por estas razones, “las mujeres rurales colombianas son las más pobres entre los pobres del país” (López Montaña, 2011). Este contexto explica por qué las mujeres entraron a la guerra vulnerables, objetivos fáciles para los perpetradores de la violencia. Pero en Colombia, las mujeres rurales no son débiles y no fueron un objetivo militar simplemente por ser mujeres o por ser espectadoras ocasionales.

Mujeres rurales: ¿el epicentro de una guerra?

Quizás una de las tragedias más conocidas y desconcertantes de Colombia es el inmenso número de desplazados internos como consecuencia de la guerra. Con más de 7 millones de afectados, la población internamente desplazada en Colombia es la segunda más grande del mundo (NRC, 2015). El Registro Único de Víctimas (RUV, 2017) muestra que las mujeres constituyen el 51.3% del total de la población desplazada, una pequeña mayoría en comparación con los hombres, pero no suficiente para hablar de una persecución sistemática de campesinas, ni para considerar el desplazamiento como un crimen de violencia de género contra la mujer.

Algunos analistas sostienen que estas cifras se deben al número de hombres asesinados por uno u otro de los grupos victimarios, pero la diferencia entre géneros —solo 1.4

puntos porcentuales— contradice esta afirmación, lo que indica que hay otros factores detrás de las cifras de desplazamiento. De hecho, el desglose por edad de la población desplazada evidencia categóricamente que familias enteras, como grupo, lo dejaron todo atrás para huir de las zonas violentas afectadas por la guerra (Gráfico 3.2).

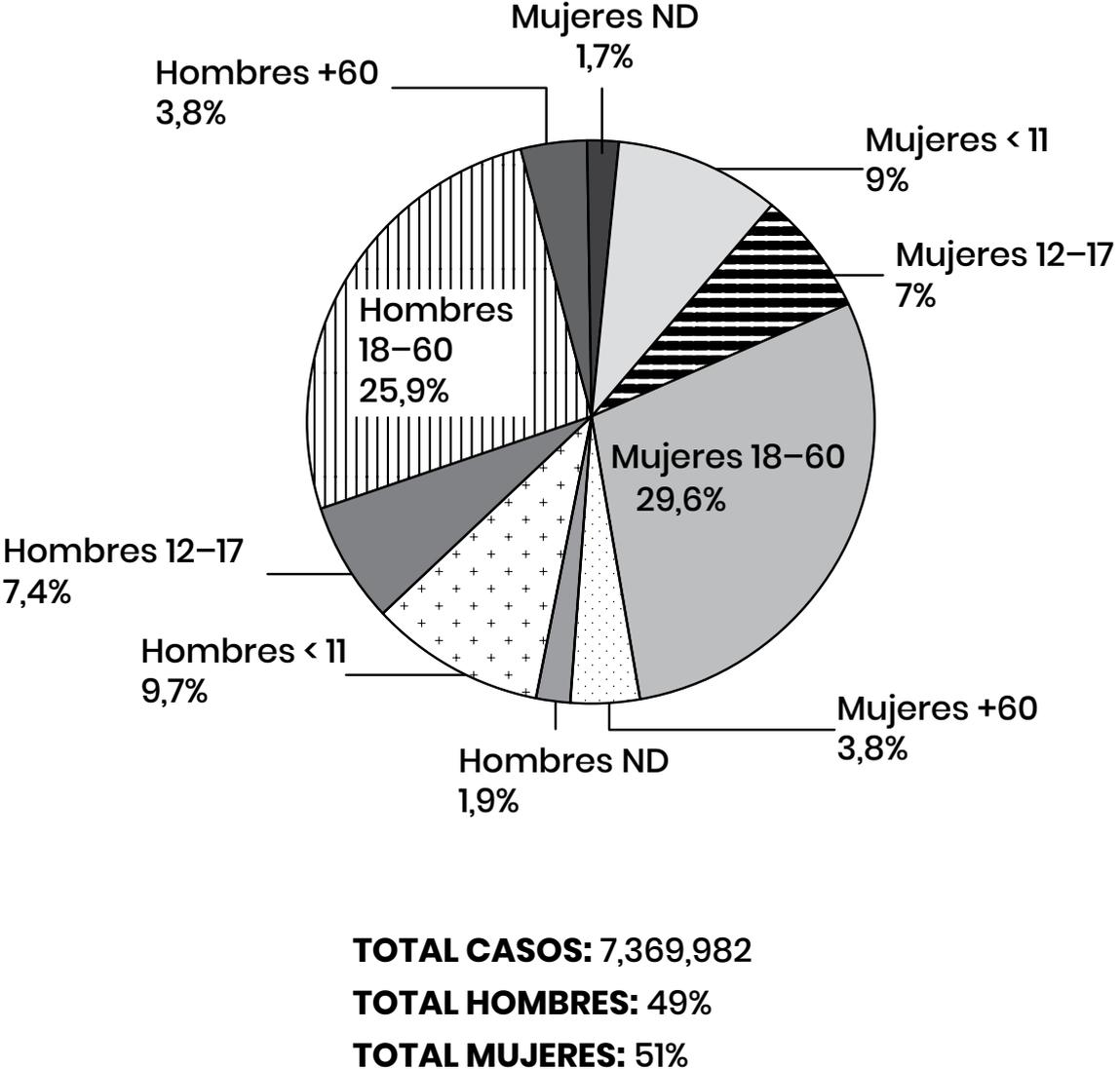
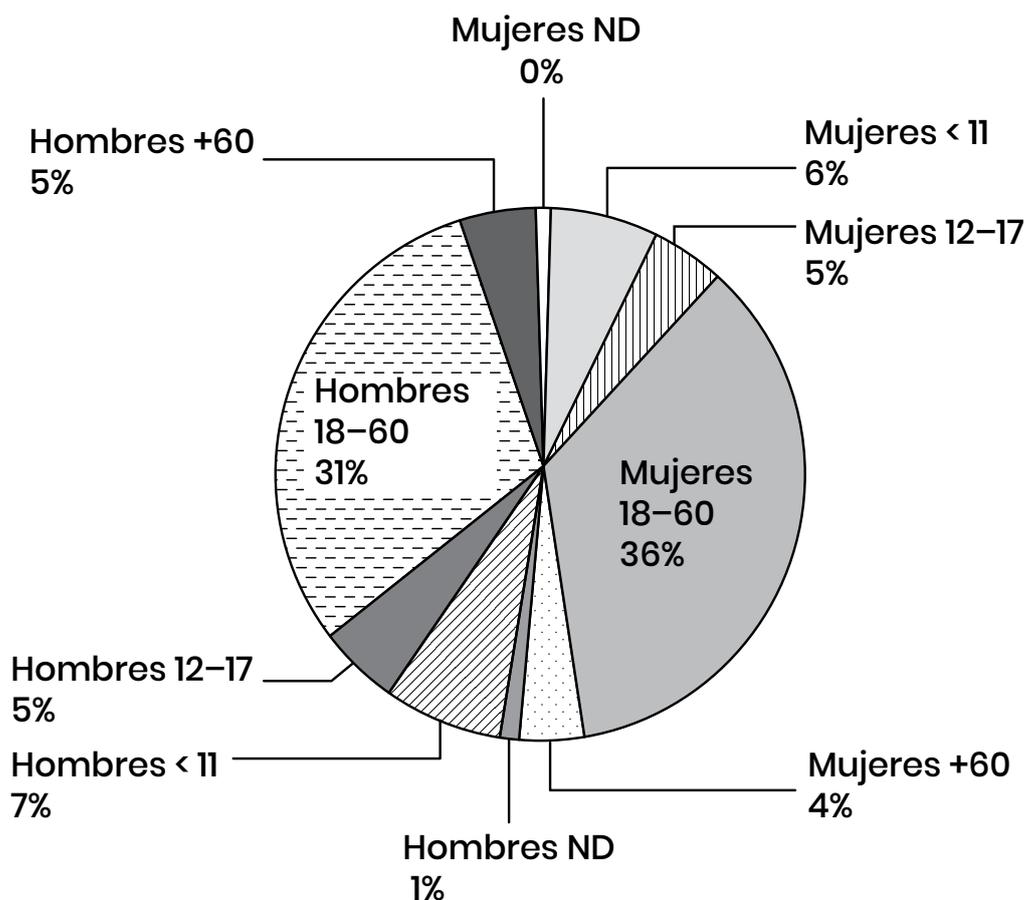


Gráfico 3.2 Desplazamiento forzado 1985 — marzo 2017.
Fuente: RUV (2017)

Al buscar una explicación, un factor victimizante clave vinculado al desplazamiento familiar es la amenaza (Gráfico 3.3). Aunque hombres y mujeres fueron amenazados por igual, el enorme número de casos de desplazamiento reportados comparado con el relativamente pequeño número de amenazas reportadas significa que lo primero no es una causa viable de lo segundo (CGR, 2015).



TOTAL CASOS: 354,293

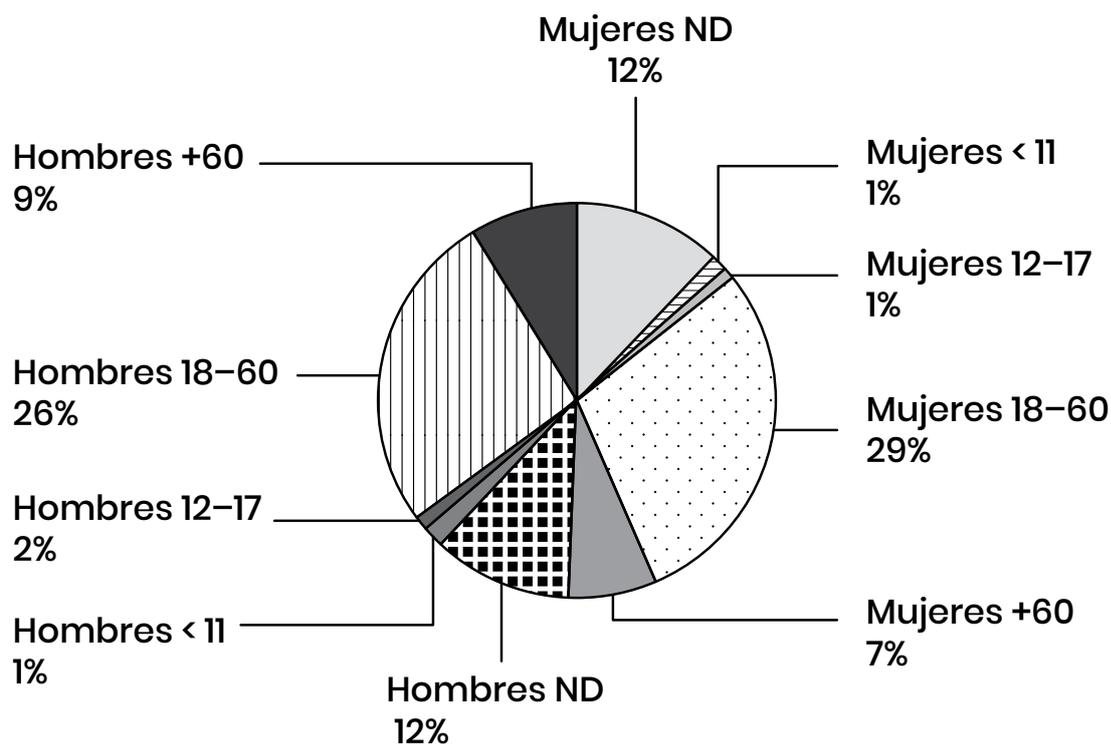
TOTAL HOMBRES: 48%

TOTAL MUJERES: 52%

Gráfico 3.3 Amenazas

Fuente: RUV (2017)

Este patrón se repite al observar las cifras de despojo de tierras como causa del desplazamiento (Gráfico 3.4). En esta comparación, el número extremadamente bajo de informes de despojo de tierras frente a las elevadas cifras de desplazamiento confirma inequívocamente que la tierra no fue la raíz del conflicto. Los 4,705 casos denunciados ponen de manifiesto uno de los problemas más antiguos de Colombia: el acceso informal a la tierra y la bien documentada ausencia de títulos de propiedad en las zonas rurales. Por lo tanto, una vez más, ¿cómo puede ser un conflicto por la tierra cuando no se puede demostrar la propiedad de esta, o cuando la tierra está claramente en manos de ricos terratenientes con títulos de propiedad, adquiridos legal o ilegalmente?



TOTAL CASOS: 4,705

TOTAL HOMBRES: 49%

TOTAL MUJERES: 51%

Gráfico 3.4 Despojo de tierras.

Fuente: RUV 2017

El mismo fenómeno puede observarse en todos los demás factores victimizantes,⁶ lo que demuestra inequívocamente que hombres y mujeres sufrieron por igual, con cuatro excepciones: hubo más víctimas masculinas de heridas causadas por artefactos explosivos improvisados (AEI), por tortura y por reclutamiento forzoso, mientras que la violencia sexual en todas sus formas se perpetró principal y explícitamente contra las mujeres (Gráfico 3.5).

MINAS TERRESTRES
Total casos: 10804



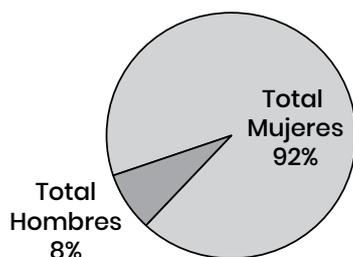
RECLUTAMIENTO DE MENORES
Total casos: 7921



TORTURAS
Total casos: 10,011



VIOLENCIA SEXUAL
Total casos: 18356



ACTOS DE TERRORISMO/ COMBATE
Total casos: 91209



SIN INFORMACIÓN
Total casos: 47

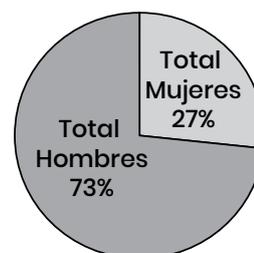
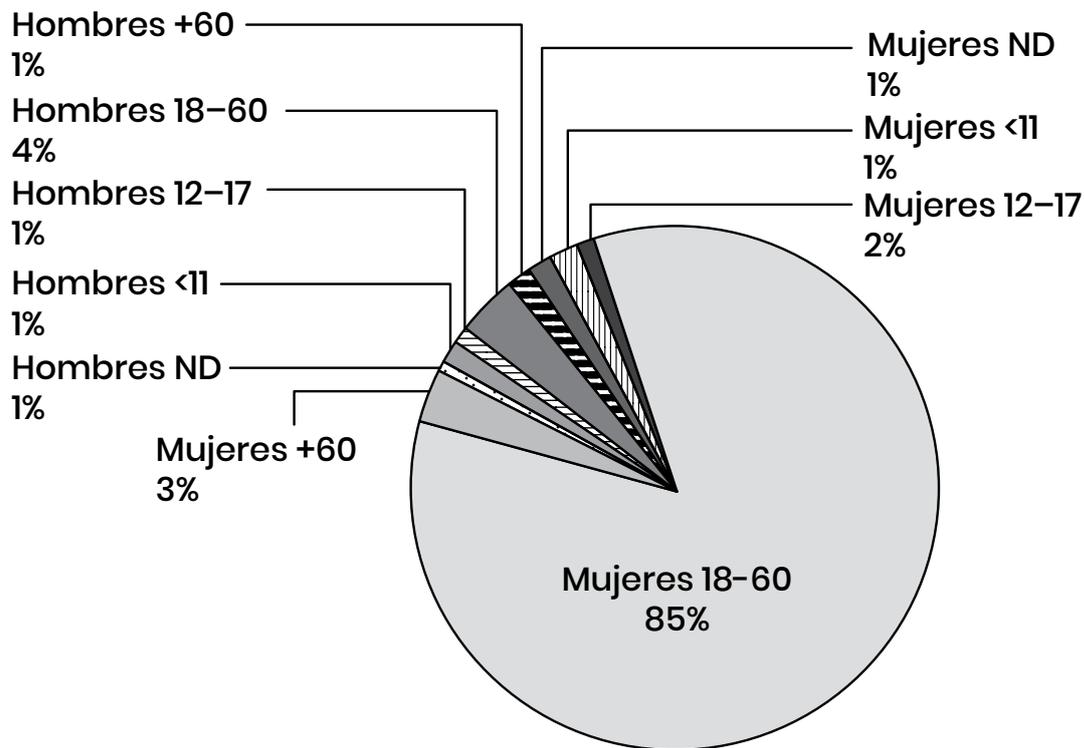


Gráfico 3.5 Otros actos victimizantes.

Fuente: RUV 2017

Los datos oficiales recogidos sobre actos victimizantes durante el conflicto limitan la violencia de género únicamente a los casos de violencia sexual denunciados. Estas cifras se utilizan en esta investigación exclusivamente con el fin de comprender si la violencia de género contra las mujeres explica su desplazamiento. A pesar de esta limitación, no debería sorprender a nadie que en una guerra con demasiados grupos armados, con fuertes visiones patriarcales, las mujeres campesinas representen el 92% de los 18,356 delitos sexuales registrados (Gráfica 3.6); de estas, solo el 1% eran niñas de once años o menos y el 2% tenía entre doce y diecisiete años.⁷ La mayoría de las veces las campesinas que son víctimas de violencia sexual no denuncian el crimen, ni reciben tratamiento médico o psicológico para recuperarse la traumática experiencia (Corte Constitucional, 2015). No obstante, las cifras globales de hechos victimizantes muestran claramente que las amenazas, más que la violencia sexual contra las mujeres, son estadísticamente el motivo más significativo de desplazamiento.



TOTAL CASOS: 18356
TOTAL HOMBRES: 8%
TOTAL MUJERES: 92%

Gráfico 3.6 Violencia sexual

Fuente: RUV 2017

¿Cómo es esto posible? La historia de Colombia muestra que la violencia sexual contra las campesinas es intrínseca a la cultura rural y no un resultado único de la guerra. Por eso, en muchos casos, no solo se culpa a las campesinas del abuso (si lo denuncian), sino que el agresor espera que sigan cumpliendo con sus deberes sexuales. De hecho, este prejuicio cultural y la idea de que el cuerpo de la mujer es un objeto que pertenece al hombre están tan extendidos que las organizaciones internacionales los repiten como dado.⁸



Reclutamiento de menores ELN

Sin embargo, esa es una generalización muy laxa que no solo incluye a todos los victimarios en un solo grupo, claramente mimetizando el alcance de los horribles actos de violencia contra las mujeres rurales, sino que también —y sobre todo— oculta abiertamente la razón y el modo en que en vez de ser destruidas por las transgresiones sexuales que sufrieron, las mujeres pasaron de víctimas a protagonistas de esta guerra.

Según la Fiscalía General, el 45.8% de los casos de violencia sexual fueron perpetrados por paramilitares, el 19.4% por la fuerza pública y el 8.5% por la guerrilla (Colombia Reports, 2015b). Las asombrosas diferencias en los casos de violencia sexual perpetrados por cada grupo armado indican motivos y *modus operandi* distintos. Las fuerzas paramilitares utilizaron diversas formas de violencia sexual contra las mujeres siendo la principal la violación como forma de placer para el perpetrador, para castigar a las que desobedecían las normas regresivas que imponían, o para dar ejemplo a las que se atrevían a sacar la cabeza para guiar a otras mujeres. Todas esas formas son crímenes despreciables que no pueden ignorarse, pero deben dejarse de lado temporalmente para desentrañar el propósito detrás de la práctica.

Tradicionalmente, los paramilitares fueron financiados por terratenientes ricos, la extrema derecha y algunas empresas multinacionales. Sus códigos se basan en valores arcaicos sobre el papel del hombre y la mujer en la sociedad. En lugar de ver a los hombres como proveedores y a las mujeres como cuidadoras, los paramilitares redefinieron esos roles como protectores y protegidas. Con esa idea en mente, los

comandantes se dieron cuenta muy pronto de que las mujeres eran un arma muy eficaz que servía para múltiples propósitos. Básicamente, para los paramilitares la violencia sexual era un método, y las mujeres el medio para aplicarlo.

A diferencia de otros conflictos, cuando se trataba de debilitar a la oposición, las campesinas resultaron ser para los paramilitares el arma disponible más eficiente para destruir a su enemigo —los hombres patriarcales—, un arma tan poderosa que mataba dos pájaros de solo un tiro porque también “obligaba rápidamente a comunidades enteras a abandonar las tierras deseadas” (Acosta, 2015: 217). Esta es otra afirmación extremadamente osada, pero una que puede explicarse fácilmente. Aunque los hombres rurales son perpetradores en casa, su rol como protector es una característica vital de su masculinidad. Su incapacidad para frenar actos de violencia de género contra sus mujeres y frente a toda su comunidad destruyó ese ego masculino. En esencia, los respetados protectores se acobardaron, viéndose débiles e inútiles. Las fuerzas armadas legales e ilegales identificaron claramente a las mujeres como el Talón de Aquiles de los hombres rurales. Así, para hacerse con el control de zonas enteras del país, todo lo que tenían que hacer era exponer públicamente la incapacidad de los hombres para proteger a sus mujeres. Y es así como las mujeres rurales colombianas se convirtieron en un arma de guerra invencible, la única capaz de mancillar a los hombres. La equitativa representación de hombres y mujeres en las cifras de desplazamiento es prueba de la eficacia de esta estrategia.

Hubo otro tipo —y nivel— de delitos de violencia de género perpetrados por los paramilitares. En los pueblos que consideraban suyos, los comandantes dividían abiertamente a las mujeres entre madres y prostitutas. Las primeras eran violadas para procrear, y las segundas eran esterilizadas, violadas y luego obligadas a prostituirse para satisfacer a las tropas de menor rango. Sin embargo, la saña y crueldad de los paramilitares transformó su machismo en pura misoginia cuando se trataba del enemigo. Las mujeres de sus adversarios no solo fueron violadas en grupo, sino “sometidas a mutilaciones físicas, desfiguraciones, desmembramientos” (Corte Constitucional, 2015) y, en muchos casos, sus seres queridos fueron testigos de sus lentas y dolorosas muertes.

Los paramilitares no fueron los únicos en esta práctica. Siguen apareciendo informes sobre el uso de la violencia sexual contra civiles por parte de las fuerzas militares colombianas; en la mayoría de los casos, esta violencia se perpetró contra mujeres consideradas cómplices de los grupos guerrilleros. La autoridad forense de Colombia confirma que, en más del 50% de los 219 casos de violación denunciados oficialmente entre 2008 y 2010, las víctimas indicaron que el agresor era un agente de policía o un

soldado del ejército (INML, 2015). Sorprendentemente, no todos los soldados eran colombianos; cincuenta y tres niñas también denunciaron abusos sexuales por parte de militares estadounidenses (Otis, 2015). Independientemente del grado de violencia, las agresiones sexuales por parte de soldados son más dañinas y perjudiciales para las mujeres porque estos hombres representan la máxima autoridad, hombres que alguna vez juraron proteger a los civiles con su propia vida. Sus abusos sexuales aumentan la vulnerabilidad y el miedo de las mujeres, ya que la violencia pronto se equiparará a no tener a nadie que las proteja o defienda. Sin embargo, estos delitos rara vez se denuncian debido a las poderosas influencias que intentan mantenerlos ocultos.

Al examinar las acciones de las fuerzas guerrilleras contra las mujeres civiles, los hallazgos son inesperados. Los informes sobre violencia sexual atribuida a la guerrilla documentan casos aislados y no siguen patrones o razones específicas. Las guerrillas no “utilizaron la violencia sexual para imponer el control social y territorial sobre las actividades cotidianas de las mujeres” (CNMH, 2013). No obstante, las acciones aparentemente menores no significan que las FARC estuvieran libres de culpa cuando se trataba de crímenes de violencia de género contra la mujer.

La mayoría de los estudios que analizan la violencia sexual de los guerrilleros señalan a las mujeres de sus filas como las víctimas de los abusos, un hecho que plantea preguntas muy interesantes. ¿Qué protegía a las mujeres civiles de la violencia sexual de las FARC? Quizá la respuesta haya que buscarla en el 40% de mujeres combatientes que conviven con los hombres en una tropa supuestamente más igualitaria, la única que incorporó mujeres. La respuesta puede ser doble. Por un lado, la libertad sexual ayudaba a mantener la disciplina en las filas; por otro, dado que las guerrilleras estaban encargadas de las relaciones comunitarias, participar, condonar o ignorar la violencia sexual contra las mujeres civiles pondría en peligro ese papel. ¿Puede significar esto que el hecho de que las mujeres formen parte de un grupo combatiente en una guerra suaviza el tradicional abuso sexual que sufren las mujeres civiles? Tal vez.

A pesar de que la violencia de género contra la mujer estaba profundamente arraigada en la sociedad rural colombiana antes del inicio del conflicto, lo que cambió con la guerra fue que el fenómeno pasó de ser un asunto familiar privado a estar en la esfera pública; esta fue una técnica exitosa para infundir miedo y reafirmar el poder sobre pueblos enteros. Sin embargo, la violencia contra las campesinas o su condición de víctimas no debe prevalecer sobre el importante papel que jugaron en la introducción de cambios duraderos para todas las mujeres colombianas.

El juego que juegan los hombres

Gates et al. (2012: 1720) consideran que “el conflicto tiene claros efectos perjudiciales sobre la pobreza, el hambre, la educación primaria, la reducción de la mortalidad infantil y el acceso al agua potable”. Sin embargo, Colombia desmiente esta afirmación. A diferencia de otras guerras, el comportamiento de esta nación es paradójico porque su economía experimentó un crecimiento económico continuo (Gráfico 3.7), excepto por un año (Banco de la República, 2016).⁹

Los avances sociales también fueron significativos, incluso en el sector rural, donde la pobreza se redujo de 61,7% en 2002 a 38% en 2016 (DANE, 2017b). Sin embargo, esta reducción no fue suficiente: demasiadas personas siguen siendo muy pobres, y el crecimiento experimentado no puede ocultar el hecho de que las diversas facetas de esta confrontación afectaron el desarrollo del país.

A pesar de lo anterior, culpar única y exclusivamente a la guerra de los fracasos del sector rural es simplista. Lo cierto es que dos decisiones económicas gubernamentales se sumaron a los efectos de la guerra y fueron igualmente culpables de la devastación que sufrió el campo colombiano. Su mayor impacto económico fue la ampliación de la brecha rural urbana, lo que habla directamente de la rapidez con la que se desarrollaron y crecieron los centros urbanos, al no tener que luchar contra la guerra que amenazaba a los colombianos rurales. Y lo que es más importante, estas decisiones contribuyeron decisivamente al peor período de violencia de género contra la mujer que ha vivido Colombia.

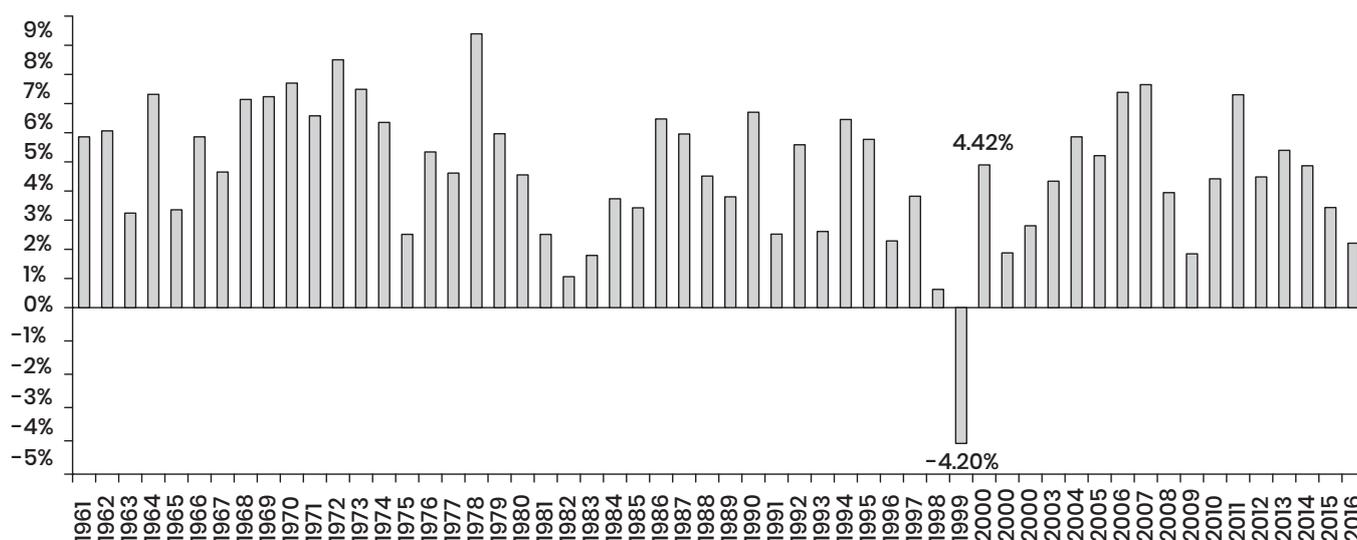


Gráfico 3.7 Crecimiento del PIB 1961-2016

Fuente: Banco Mundial (2016); DANE (2017a).

Nota: las cifras pueden ser actualizadas por el Banco Mundial posterior a la fecha de publicación.

La agroindustria debilitó la masculinidad del hombre rural

Cueter (2015) explica que “la globalización toca el corazón del conflicto [dado que] la *Apertura* de 1990, la iniciativa de globalización del país fue un proceso que obligó a Colombia a salir de su economía autocontenida [cerrada] para entrar en el mercado abierto” (Gráfico 3.8).

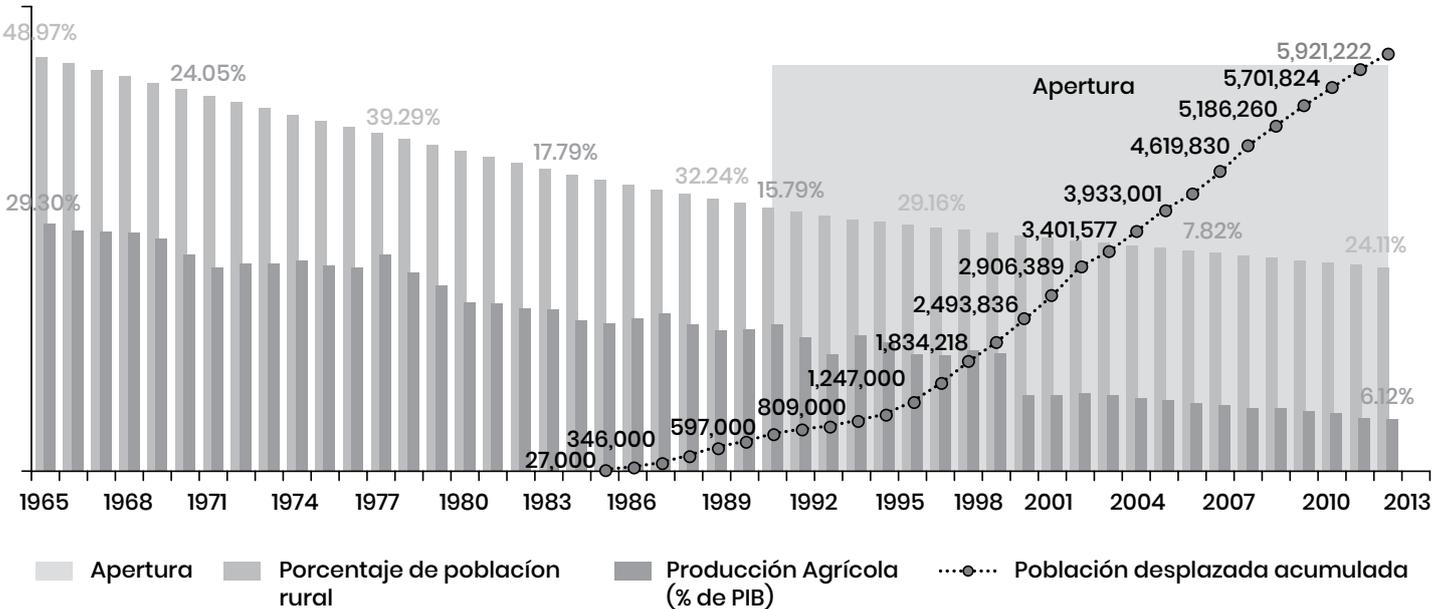


Gráfico 3.8 La globalización se suma al conflicto en el sector rural colombiano.
Fuente: Cueter (2015:94)

Siguiendo el Consenso de Washington, el presidente Gaviria (1990—94) ignoró por completo la base productiva del país al poner en marcha una *Apertura* bastante rápida y poco planificada. Subestimó enormemente la pequeña producción *campesina*, que no pudo competir con las importaciones de alimentos a bajo precio que invadían los mercados nacionales. Hasta entonces, este sector había abastecido el 60% de la demanda nacional colombiana de verduras y frutas (DNP, 2015a: 14). El resultado fue devastador. Durante los primeros años de la *Apertura*, los pequeños productores perdieron 1 millón de hectáreas, mientras que la agricultura a gran escala se extendió por las tierras que los campesinos habían perdido.

Existe una clara conexión entre la *Apertura* y el crecimiento de las fuerzas paramilitares. Para entender esta simbiosis, hay que tener en cuenta que, al tiempo que perjudicaba irreparablemente a los pequeños productores, la *Apertura* también animó a los grandes terratenientes a entrar en la agroindustria. Estos terratenientes se dieron cuenta rápidamente de que “el truco del negocio estaba en derrotar la naturaleza extensiva [de la agroindustria] aumentando el tamaño original de sus explotaciones”, y quién mejor para ayudarles en la tarea que tenían entre manos que sus viejos y conocidos socios (Cueter, 2015: 94). Este nuevo empeño cambió la “relación existente entre terratenientes y paramilitares, que evolucionó de la protección a la expansión” (ibíd.).

El método que eligieron para obligar a los campesinos a abandonar sus tierras fue eficaz y rápido: golpear duramente la masculinidad y el ego de los campesinos mostrándoles lo incapaces que eran a la hora de proteger a sus mujeres de la violencia sexual, y exponiendo públicamente esa debilidad. Por lo tanto, las peores y más violentas formas de violencia de género procedentes de los paramilitares convirtieron a las mujeres en el arma de guerra más eficaz contra los hombres. La confirmación final de su eficacia puede encontrarse en una comparación de las cifras de desplazamiento: huyeron el mismo número de hombres y de mujeres, mientras que la producción agroindustrial floreció (Gráfico 3.9).

La descentralización fortaleció el machismo

La descentralización no es nueva en Colombia: se viene adoptando desde los años setenta. Tras la promoción de la globalización de un gobierno central más pequeño en favor de sociedades más equitativas, la *Apertura* transfirió todos los recursos públicos destinados a salud, educación y servicios públicos a las administraciones regionales.

Mantilla (2012: 55) cree que “la descentralización juega un papel muy importante en la escalada del conflicto.” La razón está clara. A partir de 1991, la elección de alcaldes y gobernadores por voto popular transfirió el poder político a las regiones. Los grupos paramilitares conocían bien las zonas sin control estatal y contaban con el apoyo de las élites locales y regionales, lo que facilitaba la imposición de sus propios candidatos, que podían hacerse con los fondos descentralizados. Tener el control político y fiscal de muchos pueblos en sus áreas de interés dio lugar a una segunda forma de violencia de género contra las mujeres, que imponía con dureza los viejos valores patriarcales, restringiendo la forma de vestir de las mujeres, la longitud de su cabello y especialmente su conducta sexual. La decisión de esterilizar a una mujer para que sirviera a las tropas o de convertirla en madre de sus hijos por la fuerza dependía únicamente del capricho del jefe paramilitar.

Aunque esta nueva forma de violencia de género contra la mujer no convertía a las mujeres en un arma de guerra, las utilizó para mantener la cohesión entre las tropas y para redefinir claramente la línea entre *mis mujeres* y las *mujeres de mis enemigos*. Al controlar a todas las mujeres, los paramilitares retrotrajeron rápidamente a comunidades enteras a arcaicos valores patriarcales y religiosos.

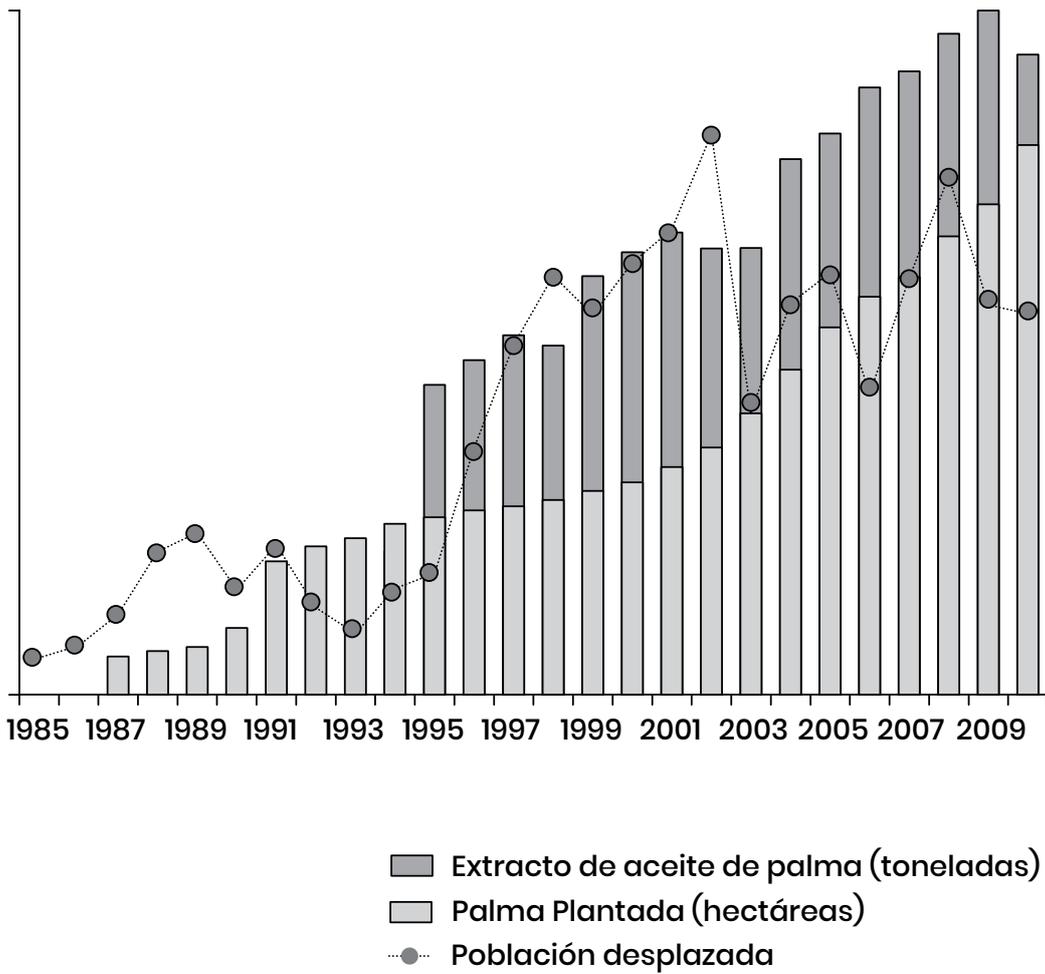


Gráfico 3.9 Palma de aceite y desplazamiento forzado
Fuente: Cueter (2015:97)

El sufrimiento y la violencia que padecieron las mujeres rurales durante la guerra son bien conocidos. Desafiaron ataques y abusos inimaginables y horribles. Ante los ojos del mundo, ellas son innegables víctimas de la violencia de género contra las mujeres; pero, a pesar de esta clasificación, surgió una nueva campesina en Colombia.

De víctima a protagonista

A lo largo de la historia de los conflictos en todo el mundo se ha identificado a las mujeres como víctimas. La pérdida de esposos, hijos e incluso posesiones materiales es motivo suficiente para calificarlas como tal. En 1995, a raíz de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la violencia de género como arma de guerra se hizo visible. La declaración era bienintencionada e importante, pero, por desgracia, seguía presentando a las mujeres como víctimas de guerra, un término que indica “la temporalidad en la condición de víctima... con un mensaje oculto que transmite que los ciudadanos inocentes son víctimas por casualidad, accidentalmente, sin mucha reflexión ni premeditación” (Cueter, 2015: 81). Nada más lejos de la realidad, al menos en Colombia, donde las acciones contra las mujeres durante la guerra no fueron ni accidentales ni fortuitas, ni mucho menos involuntarias.

Uno de los problemas de limitar la condición de las mujeres durante el conflicto a ser solamente víctimas es la implicación de que las mujeres —y los abusos cometidos contra ellas— no son más que ‘casualidades de la guerra’; sin embargo, los crímenes cometidos contra ellas no son simplemente ‘desafortunados daños colaterales de la guerra’.¹⁰ El trasfondo del término ‘víctima’ implica debilidad e indefensión, y caracteriza a las mujeres como si tuvieran una capacidad disminuida. La inferencia oculta su fuerza, su empuje para sobrevivir, pero sobre todo, esconde cómo los perpetradores las utilizaron deliberadamente para lograr control político, económico y territorial. Esta es la guerra perfecta para mostrar que las diferentes formas de interactuar con las mujeres no siempre producen cambios a su favor, sino que más bien, pueden ratificar creencias patriarcales tradicionales, una “estructura que da a algunos hombres poder sobre otros hombres, y a todos los hombres poder sobre las mujeres” (Game y Pringle, 1984).

Sin embargo, las *campesinas* colombianas no son solo víctimas, son ante todo protagonistas. Esto honra a todas las mujeres afectadas de un modo u otro por la guerra, pero especialmente les otorga el reconocimiento y el respeto que merecen. Por esa razón, ahora dejamos de lado nuestro enfoque en las acciones de los perpetradores para resaltar el valor de los diferentes tipos de mujeres campesinas que soportaron su brutalidad.

Mujeres en armas

Un estereotipo muy común es que, durante la guerra, “todos los hombres están en las milicias, todas las mujeres son víctimas” (Enloe, 2004: 99).¹¹ Este no es el caso de

Colombia, ya que la existencia de mujeres combatientes en los grupos guerrilleros se ha documentado desde la década de 1970, y las mujeres ingresaron en las fuerzas militares colombianas en 1976 (ENC, 2015). Para los estándares mundiales, las mujeres colombianas llegaron tarde al combate, sin embargo, sus roles como miembros de diferentes grupos armados —manejando narrativas de género disímiles— son reveladores; al final, incluso las más visionarias volvieron a los comportamientos y patrones patriarcales tradicionales.

Aunque había muchos grupos guerrilleros que seguían ideologías de izquierda, las FARC eran los más abiertos a las mujeres, que entraban en sus filas de dos formas: o bien por la fuerza, cuando secuestraban a niñas para adoctrinarlas; o bien porque las mujeres aceptaban la retórica igualitaria de las FARC, que promovía la igualdad de derechos y tareas para los combatientes, tanto hombres como mujeres.

Es fácil entender por qué algunas campesinas se creyeron tan rápidamente el discurso igualitario, dado que las mujeres rurales sufrían agresiones graves e incluso físicas en el seno de sus familias. Estar por fin en igualdad de condiciones con los hombres era probablemente muy atractivo, no solo para poner fin a los abusos en sus vidas, sino

Mujeres Policías



Foto: National Police of Colombia

porque también implicaba una nueva libertad para decidir, luchar por una causa y mejorar sus oportunidades. Curiosamente, incluso las chicas que entraron en el grupo de forma coercitiva encontraron cierta satisfacción en las filas guerrilleras (Herrera y Porch, 2008). Por el contrario, los grupos paramilitares eran reacios a incorporar mujeres a sus fuerzas, por considerar que la feminidad está reñida con la vida militar (Otero, 2006). Los militares colombianos tenían un discurso de género muy similar al de las guerrillas; sin embargo, en la práctica, sus acciones se acercaban más a las de los grupos paramilitares.

A pesar de las enormes diferencias en las razones y tácticas de estas tres fuerzas armadas a la hora de incorporar mujeres a sus filas, una característica común es que a las mujeres en armas se les encomendaban tareas de cuidado¹² y comunicaciones. Además de cocinar, limpiar y llevar a los enfermos, estas mujeres también gestionaban la relación con los civiles, ya que se las percibía como inofensivas, amables, compasivas y amigables, lo que a su vez facilitaba los esfuerzos de reclutamiento.

Por supuesto, hay disimilitudes que merece la pena mencionar. Por ejemplo, las fuerzas paramilitares rechazaban por completo la idea de las mujeres en combate, una postura muy patriarcal que se veía reforzada por su escepticismo sobre la capacidad de las mujeres para luchar sin miedo. Por ello, animaban a las interesadas en unirse a sus filas a “elegir otro trabajo [porque] esto es la guerra... La guerra no es un trabajo divertido” (CNMH, 2012: 53). Solo un puñado de mujeres paramilitares llegaron a ser comandantes, y se encargaban únicamente de controlar a otras mujeres (Acosta, 2015).

En 2012, el ejército colombiano autorizó finalmente a las mujeres a participar en combate activo (Vergel, 2012: 236). Hasta la fecha, los altos mandos siguen manteniendo que las mujeres deben tener “un trato especial. Afortunadamente, la vanidad siempre estará presente. No queremos que se parezcan a los hombres” (Vélez, 2013). Puede que todo se reduzca a proteger a las mujeres soldados de la violencia sexual a la que se ven sometidas otras mujeres, un pensamiento muy noble, aunque no muy igualitario desde el punto de vista del género, y que sin duda los militares no defendieron cuando se trató de mujeres civiles en zonas rurales.

El grupo más visionario fue las FARC. Creían que una política de reclutamiento basada en la igualdad de género “aumenta la cantidad y la calidad de la reserva de reclutamiento” (Herrera y Porch, 2008: 613). La capacidad más que el género era el principal criterio para asignar tareas entre la tropa (Otero, 2006), y asignaban las tareas de cuidado por igual entre los géneros. Las mujeres también participaban en el

combate activo. Sin embargo, el discurso de la igualdad de género terminaba donde comenzaba el comportamiento sexual. Las *guerrilleras* gozaban de cierta libertad sexual ya que podían elegir a sus parejas, siempre y cuando siguieran cumpliendo con su deber de proporcionar sexo a otros guerrilleros para frenar la desertión. En otras palabras, las *guerrilleras* eran el “suministro de parejas sexuales más estable para... un cuerpo de [soldados] varones desamparados y en gran parte célibes” (Herrera y Porch, 2008: 613).

Para los estándares de la sociedad, los deberes impuestos a las guerrilleras son prueba de violencia sexual contra ellas y las identifican como víctimas de esclavitud sexual, violación, aborto forzado y esterilización. Sin embargo, según las entrevistas, los abusos no fueron necesariamente percibidos como tal por las mujeres-soldado implicadas. El primer indicio de esto proviene de Londoño y Nieto (2006), quienes encuestaron a hombres y mujeres sobre las razones detrás de su alistamiento.

De los que se alistaron para escapar del conflicto intrafamiliar, el 46 por ciento eran mujeres y el 26 por ciento hombres; de los que citaron la mejora económica, el 48 por ciento eran mujeres y el 26 por ciento hombres; el 56 por ciento de las mujeres sentían resentimiento hacia otro grupo armado, pero solo el 7 por ciento de los hombres lo sentían. Curiosamente, de los que se alistaron por motivos políticos, el 28% eran mujeres y el 26% hombres.¹³ Estas cifras contradicen la idea —promovida en las campañas de desmovilización— de que *siempre* se arrancaba a las niñas de un hogar familiar seguro y se las obligaba por la fuerza a convertirse en soldados. Sus voces explican que el movimiento guerrillero permitió a muchas de ellas escapar de la vulnerabilidad económica y social, y que, en un momento u otro, la mayoría de las *guerrilleras* tomaron una decisión muy consciente de entrar en las filas de las FARC. Esto vuelve a confirmar que no todo el reclutamiento femenino fue bajo coacción.

El uso por parte de la sociedad civil del término ‘forzada’ antes que ‘reclutamiento’ niega la libertad de las mujeres para seguir un camino tradicionalmente masculino, o su autonomía para elegir cómo afrontar los retos que amenazan su carrera. La ahora senadora, Victoria Sandino, la mujer más visible de las FARC, aclara conceptos erróneos sobre la violación, la esclavitud sexual, el aborto y la esterilización dentro de las filas. “Cuando falla el control de la natalidad y se produce un embarazo, las *guerrilleras* se enfrentan a una decisión entre... continuar con su carrera o abandonarla para ser madres” (Castrillón, 2016). Sus palabras desmienten los estereotipos sobre la incapacidad de las mujeres para elegir libremente parejas sexuales, ser madres o incluso su derecho a anteponer su carrera profesional a tener

una familia. Y lo que es más importante, las mujeres civiles tienen normas diferentes a las de las combatientes. La decisión de estas últimas de ser guerreras implica tomar decisiones que las alejan aún más de los roles y las vidas femeninas tradicionales de las primeras. Ninguna está preparada para juzgar a la otra.

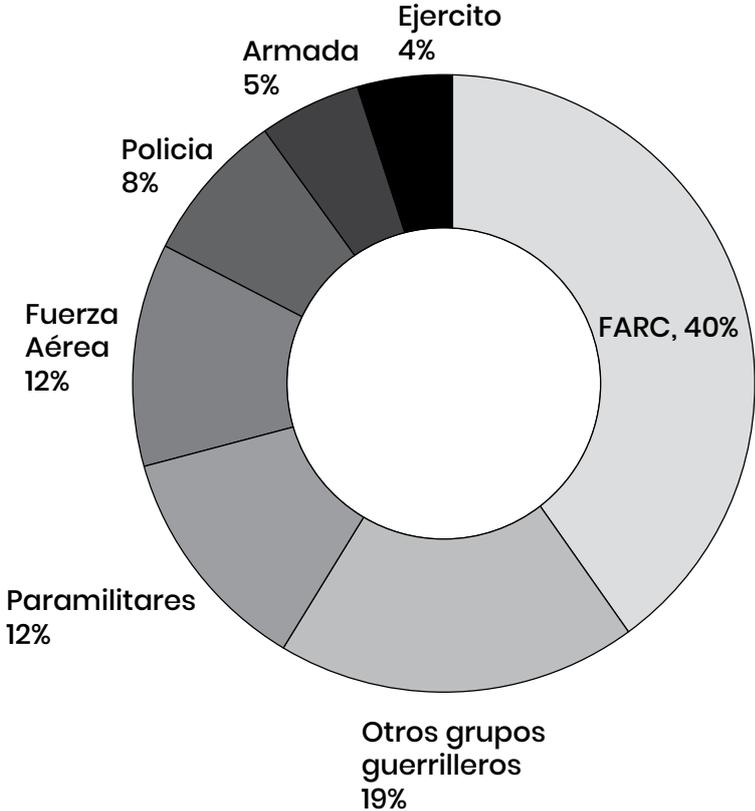


Figura 3.2
Mujeres en grupos armados

Fuente: Vergel (2012; Ministerio de Defensa Nacional 2010)

Las diferencias en los porcentajes de mujeres combatientes en las fuerzas armadas (Figura 3.2) son un reflejo de la percepción que cada grupo tiene de las mujeres, de sus políticas explícitas y de las normas implícitas relativas a la participación femenina. Lo que no es discutible es que, al final, todos los grupos volvieron a los valores patriarcales tradicionales, tratando de contralar lo que las mujeres pueden o no hacer, especialmente cuando se refiere a sus cuerpos, independientemente de que tan progresista sea su retórica de igualdad de género. Por ejemplo, aunque las mujeres de las FARC llevaban armas para participar activamente en la batalla, y las tareas de cuidado se distribuían equitativamente entre los géneros, las únicas con obligaciones

sexuales obligatorias eran las mujeres, siguiendo una directiva equivalente a la violación. Del mismo modo, las prácticas de aborto y esterilización de la guerrilla y los paramilitares no solo eran crueles, sino que constituían una violación incuestionable de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo. Este método era más duro que el control de la natalidad, y no siempre se aplicaba de forma equitativa, ya que a los comandantes de ambos grupos se les permitía el nacimiento de sus propios hijos. Aunque estas prácticas no tenían lugar dentro de las fuerzas militares, las atrocidades sexuales que el personal militar perpetraba contra las mujeres civiles eran igual de crueles, o incluso más.

Independientemente de cómo traten las fuerzas legales o ilegales a sus mujeres, la forma en que la sociedad percibe a las ‘mujeres en armas’ dice mucho de sus vidas una vez que vuelven a ser civiles. Un caso notable es el de las mujeres de las FARC, ya que a mucha gente le parece inimaginable que algunas *guerrilleras* eligieran esa vida y participaran voluntariamente en combates. Este prejuicio ha hecho que a la mayoría de las mujeres de los grupos ilegales se les hayan negado los beneficios económicos y sociales que recibieron los combatientes varones durante las desmovilizaciones anteriores. Inexplicablemente, solo se contabilizaban como miembros del grupo aquellos que realmente participaban en combate. Todos los encargados de tareas de cuidado, logística o comunicación fueron considerados *colaboradores* —a la fuerza, por supuesto—, y por tanto, no formaban parte del grupo que se desmovilizaba. Y a pesar de esta clasificación, la sociedad colombiana califica a todas estas mujeres como víctimas, restando importancia al hecho de que “superaron los estereotipos femeninos y traspasaron fronteras insuperables que antes les estaban vedadas” (Wills, 2005: 63) al decidir participar en la guerra como soldados. Las mujeres en armas son quizás el mejor ejemplo de la forma en que las mujeres pasaron de ser víctimas a protagonistas en el conflicto colombiano, pero no son las únicas que lo hicieron.

El silencioso ascenso de las campesinas civiles

Mientras las mujeres en armas luchaban para que se respetara su elección profesional, las mujeres rurales civiles tomaron un camino diferente, en el que sus voces se convirtieron en su arma. Su lucha contra los valores patriarcales comenzó mucho antes de la ferocidad de la guerra, y su liderazgo no pudo ser detenido por la violencia paramilitar que soportaron. Sus avances silenciosos evolucionaron con la misma rapidez con la que la guerra atravesó tres etapas diferentes. El Registro Único de Víctimas, RUV (2017), muestra que las mujeres rurales representan aproximadamente la mitad de las bajas registradas en la guerra, pero al retratarlas siempre como víctimas impotentes se ignora su ascenso como heroínas silenciosas.

Durante la década de 1960, en medio del acuerdo de paz del *Frente Nacional*, las movilizaciones *campesinas* impugnaron los derechos de propiedad y redistribución de la tierra. Las mujeres rurales lucharon para ser incluidas en estos grupos para defender sus actividades de cuidado, pero fueron subestimadas y abiertamente ignoradas como sujetos políticos (Defensoría del Pueblo, 2014: 21).

Aunque las mujeres rurales son menos autónomas financieramente, dada su dependencia de los hombres, no son impotentes y definitivamente no son débiles, como lo demostraron durante la década de 1980. En medio de la intensidad de la guerra para proteger las rutas de la coca, estas mujeres comenzaron a desempeñar papeles vitales en sus propios movimientos, que parecían alinearse con las luchas de los hombres rurales que reclamaban derechos políticos y económicos. En aquella época, la posibilidad de que las mujeres fueran propietarias de la tierra en un país donde los títulos de propiedad se otorgaban solo a los hombres impulsó aún más la reivindicación femenina. El gobierno reconoció la necesidad de formular estrategias dirigidas específicamente a las campesinas (DNP, 1984). Tras cuatro años de su imparable presión, la Ley Agraria 30 de 1988 — reafirmada en 1994 — obligó a los hombres a añadir los nombres de sus mujeres como propietarias iguales en sus títulos de propiedad rural (Congreso de la República, 1988). Los hombres rurales no reaccionaron bien e intentaron desalentar la participación de las mujeres en las asociaciones *campesinas* (Defensoría del Pueblo, 2014: 33), pero el ambiente negativo no disuadió a las *campesinas*.

El activismo de las mujeres rurales se amplificó visiblemente durante la década de 1990. Poco después de que la *Apertura* provocara el regreso del paramilitarismo, la guerra se volvió por primera vez contra las *campesinas* civiles. La táctica de los paramilitares era utilizar cruelmente a las mujeres como método para controlar a los hombres y a las comunidades, pero la escalada de crueldad solo sirvió para fortalecer las voces femeninas. Proteger a sus seres queridos y a sus comunidades aumentó su exposición mientras acusaban al Estado por abandonarlas a su suerte. La crueldad de los crímenes cometidos por los paramilitares reforzó su voluntad de exigir medidas concretas a su gobierno. Su tardía respuesta y la violencia causada por las fuerzas militares enviadas para protegerlas despertaron en las mujeres el poder que ofrece el estatus político. Como resultado, las mujeres rurales afrocolombianas se convirtieron en el primer grupo femenino invitado a participar en la redacción de la Constitución en 1991 (Defensoría del Pueblo, 2014).

Desafortunadamente, sus notables avances se frenaron cuando los paramilitares silenciaron sus voces atacando estratégicamente sus movimientos y forzando su declive

(Defensoría del Pueblo, 2014: 35). Sin embargo, señalar a los perpetradores de la violencia como los únicos culpables de la desaparición de los movimientos *campesinos* no honraría las vidas de las mujeres que murieron luchando por sus derechos, sus familias y sus comunidades. Sus tragedias también manchan al gobierno y a una sociedad urbana despiadada que desprecia sistemáticamente su sufrimiento porque, para ellos, los horrores de la guerra no fueron más que un espectáculo televisivo.

Las mujeres rurales no se rindieron. De hecho, se reorganizaron rápidamente y lideraron grupos de resistencia para detener la expropiación de tierras por parte de los paramilitares. Nada las disuadió de su objetivo, ni siquiera el peligro de ser identificadas como simpatizantes de las FARC, verdadero o falso, lo que garantizaba la tortura violenta y la muerte a manos de los paramilitares. Por el contrario, a pesar de ser el blanco de los peores casos de violencia de género y de ser abandonadas por las instituciones públicas, las *campesinas* encontraron la fuerza para “denunciar la violencia contra ellas y sus familias” (Defensoría del Pueblo, 2014: 36). Su valentía llevó a la Corte Constitucional, con veinte años de retraso, a censurar al Estado por su enfoque inconstitucional a la hora de ayudar a las víctimas de la guerra.

Sus logros continuaron. Con la promulgación de la Ley 731 de 2002 se permitió a las mujeres rurales acceder a los bienes públicos y a los beneficios agrarios, y se abrió un espacio real para su participación política (Congreso de la República, 2002). Sin embargo, su logro más importante fue la promulgación de la Ley 1448 de 2011, que finalmente reconoció la larga guerra de Colombia y a sus víctimas (Congreso de la República, 2011). Lamentablemente, esta ley no reconoce el papel crucial de las *campesinas* como fuerza impulsora de mandatos estatales vitales transformando la vida de todas las mujeres colombianas. Negar que las mujeres rurales se convirtieron en auténticas agentes de cambio durante los duros momentos históricos de Colombia es una terrible injusticia. Un análisis de la cruel violencia de género que soportaron durante el conflicto demuestra claramente cómo, en lugar de sucumbir a la tragedia, encontraron fuerza en su dolor para cambiar dinámicas importantes, alejándose rápidamente del estereotipo de víctimas, un cambio importante que aún no es reconocido por quienes tienen el poder de cambiar su futuro. Las mujeres rurales deben ser reconocidas hoy como protagonistas esenciales de la guerra.

Mujeres: el camino para que la guerra rural entre en las ciudades

Es bien sabido y aceptado que las zonas rurales fueron el campo de batalla de este largo conflicto. El distanciamiento de la guerra de la Colombia urbana refleja el

hecho de que esta nunca sintió el impacto feroz de la guerra ni sus consecuencias. Sin embargo, aunque los tiroteos, las bombas y los asesinatos masivos permanecieron en la Colombia rural, el conflicto llegó a las ciudades, de forma silenciosa, indetectable y a través de un canal muy inesperado: las mujeres.

De campesinas a trabajadoras urbanas desplazadas

Una característica conocida del desplazamiento es que la gente tiende a huir primero a los centros urbanos. No fue diferente en Colombia, donde más de 7 millones de hombres, mujeres y niños de las zonas rurales llegaron repentina y sistemáticamente a pueblos y ciudades que no estaban preparados para recibirlos. No fue una transición fácil para esas familias rurales que se encontraron abruptamente con las manos vacías, en medio de ciudades en rápido movimiento, tan diferentes de sus hogares. La respuesta de emergencia inicial del gobierno fue relativamente rápida, pero la búsqueda de soluciones a largo plazo para integrarlos en la vida urbana o ayudarlos a regresar a sus tierras sigue siendo lenta. La llegada masiva de familias *campesinas* a los centros urbanos fue una llamada de atención para la Colombia urbana, pues hizo real la guerra. Sin embargo, las luchas del desplazamiento siguen siendo ajenas a ellos.

La forma en que las mujeres y los hombres rurales afrontaron este reto habla una vez más de la flexibilidad innata de las mujeres para adaptarse a entornos difíciles y nuevas situaciones. Los hombres tuvieron dificultades porque sus conocimientos eran inútiles en los centros urbanos; las mujeres se pusieron rápidamente a la altura de las circunstancias, aprovechando la gran demanda de su campo de conocimiento: los servicios de cuidado. Sorprendentemente, estas mujeres se enfrentaron a una nueva oleada de violencia de género cuando los hombres rurales desplazados, frustrados y desempleados, vieron a sus campesinas empoderadas, ganando autonomía económica, y asumiendo rápidamente el rol de proveedoras, dejándolos atrás. Las estadísticas muestran que la violencia doméstica entre los desplazados es mayor que entre los que aún viven en zonas rurales (Ibáñez et al., 2011). Por otra parte, estos nuevos escenarios sacaron lo mejor de las mujeres en lugar de disminuirlas. Rápidamente asumieron roles de liderazgo en el hogar y dentro de su nueva comunidad. Hoy en día, los hogares liderados por mujeres desplazadas en las ciudades comprenden aproximadamente entre el 39% y el 46% (DNP, 2013), casi el doble que el 27,8% en las zonas rurales (DANE, 2015). Además, a pesar del aumento de la tasa de dependencia, estas mujeres encontraron tiempo para liderar o participar en organizaciones femeninas que obligaron al gobierno a incluir sus barrios informales en la red de servicios públicos (CNRR, 2011).

Coca y belleza: aliados improbables

El narcotráfico en Colombia siempre es analizado y percibido como un problema autónomo, paralelo a la guerra, asociado exclusivamente a los cultivos ilícitos y a las rutas de la coca manejadas por las guerrillas como únicas responsables del conflicto. Para la mayoría, las acciones de los narcotraficantes se limitan a los centros urbanos de distribución y a la participación en el mercado mundial. Se trata de una idea equivocada. La conexión entre drogas y guerra es profunda, y el impacto no fue solo económico o urbano. El narcotráfico cambió a toda una sociedad, especialmente a sus mujeres.

Los narcotraficantes llevaban vidas opulentas, donde el dinero era el rey y todo el mundo tenía un precio. En una sociedad muy clasista, al principio estaban en lo más bajo, pero pronto descubrieron que el dinero era la forma de ascender por la inaccesible escalera hacia las esferas más altas de la sociedad. Más rápido de lo esperado, los “narcotraficantes se mezclaron solo con las élites poderosas del país — los ricos y los políticos, a menudo uno y el mismo — simplemente exhibiendo dinero frente a sus ojos. Estas nuevas fusiones desencadenaron una secuencia que derribó rápidamente los valores morales y éticos tradicionales en toda la nación; y así, sin más, nació una cultura de la droga en Colombia” (Cueter, 2015: 105).

La cultura de la droga tiene muchos aspectos, pero sus efectos más devastadores los sufrieron las mujeres. Los narcotraficantes se rodeaban de hermosas jóvenes cuyo único trabajo era complacerlos y servirlos. A cambio, las mujeres vivían rodeadas de riquezas, siempre y cuando fueran impecables, y no solo en cuanto a su comportamiento. “La forma femenina perfecta adoptada por los narcos replicaba el aspecto de las prostitutas estadounidenses de los años setenta: rubias, muy voluptuosas y sexualizadas” (Yagoub, 2014). Esta no era precisamente una característica de las mujeres colombianas, sin embargo, fue una de las que animó a los narcos a pagar a cirujanos plásticos para convertir a sus mujeres en ese prototipo. Sin darse cuenta, pero con bastante rapidez, “la percepción de la belleza cambió cuando las mujeres colombianas... empezaron a asociar la mejora física con una vida mejor”. Aún más perjudicial fue que, a medida que la belleza cambiaba en Colombia, también lo hacía la forma en que los hombres veían y trataban a las mujeres” (Cueter, 2015: 112).

El lado más oscuro de la narco-belleza dio lugar a una forma inexplicable de tráfico de personas por consentimiento cuando... las niñas y mujeres jóvenes de pueblos rurales, o incluso de barrios de clase baja, [eran] llevadas a la fuerza o de acuerdo con

los padres para ser ‘engalladas’ a la perfección; o cuando ellas mismas tomaban la iniciativa de ir a la gran ciudad para ‘triunfar’, ... para que finalmente un hombre rico les resolviera sus problemas económicos. (Cueter, 2015: 112)

En esencia, “el legado de la cultura de las drogas pretendía perder a la *mujer* haciéndola más invisible, inducir a los hombres a ver primero los objetos con curvas, sustituir la educación por la belleza... El *narcoestilo* de vida intentó aplastar y revertir rápidamente los avances en materia de equidad de género logrados anteriormente” (Cueter, 2015: 113). En un país donde la violencia intrafamiliar sigue creciendo, la percepción del *narcoestilo* de las mujeres ayuda a explicar el aumento de la violencia de género en todo el país. Dado que pocos ven a los *narcos* como victimarios clave en la guerra, no muchos se dan cuenta de cómo su papel en el cambio de la percepción de lo que es aceptable para que una mujer sea considerada bonita o deseable, es una de las formas más feas y agresivas de la violencia de género.

Afortunadamente, muchas no cayeron en el nuevo estándar de belleza y desafiaron la influencia del *narcoestilo* de vida. Como en cualquier guerra, hubo bajas y muchas jóvenes se perdieron por ese prototipo ideal extranjero, pero aún son más las que luchan hoy en día por defender que las mujeres son ante todo seres humanos con derechos, independientemente de su aspecto o comportamiento, de dónde vivan y de lo pobres o ricas que sean. Sobre todo, las mujeres siguen haciendo frente a los viejos valores patriarcales que aún prevalecen, no solo en su propio nombre, sino por las campesinas jóvenes y mayores. Las mujeres colombianas, tanto urbanas como rurales, forman parte de esta resistencia mayor y, por ello, son protagonistas cruciales en el final de esta guerra.

Mujeres rurales: la fuerza de Colombia

El consenso en todo el mundo es claro: la devastación que deja cualquier guerra es atroz. También hay acuerdo sobre quienes son las víctimas de la guerra: los hombres suelen ser la mayoría de los que mueren, demasiados niños quedan huérfanos y asustados, y las mujeres sufren enormemente la pérdida de sus seres queridos, al tiempo que soportan una profunda violencia. Sin embargo, este estudio se opone a limitar el análisis de la violencia de género contra las mujeres teñido por el lente del sesgo tradicional, ya que ignora los papeles clave que desempeñan las mujeres, más definitivos y complejos que el de ser meras víctimas que luchan por sobrevivir.

Las *campesinas* son un gran ejemplo de cómo, a pesar del sufrimiento, se levantaron y lograron un cambio real en toda la nación. Para reconocerlas, el conflicto colombiano

no puede — ni debe — compararse con otras guerras. Más allá de la naturaleza cambiante del conflicto a manos del mismo grupo de perpetradores, que modificaron rápidamente de objetivos mientras mantenían los métodos y la crueldad a lo largo del tiempo, lo que realmente diferencia a esta guerra es la fuerza de sus mujeres. La guerra que se libra en la Colombia rural no se ajusta a ninguna categoría ni teoría; sus múltiples y complejos escenarios exigen una mente abierta para darse cuenta de la relación entre la economía política y la violencia de género.

Dos enfoques principales abordan esta nueva relación. El primero obliga a comprender los “determinantes sociales, culturales, políticos y económicos contextualmente específicos que dan forma al conflicto y sentido a la violencia” (Meger, 2016). El segundo “atiende a los contextos locales y globales en los que se produce la violencia contra las mujeres” (True, 2010: 4). Las características inusuales de la guerra colombiana y la idiosincrasia de los implicados son fundamentales para el núcleo de la relación entre la economía política y la violencia contra las mujeres. Cualquier análisis exhaustivo debe tener en cuenta todos estos elementos y ambos enfoques.

El marco de True (2012) es inmediatamente contrario a las realidades de las mujeres rurales colombianas cuando afirma que “existe una relación entre el acceso de las mujeres a recursos productivos como la tierra, la propiedad, los ingresos, el empleo, la tecnología, el crédito y la educación, y su probabilidad de sufrir violencia de género”. Como se ha señalado anteriormente, en Colombia la mayoría de las *campesinas* no son propietarias de tierras, ni tienen acceso a las subvenciones, préstamos o asistencia técnica que reciben los hombres. Por lo tanto, las circunstancias de vida de las *campesinas* derriban rápidamente la premisa básica de True, por lo que su situación las hace más propensas a sufrir violencia de género durante la guerra. La violencia intrafamiliar en la Colombia rural, aceptada por las *campesinas* como el estado normal de las cosas, las hacía más fuertes que vulnerables.

El marco de Meger encuentra interesantes coincidencias con el conflicto colombiano que podrían explicar la violencia de género experimentada por las *campesinas*. La definición de Meger (2016: 93) de la mujer como arma de guerra vincula este concepto “a los fines estratégicos de un grupo armado” y describe “la violencia sexual [como] perpetrada de forma sistemática, pública y masiva”. Esta descripción se ajusta perfectamente a las acciones de los paramilitares contra sus enemigos. Sin embargo, al profundizar en el tema, queda claro que la coincidencia de términos no significa que su explicación se adapte a las especificidades de la violencia de género sufrida por las *campesinas*.

Posiblemente, la mayor diferencia entre estos autores es su flexibilidad: el marco de Meger reconoce que cada conflicto es diferente al siguiente, y que aspectos clave que están fuera del control de las mujeres — la cultura, la política interna y la economía — pueden influir en las causas de la violencia de género. Pero lo que se hace evidente ahora es que la violencia de género contra las mujeres colombianas durante la guerra no se ajusta a ninguna teoría o marco porque las acciones contra las mujeres son tan particulares y únicas como la guerra misma. Por lo tanto, para llegar a una comprensión clara de la economía política de la violencia de género en Colombia, hay que analizar primero las raíces del conflicto y luego a los hombres colombianos.

Sin duda, el exigente marco de la economía política y los aportes de los principios de True y Meger abrieron un espectro de posibilidades totalmente nuevo, no solo para reconocer factores, sino también para vincular cuestiones que antes no se asociaban con la violencia de género. Los prejuicios religiosos, los valores patriarcales, los cánones morales, los roles sociales de género y las especificidades geográficas, todos ellos intrínsecos a la cultura de una nación, influyen enormemente en el tipo de mujer que se incorpora a los escenarios de guerra. Por ello, existen diferencias de comportamiento significativas en la forma en que las poblaciones urbanas y rurales responden a la agitación en sus vidas. También es bien sabido que estas últimas siempre van un paso por detrás del desarrollo urbano; su cambio cultural no es rápido ni decisivo. La guerra de Colombia tuvo lugar precisamente en las zonas rurales más subdesarrolladas del país. Mucho antes de que comenzara la guerra, las campesinas vivían sometidas a la autoridad de los hombres, su mundo ya era pequeño, limitado a las actividades de cuidado y sin posesiones ni derechos. En esencia, eran invisibles. Dadas sus precarias circunstancias, las campesinas entraron en el conflicto no solo vulnerables, sino profundamente subestimadas: el perfil perfecto para convertirse en objetivos, meras víctimas de la guerra. Entonces, ¿qué impulsó a estas mujeres a convertirse en protagonistas y no solo en víctimas? La explicación es tan compleja como el conflicto, pero lo que es indiscutible es que estas mujeres derribaron cinco paradigmas tradicionales.

• **Primer paradigma: la violencia sexual destruye a las mujeres.** Las campesinas se levantaron silenciosamente pero decididamente contra la violencia, y fueron responsables de lo que Stewart (2010: 2) denomina “complejas redes de movimientos a favor de la paz”. Sufrieron mucho como consecuencia de los abusos sexuales, pero su reacción social y política es lo que las distingue. Tal vez la violencia intrafamiliar intrínseca a sus vidas pueda estar detrás de su fortaleza. Las mujeres rurales no deberían ser invisibles en Colombia, pues sus logros durante la guerra pueden medirse por el número de leyes nacionales promulgadas en su favor.

• **Segundo paradigma: el conflicto no afecta los roles de género.** Un hecho insólito en esta guerra es que las normas patriarcales actuaron más contra los hombres rurales que contra las campesinas. La incapacidad de proteger a las mujeres llevó a los hombres a autodestruirse productiva y socialmente. Su poder es también su mayor debilidad, pues una absurda paradoja en la definición de masculinidad de los hombres rurales son las mujeres. Las fuerzas paramilitares comprendieron rápidamente su debilidad y convirtieron a las mujeres en eficaces armas de guerra que destruyeron rápidamente la masculinidad rural y comunidades enteras.

• **Tercer paradigma: las políticas económicas son neutrales en términos de género y violencia de género.** La tesis de Elson y Cagatay (2000) sobre la no neutralidad de las políticas económicas en materia social es aplicable al género en este conflicto. La Apertura también se unió al conflicto e impactó negativamente en las mujeres. El carácter extensivo de los agronegocios renovó viejas alianzas entre terratenientes y paramilitares para extender sus plantaciones, una relación que dio lugar al desplazamiento violento impulsado por los intereses económicos de unos pocos. El arma elegida para forzar la salida de los hombres fueron las mujeres.

• **Cuarto paradigma: las políticas públicas son neutrales en términos de género o violencia de género.** En los conflictos armados, los factores políticos suelen ignorar el contenido de género en las políticas públicas. La descentralización — que también se unió a la guerra — afectó a las mujeres rurales a través de diferentes formas de violencia de género. Los recursos fiscales y el poder político que se trasladaron a los gobiernos locales y regionales reforzaron el control paramilitar sobre zonas específicas del país. No solo disminuyó rápidamente la calidad de los servicios sociales, sino que los perpetradores impusieron libremente valores patriarcales más arcaicos a las mujeres de los pueblos bajo su hegemonía. La descentralización fortaleció el poder y la base financiera de las fuerzas paramilitares; su gobierno autoritario convirtió a las mujeres en objetos de reproducción o placer para los comandantes y las tropas.

• **Quinto paradigma: la rivalidad entre los roles de género tiene su origen en la globalización competitiva.** En la guerra de Colombia, la rivalidad entre los roles de género no proviene exclusivamente de la globalización competitiva. De hecho, este tipo de rivalidad se da sobre todo entre hombres y mujeres desplazados, y su efecto es aún más despiadado. La alta demanda de servicios de cuidados en la Colombia urbana empujó a las antiguas campesinas al mercado laboral. La falta de demanda de las habilidades de los hombres rurales aplastó su masculinidad una vez más, y esa es la razón de la violencia de género que sufren las campesinas desplazadas que viven en zonas urbanas.

Reflexiones finales

La mayoría de las conclusiones de este análisis del caso colombiano difieren de las que comúnmente perciben los defensores de la igualdad de género y los expertos. Optar decididamente por considerar a las mujeres como protagonistas y no solo como víctimas y de ir más allá de las explicaciones históricamente aceptadas de la guerra, al incluir perspectivas económicas y sociales, condujo a inesperadas reflexiones finales. Las feministas tradicionales rechazarían desde el principio cualquier análisis que se centre en los hombres para explicar lo que les ocurre a las mujeres. Muchas creen que el estudio de la situación de los hombres no contribuirá a hacer avanzar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Este estudio demuestra lo contrario. El asombroso paso de las mujeres rurales colombianas de víctimas a protagonistas cruciales del conflicto no podría entenderse plenamente, ni realizarse, sin la contribución de las debilidades de los hombres.

Estas mujeres experimentaron todas las dimensiones posibles de la violencia de género a manos de tres tipos diferentes de perpetradores: las fuerzas paramilitares más brutales e inhumanas; las FARC, que desatendieron los derechos de las combatientes a pesar de su discurso igualitario de género; y las fuerzas militares nacionales que incumplieron miserablemente su promesa de proteger a la población al perpetrar crímenes atroces contra las mujeres. Sin embargo, en lugar de limitarse a sobrevivir como víctimas, las campesinas se convirtieron en actores cruciales que impulsaron el cambio para toda la sociedad colombiana, un logro vital que pocos han reconocido. Sin duda, en lo que se refiere a la guerra y sus trasfondos, Colombia sigue siendo un caso único. Este análisis de la economía política de la violencia contra las mujeres durante la guerra demuestra que las mujeres rurales del país también son bastante singulares. Importantes paradojas las separan de las nociones preconcebidas que retratan a las mujeres como víctimas, débiles e indefensas, desaparecidas de la guerra. La primera es la fortaleza de las campesinas, quienes, a pesar de los atroces abusos de hombres conocidos y desconocidos, tomaron sus vidas en sus manos, sin ninguna ayuda, apoyo u orientación, para forjarse su propio futuro. La segunda y más inesperada paradoja es su fortaleza como prueba de que, en Colombia, la violencia de género contra la mujer no era un método para controlarlas, sino el arma elegida para obligar a los hombres a someterse. La tercera, oculta y muy sorprendente, es que, aunque las heridas siguen vivas en los cuerpos de las mujeres, la verdadera víctima de esta guerra es la masculinidad de los hombres.

Sin ayuda y en silencio, estas mujeres influyeron en el cambio de toda una nación, no solo para ellas mismas, sino para las futuras generaciones de mujeres rurales y

urbanas por igual. Hoy, la fuerza y las voces de las campesinas ya han conseguido lo que las mujeres urbanas aún esperan. Su valentía las ha hecho pasar de víctimas a protagonistas vitales en esta larga guerra, pero sus logros no deben detenerse en Colombia. Ellas son un mensaje para el mundo sobre la necesidad de mirar más allá de lo obvio cuando se trata de estudiar a las mujeres y lo que afecta sus vidas.

Notas

- 1- Las FARC son conocidas como la guerrillera más antigua del mundo, fundada en 1964, y fue la insurgencia más grande del país.
- 2- El «Acuerdo Final» es como este estudio se referirá al acuerdo de paz de 2016, firmado entre el gobierno colombiano y las FARC. Incluye compromisos en materia de reforma agraria, participación política, políticas antidrogas, etc. Un comité de seis personas está encargado de supervisar el cumplimiento; solo un miembro es una mujer.
- 3- El Partido Liberal Colombiano se parece al Partido Demócrata Americano. El Partido Conservador es ideológicamente cercano al Partido Republicano.
- 4- El término «guerrilla» incluye diferentes grupos guerrilleros, que históricamente varían entre tres y nueve fuerzas revolucionarias diferentes, todas con ideologías de izquierda.
- 5- Este estudio utilizará indiscriminadamente el término campesinas en referencia a las mujeres rurales; por lo tanto, ambos términos se refieren al mismo grupo de mujeres.
- 6- Se dispone de información sobre los homicidios, desapariciones forzadas y secuestros, pero esta investigación no puede utilizarla porque el Registro de Víctimas incluye tanto a víctimas directas como indirectas por estos tres factores de victimización. Por ejemplo, hay 166.592 víctimas de desaparición forzada, cifra que incluye a los desaparecidos por la fuerza (víctimas directas) y a los que están dentro de su círculo familiar (víctimas indirectas). Del mismo modo, el registro no proporciona más datos sobre el género de las víctimas indirectas.
- 7- La edad legal para contraer matrimonio sin el consentimiento de los padres y la edad de consentimiento sexual del país es de catorce años. Sin embargo, la estructura de rango utilizada en la recopilación de datos limita la definición de niñas a los once años. Por lo tanto, para este análisis, las niñas se dividirán en once y menos, y de doce a diecisiete.
- 8- Tanto el Consejo de Seguridad de la ONU (2012:6) como ONU Mujeres (2012) corroboran esta creencia en sus informes sobre la guerra de Colombia.
- 9- En el año 1999, el PIB de Colombia cayó un 4,2% (Banco de la República, 2016).
- 10- Oxford Dictionary definición de «casual» en <http://bit.ly/1igMXbd>
- 11- Este estereotipo se deriva de la idea de patriotismo, que surgió cuando los ejércitos dejaron de ser dirigidos por caudillos y se convirtieron en organizaciones profesionales. Hay dos nociones distintas en este concepto: la Nación, que es una estructura familiar que debe ser preservada y reproducida (Wills, 2005:74); y la Patria, que representa el sacrificio final para proteger a la Nación. Se asignó a las mujeres la conservación y reproducción de la Nación, y se esperaba que los hombres estuvieran dispuestos a morir por la Patria. De esta manera, la profesionalización de los ejércitos condujo a un refuerzo de los roles de género que todavía continúa hoy (ibíd.).
- 12- Las tareas de cuidado se centran en proporcionar el bienestar físico, social y emocional del individuo; la sociedad ha asignado tradicionalmente estas tareas a las mujeres (López Montaña et al., 2015).
- 13- Los porcentajes de las respuestas de hombres y mujeres no suman el 100% porque se permitió a los participantes elegir más de una razón para unirse a las FARC.

Referencias

- Acosta, C. L. 2015. Women, Sexual Violence, Forced Displacement and Land Restitution in the Department of Magdalena 1999 to 2012', *Criterios* 8 (2): 207–52.
- Banco de la República. 2016. *Indicadores Económicos*. Bogotá: Banco de la República, <http://bit.ly/1UY9hlO>
- Call, C. T. 2012. *Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War Recurrence*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Castrillón, G. Y. 2016. 'Victims or Victimizers? El Rol de las Mujeres en las FARC', *Revista Opera* 16, [http:// bit.ly/2oUxaTq](http://bit.ly/2oUxaTq).
- CGR. 2015. *First National Survey of Victims*. Bogotá: Office of the Comptroller General of the Republic (CGR), <http://bit.ly/2nbPryg>
- CNMH. 2012. *El Placer: Women, Coca and War in Bajo Putumayo*. Bogotá: Taurus & Pensamiento for Centro National Center for Historical Memory (CNMH).
- CNMH. 2013. *Basta Ya!* Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
- CNRR. 2011. *Women Who Make History: Land, Body and Politics in the Colombian Caribbean*. Report of the Historical Memory Group. Bogotá: National Commission for Reparation and Reconciliation (CNRR).
- Colombia Reports. 2015a. 'Understanding Colombia's Conflict: Inequality', Colombia Reports, 7 January, <http://bit.ly/2nAbP3v>.
- Colombia Reports. 2015b. 'Who Commits Most Sex Crimes in Colombia's Conflict', Colombia Reports, 20 April, <http://bit.ly/2nrLLIJ>
- Congress of the Republic. 1988. Law 30 of 1988 — Grants Faculties to the President of the Republic. Bogotá: Gobierno de la República.
- Congreso de la República. 2002. Law 731 of 2002 — *Norms to Favor Rural Women*. Law 731. Bogotá: Gobierno de la República.
- Congreso de la República. 2011. Law 1448 of 2011 — *Victims and Land Restitution*. Law 1448. Bogotá: Ministry of the Interior, <http://bit.ly/2fstRCK>
- Constitutional Court. 2015. Auto 009: *Prevention of Sexual Violence in the Framework of the Conflict*. Sala Especial de Seguimiento Sentencia T—025 of 2004. Bogotá: Government of the Republic.
- Crandall, R. 1999. 'The End of Civil Conflict in Colombia: The Military, Paramilitaries, and a New Role for the United States', *SAIS Review* 19 (1): 223—37.
- Cueter, N. 2015. 'Caught between the War on Drugs and Guerrilla Warfare: Colombia's Road to Peace'. Master of Arts in Liberal Studies (MALS) thesis, Georgetown University.

- DANE. 2015. *Third National Agricultural Census*. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Gobierno de la República, <http://is.gd/nENfxm>.
- DANE. 2017a. *Exports: June 2017*. Boletín Técnico. Bogotá: National Administrative Department of Statistics (DANE), Government of the Republic, <https://bit.ly/2H2BoVand>
- DANE. 2017b. *Presentation Poverty Results 2016*. Presentation. Bogotá: National Administrative Department of Statistics (DANE), Government of the Republic, <http://bit.ly/2wObGOW>.
- Ombudsman's Office. 2014. *Armed Conflict and Risk for Rural Women*. Early Warning System. Bogotá: Torre Gráfica.
- (DNP). 1984. *Política sobre el Papel de la Mujer Campesina en el Desarrollo Agropecuario*. Documentos Conpes 2109. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gobierno de la República.
- DNP. 2013. *Lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado*. Documentos Conpes 3784. Bogotá: DNP, Gobierno de la República.
- DNP. 2015a. *Saldar la Deuda Histórica con el Campo. Marco Conceptual*. Bogotá: Departamento DNP, Misión para la Transformación del Campo, Gobierno de la República, <http://bit.ly/1RIxgFC>
- DNP. 2015b. *El Campo Colombiano: Un Camino Hacia el Bienestar y la Paz*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación (DNP), Misión para la Transformación del Campo, Gobierno de la República.
- Elson, D. and Cagatay, N. 2000. 'The Social Content of Macroeconomic Policies', *World Development* 28 (7): 1347–64, <https://bit.ly/2ArJnZG>
- ENC. 2015. *Mujer Militar: Igualdad y Liderazgo*. Bogotá: Ejército Nacional de Colombia (ENC), Gobierno de la República, <http://bit.ly/2nCFfv4>
- Enloe, C. 2004. 'The Politics of Masculinity and Femininity in Nationalist Wars' in Enloe, C., *The Curious Feminist: Searching for Women in the New Age of Empire*. Berkeley: University of California Press.
- Game, A. and Pringle, R. 1984. *Gender at Work*. London: Allen and Unwin.
- Gates, S., Håvard, H., Håvard, M. and Håvard, S. 2012. 'Development Consequences of Armed Conflict', *World Development* 40 (9): 1713–22.
- González, F. 2004. 'The Colombian Conflict in Historical Perspective' in García—Durán, M. (ed.), *Accord. Alternatives to War: Colombia's Peace Processes*. London: Conciliation Resources and CINEP.
- Guzmán, G., Fals Borda, O. and Umaña Luna, E. 1962. *La Violencia en Colombia: Estudio de un Proceso Social*. Vol. I. Bogotá: Tercer Mundo.
- Herrera, N. and Porch, D. 2008. '“Like Going to a Fiesta”: The Role of Female Fighters in Colombia's FARC—Ep', *Small Wars and Insurgencies* 19 (4): 609–34, <http://bit.ly/2vzeXSu>
- Ibáñez, A. M., Gáfaró, M. and Calderón, V. 2011. 'Desplazamiento Forzoso, Participación Laboral Femenina y Poder de Negociación en el Hogar: ¿Empodera el Conflicto a las Mujeres?' Documentos CEDE 45. Bogotá: Universidad de los Andes.

- INML. 2015. *Violencia Sexual en Colombia*. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), Gobierno de la República.
- Londoño, L. M. and Nieto, Y. F. 2006. *Mujeres no Contadas: Proceso de Desmovilización y Retorno a la Vida Civil de Mujeres Excombatientes en Colombia*. 1990–2003. Bogotá: La Carreta Editores.
- López Montaña, C. 2011. 'Diseño y Formulación de Políticas para las Mujeres Desplazadas' in *El Reto Ante la Tragedia Humanitaria del Desplazamiento Forzado: Superar la Exclusión Social de la Población Desplazada*. Bogotá: CODHES.
- López Montaña, C., Rodríguez Enríquez, C., Rey de Marulanda, N. and Ocampo, J. A. 2015. *Bases para un Nuevo Modelo de Desarrollo con Igualdad de Género*. Bogotá: CiSoe and ONU Mujeres.
- Mantilla, S. 2012. 'Economía y Conflicto Armado en Colombia', *Latinoamérica* 55 (2): 35–73, <http://bit.ly/1W0khVN>
- Meger, S. 2016. *Rape, Loot, Pillage: The Political Economy of Sexual Violence in Armed Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Ministerio de Defensa Nacional. 2010. *Política en Derechos Sexuales y Reproductivos, Equidad y Violencia Basada en Género, Salud Sexual y Reproductiva, con Énfasis en Vih*. Bogotá: Programa Integral contra la Violencia de Género, <http://bit.ly/2mWqKpC>
- NRC. 2015. *Global Overview 2015: People Internally Displaced by Conflict and Violence*. Oslo: Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council (NRC).
- Otero, S. 2006. 'Colombia: Las Mujeres en la Guerra y en la Paz. Lo Femenino de las FARC y de las AUC', ReliefWeb, 21 March, <http://bit.ly/2nnumvY>
- Otis, J. 2015. 'Colombians Accuse US Soldiers and Officials of Sexual Assault', *Time*, 15 April, <http://ti.me/1b10ak6>
- RUV. 2017. 'Red Nacional de Información', Registro Único de Víctimas (RUV), Gobierno de la República, <https://bit.ly/2uZlZNI>
- Stewart, F. 2002. *Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development*. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE).
- Stewart, F. 2010. 'Women in Conflict and Post—conflict Situations'. New York: Development Cooperation Forum, UN Economic and Social Council.
- True, J. 2010. 'The Political Economy of Violence against Women: A Feminist International Relations Perspective', *Australian Feminist Law Journal* 32 (1): 39–59, <https://bit.ly/2gbH4zB>
- True, J. 2012. *The Political Economy of Violence against Women*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- UN Security Council. 2012. *Report of the Secretary—General on Conflict—related Sexual Violence*. General Assembly 66. Geneva: United Nations (UN) Security Council.
- UN Women. 2012. *Addressing Conflict—related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice*. New York: United Nations (UN).

- US Library of Congress. 2013. *Colombia: A Country Study*. Fifth edition. Washington DC: Federal Research Division, Library of Congress.
- Vélez, C. I. 2013. 'Más Mujeres Quieren Ingresar a la Vida Militar', *El Colombiano*, 20 August, <http://bit.ly/2nEoNtq>
- Verdad Abierta. 2013. 'La Historia de las FARC', *Verdad Abierta*, 3 October, <http://bit.ly/1GHrDB2>
- Vergel, C. 2012. 'Entre Lutte Armée et Féminisme: Quelques Reflexions à Propos des Femmes Combattantes en Colombie', *Revista Derecho del Estado* 29.
- Wills, M. E. 2005. 'Mujeres en Armas: ¿Avance Ciudadano o Subyugación Femenina?', *Análisis Político* 54: 63–80, <http://bit.ly/2grjf3J>
- World Bank. 2016. 'World Development Indicators', World Bank, <http://bit.ly/1Cd8EkQ>
- Yagoub, M. 2014. 'How Colombia's Drug Trade Constructed Female Narco—beauty', *Colombia Reports*, 5 February, <http://bit.ly/1MqYOuA>

4

DEBATIENDO LA TERRITORIALIDAD: PATRIARCADO, ACUMULACIÓN Y DESPOJO. “ARRAIGO DE LA PERIFERIA”: MUJERES, ECONOMÍA POLÍTICA Y EL MITO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL NORESTE DE LA INDIA

Roshmi Goswami

Introducción

En los últimos tiempos, las conversaciones de paz en Colombia y el propio proceso han suscitado un enorme interés y atención en todo el mundo, especialmente entre las mujeres activistas y defensoras de la paz. Está bien documentado y reconocido que todas las partes utilizaron la violencia sexual como arma de guerra, y que las mujeres y los niños, especialmente los de los grupos afrocolombianos e indígenas, se llevaron la peor parte del conflicto.¹ Pero el reconocimiento y el compromiso de reparación llevó el análisis más allá de la violencia sexual. Al articular las violaciones del conflicto como violaciones de la justicia y al incluir una serie de soluciones para hacer frente a las infracciones, desde la violencia contra las mujeres hasta la discriminación en la propiedad y en el acceso a la tierra, los acuerdos de paz en Colombia señalan una línea para abordar las causas profundas del conflicto y la violencia que conlleva, e incluyen la reparación de las causas directas y estructurales de la violencia.

De hecho, la búsqueda de la justicia o el deseo de una ‘paz justa’, formulada de forma diferente en los distintos contextos, es un objetivo al que aspiran los constructores de paz en todo el mundo, así como en las comunidades que salen de conflictos armados y guerras. El pionero y extenso trabajo de Lederach (2003) sobre los conflictos, que hacía hincapié en la paz como parte integrante de la justicia, consistía en buscar un cambio constructivo o un proceso de transformación de los conflictos violentos, cuyos elementos incluyen la construcción de relaciones y estructuras sociales a través de un respeto radical de los derechos humanos. Para Galtung (1969), la consolidación de la paz está íntimamente ligada a la lucha contra la violencia estructural o indirecta, es decir, la violencia causada por determinadas estructuras o instituciones sociales que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas. Aunque se dice que la violencia estructural es invisible, tiene una serie de influencias que la conforman, como las leyes discriminatorias, el racismo y la desigualdad de género. La ausencia o negación de la violencia estructural es lo que Galtung define como paz positiva, diferenciándola de lo que denomina paz negativa, que es la ausencia de violencia personal o directa. Basando estas ideas en realidades y refiriéndose en particular a los factores que limitan el acceso a la atención en salud en el contexto de Haití, pero que son aplicables universalmente, Farmer et al. sostienen que las desigualdades sociales se encuentran en el corazón de la violencia estructural y que la violencia estructural es estructurada y estricta porque constriñe la agencia de sus víctimas y “aprieta una soga física alrededor de sus cuellos”, determinando así cómo se asignan y experimentan los recursos materiales y sociales (2006).

Basándose en estos análisis, Gready y Robins (2014) proponen la justicia transformadora como enfoque alternativo. Sostienen que la justicia transformadora es un concepto que puede aplicarse claramente en cualquier lugar y en cualquier momento para abordar problemas como la violencia estructural y cotidiana, que a menudo se ven exacerbados en un período posterior a un conflicto o de construcción de paz. La característica más destacada de la justicia transformadora es el cambio transformador que hace hincapié en la agencia y los recursos locales; prioriza el proceso en lugar de los resultados preconcebidos; y desafía las relaciones de poder desiguales y entrecruzadas y las estructuras de exclusión, tanto a nivel local como global. Sostienen que el enfoque de la justicia transformadora se centrará en las intersecciones entre la economía y el poder; en la discriminación y la exclusión; y en cambiar el futuro en lugar de volver al pasado.

Estos análisis de la violencia estructural resuenan y se sincronizan con las experiencias vividas por las mujeres, mientras que el énfasis y el compromiso con la justicia que requieren son especialmente críticos para ellas. Décadas antes que Galtung y otros, las feministas desarrollaron una amplia comprensión de la paz y la violencia, postulando que no puede haber paz si hay opresión y no hay estabilidad sin justicia. El discurso feminista ha mantenido claramente la opinión de que la violencia física contra las mujeres en el contexto de los conflictos armados y las guerras está estrechamente vinculada a la situación de los derechos de las mujeres en tiempos de paz, que incluyen sus derechos socioeconómicos. Un elemento central del análisis feminista es el concepto de patriarcado como sistema opresivo y jerárquico, que es esencialmente violencia estructural a menudo ejercida como violencia personal. Los análisis feministas, basados en las experiencias vividas por las mujeres y en las nociones de justicia, siguen centrándose en el patriarcado como sistema de opresión y constituyen la base del enfoque más reciente de la economía política. Argumentan que la violencia es un *continuum* posibilitado por los acuerdos sociales jerárquicos en las esferas privada y pública, un enfoque de economía política feminista que trata de reconceptualizar la justicia sobre la base de las experiencias vividas por las mujeres (True, 2014). La persistente defensa de los derechos de las mujeres por parte de activistas y defensoras de los derechos humanos ha dado lugar a que se preste cierta atención a la violencia sexual. Si bien, esto es necesariamente un enfoque exclusivo en la violación y otras formas de violencia sexual directa, no reconoce toda la gama de abusos cometidos contra las mujeres y las niñas y lo que las mujeres sufren en situaciones de violencia (Schmid, 2012), y también lo que las mujeres aspiran en un momento de transición política. De hecho, el proceso colombiano ha elevado el listón de las negociaciones en torno a la violencia sexual garantizando dignidad² y, lo que

es más importante, incorpora temas que recogen las realidades y prioridades sobre el terreno de la vida de las mujeres.

Los conflictos endémicos de Asia y sus negociaciones de paz no reflejan un alto nivel de exigencia en temas relativos a la mujer. La resistencia o la apatía hacia la justicia de género también se suele escudar en el tan cacareado argumento de la ‘singularidad de los valores asiáticos’. Además, los conflictos son muy complejos e involucran a diferentes partes interesadas con dinámicas sociales diversas. Un estudio de 2013 muestra que en las regiones del Sur y el sureste de Asia se dan algunas de las luchas armadas más largas del mundo, que duran varias generaciones y tienen una media de unos cuarenta y cinco años por conflicto, y que las luchas armadas son en su mayoría conflictos subnacionales o conflictos armados por el control de un territorio subnacional dentro de un Estado soberano (Parks et al., 2013). Estos conflictos de larga duración han sido extremadamente devastadores, comprometiendo la seguridad y la justicia y corroyendo constantemente la vida y el tejido social de las comunidades de las zonas afectadas. En el contexto nacional, estos conflictos se sitúan invariablemente en regiones remotas del Estado, que son periféricas tanto en términos de ubicación como de reparto del poder. Habitadas principalmente por comunidades a menudo denominadas ‘minorías’, cuyas contribuciones a la política nacional y a la economía nacional se perciben invariablemente como insignificantes o periféricas (Goswami, 2017).

Un método de análisis de economía política muestra que, a medida que el poder político y económico forman parte de la misma estructura de autoridad, los ámbitos económico, político y social están interconectados y el poder opera no solo a través de la coerción directa, sino también a través de las relaciones estructuradas de producción y reproducción que rigen la distribución y el uso de los recursos, beneficios, privilegios y autoridad dentro del hogar y en la sociedad transnacional en general (True, 2014). La perspectiva de la economía política feminista añade que los conflictos violentos, que a menudo son el resultado de luchas por el control del poder y los recursos productivos, normalizan la violencia, la extienden por las sociedades y conllevan la celebración de la agresión masculina y la perpetuación de la impunidad de la violencia de los hombres contra las mujeres. Destaca que si las mujeres no pueden acceder a la seguridad física, a los servicios sociales, a la justicia y a las oportunidades económicas, su especial vulnerabilidad a la violencia continúa en tiempos de paz (ibíd.). Este capítulo trata de poner de manifiesto algunos aspectos de la forma en que los procesos políticos, económicos, sociales e ideológicos se han entrecruzado para influir y configurar la violencia de género en los conflictos subnacionales del Noreste de la India y continúan

haciéndolo en el actual período de ‘paz prolongada’. Utilizando un enfoque de economía política, el capítulo pone de manifiesto las bases estructurales y los sistemas que anclan el reparto desigual del poder político y económico entre hombre y mujeres que perpetúa la violencia, al tiempo que presenta una diversidad de experiencias vividas por las mujeres. Al tiempo que pone de manifiesto los cambios que las mujeres buscan en su lucha por la justicia, el capítulo concluye destacando la necesidad de reformular la resistencia de las mujeres en la región y en los contextos de conflicto en general en términos transformadores, yendo más allá de la violencia directa para abordar los acuerdos sociopolíticos y económicos jerárquicos y el reparto de recursos tanto en la esfera privada como en la pública.

Paisajes

El contexto periférico y las mujeres

La enorme diversidad de la parte nororiental de la India, que originalmente comprendía siete estados, a menudo se agrupa en una sola unidad, lo que en sí mismo es muy contradictorio y sigue siendo objeto de controversia. Los puntos en común se refieren a que es una región de prolongados conflictos subnacionales que duran varias décadas y a que es la periferia o el interior de la India continental, rica en recursos. Los conflictos – tan diversos como la propia región — han abarcado desde luchas políticas y civiles por la autodeterminación y los grupos agraviados que pugnan por una parte mayor o más justa del poder o una participación en el sistema, hasta los conflictos interétnicos por identidades fracturadas o recursos escasos y menguados (Goswami et al., 2014). Mis propios conocimientos, basados en la experiencia y el estudio, así como en un extenso trabajo de campo junto con la experiencia en materia de derechos humanos de las mujeres, especialmente en el contexto de los conflictos, ofrecen una imagen convincente de la región. Los temas de identidad y etnicidad han sido centrales y han añadido capas de complejidad, tanto dentro de los parámetros de los conflictos como en los diversos ‘acuerdos de paz’. Los objetivos políticos de los conflictos armados han oscilado entre una mayor autonomía y derechos políticos hasta posiciones extremas en el pasado, como los llamamientos a la secesión total de India. Las disputas sobre el control y la utilización óptima de los recursos naturales (tierra, agua y minerales), aunque menos articuladas abiertamente, han sido el núcleo de muchos de los conflictos y siguen siendo líneas de fractura críticas en la actualidad. La respuesta del Estado indio ha variado a lo largo de los años, pero ha sido esencialmente de dominio y control — ya sea mediante las medidas represivas abiertas y la violencia directa de épocas anteriores o mediante el mantra de ‘desarrollo’ más sutil de extracción de recursos del presente. En este contexto, hay mucho cinismo,

incluso en torno a la intención y la viabilidad de la tan promocionada política exterior india de ‘mirar al Este’, iniciada en 1991 con el fin de ver la región no como una periferia, sino como un centro económico próspero e integrado que una el Sur de Asia y el Sudeste Asiático.

Los conflictos subnacionales siguen sin ser reconocidos oficialmente por los Estados y su existencia es objeto de intensos debates y desacuerdos políticos. Del mismo modo, en el Noreste de la India, la persistente falta de reconocimiento de estos conflictos por parte del Estado indio, o su categorización del problema como una cuestión de ley y orden, ha mantenido altos los niveles de violencia y la situación fuera del ámbito del derecho internacional humanitario y de las normas de justicia y derechos humanos internacionalmente aceptadas (Goswami, 2017). A lo largo de las décadas, a medida que han ido surgiendo nuevas demandas y nuevos grupos, las causas originales de los conflictos – desigualdades económicas y políticas, injusticias sociales arraigadas, graves violaciones de los derechos humanos o estructuras de poder desiguales – han quedado sumergidas bajo un paraguas general de acuerdos políticos ad hoc y a corto plazo. Esto incluye las relaciones económicas de violencia como una economía de guerra/conflicto subterráneo pero próspera que ha crecido progresivamente; en muchos casos, los conflictos anteriores han hecho metástasis en complejas alianzas económicas. La presencia militar manifiesta de épocas anteriores sin duda ha disminuido, pero décadas de amplia militarización han dejado sus cicatrices. Las preocupaciones en materia de seguridad en general siguen restringiendo el acceso y la información, pero de manera encubierta también permiten obtener beneficios económicos y la especulación entre unos pocos elegidos, que van desde la dudosa extracción de los diversos recursos de la región hasta el comercio de armas, e incluyen ganancias económicas a sangre fría por muertes falsas (Bhattacharjee, 2015). Aunque es necesario investigar más a fondo para revelar los nexos entre los distintos ‘agentes de poder’, los comentarios de los grupos de derechos de las mujeres y de derechos humanos que trabajan sobre el terreno, así como mis propias experiencias, muestran que entre las partes interesadas figuran funcionarios estatales, políticos, militares, grupos armados no estatales, traficantes de armas, empresas y diversos tipos de ‘agentes facilitadores’.

Al igual que en el resto del mundo, las mujeres se han llevado la peor parte del aumento de la militarización, bien sea como objetivo específico de las fuerzas de seguridad o de grupos militantes rivales, o debido a la continuidad de la violencia desde lo público a lo privado. El impacto ha sido debilitante y de largo alcance, con violaciones que van desde la violencia sexual, el desplazamiento y la pérdida

de bases de apoyo y medios de subsistencia, hasta las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de familiares, la falta de todas las formas de seguridad humana y la constante sensación de miedo y temor (van Lierde, 2011). Por otra parte, en los diferentes ‘momentos de paz’, las negociaciones y los acuerdos ofrecen importantes oportunidades para la transformación del conflicto, pero la seguridad masculinizada ha aumentado enormemente o sigue siendo el enfoque dominante (Goswami, 2017).

Pueden plantearse varias preguntas sobre cómo se conceptualiza la paz en estas periferias. ¿Estos procesos de paz pretenden garantizar la justicia poniendo fin a la violencia y a las desigualdades sociales y políticas profundamente arraigadas, así como a las de género y a la exclusión del ‘otro periférico’? ¿O son meros ‘acuerdos’ dentro de un marco patriarcal que simplemente continúan con las desigualdades arraigadas y, en algunos casos, introducen mayores complejidades? El contexto actual de la región ‘periférica’ del Noreste de la India ofrece un interesante análisis de la economía política de los conflictos desde la perspectiva de género. A partir de ilustraciones de tres contextos y marcos temporales diferentes de la región, y desde una perspectiva de género, este capítulo pretende:

- revelar las consecuencias de las arraigadas desigualdades de género en las narrativas de las luchas armadas, los derechos humanos y la construcción de la paz en la región;
- analizar si se comprenden las causas estructurales y las repercusiones y consecuencias a largo plazo de la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como las diferentes formas en que los procesos sociales, políticos, económicos e ideológicos se han entrecruzado para influir y dar forma a la violencia de género relacionada con los conflictos (True, 2014) y qué atención se les está prestando;
- determinar si el contenido, la forma y la política de los procesos de paz de cualquiera los tres contextos diferentes ofrecen alguna evidencia de comprensión e intento de ‘transformación social’ o justicia de género y en caso negativo por qué?

Por último, se intenta poner de relieve lo que las mujeres en el terreno realmente quieren y la necesidad de reformular su resistencia en términos transformadores para hacer realidad estas aspiraciones.

Territorialidad y retos para el Estado nación emergente

El conflicto Naga: los juegos de poder patriarcales, los cuerpos de mujeres y el otro lado de la periferia

El conflicto Indo—Naga es uno de los más prolongados, no solo en la India, sino de todo el Sur de Asia. Habiendo resistido la inclusión forzada de Naga Hills en la

India británica en 1881, durante la movilización por la independencia india los Naga solicitaron a la Comisión Simon que “nos dejaran solos para decidir por nosotros mismos como en la antigüedad”. A partir de entonces, el Consejo Nacional Naga (CNN), formado bajo el liderazgo de Angami Zapu Phizo, declaró la región Naga como estado independiente el 14 de agosto de 1947. Antes de esto, en una reunión histórica, Mahatma Gandhi aseguró a los líderes de Naga que no se utilizaría la fuerza contra ellos y que los Naga eran libres de no formar parte del Consejo Nacional Indio. En un plebiscito sobre la independencia de Naga en 1951, el 99% de los Naga dieron su veredicto a favor de la independencia. La resistencia Naga fue una afrenta al flamante poder del emergente Estado Nación indio, que respondió con una demostración de fuerza masiva y brutal. En 1958 se promulgó la Ley de las Fuerzas Armadas (Poderes Especiales) para hacer frente a esta situación. Se suponía que esta ley era una medida especial temporal, pero dotó a las fuerzas armadas de poderes desenfrenados, coartando totalmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, y sigue vigente hoy en día.

Lo que siguió fueron años de extensas e intensas operaciones de contrainsurgencia por parte del Estado indio, que incluyeron operaciones de barrida, detenciones arbitrarias y la quema de aldeas enteras, todo ello marcado por niveles extremos de violencia y brutalidad. Las mujeres Naga fueron un objetivo especial y estratégico — fueron violadas, abusadas sexualmente y maltratadas para dar una lección a los ‘insurgentes/rebeldes’ y doblegarlos psicológicamente. Los Naga eran conocidos por ser extremadamente protectores con sus mujeres y niños. Históricamente, como tribus guerreras cazadoras de cabezas en constante guerra con sus aldeas vecinas, cada tribu tenía una estructura de defensa bastante elaborada y una jerarquía para proteger a las mujeres y los niños. Solo los guerreros más capaces y valientes formaban el núcleo interno de defensores a los que se asignaba esta tarea. Poder atravesar esta formidable defensa y llegar hasta las mujeres se consideraba la mayor victoria para los agresores y la derrota absoluta — tanto física como psicológica — para la tribu defensora. Era una medida y valoración de las masculinidades — nociones patriarcales de personalidad — enfrentadas una contra la otra. Además, las mujeres también eran consideradas las ‘posesiones más preciadas’ y las guardianas de la cultura y la identidad de la tribu. Al violar a las mujeres, los agresores transmitían el mensaje de que estaban pisoteando el núcleo interno de la tribu. Muchos de los casos de brutalidad también se produjeron en el interior o en las inmediaciones de iglesias, lugares sagrados que los Naga recién convertidos tenían en inmensa reverencia y temor. Estas violaciones hirieron y paralizaron profundamente la psique Naga. Para el Estado indio y sus fuerzas de seguridad, la intensidad de la violencia sexual estaba determinada en parte por la

‘otredad’ de los habitantes de la periferia. Al ser claramente diferentes en apariencia, hábitos alimenticios, cultura y religión de la ‘India continental’, la ‘otredad’ de los Naga era fácil.

Los periodos de violencia también se vieron salpicados por una serie de ‘iniciativas de paz’ que, en el mejor de los casos, fueron ‘intentos’ poco sinceros de encontrar una solución política. Esto no hizo más que avivar la resistencia, que se complicó con la formación del Consejo Nacional Socialista de Nagaland (CNSN) en 1980, que se escindió en la facción Isak—Muivah (CNSN—IM) y la facción S. S. Khaplang (CNSN—K) en 1988, pero todas con el objetivo declarado de establecer un Nagalim (Nagaland mayor) que abarcara todas las zonas habitadas por los Naga. Finalmente, en 1997, el CNSN—IM y el gobierno de la Unión firmaron un acuerdo de alto al fuego y desde entonces han celebrado más de ochenta rondas de diálogo para resolver el conflicto. En 2001 se firmó un acuerdo de alto al fuego similar con el CNSN—K.

Paralelamente a los intentos de reconciliación entre las distintas tribus Naga, continúan las disputas dentro de las tribus y las nuevas demandas de mayor autonomía. Organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Tribal Supremo, Naga Hoho, la iglesia³ y las mujeres bajo la égida de la Asociación de Madres Naga (AMN) han desempeñado un papel notable en la mediación para la paz y el cese de los asesinatos fratricidas entre las distintas facciones armadas. Aunque el papel de la AMN en la determinación de los términos del acuerdo de alto al fuego es especialmente loable, también ha ido más allá del cese inmediato de la violencia para cuestionar temas estructurales más profundos de la violencia contra las mujeres y sigue abogando por una participación más sustantiva de ellas en la construcción del Estado. El cuestionamiento del poder y el control también han sido abordados más recientemente por otros sectores de la sociedad civil, en particular por las organizaciones juveniles y las asociaciones empresariales; estas últimas formaron un comité de acción llamado Contra la Corrupción y los Impuestos Incesantes (CCII) para oponerse a la recaudación desenfrenada y múltiple de impuestos por parte de los grupos rebeldes Naga y para cuestionar su continua agresión y control. Sin embargo, el CNSN, mantiene que, como grupo revolucionario con mandato popular, tiene derecho a cobrar impuestos a la gente y seguir cosechando los beneficios económicos de la guerra.

Sin un resultado claro, las negociaciones de paz entre el Estado indio y el CNSN—IM se han prolongado terriblemente. Tras unas ochenta rondas de conversaciones, en 2015 se llegó a un Acuerdo Marco Naga con el Gobierno indio. Sin embargo,

este esperado acuerdo de paz Naga, ha estado envuelto en un profundo secretismo, sin claridad sobre su contenido o el estatus real de la controvertida demanda de unificación Naga.

El conflicto de Mizo: controles patriarcales, apatía y 'heridas espirituales'

Antes de la formación del estado de Mizoram en 1987, las colinas Mizo o Lushai eran un distrito del estado de Assam. Pero, al igual que las luchas Naga, las aspiraciones Mizo de autonomía y autogobierno también son anteriores a la independencia india, aunque llegaron a su punto álgido en la década de 1960. Cada cincuenta años aproximadamente se produce en la región un fenómeno ecológico cíclico llamado localmente Mautam o 'muerte del bambú', durante el cual ciertas especies de flores de bambú atraen una plaga de ratas que saquean cultivos y graneros, provocando hambrunas. La devastadora hambruna de 1959 fue recibida con negligencia y apatía por el gobierno de Assam, lo que ahondó el resentimiento y el descontento de los Mizo. El equipo de ayuda a la hambruna que se formó acabó convirtiéndose en el Frente Nacional Mizo (FNM). Centrado en el nacionalismo Mizo, con la autodeterminación como principal objetivo, el FNM lideró un movimiento secesionista que pretendía establecer una nación cristiana soberana para los Mizo. Este movimiento independentista Mizo duró hasta que se firmó el acuerdo de paz o Memorando de Acuerdo en 1986.

El movimiento se encontró con operaciones de contrainsurgencia extremadamente brutales y contundentes por parte del Estado indio. Se invocó la Ley de Áreas Perturbadas de Assam de 1955 y la Ley de Fuerzas Armadas (Poderes Especiales) de 1958, proclamando todo el distrito de Mizo como 'perturbado'. Esto permitió y proporcionó impunidad para los arrestos arbitrarios, las detenciones y los asesinatos de personas inocentes, la brutalización y la humillación extrema de los hombres, el saqueo de aldeas y la violación y el abuso sexual desenfrenado de las mujeres. Pero las operaciones más significativas, infames y memorables fueron los ataques aéreos de la fuerza aérea india con bombas incendiarias sobre territorio civil y sus propios ciudadanos. Esto no tenía precedentes en ningún lugar del país y era raro en cualquier otra parte del globo.

La otra operación, más profundamente subversiva, que provocó cambios estructurales de gran alcance y sigue siendo un recuerdo de la 'angustia colectiva', fue la introducción del plan de 'agrupación de aldeas' en virtud de las disposiciones de las Normas de Defensa de la India de 1962 y la Ley de Mantenimiento del Orden



Tribu nativa de Nagaland

Público de Assam de 1953. La reagrupación masiva de aldeas en unidades más grandes, supuestamente para una gestión más eficaz, se realizó mediante el desalojo y el reasentamiento coercitivo bajo la supervisión de los militares. Se llevó a cabo para someter a los voluntarios del FNM y cortar el suministro de alimentos y el acceso al refugio de los rebeldes, así como para perturbar y romper la cohesión de la comunidad. En virtud de la política de agrupamiento, casi el 80% de la población rural fue desplazada de sus aldeas y reasentada a lo largo de las carreteras. La resistencia fue respondida brutalmente con graves violaciones de los derechos humanos. Las mujeres fueron violadas, las cosechas que la gente había trabajado durante meses fueron incendiadas, las aldeas viejas fueron quemadas y los nuevos asentamientos se mantuvieron bajo el control de las fuerzas de seguridad. La agrupación provocó una agitación traumática, y la comunidad Mizo sufrió lo que se denomina una 'herida espiritual'. Las comunidades se desintegraron, la gente fue forzada a trasladarse a distintos campamentos y, a menudo, los acuerdos se firmaban a punta de pistola, mientras la gente veía impotente el incendio de sus casas, sus preciadas pertenencias y graneros, y la matanza de su ganado (Nunthara, 1981). Unos 5.200 pueblos se vieron afectados por el reagrupamiento y poblaciones enteras se convirtieron en súbditos del poder y la autoridad de las fuerzas de seguridad. Se intensificó la vigilancia, se desmontaron los conocimientos tradicionales y se prohibió el acceso a los bosques más

allá de los límites permitidos. En consecuencia, toda una comunidad de agricultores autosuficientes pasó a depender totalmente del gobierno. Para los Mizo, ésta ha sido una de sus experiencias más traumáticas y dolorosas, que ha dejado heridas psicológicas muy profundas, y ha tenido un impacto a largo plazo en el tejido social de la antes cohesionada sociedad Mizo. Para las mujeres que ya habían sido violadas sexualmente, la reagrupación añadió otra dimensión de trauma y pérdida de bases familiares de apoyo.

Al igual que en el movimiento Naga, mujeres de todas las clases sociales fueron atacadas, incluidas mujeres embarazadas. La brutal violación en grupo de dos mujeres jóvenes por las fuerzas de seguridad en 1966 es un caso muy recordado. En una fatídica noche, en represalia por un ataque del FNM a un convoy del Ejército Indio, los aldeanos fueron agrupados e incendiadas sus casas por el ejército. Dos mujeres, hijas de destacados dirigentes de la comunidad, fueron retenidas por separado en una choza donde los soldados se turnaron para violarlas. Recientemente, después de casi cincuenta años, el gobierno central anunció una indemnización de 500.000 rupias para cada una de las dos sobrevivientes. Pero era demasiado poco y demasiado tarde para estas mujeres gravemente traumatizadas, que ya no pueden llevar una vida normal, como la mayoría de las mujeres violadas de la época. Toda la comunidad Mizo – y las mujeres en particular – sufrieron en silencio, ya que no existía ninguna institución en la que las víctimas pudieran buscar justicia o reparación. Fueron estos crímenes y violaciones los que impulsaron a varios grupos de mujeres a unirse para formar la poderosa Mizo Hmeichhia Insuihkhawm Pawl (MHIP), que se comprometió a trabajar y luchar por los derechos colectivos de las mujeres Mizo.

Entusiasmado por el llamamiento del FNM a Zalenna o Libertad para Mizoram, las mujeres Mizo, tanto jóvenes como mayores, se unieron en masa al movimiento por la libertad y se alistaron en los Voluntarios Nacionales Mizo (VNM). En su mayoría recibieron formación en enfermería básica más que en combate, pero formaron la columna vertebral del movimiento proporcionando alimentos y sirviendo de mensajeras, llevando información estratégica. Dado que un gran número de mujeres solteras se ofrecieron como voluntarias en el FNM, el personal militar indio sospechaba de ellas y sufrieron mucho acoso. Mi investigación documentó a una voluntaria que recordaba cómo, antes de convertirse en miembro de pleno derecho del FNM, las fuerzas de seguridad indias la maltrataron en repetidas ocasiones y la humillaron en público con las manos y los pies atados. La humillación repetida la empujó a unirse a la lucha armada.

El movimiento de Assam: el romance juvenil de la resistencia, la desilusión y las mujeres

La muerte de un parlamentario en el estado de Assam en 1978 hizo necesarias unas elecciones parciales. Durante la elaboración de las listas electorales, se observó un aumento dramático del número de votantes registrados. Los posteriores informes de los medios de comunicación y una declaración de preocupación del propio Comisario Electoral por el gran número de colonos y votantes ilegales desencadenaron una fuerte respuesta de los organismos estudiantiles y sectores de la sociedad civil. Así se inició un movimiento estudiantil de masas llamado Agitación de Assam o Assam Andolan, que exigía una revisión de las listas electorales seguida de la privación del derecho al voto y la deportación de los votantes ilegales. En la movilización masiva de la sociedad civil, la gente se unió por millares, y las mujeres de todas las profesiones y condiciones sociales fueron especialmente activas y visibles. El tema de la explotación económica de Assam y su uso como ‘hinterland’ se sumó a las quejas iniciales y el movimiento bloqueó los envíos de crudo y otros recursos naturales del Estado al continente. El Estado indio trató la agitación con severidad y el propio movimiento, aunque concebido principalmente como una protesta no violenta, desembocó en unas consecuencias extremadamente violentas⁴.

Al mismo tiempo, un sector de la juventud de Assam decidió iniciar una resistencia armada contra lo que percibía como terrorismo de Estado y explotación económica. En 1979, formaron el Frente Unido de Liberación de Assam (FULA)⁵, una autoproclamada organización política revolucionaria que luchaba por la liberación y el establecimiento de un Assam soberano y socialista. Como pretendía establecer una identidad ‘asamesa’ unida, sin distinción de etnia, casta, clase, tribu o religión, resultaba tremendamente atractiva para las comunidades multiétnicas del Alto Assam, que de otro modo estarían marginadas, y consiguió tener fuertes bases de apoyo tanto en el Assam rural como en el urbano. Una vez más, las mujeres desempeñaron un papel importante y fueron fundamentales para establecer esta identidad. A pesar de su fuerte apoyo inicial, el FULA, a diferencia de los movimientos de resistencia Naga y Mizo, nunca se consideró un movimiento exclusivamente ‘assamita’. Y con los años, a medida que el FULA se desviaba de su objetivo inicial de desafiar la hegemonía económica del Estado indio y se asociaba cada vez más con actos extremos de brutalidad, violencia y extorsión económica, el apoyo que tenía fue cayendo en picada.

La violencia del FULA se ha visto igualada por la violencia y la agresión de la serie de operaciones de contrainsurgencia del Estado indio. Los miembros de la familia, especialmente las mujeres y los simpatizantes del FULA, llevaron la peor parte de estas

operaciones. En un claro mensaje de fuerza superior y como advertencia a quienes apoyaban o daban refugio a los militantes, las fuerzas de seguridad solían llevar a cabo ‘operaciones de barrido y búsqueda’ acompañada de violencia sexual, intimidación extrema y saqueos. Casi todos los casos denunciados se produjeron en zonas rurales remotas del Estado, las periferias de la periferia. Las entrevistas con excombatientes muestran que muchas mujeres que solo estaban involucradas marginalmente con el FULA se convirtieron en miembros y combatientes comprometidas tras las atrocidades reales o debido al miedo a las mismas (Goswami, 2015).

El FULA ha hecho un llamamiento a la paz en distintos momentos, sobre todo con la formación de un Grupo Consultivo Popular (GCP) en 2005. La fallecida Dra. Mamoni Raisom Goswami, eminente escritora feminista, desempeñó un papel fundamental en el descongelamiento de la resistencia del FULA y lo impulsó a entablar negociaciones de paz. El GCP celebró tres rondas de diálogo con el gobierno de la Unión durante un año, pero el proceso colapsó. Finalmente, las negociaciones de paz tomaron un rumbo más definitivo en 2009 tras las detenciones de altos dirigentes del FULA y fueron facilitadas en gran medida por eminentes ciudadanos de Assam.⁶ A pesar de la oposición a las conversaciones de paz por parte de un sector del FULA, las negociaciones de paz que comenzaron en mayo de 2010 —con una mujer en el equipo del FULA— se han mantenido desde entonces.

Fuera de la estructura patriarcal de los acuerdos de paz

El ‘otro’ periférico y la violencia sexual

A pesar de la creciente atención internacional a la violencia sexual y del creciente estatus de la India como actor global responsable en una serie de temas, en las ‘periferias’ del país la justicia por violencia sexual perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado sigue siendo esquiva. La violencia sexual por parte de grupos armados no estatales e individuos sigue siendo invisible y, lo que es más importante, los temas de violencia sexual siguen quedando fuera del ámbito de las estructuras patriarcales y de los términos de referencia de las conversaciones de paz y las negociaciones de paz (Goswami, 2017).

La violencia sexual tiene un efecto grave y corrosivo en la sociedad, intimida y aterroriza no solo a la víctima, sino también a las familias y a toda la comunidad. En la mayoría de los casos, se trata de un acto de dominación basado en una compleja red de prejuicios socioculturales de género y está impulsado políticamente (Goswami, 2017).

En contextos de conflicto, es esencialmente una afirmación de poder y superioridad perpetrada por quienes tienen poder contra una población objetivo que no lo tiene y, en muchos casos en los tres contextos citados, es un ejemplo de ‘hacer del castigo un espectáculo’ (Foucault, 1995).

La violencia sexual en la región se ha desplegado para establecer el dominio y la supremacía del Estado indio (Goswami et al., 2014). Se ha utilizado para torturar y humillar a la gente hasta la sumisión, así como para castigar y humillar a un grupo enemigo o a una comunidad que se había opuesto o desafiado la idea de un Estado nación indio homogéneo y unificado. Tras la independencia, los movimientos armados en la región periférica del Noreste de India fueron una afrenta a la idea del Estado nación y del nacionalismo. Además, la marginación social, cultural y económica de las periferias, más la percepción de estas como los otros, también contribuyeron a la alta incidencia de la violencia en la región por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Entre los diversos casos de violencia sexual y tortura que tuvieron lugar durante las luchas Naga, el incidente de Oinam Hill Village, ocurrido durante la Operación Bluebird de las fuerzas de seguridad indias, se destaca por su nivel de brutalidad y está fuertemente grabado en la memoria del pueblo Naga. En un fatídico día de 1987, presuntos rebeldes armados atacaron un puesto del Ejército Indio a plena luz del día y mataron a nueve soldados. La operación de contrainsurgencia sin precedentes lanzada por las fuerzas de seguridad indias estuvo acompañada de violaciones, torturas, incendios provocados, vandalización de la propiedad pública y privada, detenciones ilegales, etc. Toda la población de la aldea de Oinam fue detenida en una zona abierta durante muchos días. Las mujeres fueron violadas y vejadas abiertamente y dos mujeres embarazadas fueron obligadas a dar a luz a la vista de las fuerzas de seguridad indias.

Del mismo modo, durante los veinte años de rebelión armada, las colinas de Mizo, un territorio periférico del Estado indio, fueron testigo de horribles actos de violencia sexual y medidas punitivas perpetradas por las fuerzas de seguridad indias. La violencia sexual era una forma de tortura extrema y, para las mujeres que la sufrieron, la tortura ha permanecido como un recuerdo doloroso y privado. En una investigación que llevé a cabo en la década de 1990 en el marco de una organización de defensa de los derechos de la mujer, North East Network, las sobrevivientes de Mizoram hablaron de su terrible experiencia por primera vez, unos veinte años después del incidente. Para ellas, el dolor y el horror de dos décadas no se habían superado, ya que nunca habían recibido apoyo para afrontar esos recuerdos. Mientras las mujeres

hablaban, los hombres permanecían inmóviles, muy avergonzados por el estallido y la demostración pública de emociones en una comunidad por lo demás bastante estoica, y quizá también por no haber ‘protegido’ a sus mujeres.

La violencia sexual consigue denigrar y destruir a las comunidades que las sufren porque las estructuras sociales y culturales están muy arraigadas en el concepto de género y la noción de que la pureza/impureza de la mujer es propiedad de los hombres. Para los hombres de las comunidades tribales del Noreste de la India, comunidades profundamente ligadas a los usos culturales y sociales de la tradición y las costumbres, la violencia sexual contra las mujeres de sus comunidades es la máxima humillación y destruye su masculinidad altamente valorada.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas indias no son las únicas que ejercen la violencia sexual. Aunque ha sido relativamente fácil sacar a la luz la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ha sido mucho más difícil identificar o conseguir que la gente hable de la violencia sexual ejercida por los rebeldes armados. Aunque estos casos son menos numerosos, las pautas seguidas son similares. El prolongado proceso de paz y los tiempos de paz entre los Naga, por ejemplo, han creado círculos concéntricos de periferia, y en ese ‘otro periférico’ las mujeres siguen siendo el otro más vulnerable. Aparte de los casos individuales de violencia sexual y tortura por parte de grupos no estatales en incidentes parecidos al caso Oinam, activistas de los derechos de la mujer del estado de Manipur han hablado de violaciones de mujeres que han tenido lugar en aldeas remotas de la periferia por parte de grupos militantes, ya sea para establecer la supremacía sobre un grupo rival o para dar una lección a toda una aldea. Además, en los pocos casos documentados por la Red del Noreste, surgen dos categorías de mujeres que parecen haber sido el objetivo — mujeres cuya comunidad es social, étnica o económicamente periférica al grupo militante dominante y mujeres fuertes e independientes que se han atrevido a cuestionar los excesos o los dividendos de la paz de los que disfrutaban unos pocos privilegiados, o que expresan su disenso o simplemente afirman su individualidad.

Aunque todas las mujeres se ven afectadas negativamente en situaciones de conflicto armado prolongado, en el caso de una mujer percibida como asociada a un grupo militante, ya sea como combatiente activa o como simpatizante, las violaciones son especialmente brutales, aunque la respuesta general es diferente. En Assam, los grupos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil han protestado contra la violencia sexual, pero cuando se trata de una mujer combatiente la respuesta es diferente. En las actuales conversaciones de paz entre los líderes del

FULA y el Gobierno indio, hay una cláusula sobre los miembros desaparecidos de la organización, pero ninguna para las sobrevivientes de violencia sexual. En las entrevistas realizadas a mujeres miembros del FULA, queda claro que, para la mujer combatiente, la condición de víctima está estrechamente relacionada con las nociones de agencia y justicia y, por lo tanto, debe entenderse y abordarse teniendo en cuenta esa complejidad. Una mujer de mediana edad visita constantemente un campamento del FULA designado por el Estado, donde viven los miembros del grupo mientras se desarrollan las negociaciones de paz. Su hija embarazada de ocho meses, que era un cuadro del FULA, fue brutalmente violada en grupo y asesinada por las fuerzas de seguridad en un acto que se justificó como ‘en cumplimiento del deber’. El nivel de brutalidad, sin embargo, también revela una justificación más profunda, insidiosa y misógina — la de enseñar una lección a una mujer que ha transgredido las normas sociales al elegir asociarse con un grupo militante. Para la madre de la militante, un aspecto importante de la justicia es que haya un reconocimiento simbólico del papel de su hija en la lucha armada, y sus frecuentes visitas al campamento del FULA son para negociar eso (Goswami, 2017).

El lienzo militarizado: comunidades brutalizadas, violencia sexual y cultura de impunidad

La violencia sexual en el Noreste de la India se facilita sobre todo por la aplicación de la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, que se utilizó por primera vez en 1960 para frenar la lucha de los Naga como medida temporal, pero que ha seguido vigente en distintas partes de la región durante más de seis décadas. Cuando se promulgó inicialmente, el CNN era el único movimiento de resistencia de la región, pero desde entonces los grupos armados se han multiplicado, desmintiendo el argumento de que la Ley de Poderes Especiales es necesaria para frenar y contener los movimientos armados. Se aboga enérgicamente por su derogación, siendo lo más notable el ayuno de protesta sin precedentes de dieciséis años de Irom Chanu Sharmila, que estuvo detenida y alimentada a la fuerza durante esos dieciséis años (del 5 de noviembre de 2000 al 9 de agosto de 2016). Un análisis del uso de la Ley de Poderes Especiales indica de manera clara que se trata esencialmente del uso ilegal de fuerza excesiva y que ha creado un régimen legal que ha dado lugar a la impunidad de las fuerzas armadas, permitiéndoles el uso de cualquier estrategia o táctica sin las limitaciones de los principios legales o las garantías constitucionales. En las denominadas zonas perturbadas donde la Ley de Poderes Especiales está en operación, las estructuras y los procesos tienden a verse desbordados por la autoridad y el poder del ejército, dado que la Ley protege a las fuerzas de seguridad de la detención y el procesamiento penal mediante disposiciones de inmunidad legal

que exigen que la autoridad ejecutiva correspondiente conceda una sanción previa para el enjuiciamiento. La ley otorga poderes extraordinarios a todo militar, incluido todo oficial comisionado, oficial de órdenes, suboficial y a cualquier otra persona de rango equivalente en las fuerzas militares, para utilizar la fuerza letal si se considera necesario; detener sin orden judicial, utilizando la fuerza que sea necesaria, incluido el asesinato; y de nuevo sin orden judicial, a entrar y registrar cualquier local por mera sospecha.

Los organismos internacionales de derechos humanos, incluido el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer), han pedido en repetidas ocasiones la derogación o revisión de la Ley de Poderes Especiales. Estas posturas se vieron reforzadas a nivel nacional en 2013 por el Comité de Justicia J. S. Verma, que expresó la preocupación de que “la violencia sexual sistemática o aislada, en el proceso de las tareas de Seguridad Interna, está siendo legitimada por la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas”. El comité recomendó medidas de amplio alcance para abordar esta realidad y revisar la continuidad de la Ley. Subrayando que las mujeres de las zonas de conflicto tienen derecho a la misma seguridad y dignidad que los ciudadanos de cualquier otra parte del país, el Comité recomendó incluir la violencia sexual contra las mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas o personal uniformado en el ámbito del derecho penal ordinario; tener especial cuidado en garantizar la seguridad de las mujeres que son denunciantes y testigos en casos de agresión sexual por parte de las fuerzas armadas; e instituir comisionados especiales para la seguridad de las mujeres en todas las zonas de conflicto del país. Sin embargo, los oficiales del ejército defendieron la ley, afirmando que eliminar el requisito de sanción en casos de violencia contra las mujeres, como recomendaba el Comité, tendría un efecto ‘desmotivador’ sobre el personal del ejército.⁷ Por el contrario, es bastante obvio que un riesgo muy alto de abuso es inherente a poderes que se formulan de forma muy amplia y en un lenguaje muy vago.

En el actual contexto de paz negativa, en el que los niveles de violencia directa por parte de las fuerzas estatales han disminuido, resulta más preocupante la cultura de impunidad y violencia militarizada que esta ley ha perpetuado en la región. Basándose en una incisiva investigación llevada a cabo en Nagaland, Kikon (2017) sostiene que el Estado indio está profundamente implicado en la escalada de la cultura de la violencia sexual y la impunidad en Nagaland porque la impunidad que la Ley de Poderes Especiales proporciona a las fuerzas de seguridad indias ha legitimado dicha cultura. Pero el Gobierno indio aún no ha asumido su papel y su responsabilidad

en la destrucción de la propiedad, el trauma psicológico y la pérdida de vidas en el conflicto Indo—Naga, así como en la ruptura del tejido social de la sociedad Naga. La investigación de Kikon respalda mi argumento de que el prolongado proceso de paz de la lucha Naga no ha hecho más que intensificar la violencia contra las mujeres Naga. Kikon señala que la cultura de la impunidad que ha calado en la sociedad Naga permite a los autores de la violencia sexual eludir la justicia, mientras que sus víctimas se ven atrapadas entre las exhortaciones de los grupos de defensa de las mujeres a no sufrir en silencio y el estigma social ligado a la violencia sexual que hace recaer la culpa únicamente a la mujer. De hecho, para una comunidad que ha conocido el uso de la violencia sexual como arma de dominación, resulta totalmente incongruente que esa misma comunidad haga comentarios como ‘los hombres pueden oler las señales sexuales que emiten las chicas y atraen a los hombres y son violadas’ (ibíd.:104).

En la actualidad, las mujeres Naga se encuentran atrapadas entre diferentes espacios de poder y un mayor control patriarcal por parte de la comunidad, la Iglesia y el Estado. Los años de militarización han tenido un efecto duradero en la sociedad Naga, desgarrando a las comunidades, acentuando las desigualdades inherentes a las normas y prácticas tradicionales y creando nuevos ‘salvadores’ y nuevos desequilibrios de poder. Las familias se desintegraron cuando la mayoría de los hombres pasaron a la clandestinidad para unirse a la lucha armada, dejando a las mujeres la tarea de sostener y mantener unida a la familia. Aunque la religión y la iglesia proporcionaron consuelo y apoyo a muchas de estas mujeres, también se convirtieron gradualmente en una indiscutible alternativa de poder y control patriarcal. Esto es igualmente cierto para las mujeres de Mizoram. Aparte de las mujeres que perdieron a sus hombres en la resistencia, muchas de las propias mujeres del FNM también recurrieron a la iglesia para lidiar con sus decepciones y traumas. Algunas incluso justifican la falta de espacio para la participación política de las mujeres diciendo que el trabajo para Dios es muy superior al trabajo político. Así pues, a pesar de que en estas dos comunidades hay un número considerable de hogares encabezados por mujeres que se enfrentan solas una serie de retos socioeconómicos, y los gestionan, esto no ha cambiado necesariamente las posiciones o perspectivas de las propias mujeres. Más bien, los valores y controles patriarcales y las nociones de castidad moral han aumentado enormemente. No es sorprendente, por tanto, que en los casos de sobrevivientes de violencia sexual y embarazos adolescentes en la sociedad Naga, ‘es el código moral y cultural centrado en el himen’ (Kikon, 2017: 105), el que se perpetúa y se refuerza agresivamente.

El continuo de la violencia: lo público y la despolitización de lo privado

La naturalización del poder patriarcal, las reivindicaciones territoriales sobre el cuerpo femenino y el aumento de la violencia en lo privado confluyen en el relato de Kikon sobre una quinceañera sobreviviente de violencia sexual que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de su padre, un cuadro de un grupo armado Naga que vivía en el campo de alto al fuego (2017). Tanto el prolongado proceso de paz de Naga como el de Assam han dado lugar a que miles de hombres desarmados y aparentemente sin poder languidezcan en los campamentos designados a la espera de un futuro incierto, pero afirmando su poder y control en la esfera privada. La documentación de la Red del Noreste (Hazarika y Sharma, 2014) también muestra la gran vulnerabilidad de las mujeres a la violencia doméstica perpetrada por los militantes rendidos en Assam que no languidecen en los campamentos, sino que se han hecho extremadamente poderosos con los paquetes de rendición y los acuerdos que firmaron con el Estado indio. Si la violencia doméstica en general sigue siendo muy poco denunciada, cuando se trata de una pareja íntima que también es un exmilitante armado y machista, la posibilidad de que se denuncie es nula.

El discurso feminista ha sostenido durante mucho tiempo que hacer una distinción entre la esfera pública y la privada despolitiza la esfera doméstica. Por lo tanto, a menos que la justicia se reconceptualice a partir de la experiencia vivida por las mujeres, la violencia cotidiana que estas sufren seguirá siendo marginal e invisible. Como subraya Kikon: “Toda mujer Naga ha sufrido humillaciones e insultos por parte de los hombres por su condición de mujer, pero estos hombres no son forasteros o extraños. Son sus ‘respetados’ tíos, primos y, en algunos casos, sus padres o hermanos, que nunca dejan de recordarles los papeles inferiores predestinados que ya se les han asignado” (Kikon, 2002: 174—82). Además, sostiene que, en el contexto actual de los Naga, las dos instituciones que más se libran de la violencia sexual y refuerzan la impunidad que proporciona la Ley de Poderes Especiales son la familia y los grupos armados.

La historia de la joven sobreviviente respalda acertadamente la postura feminista de que la violencia solo se aborda de forma integral cuando se tratan las cuestiones estructurales que la subyacen y la posibilitan. Se observaron diferentes dimensiones cuando el incidente fue denunciado a la policía por la tía de la niña, ya que el padre y la tía pertenecían a grupos armados rivales. Así, el caso pasó por distintas jurisdicciones legales — tribunales insurgentes, reuniones familiares consuetudinarias y comisarías de policía estatales. La joven no obtuvo reparación, ya que la compleja dinámica de las

instituciones patriarcales en la esfera pública despolitizó completamente la privada. La rivalidad política y familiar estaban entrelazadas y los organismos estatales se mostraban reacios a abordar un asunto ‘interno’ que también implicaba a grupos armados rivales. Kikon señala, con razón, que este caso es de vital importancia porque el acto de violencia sexual transgredió los límites de la familia, la política y la jurisdicción legal de los grupos armados rivales, así como de los organismos estatales. Y, sin embargo, finalmente ninguna de las instituciones intentó responsabilizar al autor de la violación privada y conseguir justicia para la joven (Kikon, 2017).

Pero las violaciones no son solo un asunto interno. Con una resolución concluyente que sigue eludiendo las conversaciones de paz de hace dos décadas, la sociedad Naga se encuentra hoy en un prolongado proceso de paz atrapada en lo que parece ser un estado permanente de no permanencia. Por otra parte, tanto en el contexto Naga como en el de Assam, los beneficios del progreso económico han creado círculos concéntricos de periferia a medida que la clase media privilegiada empieza a disfrutar de los dividendos de los tiempos de paz. Un contexto tan frágil requiere agilidad y una gran vigilancia de las maniobras, posibilidades y afiliaciones políticas, por muy defectuosas o temporales que sean. Y la justicia de género es lo primero que se regatea, ya sea por moralidad o por conveniencia política y económica. El hecho de que las mujeres no sean percibidas como individuos, sino más bien como la valiosa propiedad de una familia o las portadoras de la identidad cultural de una comunidad, hace que esto sea fácil de hacer.

La misma lógica sustenta la acción que a menudo emprenden los agentes no estatales. Mientras los organismos estatales dudan en actuar, los grupos armados de la región son famosos por impartir sus propias formas de justicia. En los casos de violencia sexual, en particular, las autoridades que compiten entre sí y en las que participan agentes estatales y no estatales suelen presentar sus propias versiones de la justicia. En muchos casos, los autores de violencia sexual — civiles o combatientes — han sido condenados a la pena capital al ser juzgados y declarados culpables en los tribunales de los grupos armados. No todas las mujeres se oponen a estas acciones, pero un sector importante sí lo hace, señalando que estos intentos de los grupos armados son simplemente para salvar la cara sin hacer justicia a la víctima. En un caso muy sonado de violencia sexual por parte de cuadros del CNSN—IM se produjo un enfrentamiento entre la organización de mujeres Totimi Hoho y el grupo armado, en el que las mujeres exigían que los autores fueran entregados a la policía estatal para su enjuiciamiento, mientras que los grupos armados mantenían que los violadores serían juzgados por su propia policía.

Las mujeres también llaman la atención sobre los altos niveles de prejuicios de clase y étnicos en las respuestas o en los juicios llevados a cabo por los actores no estatales armados o desarmados. Cuando el agresor pertenece a la misma tribu o comunidad hay una gran indulgencia,⁸ pero cuando se trata de alguien fuera del círculo étnico aceptable la reacción puede ser extremadamente violenta, como demostró el incidente del linchamiento de Dimapur en 2015.⁹ Es muy probable, por tanto, que la rabia que provocó la muerte del acusado no se debió a que se quisiera justicia para la sobreviviente de la violación, sino más bien a la indignación por la temeridad de que un forastero reclamara el cuerpo de una mujer, que es propiedad de la comunidad. Como resultado de años de militarización, lo que ha surgido en la actualidad es la actitud de que el no Naga es un enemigo distinto, mientras que el mito de que los hombres Naga defienden automáticamente la justicia y el honor y no aceptan la violencia sexual es una negación colectiva de la violencia de género en la sociedad Naga.

Tradiciones sagradas: el derecho consuetudinario y el tema de la mujer

En todo el mundo existe actualmente un importante conjunto de investigaciones y análisis que tratan de comprender la violencia contra las mujeres en diversos entornos, como las zonas de conflicto, los hogares y la familia. Lo que, sin embargo, no se analiza adecuadamente son las desigualdades estructurales de los hogares o las comunidades, las estructuras políticas y económicas que sustentan las desigualdades de género y aumentan la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia. Más allá del control omnímodo de la iglesia cristiana patriarcal, tanto los Naga como los Mizo también se rigen intrínsecamente por sus leyes y prácticas consuetudinarias, muchas de las cuales son lugares de profunda desigualdad estructural, ya que sostienen relaciones de poder inequitativas en función del género. Una premisa importante de las negociaciones de paz tanto Naga como Mizo ha sido el compromiso de respetar y proteger estas prácticas consuetudinarias. En la actualidad, el artículo 371(A) de la Constitución india permite a Mizoram y Nagaland elaborar sus propias leyes, en consonancia con el derecho consuetudinario.¹⁰ Los hombres pueden optar por no estar sujetos a algunas de las normas positivas y códigos de conducta establecidos en el derecho consuetudinario, pero las mujeres tienen que respetar sin cuestionamientos todo lo que es 'tradicional'. Entre otras cosas, las leyes consuetudinarias de estas dos comunidades tan patriarcales niegan a las mujeres los derechos a la tierra y a la herencia, así como un papel en la toma de decisiones. Estas leyes y prácticas consuetudinarias encarnan lo que Galtung denomina violencia cultural, ya que se citan para justificar o legitimar la violencia estructural y negar a las mujeres su condición de personas.

Tradicionalmente, tanto las mujeres Naga como las Mizo se han visto limitadas por las normas de género de la cultura y las costumbres, con una división sexual del trabajo y una identidad muy bien definidas. Las mujeres Mizo participaron en gran número en ese movimiento de resistencia, pero en lo que respecta al discurso del movimiento del FNM y el nacionalismo Mizo, esta resistencia se percibió principalmente como organizada y dirigida por hombres, mientras que la contribución de las mujeres quedaba marginada e invisible. A menudo se destaca la imagen de las mujeres como meras víctimas de la violencia sexual, pero hasta la fecha la contribución y la participación de las mujeres se han excluido sistemáticamente del discurso general del movimiento del FNM. El tema de las mujeres — víctimas o agentes — no figuró en absoluto en la agenda durante las negociaciones de paz con el Estado indio, sino que la protección total de todas las leyes y prácticas consuetudinarias, incluidas las que discriminan por razón de género, fue una cláusula no negociable. Así, mientras que el acuerdo de paz de Mizo firmado con el Gobierno indio protegía las prácticas consuetudinarias de los Mizo en el posconflicto, las mujeres Mizo, bajo la égida del MHIP, han tenido que librar una larga y dura batalla para conseguir los derechos de herencia y a la participación política, que se ha saldado con cierto grado de victoria. Antes, las mujeres Mizo se veían muy limitadas a la hora de mostrar cualquier forma de disenso, incluso en casos de violencia doméstica extrema. Según el derecho consuetudinario Mizo, un hombre podía divorciarse de su mujer con solo pronunciar las palabras *Ka Mei Che* (me divorcio de ti). La mujer divorciada debía abandonar inmediatamente el domicilio conyugal y todas sus pertenencias, incluso si todo se había adquirido conjuntamente. Tampoco tenía derecho a sus hijos y a veces ni siquiera el derecho a visitarlos. Cualquier desacuerdo o cuestionamiento por parte de la mujer solía dar lugar a que los hombres se divorcieran de ellas. Sin embargo, gracias a los esfuerzos concertados del MHIP, esto cambió con la Ordenanza de Divorcio de Mizoram (ODM) en 2008, que posteriormente se adoptó como la Ley de Matrimonio, Divorcio y Herencia de Mizo en 2014.

Así mismo, a pesar de la gran contribución y sacrificio de las mujeres Naga por su causa el derecho consuetudinario Naga les niega los derechos de herencia y la participación en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, los estudios sociológicos indican que no existe un cuerpo homogéneo de leyes consuetudinarias entre la comunidad Naga, sino que dichas leyes son de naturaleza plural y difieren de una tribu a otra y de una aldea a otra. Sin embargo, muy a menudo, los órganos tribales Naga, dirigidos por hombres, interpretan las leyes consuetudinarias de manera uniforme, con el objetivo de negar a las mujeres sus derechos.

Como subraya Galtung, la transformación debe ser capaz de responder a los retos, necesidades y realidades de la vida sobre el terreno. Para las mujeres Naga bajo la égida de la AMN, el reto ha consistido en introducir cambios en sus leyes consuetudinarias, extremadamente discriminatorias en materia de género, relativas a los derechos de herencia y de propiedad de la tierra, así como lograr el éxito en su larga batalla por la inclusión en la toma de decisiones políticas.¹¹ Como ha demostrado una y otra vez el análisis feminista, la violencia física que sufren las mujeres durante las guerras y los conflictos está estrechamente relacionada con su estatus y sus derechos en tiempos de paz, incluidos sus derechos socioeconómicos dentro de sus propias comunidades. La violencia es, pues, un ‘continuum’ posibilitado por los acuerdos sociales jerárquicos, tanto en la esfera pública como en la privada. Por lo tanto, un enfoque de economía política feminista busca reconceptualizar la justicia a partir de las experiencias vividas por las mujeres (True, 2014). A medida que las prolongadas negociaciones de paz Naga llegan a su fase final y la comunidad busca trazar una nueva hoja de ruta para su futuro, la lucha de las mujeres por la participación política y económica y por el reparto de poder y recursos adquiere una importancia crítica. La falta de poder político y económico priva a la mujer Naga de su condición de persona y la hace especialmente vulnerable a la violencia y carente de voz ante cualquier violación. En noviembre de 2016, parecía haberse abierto un emocionante capítulo en la historia política y feminista Naga. La Asamblea de Nagaland aprobó inicialmente la Ley Municipal de Nagaland (Primera Enmienda) en 2006, que preveía la reserva del 33% de los escaños para las mujeres en los organismos locales urbanos. Pero como la AMN instó al gobierno a celebrar elecciones con las cuotas, este — presionado por los hombres de las tribus — recurrió a las disposiciones constitucionales especiales del artículo 371(A) y aprobó una resolución según la cual tal reserva para las mujeres entraría en conflicto con el derecho consuetudinario. El Tribunal Superior confirmó la postura del gobierno estatal y la NMA recurrió al Tribunal Supremo, donde está pendiente la sentencia definitiva.

Por primera vez, parece haber unanimidad entre los hombres Naga de todas las tribus, a veces enfrentadas, sobre un mismo tema — la oposición a reservar plazas para las mujeres, alegando leyes y normas consuetudinarias. En cuanto se notificaron las fechas de las elecciones cívicas, varios organismos tribales llamaron a boicotear las elecciones si se permitían los puestos reservados para las mujeres. Lo que siguió fue una agresión extrema, incendios provocados, violencia e intimidación. Muchas mujeres se vieron obligadas a retirar sus candidaturas. Presionadas por su familia y su comunidad, las mujeres también se polarizaron. La postura de los venerados líderes rebeldes también ha sido ambivalente: aunque simpatizan con las mujeres, que siempre han sido su

base de apoyo más fuerte, no han hecho ninguna declaración pública definitiva. Para las pocas mujeres Naga que han roto filas con sus propias comunidades y defienden su postura, se trata de una lucha que va más allá de la representación electoral y tiene que ver con el reparto del poder y la justicia de género.

La eterna búsqueda de la mujer: justicia y dignidad

Los arreglos sociales estructurales y la justicia imaginada por las mujeres frente a la violencia sexual

Los contextos de conflicto en el Noreste de la India – sobre entre los Naga y los Mizo – ilustran cómo las complejidades de la justicia, las desigualdades y las transiciones son especialmente difíciles de resolver cuando se trata de género. La reciente situación de los Naga plantea preguntas importantes sobre lo que constituye el núcleo de la lucha de las mujeres en contextos y transiciones políticamente controvertidos. ¿Cómo imaginan las mujeres la justicia? ¿Cómo negocian y maniobran con sus múltiples y a menudo conflictivas identidades? ¿Y cómo equilibran la justicia con los compromisos sociales y políticos en las comunidades involucradas en luchas armadas prolongadas y en la resistencia?

Está claro que la justicia imaginada por las mujeres Naga para la violencia sexual implicaría un reconocimiento de la personalidad de las mujeres y una justicia basada en nociones de igualdad, y no vista a través del lente patriarcal de la protección de la propiedad y los cuerpos. Cada vez se reconoce más que, para garantizar la justicia, especialmente en las transiciones posconflicto, las personas afectadas deben tener acceso a los procedimientos políticos y voz en las decisiones que afectan a sus vidas.

Aguilar (2011: 128–9) subraya que un paso esencial para identificar las diferentes dimensiones de la experiencia de las mujeres durante y después del conflicto es comprender ‘los déficits y las brechas de género en las estructuras legales, económicas y políticas que existían antes del conflicto: la dinámica del poder y el control sobre los recursos económicos; la dimensión de género del sistema económico dentro de las comunidades y familias; y los factores culturales que determinan el estatus social y económico en contextos específicos.’ En el contexto Mizo, por ejemplo, el plan de reagrupación de aldeas fue doblemente *desempoderador* para las mujeres, ya que, entre otras desventajas, les arrebató el poder y el control sobre la producción económica y el valioso conocimiento de los contextos locales. A nivel comunitario, la impugnación de las leyes consuetudinarias por parte de las mujeres Naga y Mizo es

un paso fundamental para corregir los déficits y brechas de género en las estructuras económicas y políticas ancestrales.

Estudiosos de una serie de campos relacionados y superpuestos identifican la violencia estructural como un problema crítico. Basándose en los análisis de Galtung (1969) y Farmer et al. (2006) y aplicándolos a las transiciones, Evans (2016), por ejemplo, explica que la injusticia social y la violencia estructural son de hecho sinónimos y denotan una condición en la que ocurre la violencia, — no porque se precipite por las acciones directas de individuos concretos contra otros individuos específicos, sino más debido a los acuerdos sociales estructurales incrustados en la organización política y económica del mundo social. Como afirman Farmer et al. (2006), estos acuerdos son a la vez estructurados y estrictos, limitan la capacidad de acción de sus víctimas y son violentos porque causan lesiones profundas. Para lograr una paz sostenible en esta región de conflictos prolongados, es necesario dismantelar las jerarquías de poder entre las estructuras estatales federales y periféricas que determinan la producción y la reproducción y rigen la distribución y el uso de los recursos, la autoridad y los beneficios. Para las mujeres, el dismantelamiento de las jerarquías de poder debe ir más allá de lo obvio. El discurso feminista aboga desde hace tiempo por un enfoque interseccional que explore el modo en que el género se cruza con otras identidades para producir tanto oportunidades como opresión o múltiples formas de discriminación. Para las mujeres Naga y Mizo, los acuerdos sociales de sus respectivas comunidades están arraigados en leyes y prácticas consuetudinarias estructuradas que han ido restringiendo su agencia como miembros de pleno derecho de sus comunidades. Por tanto, aunque la justicia para la violencia sexual es importante, en un momento de transición política, reconocer y corregir la discriminación sistémica y arraigada son pasos esenciales para aplicar las garantías de no discriminación, igualdad de género y paz justa. En el actual contexto de posconflicto y de paz prolongada, garantizar un fuerte enfoque de género en la dinámica del poder y el control de los recursos económicos es de vital importancia y podría ser el punto de apoyo del activismo de las mujeres para abordar la violencia estructural.

Economía política de la justicia de género: la necesidad de un enfoque transformador

Un enfoque emergente que está más estrechamente vinculado a las realidades, necesidades y expectativas sobre el terreno en un período de posconflicto. es el de la justicia transformadora, que implica un ‘cambio de enfoque de lo jurídico a lo social y político, y del Estado y las instituciones a las comunidades y las preocupaciones cotidianas’ (Gready y Robins, 2014: 340). Al elaborar lo que implica la justicia

transformadora y contratándola con la justicia transicional, Gready y Robins proponen que tal vez un enfoque transformador sea más pertinente para abordar las necesidades y realidades de los contextos de los procesos de paz. Sin duda, es más pertinente para las mujeres, porque ‘la justicia transformadora no es el resultado de una imposición de arriba a abajo de marcos jurídicos o modelos institucionales externos, sino de una comprensión y un análisis de abajo a arriba de las vidas y las necesidades de las poblaciones’ (ibíd.: 340). La transformación, por tanto, no se limita simplemente a los acuerdos políticos, sino que incluye una serie de enfoques que incorporan dimensiones sociales, políticas y económicas.

La justicia transformadora, en particular en un contexto postconflicto, es por tanto de especial importancia para las mujeres y otras comunidades marginadas, porque en su esencia implica un proceso de transformación de las jerarquías opresivas y las estructuras sociales discriminatorias, y la posibilidad de una paz positiva. Como afirma Chinkin (2009), a pesar de los enormes desafíos, un momento de posconflicto o una sociedad que sale de un conflicto también puede presentar una oportunidad estratégica para lograr la transformación en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. En estos periodos de posguerra, durante un breve lapso, se abre una pequeña ventana de oportunidad en la que pueden desarrollarse e institucionalizarse una serie de medidas, incluidas las legislativas y políticas, para proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, así como para abordar seriamente las cuestiones de las reparaciones, la seguridad humana, la rendición de cuentas, la paz y la justicia, y la agencia social y política.

Los tres contextos ponen de manifiesto que las desigualdades de género obstaculizan profundamente el acceso de las mujeres a una serie de derechos, que se agravan durante el conflicto y a menudo se descuidan en la fase posterior al mismo. Las mujeres se ven doblemente víctimas de las desigualdades arraigadas y del impacto del conflicto. Los sistemas de guerras y conflictos armados no solo exacerban las desigualdades estructurales y vulnerabilidades existentes, sino que también tienen implicaciones de gran alcance para los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, abordar el impacto sobre las mujeres exclusivamente a través del lente de la violencia sexual directa es insuficiente, pues ignora las dimensiones de género del conflicto. Lo importante es destacar repetidamente el hecho de que las desigualdades de género son un continuum en la vida de las mujeres. Como sostiene Schmid (2012), durante los conflictos las mujeres no solo sufren la discriminación y las violaciones existentes, sino también violaciones múltiples e interrelacionadas de los derechos humanos. Muestra, por ejemplo, que una mujer que pierde a su marido o a sus hijos no solo sufre las violaciones directas de sus derechos civiles y políticos (por ejemplo, el asesinato

o la desaparición de sus seres queridos), sino que a menudo también padece graves consecuencias económicas, sociales y culturales al convertirse en la única cuidadora del hogar. Las mujeres también se ven afectadas de forma desproporcionada por la negación y la discriminación en cuestiones como el acceso a la tenencia de la tierra, la propiedad, la educación o la salud (ibíd.). En las entrevistas de la autora con las mujeres del FULA, estas hablaron de la ‘violencia’ de los tiempos de paz, de su incapacidad para salir de las privaciones socioeconómicas y de las arraigadas desigualdades de género a las que tuvieron que enfrentarse como mujeres civiles. Y la lucha actual de las mujeres Naga por estar representadas en la toma de decisiones, en este importante momento político de la historia Naga, es un imaginario colectivo del futuro y un llamado a la rectificación de las negaciones y discriminaciones.

Como sostiene Aguilar (2011), la ‘verdadera transformación social’ solo puede lograrse con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que estos derechos son cruciales para que las mujeres rompan el círculo de exclusión que las convierte en un blanco de la violencia directa. El compromiso del Gobierno colombiano y de los rebeldes de las FARC de mejorar el acceso de las mujeres a la tierra y de garantizar que los autores de los actos de violencia sexual, incluidas las violaciones, no puedan acogerse a la amnistía es un hito de suma importancia.

Como la mayoría de los procesos de paz conocidos y bien documentados, los del Noreste de la India se caracterizan por ser descendentes, de arriba hacia abajo, dirigidos por hombres y esencialmente transacciones impulsadas por el poder. En ningún lugar es esto más evidente que en el reciente contexto Naga. El principal objetivo de la iniciativa “Mujeres, paz y seguridad” a escala mundial es la necesidad de cambiar este enfoque. Las mujeres han criticado no solo las guerras y los conflictos, sino también los procesos protagonizados y dominados esencialmente por hombres que se producen durante las transiciones políticas, en los que los derechos de las mujeres se intercambian a conveniencia de los intereses políticos o en los que las omnipresentes desigualdades y prejuicios de género existentes en la sociedad limitan la participación significativa de las mujeres en todos los niveles y en todas las fases de las negociaciones de paz y las transiciones posteriores a los conflictos. La realidad de estos tres contextos del Noreste de la India también subestima la necesidad de salir de este modo de transacción patriarcal y aspirar a algo que sea verdaderamente transformador. Esto implicaría necesariamente centrarse en las necesidades y prioridades locales, garantizando que se escuchen las voces de los marginados, que se potencie la participación y la apropiación, que se dé prioridad al proceso y a los resultados, y que se cuestionen las dinámicas de poder desiguales e interrelacionadas.

Y como tal, la lucha de las mujeres Naga por los puestos reservados a las mujeres y su derecho a la toma de decisiones políticas es de vital importancia en esta coyuntura de la historia Naga.

Los argumentos de Gready y Robins coinciden con el discurso feminista de que hacer una distinción entre lo privado y lo público despolitiza lo doméstico. Esto ha conducido a la marginación y la invisibilidad de la violencia cotidiana perpetrada contra las mujeres – en particular la que se produce en las familias y las comunidades –, que tiene sus raíces en causas estructurales. Los procesos judiciales, aunque importantes, reducen a las mujeres a sus lesiones y se centran en la violencia y el perpetrador, en lugar de discutir las relaciones de poder de género que conducen a las violaciones. La negación de una serie de derechos a las mujeres en virtud de las leyes consuetudinarias Naga y Mizo es una manifestación de las relaciones de poder basadas en el género. Plantear los derechos en términos explícitamente transformadores implica reconocer y tratar de desafiar las desigualdades vinculadas al poder y la jerarquía (Gready y Robins, 2014), y no se puede exagerar la importancia de esto. También requiere aceptar que los derechos humanos se definen por la lucha y nacen de experiencias de privación y opresión.

¿Cómo sería un enfoque de justicia transformadora para las mujeres situadas en diferentes etapas del conflicto en una región que se está convirtiendo rápidamente en un lugar de infinitas posibilidades económicas para la actual administración política? Se necesitaría cambiar todo lo que refuerza las jerarquías sociales y económicas de poder existentes e incluir a las comunidades afectadas – especialmente a las mujeres – como agentes en la configuración de la nueva agenda para el cambio a través de la política y la práctica. Sobre todo, exigiría revisar y redefinir un tipo de resistencia de las mujeres que vaya más allá de los estrechos límites de la etnia, la clase, la religión y las afiliaciones políticas. Por último, para la propia región, un enfoque de justicia transformadora centrado en abordar las injusticias socioeconómicas y las raíces estructurales de las injusticias actuales sería una forma más eficaz y a la vez más matizada de eliminar los estereotipos periféricos y la discriminación de los pueblos y las personas.

Notas

- 1- Vea Cecilia López Montañó y María-Claudia Holstine (este volumen) para un análisis con conocimiento interno muy diferente.
- 2- En agosto de 2014 se aprobó el Decreto 1480, que establece el 25 de mayo como Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual causada por el Conflicto Armado Interno, como medida de reparación colectiva.
- 3- En julio de 1997, la Iglesia Bautista organizó la reunión de Paz de Atlanta, donde los dirigentes del CNSN aceptaron iniciativas para iniciar un proceso de diálogo incondicional.
- 4- Véase la masacre de Nellie en febrero de 1983.
- 5- Según el Gobierno de la India, el FULA está clasificado como una organización terrorista prohibida por la Ley de prevención de actividades ilícitas de 1990. Al mismo tiempo, el gobierno inició ofensivas militares contra en su contra, llamadas Operación Bajrang (noviembre de 1990), Operación Rhino (septiembre de 1991), Operación All Clear (diciembre de 2003) y Operación Rhino 2 (octubre de 2001), dirigidas por el ejército indio. Las operaciones contra la insurgencia continúan hoy bajo la Estructura de Mando Unificada.
- 6- Fue dirigido por el eminente intelectual Dr. Hiren Gohain, que formó una convención a nivel estatal, «Sanmilita Jatiya Abhivartan», que pidió a Nueva Delhi y al FULA que se presentaran a la mesa de negociaciones sin condiciones previas ni retrasos.
- 7- El teniente general Harwant Singh, ex jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército, escribió: «Ningún personal militar querría verse involucrado en casos civiles falsos y pasar los próximos años haciendo las rondas de tribunales civiles, donde todas las pruebas falsas de los testigos locales hostiles serán presentadas en su contra».
- 8- Por ejemplo, en agosto de 2007, cuatro estudiantes universitarios secuestraron y violaron a una mujer de la aldea de Showuba, cerca de Dimapur. Los cuatro fueron detenidos después de que se presentara una denuncia en una comisaría local. El tribunal del consejo de la aldea de Showuba juzgó a los jóvenes y los dejó ir después de imponer una multa de quince rupias cada uno (Banerjee, 2014:150).
- 9- En marzo de 2015, una enorme turba atravesó las puertas principales de la cárcel central de Dimapur y sacó de la cárcel a un hombre no Naga acusado de violar a una chica Naga, lo golpearon, lo hicieron desfilar desnudo, lo lincharon y colgaron su cuerpo de la torre del reloj de la ciudad mientras la policía permanecía como espectadora impotente.
- 10- El artículo 371 A de la Constitución dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Constitución, ninguna ley del Parlamento relativa a las prácticas religiosas o sociales de los Nagas, el derecho y los procedimientos consuetudinarios de los Naga, la administración de justicia civil y penal que impliquen decisiones conforme al derecho consuetudinario de los Naga, la propiedad y transferencia de tierras y sus recursos, se aplicarán al Estado de Nagaland a menos que la Legislativa La Asamblea de Nagaland así lo decide mediante resolución.
- 11- Nagaland es el único estado del país que nunca ha tenido una mujer como miembro de la Asamblea Legislativa. Si bien cada pueblo y tribu tiene su propia sección de mujeres, no hay mujeres en el consejo de la aldea y el máximo órgano de toma de decisiones de las tribus Naga, los Naga Hoho, tampoco tienen representantes mujeres.

Referencias

- Aguilar, G. O. 2011. ‘Asserting Women’s Economic and Social Rights in Transitions’ in Aguilar, G. O. and Gómez, F. I. (eds), *Rethinking Transitions: Equality and Social Justice in Societies Emerging from Conflict*. Cambridge: Intersentia.
- Amnesty International. 1990. India, ‘Operation Bluebird’: A Case Study of Torture and Extrajudicial Executions in Manipur. New York: Amnesty International.
- Banerjee, P. 2012. ‘Women, Conflict, and Governance in Nagaland’ in Samaddar, R. (ed.), *Government of Peace: Social Governance, Security and the Problematic of Space*. London and New York: Routledge.
- Banerjee, P. 2014. ‘New Conundrums for Women in Northeast India, Nagaland and Tripura’ and ‘Women, Violence and North East India’, *Economic and Political Weekly* 49 (43–44).
- Baruah, S. 2007. ‘Postfrontier Blues: Towards a New Policy Framework for Northeast India’. Policy Studies 33. Washington DC: East—West Center.
- Baruah, S. 2014. ‘Routine Emergencies: India’s Armed Forces Special Powers Act’ in Sundar, A. S. (ed.), *Civil War and Sovereignty in South Asia: Regional and Political Economy Perspectives*. New Delhi: Sage.

- Bell, C. and O'Rourke, C. 2007. 'Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory Essay', *International Journal of Transitional Justice* 1 (1): 23–44.
- Bhattacharjee, K. 2015. *Blood on My Hands: Confessions of Staged Encounters*. Noida, India: HarperCollins.
- Chakravarti, U. 2017. 'Introduction' in *Fault Lines of History: The India Papers*. New Delhi: Zubaan.
- Chinkin, C. 2009. 'The Protection of Economic, Social and Cultural Rights Post—conflict'. Paper commissioned by the Office of High Commissioner for Human Rights, www.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Protection_ESCR.pdf (consultado el 3 de mayo 2019).
- Coomaraswamy, R. 2015. *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*. New York: UN Women.
- Das, P. 2013. 'The History of Armed Forces Special Powers Act' in Chadha, V. (ed.), *Armed Forces Special Powers Act: The Debate*. New Delhi: Lancer's Books.
- Dey, S. K. 2013. 'Human Rights Issue and Insurgency due to Bamboo Flowering: A Case Study of Lushai Hills District of Assam', *Excellence: International Journal of Education and Research*, November.
- Economic and Political Weekly. 2017. 'Naga Women Fight Back', *Economic and Political Weekly* 52 (3).
- Evans, M. 2016. 'Structural Violence, Socioeconomic Rights, and Transformative Justice', *Journal of Human Rights* 15: 1–20.
- Farmer, P. E., Nizeye, B., Stulac, S. and Keshavjee, S. 2006. 'Structural Violence and Clinical Medicine', *PLoS Medicine* 3 (10): 1686–91.
- Foucault, M. 1995. *Discipline and Punishment: The Birth of the Prison*. Translated by A. Sheridan. New York: Penguin Random House.
- Galtung, J. 1969. 'Violence, Peace, and Peace Research', *Journal of Peace Research* 6 (3): 167–91.
- Goswami, R. et al. 2005. 'Women in Armed Conflict Situations'. Guwahati: North East Network.
- Goswami, R. et al. 2014. 'General Recommendation 30: Women in Conflict Prevention, Conflict and Post—conflict Situations' in *India: 4th and 5th NGO Alternative Report on CEDAW*. New Delhi: National Alliance of Women.
- Goswami, R. 2015. *Of Revolution, Liberation and Agency: Aspirations and Realities in the Lives of Women Combatants and Key Women Members of the United Liberation Front of Assam (ULFA)*. New Delhi: Heinrich Boll.
- Goswami, R. 2017. 'The Price of "Revolution": Who Determines? Who Pays?' in Chakravarti, U. (ed.), *Fault Lines of History: The India Papers*. New Delhi: Zubaan.
- Gready, P. and Robins, S. 2014. 'From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice', *International Journal of Transitional Justice* 8: 339–61, www.york.ac.uk/media/cahr/documents/IJTJ—2014—Gready—339—61.pdf (consultado el 3 de mayo de 2019).

- Hazarika, A. and Sharma, S. 2014 *Armed Struggle, Identity and the State*. Guwahati: North East Network.
- Hluna, J. V. and Tochwawng, R. 2012 'Outbreak in the Mizo Hills: Reason and Responsibilities' in *The Mizo Uprising: Assam Assembly Debates on the Mizo Movement, 1966–1971*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Hmingthanzuali. 2016. 'Memories, Trauma and Resistance: Mizo Women's Narratives on Rambuai'. Unpublished article.
- Hoening, P. and Singh, N. 2014. *Landscapes of Fear: Understanding Impunity in India*. New Delhi: Zubaan.
- Iralu, K. D. 2000. *Nagaland and India: The Blood and the Tears*. Kohima: Eastern Publications.
- Iralu, K. D. 2005. 'The Fifty—four—year Indo— Naga Conflict' in Hussain, M. (ed.), *Coming Out of Violence: Essays on Ethnicity, Conflict Resolution and Peace Process in North East India*. New Delhi: Regency Publications
- Karmarkar, R. 2014. 'Manipur's Horror: When Operation Bluebird Stuck Terror', *Hindustan Times*, 5 November.
- Kashyap, S. G. 2017. 'Opposed to 33% Reservation for Women, Naga Bodies Call for Boycott of Civic Polls', *Indian Express*, Guwahati, 5 January.
- Kikon, D. 2002. 'Political Mobilization of Women in Nagaland: A Sociological Background' in Fernandez, W. and Barbora, S. (eds), *Changing Women's Status in India: Focus on the Northeast*. Guwahati: NECRC.
- Kikon, D. 2017. 'Memories of Rape: The Banality of Violence and Impunity in Naga Society' in Chakravarti, U. (ed.), *Fault Lines of History: The India Papers*. New Delhi: Zubaan.
- Kotwal, D. 2000. 'The Naga Insurgency: The Past and the Future', *Strategic Analysis* 24 (4): 751–72.
- Lasuh, W. and Nuh, V. K. (eds). 2002. *The Naga Chronicle*. New Delhi: Regency Publications.
- Lederach, J. P. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. New York: Good Books.
- Longvah, S. 2014. 'Territorial Dimension in the Naga Peace Process', *International Research Journal of Social Sciences* 3 (5): 41–5.
- Luithui, L. and Haksar, N. 1994. *Nagaland File: A Question of Human Rights*. New Delhi: Lancer International.
- Manchanda, R. 2005. *Naga Women Making a Difference: Peacebuilding in Northeastern India*. Washington DC: Women Waging Peace Policy Commission.
- Menampampil, T. 2008. 'The Role of Religious Leaders in Peace Initiatives' in Fernandez, W. (ed.), *Search for Peace with Justice: Issues around Conflicts in Northeast India*. Gauhati: Northeastern Social Research Centre.
- Misra, U. 2000. *The Periphery Strikes Back: Challenges to the Nation State in Assam and Nagaland*. Shimla: Indian Institute of Advanced Study.

- Misra, U. 2005. 'Towards a Resolution of the Naga Issue' in Hussain, M. (ed.), *Coming Out of Violence: Essays on Ethnicity, Conflict Resolution and Peace Process in North East India*. New Delhi: Regency Publications.
- Moloney, A. 2016a. 'Women's Voices Heard Clear and Loud in Colombia's Peace Deal', Thomson Reuters Foundation, 28 September.
- Moloney, A. 2016b. 'No Amnesty for War Rapists: Colombia Peace Talks Turn to Women's Rights', Thomson Reuters Foundation, 25 July.
- Nag, S. 2001. 'Tribals, Rats, Famine, State and the Nation', *Economic and Political Weekly* 36 (12): 1029–33.
- Nagaland News. 2012. 'SC Directs Nagaland Govt. to Respond on 33% Women Quota', *Nagaland News*, 20 November.
- Nagaland Post. 2012. 'Assembly Stands by Art.371(A); Rejects Women Reservation', *Nagaland Post*, 23 September.
- Nunthara, C. 1981. 'Grouping of Villages in Mizoram: Its Social and Economic Impact', *Economic and Political Weekly* 16 (30): 1237–40.
- Nunthara, C. 1989. 'Impact of Grouping Scheme on Traditional Organization' in *Impact of the Introduction of the Grouping of Village in Mizoram*. New Delhi: Omsons Publications.
- Parks, T., Colletta, N. and Oppenheim, B. 2013. *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance*. San Francisco: The Asia Foundation, <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/ContestedCornersOfAsia.pdf> (consultado el 3 de mayo de 2019).
- Roluahpuia. 2015. 'Memoirs of a Mizo Rebel', *Northeast Review*, 22 May.
- SAHRDC. 2015. 'Armed Forces Special Powers Act: A Study in National Security Tyranny'. New Delhi: South Asian Human Rights Documentation Centre (SAHRDC), <http://themanipurpage.tripod.com/letters/humanrhts.html> (consultado el 15 de mayo 2015).
- Schmid, E. 2012. 'Women's Freedom from Want after Armed Conflicts: Does the Inclusion of Economic, Social and Cultural Rights in Transitional Justice Help Women?', *NJA Law Journal* (Special Issue).
- Shimray, A. S. A. 2005. *Let Freedom Ring: Story of Naga Nationalism*. New Delhi: Promilla and Co.
- Srivastava, D. 2013. 'Rights—based Critique of AFSPA' in Chadha, V. (ed.), *Armed Forces Special Powers Act: The Debate*. New Delhi: Lancer's Books.
- True, J. 2014. 'The Political Economy of Violence against Women: A Feminist International Relations Perspective', *Australian Feminist Law Journal* 32 (1): 39–59, www.researchgate.net/publication/241764665_The_Political_Economy_of_Violence_Against_Women (consultado el 3 de mayo de 2019).
- van Lierde, F. 2011. *We the Widows of the Gun*. The Hague: Cordaid.
- Woch, K. 2016. 'In Support of Implementation of 33% Women Reservation in Nagaland Municipal Elections 2016', *Morung Express*, 6 September.

5

REIMAGINAR LA SUBVERSIÓN: AGENCIA Y ACTIVISMO DE LAS MUJERES POR LA PAZ EN EL NORTE DE UGANDA¹

Yaliwe Clarke
y Constance O'Brien



Introducción

Este capítulo ofrece un análisis de la micropolítica de las iniciativas comunitarias de paz de las mujeres en el Norte de Uganda. Examina los cambios socioeconómicos y políticos de género que se produjeron como consecuencia de la guerra, así como las formas en que la agencia de las mujeres intentó subvertir las normas patriarcales. Además, cuestiona hasta qué punto las mujeres activistas por la paz abordaron la violencia estructural dentro de un marco liberal existente de construcción de paz.

Los datos se recopilaban a partir de entrevistas en profundidad con diecisiete personas (quince mujeres y dos hombres) que fundaron y/o trabajaron en organizaciones comunitarias por la paz en el Norte de Uganda entre 1998 y 2011. Los resultados revelan que los cambios en las redes familiares patrilineales derivados de la guerra abrieron la posibilidad de que las mujeres activistas por la paz se convirtieran en importantes nodos de apoyo material. Las mujeres fueron capaces de poner en marcha varios grupos pacifistas, crear pequeños planes de ahorro colectivos, recoger cosechas de campos abandonados, dedicarse al pequeño comercio y acceder al apoyo de organizaciones humanitarias internacionales para ayudar a mantener los medios de subsistencia de los más vulnerables. Es significativo que estas iniciativas se llevaran a cabo a pesar de la violencia sexual y de género. Al mismo tiempo, el desplazamiento interno desestabilizó el sistema de clanes, lo que provocó cambios importantes en los lazos patrilineales y una pérdida de control social. Al ocuparse de los hijos huérfanos, los nietos y otros miembros de la familia extendida, las funciones maternas de las mujeres se ampliaron en un momento en que los recursos económicos y sociales disponibles eran mínimos.

Se ofrece una visión crítica de cómo los esfuerzos de las mujeres por construir la paz reclamaron 'espacios' que antes estaban en manos de los hombres, que eran los proveedores materiales y protectores dominantes de la familia. Parece que se produjeron algunos cambios en los acuerdos políticos y económicos durante la guerra y que los consiguientes esfuerzos de construcción de paz de las activistas por la paz contribuyeron a impugnar diversas formas de patriarcado.

La siguiente sección cuestiona los fundamentos conceptuales de los esfuerzos por la paz liberal que enmarcaron el activismo por la paz de las mujeres en Uganda.

La construcción de la paz neoliberal y el feminismo: un argumento para enmarcarla

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dieron lugar a un aumento del perfil público de las mujeres y sus organizaciones que trabajan por la paz. La Plataforma de Acción de Beijing de 1995 incluyó secciones sobre ‘violencia contra la mujer y ‘la mujer y los conflictos armados’. En cada sección se mencionan explícitamente las formas de violencia sexual que tienen lugar durante los conflictos armados, como ‘el asesinato, la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado. Incluía un llamamiento para que estos tipos de violencia se previnieran o abordaran en los esfuerzos generales por la paz y la seguridad, especialmente en relación con los derechos de las mujeres.² A esto le siguió la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad en octubre de 2000, y la posterior defensa de la presión internacional, en gran medida retórica, para incluir a las ‘mujeres’ en los procesos de paz formales. Estos instrumentos internacionales se centran en la prevención de la violencia contra las mujeres durante la guerra, así como en los esfuerzos de las mujeres por lograr la paz.

En su libro de 2007 *From Where We Stand*, Cynthia Cockburn argumenta que “las experiencias específicas de sexo y género de las mujeres en la guerra a menudo se ignoran, tergiversan o se explotan en los medios de comunicación, por los políticos y por el movimiento contra la guerra”. Otros estudios se basan en el ‘trabajo por la paz de las mujeres’ y teorizan los significados de género de la paz (Barry, 2005; Cheldelin y Eliatamby, 2011; Moser y Clark, 2001; Pankhurst, 2003). Este análisis fue precedido por las críticas feministas a las interpretaciones neoliberales de la paz y los conflictos armados a principios de la década de 1990, procedentes principalmente de la perspectiva de la ciencia política (Steans, 1998; Tickner, 1992; Whiteworth, 1994). Según Zaum:

La construcción de la paz liberal se ha utilizado para describir las intervenciones externas de construcción de paz que comparten varias características: en primer lugar, son llevadas a cabo por Estados liberales occidentales; en segundo lugar, están motivadas por objetivos liberales, como responder a violaciones de los derechos humanos a gran escala o llevarse a cabo en virtud de una responsabilidad internacional de proteger; y en tercer lugar, estas intervenciones promueven las instituciones políticas liberal—democráticas, los derechos humanos, la gobernanza eficaz y buena, y la liberalización económica como medio para llevar la paz y la prosperidad a los países devastados por la guerra (Zaum, 2012: 121).

La paz liberal se deriva de una combinación del pensamiento realista y liberal dominante en las relaciones internacionales, así como de los marcos políticos de organizaciones internacionales de desarrollo como las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (Campbell et al., 2011; Heathershaw, 2013; Pugh et al., 2008; Richmond, 2006; 2012). Aunque aspira a objetivos amplios de seguridad humana, hay un foco limitado a interpretaciones positivistas de la seguridad centradas en ideas occidentales homogeneizadas de la democracia (Richmond, 2006). Apenas hay un compromiso significativo con las culturas locales y las necesidades de bienestar que quedan fuera de las prescripciones económicas neoliberales.

En los últimos años, la paz liberal se ha enmarcado en los enfoques propios de las comunidades indígenas para construir la paz, que van más allá de los procesos judiciales y las ideas sobre los derechos enmarcados en el discurso universal de los derechos humanos. Heathershaw (2013: 280) se refiere a esto como una ‘hibridez liberal-local’. Sostiene que sigue siendo competitiva en lugar de co-constructiva. Todavía no existe un enfoque teórico alternativo para la construcción de paz en el que ‘la autoridad política se reconstituya a través de múltiples escalas geográficas’.

Las feministas (Hendricks, 2011; Hudson, 2012; Scully et al., 2010), por su parte, destacan el hecho de que la paz neoliberal no aborda la violencia estructural patriarcal que está incrustada en la idea misma de Estado. La raza, la clase y el género son modos de exclusión y dominación que forman parte del desarrollo del capitalismo con sus categorías de diferencia y desigualdad. Para el Sur Global, las historias del colonialismo no pueden separarse de la formación del Estado y de las versiones del desarrollo expresadas en los planes nacionales de desarrollo, incluidos los de reconstrucción posconflicto y construcción de paz. Confortini (2010: 4) afirma que incluso “las recientes reestructuraciones del capitalismo, a menudo denominadas ‘globalización’, han supuesto una mayor intensificación y racionalización de los modos de dominación, subordinando a pueblos y tierras a escala transnacional y realineando las relaciones sociales para satisfacer mejor las necesidades del capital.”

A pesar de los considerables conocimientos sobre la importancia de la deconstrucción del patriarcado, los marcos liberales de la paz siguen centrando la atención en la realidad masculina (Campbell et al., 2011; Heathershaw, 2013). Por ejemplo, el exhaustivo estudio de Doyle e Ikenberry sobre la guerra y la paz realizado en 1997 contiene seis menciones en el índice relacionadas con el género, pero solo dedica una décima parte de su estudio al tema. Las palabras ‘mujer’ y ‘género’ aparecen ocasionalmente como una nota de paso. Esta escasa atención al punto de vista de la

mujer se refleja en los procesos de paz de la ONU: .de los veintiún procesos de paz más importantes celebrados desde 1992, solo 2.4 por ciento de los firmantes eran mujeres.³ Por otra parte, ninguna mujer ha sido nombrada mediadora jefe o líder en las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU. Hasta ahora, solo una mujer ha formado parte del equipo de mediación de la Unión Africana (UA) (Graça Machel fue una de las tres mediadoras del equipo de la UA durante la crisis de Kenia en 2008). El libro editado por Olonisakin y Okech sobre las mujeres y la gobernanza de la seguridad en África, publicado en 2011, afirma que los esfuerzos de construcción de la paz en África han tenido dificultades para tener en cuenta las realidades vividas por las mujeres en materia de (in)seguridad.

Debe señalarse que la mera inclusión de ‘mujeres’ en el discurso y en la práctica de la construcción de paz no significa necesariamente una ruptura con el neoliberalismo. Pratt y Richter-Devroe afirman que:

La agenda liberal de construcción de la paz que privilegian la ONU y los defensores de la igualdad de género que trabajan en la ONU o a través de ella representa una estrategia limitada para los movimientos de mujeres comprometidos con una agenda más radical de transformación social y política. La ‘resistencia’ de las mujeres al capitalismo global y a las formas de colonialismo (en lugar de construcción de paz en sí misma), por ejemplo, no son apoyadas por la agenda 1325, aunque las mujeres se pueden involucrar en estas iniciativas de empoderamiento, quizás incluso más que participar en la agenda de paz basada en el género 1325. (Pratt y Richter-Devroe 2011: 498).

Una revisión de los documentos de la ONU diez años después de la aprobación de la 1325 reveló que las críticas al militarismo, a los presupuestos y a las prioridades militares se redujeron y reformularon en llamamientos positivos a la participación de las mujeres y a una perspectiva de género sobre la paz y la seguridad (Gibbins, 2011: 532). Se trata de una tendencia preocupante, dado que “el militarismo africano ha generado más inseguridad que seguridad, a menudo aterrorizando a las poblaciones locales en lugar de protegerlas, dominando la esfera política, difuminando los límites entre lo civil y lo militar y socavando así todas las formas no militares de autoridad y responsabilidad política e institucional” (Mama y Okazawa—Rey, 2012).

Según Mama y Okazawa—Rey, el discurso y la práctica dominantes en materia de seguridad prestan una atención mínima a “las formas contradictorias en que las mujeres se ven afectadas por la compleja relación entre los procesos capitalistas de género y el militarismo, y el modo en que las mujeres negocian sus vidas a través de

ambos” (2012: 97). Además del militarismo, los vestigios del colonialismo y la política del etnicismo siguen obstaculizando las posibilidades de paz.

Una visión general de la historia socioeconómica y política de Uganda ofrece algunas ideas críticas que podrían ayudarnos a comprender la trayectoria de ‘emancipación’ de las mujeres en este contexto.

Los retos del contexto histórico político— económico y la ‘emancipación’ de las mujeres ugandesas

Desde su independencia en 1962, Uganda ha experimentado una paz disputada (en Uganda central y algunas partes de Uganda meridional) junto con conflictos armados en el Nilo Occidental, los distritos septentrionales de Gulu y Kitgum y algunas partes del distrito de Apac (Sathyamurthy, 1986; Saul, 2004). Las poblaciones locales han sufrido una violencia extrema a manos de los grupos rebeldes y de las fuerzas militares y policiales del gobierno. Las raíces de la guerra se remontan a principios de 1900 cuando la administración colonial británica firmó un acuerdo con el reino de Buganda, una medida que otorgó a un grupo étnico influencia política y económica sobre otras comunidades étnicas y reinos (Karugire, 1980; Sathyamurthy, 1986).

Según Branch (2011), las interpretaciones coloniales británicas de la identidad étnica enfrentaron a las etnias dominantes del Norte con las del Sur. El método colonial británico de gobierno indirecto fomentó estereotipos negativos sobre determinados grupos étnicos que a su vez alimentaron tensiones políticas extremas. De hecho, los colonialistas apoyaron el desarrollo de los Acholi como identidad étnica homogénea y nombraron jefes en el Norte para impulsar los intentos administrativos británicos de centralización. Como afirma acertadamente Branch:

La dimensión nacional de la identidad política Acholi se formó, por tanto, en la relación dinámica entre la clase educada Acholi y las estrategias administrativas británicas en el contexto de los procesos de formación del Estado en el Protectorado de Uganda... Desde el principio, por tanto, la identidad política Acholi tuvo dos dimensiones: una dimensión interna basada en las reivindicaciones enfrentadas a una tradición y liderazgo auténtico dentro de la sociedad Acholi, que al principio se disputaban entre los jefes designados y los *rwodi—moo*, ancianos basados en el linaje y otros; y una dimensión nacional, ya que los Acholi se representaban a sí mismos como Acholi en el escenario político nacional para competir en la política nacional ‘tribalizada’ de Uganda. (Branch 2011: 52—3)

A diferencia de estas jefaturas dominadas por hombres y polarizadas étnicamente, las iniciativas misioneras de las mujeres eran multilingües, multiétnicas y multi—religiosas. Por ejemplo, el Consejo de Mujeres de Uganda, creado en 1946, fue fundado por “mujeres africanas, europeas y asiáticas que querían crear una organización formada por mujeres de todas las etnias, razas, orígenes religiosos y afiliaciones políticas para abordar cuestiones de interés mutuo” (Brown, 1988: 20; véase también White, 1973: 47, citado en Tripp, 2004: 143). Esto contrastaba con los partidos políticos definidos por tribus que se crearon en gran medida a través de redes sociopolíticas que intentaban resistirse al sistema británico de gobierno indirecto. Por lo tanto, es probable que la élite local del Norte estuviera formada principalmente por hombres en las jefaturas y los partidos políticos, con unas pocas mujeres que ocupaban puestos de liderazgo en organizaciones religiosas y comunitarias a pequeña escala a nivel de consejos y municipios.

Amone y Muura (2014) afirman que en la parte más ‘productiva’ del Sur de Uganda se invirtió mucho en educación e infraestructura, mientras en el Norte, considerado ‘una fuente de mano de obra’, las inversiones fueron escasas o nulas. Esto significó que la demanda de mano de obra en el Sur estimuló un flujo de trabajadores migrantes desde Kitgum, Gulu y partes del Nilo Occidental hacia la región central. Con poca educación y un bajo nivel de alfabetización en inglés, estos migrantes solían trabajar como trabajadores ocasionales o como personal de bajo rango en el gobierno, las

Una mujer delante de su casa tradicional en Gulu, Uganda.



empresas privadas, el ejército o la policía. Los trabajadores migrantes eran vigilados de cerca para que no se perdiera su origen étnico. Con la aprobación de la Ordenanza de Vagancia en 1925, los trabajadores migrantes que no tenían trabajo debían regresar a su 'tribu' (ibíd.). De este modo, el Norte se había convertido en poco más que una reserva para la mano de obra migrante y el reclutamiento militar. Esta forma de gobierno militarizado y étnico dependía de una floreciente élite masculina formada por administradores coloniales, misioneros, párrocos y jefes (nombrados por los británicos). Eran en su mayoría hombres, con diversos grados de conformidad y resistencia al dominio británico. Las mujeres también formaban parte de esta élite, aunque de manera menos central.

Así, los rasgos estructurales que definen la sociedad y la política Acholi contemporáneas tienen sus raíces históricas en este desarrollo regional desigual de Uganda. Las estrategias de expansión económica patriarcal asimétrica y las estructuras estatales de gobierno indirecto durante el colonialismo dieron lugar a profundas desigualdades regionales. En el momento de la independencia, los británicos entregaron el país a una sociedad políticamente dividida en la que el rey de Buganda, representante de las comunidades del Sur, formó una débil alianza con Milton Obote, que estaba políticamente alineado con las comunidades del Norte (Mutibwa, 2008; Saul, 2004). En 1966, Obote rompió la alianza con el reino de Buganda y asumió la autoridad política de todo el país. Durante su primera presidencia, Obote se apoyó en gran medida en el ejército estatal, en el que un comandante, Idi Amin, tenía influencia política (Ngoga, 1998). Con la llegada de Amin al poder en 1971, todos los ministros prestaron juramento en el ejército como cadetes que les sometió a la disciplina militar (Decker, 2014: 43). Mutibwa (2008) y Saul (2004) describen la presidencia de Idi Amin de 1971 a 1978 como un período en el que el militarismo se institucionalizó aún más mediante la fusión del gobierno y el ejército.

Con esta creciente militarización del Estado creció una nueva 'clase' socioeconómica de hombres militares y sus compañeras (Decker, 2014: 43). Debido a las anteriores prácticas coloniales de reclutamiento, la mayoría de los soldados pertenecían a comunidades étnicas del Norte, procedentes del Nilo Occidental, y eran conocidos como 'nubios'. Los que no pertenecían a esta clase luchaban al margen de una economía política militarizada. En el estudio de Decker (ibíd.: 87), las mujeres que vivían en Kampala explicaron que los salarios de sus maridos eran demasiado bajos para mantener a sus familias. Además, sus hombres desaparecían misteriosamente, siendo capturados por la policía secreta o pasando a la clandestinidad, dejando a las mujeres que se valieran por sí mismas mediante actividades generadoras de ingresos.

Con la toma del poder estatal por parte del Movimiento de Resistencia Nacional en 1986, el poder político volvió al Sur. Esto intensificó la crisis de liderazgo en el Norte que había comenzado durante las décadas de 1970 y 1980 y que más tarde se convirtió en una profunda crisis social (Branch, 2011: 56—62). Durante veinte años (1986—2006), la región de Acholi sufrió las consecuencias de la guerra, con los subsiguientes grupos rebeldes, siendo el más notorio el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), alzado en armas contra el Gobierno y atacando a la población civil. Al mismo tiempo, las tropas gubernamentales fueron culpables de graves violaciones de los derechos humanos. Se calcula que más de 2 millones de Acholi vivían en campos de desplazados internos durante varios años del conflicto.

Cuando Uganda se convirtió en protectorado británico en 1894, había varias asociaciones de mujeres voluntarias creadas por misioneras cristianas y esposas de administradores y empresarios coloniales (Tripp, 2004). La educación formal de las niñas fue su objetivo inicial. Esta temprana inversión en educación hizo que se estableciera la primera escuela en 1898 y la segunda en 1905, y permitió que las mujeres entraran en diversos espacios de influencia, empezando por el liderazgo dentro de las iglesias y más tarde en la administración pública (ibíd.). En la década de 1930, “las mujeres se sentaban con los hombres en los Consejos Eclesiásticos y eran elegidas para las Juntas Educativas Diocesanas, así como para el Sínodo de la Iglesia y otros organismos” (Allen, 1930, citado en Tripp, 2000: 34). De hecho, la primera asociación nacional de mujeres fue la Unión de Madres Protestantes, fundada en 1906 en Budo por esposas de misioneros británicos. En 1908 se abrió a las mujeres ugandesas esposas de estudiantes varones del Kings College de Budo. En 1930, las mujeres estaban representadas en todos los comités de la Iglesia Anglicana Nativa. Otra gran organización fue la Girl Guides, creadas en 1921 por Foster Smith, de la Church Missionary Society. En 1938 se creó la Liga Femenina de Uganda. En 1939, se creó la Organización de Emergencia de Mujeres de Uganda en respuesta a las consecuencias de la guerra. El homólogo católico de la Unión de Madres Protestantes se creó mucho más tarde, en 1959. Tras la Segunda Guerra Mundial, aumentó el número de mujeres misioneras y funcionarias, sobre todo en el campo de la educación y la divulgación comunitaria. Por ejemplo, en 1946 ayudaron al Departamento de Desarrollo Comunitario a crear clubes de desarrollo comunitario (Tripp, 2004: 127).

A pesar de un claro compromiso político con la igualdad de género, con la llegada de Yoweri Museveni al poder en 1989,⁴ con reformas legales y sistemas de cuotas para las mujeres en el parlamento, el gobierno no abordó directamente las formas en que la guerra desestabilizó la dependencia socioeconómica de las mujeres en la agricultura

de subsistencia, especialmente en las zonas rurales. Los desplazamientos forzados y la amenaza de secuestro y violencia sexual, sufridos sobre todo por mujeres, afectaron su capacidad para cultivar. Esto redujo inadvertidamente la actividad de las mujeres en el trabajo agrícola de subsistencia, en particular la producción de cultivos, que constituye la base de la economía en el Norte de Uganda.

La mayoría de las trabajadoras en Uganda son o familiares, no remuneradas en actividades rurales y representan el 80% de todos los trabajadores no remunerados, o autoempleadas en el sector informal. Según los Servicios Nacionales de Asesoramiento Agrícola (SNAA), un programa gubernamental de apoyo a la producción agrícola, los hombres tendían a concentrarse en la producción de cultivos comerciales de café, algodón, tabaco y, más recientemente, cereales. Las mujeres se concentraron en los cultivos alimentarios, principalmente para el consumo, y al tiempo proporcionaron gran parte de la mano de obra para la producción de cultivos comerciales (Ellis et al., 2005).

La naturaleza de género de la producción agrícola es claramente evidente en la forma en que los usos socioeconómicos de la tierra experimentaron cambios significativos durante la guerra. Estos cambios no han sido suficientemente documentados en los relatos convencionales. En los centros urbanos, a las mujeres les resultaba difícil conseguir un trabajo formal, por lo que recurrían cada vez más al comercio informal y al espíritu empresarial como medio de supervivencia. Al mismo tiempo, también hubo cambios en la influencia económica de los hombres, especialmente entre los hombres de las zonas rurales del Norte que fueron desplazados, perdieron su ganado y/o vieron reducido su acceso a la tierra.

La micropolítica de los esfuerzos de las mujeres ugandesas por construir la paz

Según Tripp, “el movimiento de mujeres en Uganda hizo una entrada inesperadamente rápida y visible en la escena política poco después de que el Movimiento de Resistencia Nacional de Yoweri Museveni tomara el poder en 1986” (2000: XIII). Describe el movimiento de las mujeres como una fuerza política relativamente autónoma en el país, que desafió “las bases clientelistas (es decir, étnicas y religiosas) de movilización que han azotado al país desde la independencia”. El activismo de las mujeres en torno a los derechos legales, la paz, la educación y la salud reproductiva, los planes de crédito, las mujeres discapacitadas y los derechos sobre la tierra se consolidó y creció exponencialmente a partir de 1986. Según Mulumba, “la participación de las mujeres en los esfuerzos por la paz en la historia más reciente de Uganda se remonta a 1985,

cuando Tito Okello tomó el poder mediante un golpe de Estado. En ese momento, el Consejo Nacional de Mujeres organizó a más de 2.000 mujeres para manifestarse en las calles de Kampala a favor de la paz y contra el maltrato de las mujeres por parte de los militares” (2002: 113—14).

En 2006, tras veinte años de rebelión armada, se inició un proceso formal de negociación de paz⁵ dirigido por el gobierno para abordar el conflicto en el Norte de Uganda. Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Uganda y el LRA tuvieron lugar en Juba, Sudán del Sur, con el apoyo de ese gobierno. Mujeres como Betty Bigombe, ex ministra de Estado encargada del Programa de Reconstrucción del Norte de Uganda, emprendieron iniciativas para poner fin a las hostilidades desde 1995. Se adentró en el monte para mantener conversaciones de paz cara a cara con el líder del LRA, Joseph Kony (Tamale, 1999: 48—51). En diciembre de 2004, Betty Bigombe medió en las conversaciones entre el gobierno y los rebeldes del LRA. En 2008, estas conversaciones se estancaron cuando los rebeldes se retiraron a los pocos días de firmar el acuerdo de alto al fuego (Quinn, 2009).

En 2006, las organizaciones de mujeres formaron una coalición destinada a asegurar que las perspectivas y demandas de las mujeres se tuvieran en cuenta durante las conversaciones. Este proceso se denominó “Caravana de la Paz de Juba”. Según Nabukeera—Musoke:

En noviembre de 2007, la Coalición organizó la Caravana de Mujeres por la Paz, que recorrió los distritos de Kampala, Luwero, Masindi, Kona Kamdini (punto de encuentro de grupos de mujeres por la paz de Teso, Lira, Pader y Kasese), Gulu y Kitgum. Con más de 100 mujeres activistas al inicio del viaje, la caravana tuvo como objetivo sensibilizar y movilizar a los ugandeses para que apoyaran el proceso de paz y reforzaran la solidaridad con las comunidades del Norte de Uganda devastadas por la guerra. (2012: 12)

Varios autores dan fe de que el trabajo de paz de las mujeres no se ha tomado demasiado en serio, especialmente considerando su exclusión o estatus periférico en las conversaciones de paz dirigidas por el Gobierno (Atim, 2010; Apio—Julu, 2004; Ocheri, 2011; Okot, 2010). Según Selle (2008: 3), las negociaciones dirigidas por el Gobierno estaban encabezadas por el Dr. Ruhakana Rugunda, entonces ministro del Interior de Uganda. El principal mediador fue Riek Machar, el vicepresidente de Sudán. El equipo negociador del gobierno de 2008 estaba formado solo por hombres, con una o dos mujeres parlamentarias que actuaban como observadoras. Solo había dos mujeres representantes del LRA, y su papel en el proceso de negociación fue limitado (ibíd.).

Según la investigación de Okot (2010: 43-6) sobre las mujeres y la construcción de la paz en el distrito de Gulu, las mujeres tendían a involucrarse en la construcción de la paz tradicional a nivel de clan. Preparaban la comida para las reuniones, proporcionaban las cervezas tradicionales y cantaban y bailaban (todos roles femeninos prescritos). A algunas ancianas se les concedía la oportunidad de pronunciar palabras de sabiduría para resolver disputas y/o dar bendiciones a los 'retornados' o exrebelde (Selle, 2008; Atim, 2010; Apio-Julu, 2004). Se formaron otros grupos de mujeres como respuesta a las necesidades inmediatas de subsistencia provocadas por el conflicto armado. La investigación doctoral de Ocheri (2011) sobre niñas que habían sido secuestradas y se convirtieron en madres reveló las complejas cuestiones de 'rehabilitación' a las que se enfrentan las sociedades militarizadas en las que tanto mujeres como hombres participaron activamente en la guerra. Según Ocheri (ibíd.), estas jóvenes madres reconstruyeron su propio marco de vida y medios de subsistencia.

En respuesta al aumento del número de viudas y huérfanos, la Asociación Nacional de Organizaciones de Mujeres de Uganda (NAWOU) puso en marcha un centro de atención a la infancia y colaboró en el reasentamiento de mujeres ex prisioneras de guerra. El Esfuerzo de las Mujeres de Uganda para Salvar a los Huérfanos (UWESO) también trató de responder a las necesidades de los niños huérfanos por la guerra. UWESO se fundó en el distrito de Luwero y ahora trabaja en unos treinta y seis distritos de Uganda.

Así pues, está claro que las mujeres emprendieron diversas estrategias de construcción de paz que concienciaron a las comunidades y prestaron servicios muy necesarios. Sin embargo, las mujeres activistas por la paz que se entrevistaron en el marco de la investigación doctoral de Yaliwe Clarke podrían no haber sido suficientemente interrogadas sobre el patriarcado y la construcción de paz liberal.

La principal fuerza impulsora de su activismo por la paz fue el impacto devastador que la guerra tuvo sobre las mujeres y los niños vulnerables (traumatizados, violados, mutilados y/o huérfanos); la ausencia de asistencia humanitaria sustantiva inmediata; la posibilidad de agencia de estas mujeres dada la incapacidad de los hombres para desempeñar sus roles y funciones; y las nuevas disputas en torno a la cuestión de la tierra. Todas estas cuestiones hicieron posible que se produjeran algunas nuevas imaginaciones y reinterpretaciones.

La reinterpretación creativa de la paz por parte de las mujeres: vivir más allá de la supervivencia

Una submuestra de la investigación doctoral de Yaliwe Clarke se centró en diecisiete miembros fundadores o personal de seis organizaciones comunitarias de mujeres por la paz en el Norte de Uganda. Nueve de estas informantes clave eran mujeres que vivían en ciudades y fundaron grupos de paz durante la guerra y justo después de ella. Todas, excepto una, trabajaban como profesoras o funcionarias en el momento en que fundaron la organización y vivían en una casa o poseían tierras cerca o dentro de una ciudad a la que la gente había huido en busca de refugio. Casi todas ellas están activas y ocupan posiciones de alto rango en organizaciones confesionales como la Unión de Madres, la iglesia católica o la Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de Acholi. La edad media de los informantes clave en el momento de recopilación de los datos (de diciembre de 2013 a febrero de 2015) era de cuarenta años. Todas las mujeres hablaron de haber presenciado o sufrido diversas formas de violencia, como secuestros, matrimonios forzados y violaciones, así como abandono económico por parte de sus maridos y/o familiares. Además, se celebraron nueve grupos de focales para corroborar los relatos de los informantes clave y se consultó a informantes de siete grandes organizaciones de apoyo.

Algunas organizaciones no contaban con un gran número de miembros (por ejemplo, WAN) o ya no realizaban actividades regulares en la comunidad (PVP y WOPI-U), por lo que no era fácil acceder a los beneficiarios. Las organizaciones que eran relativamente funcionales —es decir, que tenían oficinas, personal contratado y mantenían contactos regulares con las comunidades— eran WAN, KIWEPI, WOPI-U y KICWA.⁶ Todas estas organizaciones se fundaron deliberadamente para responder a las necesidades de las comunidades. En los siguientes apartados se destacan algunas de las principales conclusiones de los diecisiete informantes clave. Se presentan agrupadas en cuatro temas principales:

- cambios en el patriarcado: secuestro, desplazamiento y erosión de las estructuras familiares;
- la guerra como oportunidad para la agencia de las mujeres y la subversión del patriarcado;
- subvertir las economías del patriarcado: microcréditos y tierra; y
- 77agencia de las mujeres en la resocialización de las masculinidades.

Cambios en el patriarcado: secuestro, desplazamiento y erosión de las estructuras familiares

La mayoría de los informantes explicaron que las mujeres fundaron diversas organizaciones porque la guerra desestabilizó el dominio (heteronormativo) de los hombres sobre la estabilidad social y material.⁷ Una combinación de reclutamiento forzado de hombres en las fuerzas de combate, violación y matrimonio forzado de niñas y mujeres, y el saqueo de ganado y otras propiedades contribuyó a desestabilizar las identidades masculinas en las sociedades Acholi y Langi (Dolan, 2009; 2002; Esuruku, 2011; Kizza et al., 2012). La investigación de Harris (2012) sobre las estructuras familiares y los sistemas de género/edad y el cambio social en el Norte de Uganda sugiere que, antes de la guerra, los hombres tenían “poder explícito como ocupantes de la posición superior en la jerarquía de género”, mientras que las mujeres mayores tenían poder implícito dentro de los hogares y el ‘patrilineaje’ como madres, tías y cuñadas. El poder de los hombres se asociaba a su papel de padres, tíos y ancianos de los clanes patrilineales.

Una madre lleva a su hijo mientras vende plátanos en Gulu, Uganda.



Organización	Informantes	Género	Edad	Educación Superior	Estado civil	Religión	Etnia
KIWEPI	KIA (fundador)	F	57	Debajo de terciario	Viuda	Musulmana	Acholi
	KIC (fundador)	F	Finales de los 50s	Universitario	Viuda	Católica	Acholi
	KIL (fundador)	F	44	Certificado en educación Diploma secretarial Administración de empresas, diploma universitario	Casada	Cristiana	Acholi
	KIX (personal)	F	30	Diplomatura en educación comunitaria adulta	Casada	Católica	Acholi
	KIB (personal)	F	En sus 20	Diploma de administración pública Máster en administración de empresas	Soltera	Católica	Acholi
	KID (personal)	M	29	Licenciatura en administración y gestión pública Máster en administración	Soltero	Católico	Acholi
	KIH (becario)	F	En sus 20	Desconocido	Casada	Católica	Acholi
KICWA	KIY (fundador)	F	59	Diploma/certificado desconocido en asesoramiento	Viuda	Protestante	Acholi
	KIU (voluntario)	F	25	Licenciada en administración y gestión pública	Casada	Católica	Acholi
	KIZ (personal)	M	38	Desconocido		Protestante	Acholi
WOPI-U	KIJ (fundador)	F	53	Cursando un máster en educación, planificación y gestión	Divorciada	Anglicana	Langi
	KIS (fundador)	F	55	Licenciada (primera mujer licenciada en el subcordado)	Casada	Católica	Langi
	KIW (fundador)	F	43	Licenciatura en contabilidad	Casada	Musulmán	Langi
	KIE (personal)	F	30	Licenciado en Estudios de Desarrollo Certificado en Derecho Administrativo	Casada	Anglicana y Católica	Langi
PVP	KIK (fundador)	F	63	Terciaria (desconocido)	Viuda	Cristiana	Acholi
WAN	KIN (personal y fundador)	F	30	Licenciatura en estudios de desarrollo	Casada	Desconocida (posiblemente cristiana)	Acholi
Live Again	KIT (fundador)	F	51	Máster en educación, administración y planificación	Desconocido	Cristiana	Acholi

Tabla 5.1 Perfil de 17 miembros del personal y fundadoras de seis organizaciones de mujeres por la paz

La propiedad y el control de la tierra eran fundamentales para este poder. Se dependía de los niños y los jóvenes para la continuidad del linaje, así como para el apoyo social y económico en la vejez. Con los desplazamientos, la violencia y la pérdida de medios de subsistencia, estas funciones y roles masculinos dominantes del linaje se desestabilizaron considerablemente (Dolan, 2009).

Esta historia de la guerra fue relatada tanto por informantes femeninos como masculinos, teniendo en cuenta que relativamente pocos hombres formaban parte del estudio. Todos mencionaron haber sido testigos del elevado reclutamiento de hombres por parte de las fuerzas combatientes. También señalaron que había más hombres que mujeres susceptibles de ser asesinados si se negaban a adherir a las exigencias de las fuerzas combatientes. Otros informaron que más hombres se quedaban en las zonas rurales para proteger sus tierras y su ganado. Por ejemplo, uno de los fundadores de WOPI—U explicó que muchos hombres se quedaban en las zonas rurales en un intento de cumplir su papel de protectores de la tierra y la propiedad, mientras que las mujeres se trasladaban a las ciudades con sus hijos en busca de protección:

Si te mueves por la carretera mientras la gente se desplaza y huye, ves a una mujer corriendo con un colchón en la cabeza, con una cacerola, un niño a la espalda y cogiendo de la mano a los otros niños. A veces miras a tu alrededor y no ves a ningún hombre con ella. Ella está viajando para proteger a los niños y a donde viaja tiene que buscar cómo alimentarlos. La mayoría de los hombres se quedan primero en las aldeas... Y esa es una de las razones por las que las mujeres asumen esta responsabilidad en lugar de los hombres”. (Informante clave J, fundador y miembro de la junta directiva, WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

La violencia masiva y los desplazamientos provocaron cambios sustanciales en las esferas de influencia económica y política de hombres y mujeres. Las investigaciones realizadas por Dolan (2009; 2002), Finnström (2006) y Harris (2012) indican que el Ejército de Resistencia Nacional de Museveni y el LRA, así como el ejército (gubernamental) ugandés, eran conocidos por robar ganado, saquear propiedades, violar, secuestrar y/o matar y mutilar a personas. La pérdida masiva de ganado y el secuestro, en su mayoría, de niños y jóvenes desestabilizaron aún más la autoridad masculina (Annan et al., 2011; Dolan, 2002). La autoridad masculina también se vio socavada a mediados de la década de 1990, cuando el Ejército ugandés obligó a aproximadamente dos millones de personas de la zona rural de Acholiland a vivir en ‘pueblos protegidos’ (es decir, campos de desplazados internos). Los oficiales del ejército gubernamental aprovecharon esta oportunidad para victimizar aún más a las comunidades Acholi e impedir que apoyaran al LRA (Finnström, 2006, citado en

Harris, 2012). En vista de que no tenían tierras que cultivar ni ganado que pastorear, la mayoría de los hombres recurrían al consumo excesivo de alcohol y al juego (Dolan, 2002).

Las investigaciones sobre las tasas de suicidio entre los hombres de los campos de desplazados internos del Norte de Uganda (Kizza et al., 2012) revelaron que la mayoría de los casos de suicidio eran consecuencia de la pérdida de dignidad de los hombres y de su sentido del valor social. Los hombres mayores se sentían que estaban siendo redundantes, mientras que los más jóvenes intentaban recuperar su estatus abandonando la escuela, optando por el matrimonio precoz y luchando por mantener a sus familias. “Estaban atrapados en un vacío de identidad en el que no eran ni hombres ni niños, un dilema que intentaban resolver mediante un comportamiento social arriesgado” (ibíd.: 10). Su autoestima se vio aún más afectada cuando se dieron cuenta de que sus esposas e hijas vendían sexo para sobrevivir. Algunos se vieron obligados a presenciar cómo sus mujeres e hijas eran violadas por soldados del gobierno o por el LRA. En algunos casos, los hombres se sintieron aún más humillados cuando ellos mismos fueron violados por soldados del gobierno (Dolan, 2002: 74–5). La figura 5.1 ilustra el desplazamiento de hombres y mujeres como consecuencia de la guerra en la región del Norte de Uganda. Los efectos subsiguientes del secuestro y la erosión de las estructuras familiares movilizaron a las mujeres en favor de esfuerzos colectivos por la paz.

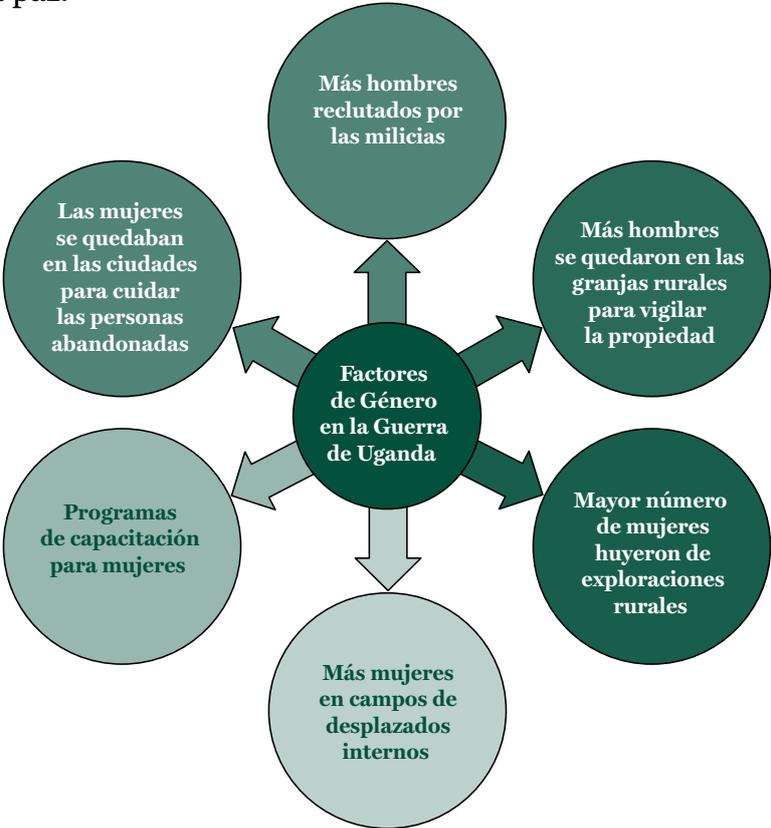


Figura 5.1 Flujo de género: desplazamiento de hombres y mujeres

La guerra como oportunidad para la agencia de las mujeres y la subversión del patriarcado

Las conclusiones de este estudio doctoral indican que el poder de las mujeres aumentó marginalmente como consecuencia de la guerra, lo que, a su vez, transformó las condiciones sociales que conformaban las normas de género, predominantemente entre las comunidades Acholi y Langi. Se amplió el poder de las mujeres mayores, antes implícito, como madres, tías, cuñadas o adivinas. La viudez, los matrimonios forzados y el aumento del número de niños huérfanos hicieron que las mujeres experimentaran de repente un incremento de sus responsabilidades materiales y maternas, aumentando inadvertidamente su esfera de influencia en el clan. Esta expansión del poder material — en contraposición al discursivo — se produjo dentro y fuera del linaje de sus padres o esposos. El estudio reveló específicamente las formas en que la guerra afectó el lugar de las mujeres dentro de las familias extensas, especialmente en lo que respecta a su secuestro y a los niños nacidos en cautiverio:

- Las mujeres y niñas secuestradas y/o separadas de sus familias durante varios años fueron obligadas a casarse con miembros de grupos de milicianos cuyos hijos engendraban como consecuencia de violaciones.
- Los niños nacidos en cautiverio se enfrentaban a varias posibilidades, a saber:
 - los que perdieron el contacto con sus padres biológicos o fueron rechazados por sus padrastros fueron acogidos por el clan paterno de su madre; y
 - los que fueron separados de sus familias y/o rechazados por el clan paterno de su madre acabaron siendo mantenidos por otras mujeres.

Todas las mujeres que fundaron organizaciones comunitarias de paz se refirieron a la necesidad urgente de ayudar a un gran número de niños indigentes en el seno de sus familias o de las comunidades en las que vivían. Una de las fundadoras ‘adoptó’ a ocho niños:

Ahora mismo tengo ocho. El mío ya se ha ido; ya ha madurado y se dedica a lo suyo. Pero tengo a mi cargo cuatro nietos que recogí de mis hermanas, a las que estoy ayudando. También tengo un hijo de mi hermano y otros que no son parientes, pero los elegí y los incorporé. Actualmente tengo ocho. (Informante clave J, fundador y miembro de la junta directiva, WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

En 2003, la participante citada mantenía a treinta y seis personas.

Sí, además de los miembros normales de la familia, tenía treinta y seis miembros y el terreno donde estoy ahora ya lo había comprado, pero aún no había desarrollado, así que los empujé, a otras tres familias, a quedarse allí. Fue un período difícil porque, por un lado, había que alimentar y mantener a esas personas y, por otro, había que asegurarles que las cosas se arreglarían con el tiempo... La gente estaba preocupada. Dejaron parte de la familia allí, la otra mitad está aquí; fue un momento un poco difícil... perdieron sus propiedades”. (Informante clave J, fundador y miembro de la junta directiva de WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

En esta situación, muchas mujeres sustituyeron el anterior papel dominante de los hombres como proveedores materiales y protectores de la familia. Además, el caos cotidiano de los campos de desplazados hacinados provocó una inevitable mezcla de clanes y sub—clanes en un espacio reducido, lo que dio lugar a cambios en los lazos patrilineales y a una pérdida general de control social. A pesar de la continua violencia sexual y de género, las mujeres se las arreglaron para mantener a sus familias adoptando diversas iniciativas:

Así que tienes todas esas responsabilidades de cuidar de los niños, de los enfermos, de ir por agua, cortar leña, de hacer todo eso, y la guerra te está molestando, está distorsionando todos los arreglos para que hagas ese trabajo porque, al fin y al cabo, lo que se espera es que si hay que llevar comida a la mesa seas tú quién la lleva... Y para las mujeres, como la vida se volvió tan difícil en el campo, tuvieron que volver a casa para ver si podían conseguir las sobras de mandioca o papas o lo que fuera, y en el proceso fueron violadas y alcanzadas por las minas terrestres. Todas estas mujeres sufrieron; fue en el proceso de intentar que sus familias sobrevivieran... para tener comida. Para nosotras, como mujeres, eso es algo único y creo que... eso es así para todas las mujeres. (Informante clave K, fundadora, PVP, Gulu, diciembre de 2014)

Un grupo de mujeres especialmente vulnerable fue el de las que fueron secuestradas y regresaron con hijos nacidos durante el cautiverio. Según Annan et al. (2011: 883), hasta el 26% de las jóvenes de entre catorce y treinta y cinco años fueron secuestradas durante la guerra. Se reclutaron principalmente para convertirlas en ‘esposas’ de hombres del LRA y en madres de niños secuestrados, algunos de los cuales no eran suyos. Aquellas que se casaron por la fuerza (hasta el 25%) experimentaron relaciones sexuales coercitivas “caracterizadas por el domicilio compartido, las responsabilidades domésticas, la exclusividad y las relaciones sexuales llevadas a cabo bajo amenazas” (ibíd.: 884). Cuanto mayor es el tiempo de cautiverio, mayores son las posibilidades de que se repita la violencia sexual y de género en forma de violación y matrimonio

forzado. De las seis organizaciones incluidas en el estudio, la Women's Advocacy Network (WAN) fue fundada únicamente por mujeres que habían sido secuestradas. El estudio descubrió que, como consecuencia de los secuestros, las fronteras de los clanes, familias y comunidades se hicieron porosas en el contexto de la guerra. La economía de guerra se basó en los secuestros para reproducir, literal y figuradamente, a los niños soldados. Como consecuencia, los lazos de parentesco se diluyeron y alteraron.

La capacidad de las mujeres para fundar grupos de paz en medio de tal estigma, violencia y flujo social revela su resistencia a la hora de crear opciones individuales y colectivas para sí mismas y para las comunidades que las rodean. Esta capacidad de navegar por sus vidas a través de situaciones precarias es tanto una forma de resiliencia como de agencia (Vigh, 2003: 136, citado en Utas, 2005). Desde una perspectiva feminista, la agencia también implica subvertir o impugnar las configuraciones sociales patriarcales y enmarcar:

un sentido de uno mismo como alguien que puede ir más allá de los significados dados en cualquier discurso, y forjar algo nuevo, a través de una combinación de discursos previamente no relacionados, a través de la invención de palabras y conceptos que capturan un cambio en la conciencia que está empezando a ocurrir, o a través de imaginar no lo que es, sino lo que podría ser. (Davies, 1991: 51)

El estudio descubrió que una forma de volver a imaginar la paz se produjo en la forma en que las mujeres activistas afrontaron el trauma del desplazamiento de los hombres y la pérdida de sus propiedades durante la guerra. Por ejemplo, las mujeres empezaron a organizar diversos grupos pacifistas y a velar por el bienestar material y social de otros necesitados. Asumieron nuevas posiciones sociales que impugnaban el poder de los hombres y modificaron ciertas construcciones patriarcales de la feminidad.—.se convirtieron en proveedoras dominantes de recursos materiales y reivindicaron su necesidad de ser propietarias de la tierra.

Subvertir las economías patriarcales: microcréditos y tierra

Una forma destacada en la que las mujeres pudieron apoyar a las comunidades fue a través de planes de microcrédito y pequeñas empresas para actividades generadoras de ingresos. En las primeras fases de formación de los grupos de paz, los esfuerzos de construcción de paz comenzaron con la recolección de alimentos entre amigos y familiares. Más tarde se adoptaron enfoques más institucionalizados, como la creación de pequeñas empresas de zumos, sastrería, comercio de alimentos, cría de animales,

vinicultura, cultivo de setas y apicultura, entre otras actividades. Algunos de estos negocios se convirtieron más tarde en planes de ahorro o microfinanza/microcrédito que permitían a las mujeres trabajar en grupo, ahorrar colectivamente y compartir riesgos financieros.

Tuvimos casos de mujeres que querían ser vendedoras en el mercado, empezamos con ellas. Y luego las que fueron capaces de hacer crecer los pocos ingresos que conseguían, pasaron a ciertos niveles superiores y pudieron obtener mejores ingresos. Y más tarde pudieron decirnos: ahora estoy asentada, mi marido ha vuelto, mis hijos van a la escuela. Si antes me daban un interés del 5%, ahora me dan como un 20% y algo así. Tuvimos algunas mujeres que lo estaban haciendo bien y que realmente nos impresionaron. (Informante clave K, miembro fundador, PVP, Gulu, diciembre de 2014).

Describieron la expansión de su capacidad para mantener a las personas de su entorno como una contribución a la paz. Varias organizaciones de Kitgum que no formaban parte del núcleo del estudio — como KIWEPI, KICWA y otras — combinaron los proyectos de generación de ingresos con planes de ahorro, a menudo denominados ‘asociaciones de ahorro y préstamo de las aldeas’ (VSLA, por sus siglas en inglés), financiados y coordinados en su mayoría por CARE International. Las VSLA formaban parte de un programa más amplio denominado Respuesta Integral Sostenible para Niños Vulnerables y sus Hogares (SCORE). En 2013, CARE había ayudado a facilitar la creación de 27 222 grupos VSLA en las zonas rurales de Uganda, que representaban a más de medio millón de personas. El informe afirma que se habían ahorrado hasta 52.000 millones de chelines ugandeses, unos 19 millones de dólares estadounidenses (Lowicki—Zucca et al., 2014). Por un lado, el papel de los donantes internacionales a la hora de facilitar numerosos proyectos para los más vulnerables es muy encomiable, pero por otro también fomentó las economías patriarcales.

No obstante, este estudio doctoral constató que los beneficios de la generación de ingresos estaban vinculados a la mitigación de la pobreza, así como a los beneficios a más largo plazo del desarrollo de capacidades, el empoderamiento y la concienciación que iban más allá de la mera supervivencia.

[Cuando] una persona es económicamente estable, puede hacer muchas cosas... y eso nos da tranquilidad: no te preocupa qué comerás mañana, qué te pondrás o qué harás, estás tranquilo...” ...la gente necesita tener tranquilidad para poder pensar en positivo, porque si no estoy seguro de lo que voy a hacer al minuto siguiente o de lo que me va a pasar al minuto siguiente, ¿por qué voy a seguir adelante y planificarlo? Eso también interfiere en lo que uno es capaz de hacer”. (Informante clave J, fundador y miembro de la junta directiva, WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

Las mujeres explicaron que los beneficios eran evidentes en los cambios de su posicionamiento social. Habían mejorado su capacidad para cuidar de sus familias y afrontar el trauma del desplazamiento, así como otras repercusiones psicosociales. La participación de las mujeres en estos colectivos de paz cambió su estatus de forma positiva, tanto social como económicamente. Así, su participación en la generación de ingresos se percibió como un intento práctico de hacer frente a los estragos de la guerra, de forma que se atendieran las diversas necesidades de las mujeres.

Y ahora, en aquellos días, también iniciamos algunas actividades generadoras de ingresos, formamos a las mujeres en la elaboración de pan y vino a partir de los recursos locales disponibles en el hogar, y luego las capacitamos en sastrería y en algunos aspectos de las habilidades de la vida cotidiana que pueden sostenerlas, y cultivar setas, cosas que pueden hacer en casa dentro de su recinto ... [P]ero cuando la gente regresó a casa desde los campamentos, cambiamos, nuestra visión cambió realmente; nos fijamos en el aspecto del desarrollo, las mujeres debían ser empoderadas, porque estábamos trabajando directamente con las mujeres afectadas por la guerra. ...Les hemos dado cabras y luego esta formación sobre sastrería también ha continuado y luego está el aspecto de los derechos humanos, la formación sobre la violencia de género que afecta a las mujeres... luego también hay un componente de salud reproductiva. (Informante clave W, fundador, WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

En general, parece que los proyectos de generación de ingresos y los planes de ahorro alimentaron las formas locales de asociación. Es difícil evaluar hasta qué punto fomentaron una vida asociativa que reconociera y transformara la opresión a través de la conciencia colectiva y la resistencia. Amina Mama (2014: 37—8) se muestra bastante escéptica en cuanto a si las mujeres que viven en contextos de guerra o tras una guerra pueden realmente abordar las raíces estructurales más amplias de la opresión, aunque este estudio da crédito al hecho de que se han producido algunos cambios. Los intentos de planes de microcrédito desempeñaron un papel vital de supervivencia, esencial para su sustento. Sin embargo, a las mujeres se les sigue negando el acceso a la tierra y la propiedad de esta.^{11`} Por lo general, no heredan la tierra de sus padres, ya que al casarse adoptan los nombres de los clanes de sus maridos.

En la subregión de Acholi, las adquisiciones de tierras son especialmente delicadas, ya que se producen tras el prolongado desplazamiento de la mayoría de la población y la consiguiente confusión sobre los límites. Su reasentamiento se ha complicado aún más por las especulaciones sobre la presencia de petróleo (Sjögren, 2014). Las vastas y fértiles tierras de Acholi, posiblemente ricas en petróleo, han atraído la atención

de posibles inversores, dispuestos y capaces de aprovecharse de una población empobrecida. Además de las numerosas disputas locales por la tierra, la región ha sido testigo recientemente de un número creciente de polémicas compras, arrendamientos y asignaciones. Todo ello ha alimentado la ansiedad y la tensión.

La propiedad de la tierra ha seguido siendo un problema importante para las mujeres, incluso en el contexto del postconflicto. El estudio reveló que las mujeres que habían sido secuestradas tenían grandes dificultades para reintegrarse en la comunidad, ya que no se les había asignado ninguna tierra.

[Como] mujer, si te vas de casa... no tienes tu parte de la tierra en casa, se espera que tengas una parte en casa de tu marido, ahora solo... tienes acceso a la tierra, no eres propietaria de ella y, en cuanto muere tu marido, o bien son tus hijos los que pueden hacerse cargo de la tierra, pero tú no, [o] puedes irte y que los hijos se queden con la tierra. Ahora bien, mientras los niños crecen, alguien, tal vez un tío de los niños, un cuñado, siempre tiene el control de esa tierra. (Informante clave W, fundador, WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

Muchas madres de niños nacidos en cautiverio habían perdido el contacto con el padre de su hijo y no podían encontrar fácilmente al clan paterno del niño ni ser aceptadas por él. Los miembros de las milicias tendían a no utilizar el nombre de su clan para ocultar su verdadera identidad. Esto hacía aún más difícil para las madres localizar al clan paterno de sus hijos cuando regresaban del ‘monte’. Otras mujeres se negaron a que se reconocieran sus matrimonios forzados con rebeldes. Según estas mujeres, no se siguieron los procesos tradicionales de pago del precio de la novia y otras ceremonias que introducían en la familia a miembros ajenos al linaje, por lo que el matrimonio con rebeldes no podía considerarse socialmente legítimo. Por ello, hubo muchos niños ‘sin padre’ que no pudieron reclamar la lealtad ancestral de su clan paterno. Sin conocimiento ni contacto con el linaje de su padre biológico, estos niños a menudo no tenían derecho legítimo a la tierra de su padre.

El conflicto de la tierra — nos dimos cuenta al visitarlos que el tema de la tierra aquí es un tema muy candente en el sentido de que tradicionalmente las mujeres solo pueden controlar la tierra a través de su marido, de un hermano o de alguien, pero no directamente como mujer. Así que intentamos apelar a los líderes de los clanes para que simpatizaran con las niñas madres y trataran de repartirles la tierra... Y les pedimos que repartieran parte de la tierra a las niñas madres para que pudieran cultivar desde casa. Porque, tradicionalmente, se supone que deben cultivar en el lugar donde se casan... se han enfrentado por la tierra”. (Informante clave Z, fundador de KICWA, Kitgum, febrero de 2015)

Así pues, parece que las normas patriarcales relativas a la tierra siguen siendo ‘no negociables’. En este contexto, las mujeres siguieron cuestionando aspectos del patriarcado, aunque de forma no crítica. Por ejemplo, las conclusiones de este estudio doctoral muestran cómo las mujeres iniciaron proyectos que afirmaban y valoraban las masculinidades no abusivas, al tiempo que reinscribían inconscientemente las masculinidades dominantes.

La agencia de las mujeres en la resocialización de las masculinidades

Como todos los demás, los hombres Acholi se han socializado en el patriarcado dominante. Según las mujeres de este estudio, la construcción de la paz a nivel micro implica que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la toma de decisiones y no estén sometidas a la dominación masculina:

Para que alguien se dé cuenta de la paz, las dos cosas [igualdad de género y paz] deben ir juntas... Si no van juntas, no creo que las cosas vayan bien. Por eso en este país las cosas no van bien, porque en la cultura se dice que una mujer está por debajo de un hombre, por lo que siempre debe estar por debajo de un hombre, y las decisiones siempre debe tomarlas un hombre. Y un hombre siempre tiene razón; cuando dice algo debe tomarse tan automáticamente que uno no trae paz porque un hombre puede decir algo que deprima a una mujer... Pero cuando se dice que a una mujer se le da tiempo para expresarse realmente y también se tiene en cuenta su decisión es cuando decimos OK creo que hay paz. Una mujer habla, el marido habla, o los hombres hablan y las mujeres hablan... Pero aquí la cultura nos sigue atando. Nos está atando. (Informante clave Y, fundador, KICWA, Kitgum, febrero de 2015).

Había conciencia de las opresiones patriarcales (estructurales) y culturales, que la guerra reforzó o (re)creó. Algunas mujeres activistas argumentaron que las raíces de la violencia en la comunidad están vinculadas a las costumbres Acholi de masculinidad durante y después de la guerra. En este sentido, un grupo pacifista de Lira, Women’s Peace Initiative— Uganda (WOPI—U), puso en marcha un proyecto comunitario de concienciación sobre la violencia de género llamado ¡SASA! SASA!, que significa “ahora” en kiswahili, que fue diseñado en realidad por dos organizaciones con sede en Kampala — Raising Voices y el Centro para la Prevención de la Violencia Doméstica (CEDOVIP). Formaron a más hombres que mujeres utilizando una metodología que pretendía crear “una masa crítica comprometida y capaz de crear un cambio de norma social” (Abramsky et al., 2014).

¡Un miembro fundador del grupo de mujeres por la paz se refirió a las ventajas de incluir a los hombres en el proyecto SASA!:

¡En nuestro reciente proyecto SASA! la mayoría de nuestros activistas comunitarios son hombres y quiero decir que es maravilloso porque si quieres abordar la VSG [violencia sexual y de género], hazlo desde los hombres, que son los perpetradores... Quiero compartir la experiencia de uno de ellos dando su testimonio. De como el solo entrenamiento de SASA lo transformó. Antes era un borracho, muy violento y cada vez que llegaba a casa todo el mundo, incluida la mujer, salía corriendo, pero todas las noches, durante las dos semanas de formación, les dimos cincuenta chelines de su bolsillo, así que en la siguiente reunión con ellos, dio testimonio de que por primera vez le había dado los cincuenta mil a su mujer, pero antes no solía darle dinero y la mujer le preguntaba: '¿Para qué es esto?'. Y para asegurarse de que decía la verdad, los hermanos vinieron a averiguar cómo se había transformado su hermano: '¿Quiénes son estas personas que han transformado a nuestro hermano? Y así, básicamente, y esto es solo para elaborar, al igual que las mujeres, los hombres son personas difíciles, pero cuando los traes a bordo son muy ingeniosos y son personas realmente confiables. Y como son más extrovertidos, llegan más a la comunidad que las mujeres; eso es lo que yo veo. (Informante clave S, fundador de WOPI—U, Lira, diciembre de 2013).

¡La iniciativa SASA! apunta a un cambio real en el comportamiento violento masculino de un miembro de la comunidad con el que el grupo de paz se había comprometido. El que este cambio pueda o vaya a mantenerse depende de diversos factores. ¡El proyecto SASA! es bastante nuevo y no todos los informantes participaron directamente en él.

Según Abramsky et al. (2014: 3):

El objetivo central de la intervención es promover un análisis crítico y un debate sobre el poder y las desigualdades de poder, no solo sobre las formas en que hombres y mujeres pueden hacer un mal uso de él, y las consecuencias de ello para sus relaciones íntimas y sus comunidades, sino también sobre cómo las personas pueden utilizar su poder de forma positiva para influir y mantener el cambio a nivel individual y comunitario.

Otros dos grupos —KIWEPI y WOPI—U— establecieron proyectos destinados a cambiar las masculinidades en la esfera doméstica a través de proyectos solo para hombres que valorizaban a los hombres que desempeñaban masculinidades 'pacíficas'. En el momento del estudio, los programas pretendían transformar ciertas masculinidades 'irresponsables' que la guerra parecía haber (re)creado o reforzado. Por ejemplo, en 2009, KIWEPI puso en marcha un proyecto titulado 'Male—

Engage', que surgió de un proyecto de empoderamiento de las mujeres. Según un miembro masculino del personal que coordinaba el programa de empoderamiento de las mujeres de KIWEPI en el momento del estudio, el equipo directivo central de KIWEPI se dio cuenta de que el empoderamiento de las mujeres no sería completo si no se 'incorporaba' a los hombres.⁸ Así se garantizaba que los hombres conocieran los principios del ahorro y, por lo tanto, no pudieran menospreciar fácilmente los esfuerzos de sus esposas por ahorrar. Además de invitar deliberadamente a los hombres a unirse a los planes de ahorro, KIWEPI se asoció con CARE International y empezó a 'educar' a la comunidad, especialmente a los hombres, sobre la importancia de los programas de capacitación de las mujeres y el papel de los hombres como socios de las mujeres en el hogar y la comunidad. En conversaciones con las comunidades con las que trabajaban, la interpretación de KIWEPI de las masculinidades 'pacíficas' incluía cinco temas: hombres que no son violentos en el hogar; hombres que no abusan del alcohol; hombres que apoyan económicamente a la familia; hombres que ayudan en las tareas domésticas; y hombres que permiten a sus esposas tomar algunas decisiones en el hogar. Los miembros de la comunidad pudieron votar por hombres que demostraban estar a la altura de estos cinco temas fundamentales. Se les otorgó un reconocimiento especial mediante una ceremonia de entrega de premios en la que fueron nombrados oficialmente *Lacor Makwiri* - hombres modelo:

Lacor Makwiri debería tener las siguientes cualidades. Uno, sus hijos deben ir todos a la escuela, no debe haber nada parecido al abandono escolar. Dos, su hogar no debe experimentar inseguridad alimentaria, la comida debe ser suficiente en ese hogar. Tres, no debe ser una persona violenta que maltrate a la mujer en todo momento, y todo eso son algunas de las cosas que se les ocurrieron. Tampoco debe beber de forma irresponsable, como volver a casa a medianoche. *Lacor Makwiri* no es así ... Deben tener las instalaciones sanitarias necesarias, la letrina debe estar en casa, el pozo de basura, el refugio para bañarse, el refugio para animales y aves de corral debe estar separado del humano, del hábitat humano. Así es como se le define, al hombre modelo. Después de la campaña, la comunidad votó en secreto y así se seleccionaron los 39 hombres modelo (informante clave D, KIWEPI, Kitgum, 19 de diciembre de 2013).

Al parecer, los intentos de las mujeres por resocializar las masculinidades se vieron circunscritos en gran medida por sus experiencias inmediatas de violencia de género y la falta de disposiciones materiales, lo que excluyó un análisis más profundo.

Conclusión

Este capítulo resalta las complejidades y matices que subyacen las iniciativas de paz de las mujeres en el Norte de Uganda. Estas mujeres mostraron un sentido de agencia y resiliencia en sus esfuerzos por establecer grupos y organizaciones de apoyo comunitario que abordaran el impacto socioeconómico y psicológico de la guerra con muy pocos recursos a su disposición. Las mujeres que iniciaron estos grupos de paz tenían suficientes vínculos sociales para poder hacer frente a las necesidades humanitarias inmediatas, aunque a pequeña escala. Aunque hay que admitir que hubo cierta “nueva imaginación de sus realidades”, que puede rastrearse a través de sus relatos, hay pocas pruebas de una conceptualización más profunda de sus esfuerzos por la paz. Está claro que las mujeres de este estudio no abordaron directamente las raíces políticas y étnicas de la guerra, sino que se centraron en las necesidades apremiantes inmediatas de los más vulnerables. Su *modus operandi* mostraba rasgos de una ‘economía de supervivencia’ (Peterson, 2008), que más tarde se convirtió en un mero modo de supervivencia. Se centraron en las necesidades de las familias que se habían reconfigurado debido a la guerra, intentaron renegociar en cierta medida las fronteras étnicas/de clan, sin mucho éxito, y desempeñaron un papel en la refundición de unas ‘masculinidades más pacíficas’. Todos estos intentos de “reposicionamiento social” se basaron en proyectos de micro ahorro y de generación de ingresos que cubrieran las necesidades materiales de las familias y de los más vulnerables de la comunidad. A pesar de estos esfuerzos a varios niveles para reparar el tejido social de esta sociedad desgarrada por la guerra, la cuestión de la tierra seguía siendo inexpugnable. Los sistemas y costumbres patriarcales de los clanes negaban a las mujeres la propiedad de la tierra. Así, aunque consiguieron algunos avances en la ocupación de espacios antes masculinizados, como ser proveedoras materiales, se les impidió cambiar la dinámica de poder inherente a la propiedad de la tierra.

Para concluir este capítulo, resulta evidente que las mujeres activistas por la paz empezaron con actividades informales para abordar las necesidades básicas derivadas del impacto de la guerra y avanzaron hacia un trabajo en red más estratégico con organizaciones internacionales para proporcionar ayuda. Además, su agenda se orientó hacia la reorganización estructural, comenzando con planes de ahorro mediante microcréditos, impugnando la propiedad de la tierra y abordando las masculinidades violentas y la ruptura de los sistemas de clanes.

Haría falta más investigación y análisis para mostrar las interrelaciones entre el patriarcado y la economía política neoliberal de Uganda, así como las arraigadas divisiones étnicas entre el Norte de Uganda y el resto del país. Como dice Confortini,

hace falta más ‘curiosidad feminista’ sobre cómo:

El patriarcado — en todas sus variadas formas, camuflado, vestido de caqui, y a rayas — es una de las causas principales tanto del estallido de conflictos sociales violentos como de los frecuentes fracasos de la comunidad internacional a la hora de proporcionar soluciones a largo plazo a esos conflictos violentos. (Confortini 2010: 4)

Notas

- 1- La investigación para este capítulo fue financiada por el Social Science Research Council (SSRC).
- 2- Véase una copia de la Plataforma de Acción de Beijing en www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm (consultado el 4 de mayo de 2019).
- 3- Véase “Facts and Figures on Peace and Security” en el sitio web de ONU Mujeres en www.unifem.org/gender_issues/women_war_peace/facts_figures.html (consultado el 25 de febrero de 2013).
- 4- Impulsó la creación del primer conjunto de políticas de género de Uganda en 1989. La Política de Género de Uganda estableció un marco político para la inclusión cuotas de género en las estructuras de los partidos políticos. El Movimiento de Resistencia Nacional (formalmente denominado Ejército de Resistencia Nacional que derrocó a Idi Amin) fue el primero en implementar un sistema de cuotas para mujeres con bastante éxito (Tamale, 1999).
- 5- “Proceso de paz” hace referencia aquí a un proceso formal de negociación y reconciliación dirigido por el Estado que va paralelo a una serie de otros mecanismos para abordar el conflicto, incluyendo la Ley de Amnistía, la Corte Penal Internacional y el mecanismo tradicional africano de Mato Oput. Dado que estos mecanismos son paralelos al proceso de negociación de paz, es importante mencionarlos ya que cada uno afecta en gran medida el progreso de los demás.
- 6- Las organizaciones son KICWA - Kitgum Concerned Women’s Association; KIWEPI - Iniciativa de Paz de las Mujeres de Kitgum; PVP - Voz Popular por la Paz; WAN - Red de Promoción de la Mujer; WOPI-U - Iniciativa de Paz de la Mujer-Uganda.
- 7- Aquí utilizamos la teoría de la dominación masculina de Pierre Bourdieu, que la define como un mundo social que se presta a la objetivación que se construye enteramente en torno a una visión del mundo androcéntrico - una historia arqueológica de inconsciente masculino “que constituye a las mujeres como objetos simbólicos cuyo ser (esse) es percibido (precipi), [y] tiene el efecto de mantenerlas en un estado permanente de inseguridad corporal, o más precisamente, de dependencia simbólica “(2001:66).
- 8- Entrevista, diciembre de 2013.

Referencias

- Abramsky, T., Devries, K., Kiss, L., Nakuti, J., Kyegombe, N., Starmann, E. and Michau, L. 2014. ‘Findings from the SASA! Study: A Cluster Randomized Controlled Trial to Assess the Impact of a Community Mobilization Intervention to Prevent Violence against Women and Reduce HIV Risk in Kampala, Uganda’, *BMC Medicine* 12 (12): 122.
- Allen, M. 1930. ‘The Women and Girls of Uganda’, *Uganda Church Review* 20 (October–December).
- Amone, C. and Muura, O. 2014. ‘British Colonialism and the Creation of Acholi Ethnic Identity in Uganda, 1894 to 1962’, *Journal of Imperial and Commonwealth History* 42 (2): 239–57.
- Annan, J., Blattman, C., Mazurana, D. and Carlson, K. 2011. ‘Civil War, Reintegration, and Gender in Northern Uganda’, *Journal of Conflict Resolution* 55 (6): 877–908.
- Apio—Julu, I. C. 2004. ‘Women’s Roles in Conflict Resolution: A Case Study of the Acholi, Northern Uganda’. Master’s thesis, Makerere University, Kampala.
- Atim, O. B. 2010. ‘Armed Conflicts and Women’s Empowerment in Northern Uganda: A Case of LRA Conflict in Gulu and Kitgum Districts, 2003–2008’. Master’s thesis, Makerere University, Kampala.

- Barry, J. 2005. *Rising Up in Response: Women's Rights Activism in Conflict*. Boulder CO and New York: Urgent Action Fund.
- Bourdieu, P. 2001. *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press.
- Branch, A. 2011. *Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, W. 1988. *Marriage, Divorce and Inheritance: The Uganda Council of Women's Movement for Legislative Reform*. Cambridge African Monographs 10. Cambridge: African Studies Centre.
- Campbell, S., Chandler, D. and Shabaratnam, M. (eds). 2011. *A Liberal Peace?: The Problems and Practices of Peacebuilding*. London: Zed Books.
- Cheldelin, S. I. and Eliatamby, M. (eds). 2011. *Women Waging War and Peace: International Perspectives on Women's Roles in Conflict and Post—conflict Reconstruction*. London: Continuum.
- Cockburn, C. 2007. *From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis*. London: Zed Books.
- Confortini, C. 2010. 'Feminist Contributions and Challenges to Peace Studies' in *The International Studies Encyclopedia*. Chichester and Malden, MA: Wiley—Blackwell and International Studies Association.
- Davies, B. 1991. 'The Concept of Agency: A Feminist Poststructuralist Analysis', *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice* 30: 42–53.
- Decker, A. C. 2014. *In Idi Amin's Shadow: Women, Gender, and Militarism in Uganda*. Athens OH: Ohio University Press.
- Dolan, C. 2002. 'Collapsing Masculinities and Weak States: A Case Study of Northern Uganda' in Cleaver, F. (ed.), *Masculinities Matter! Men, Gender and Development*. London: Zed Books.
- Dolan, C. 2009. *Social Torture: The Case of Northern Uganda, 1986–2006*, Vol. 4. New York: Berghahn Books.
- Doyle, M. and Ikenberry, J. G. (eds). 1997. *New Thinking in International Relations*. Boulder CO: Westview Press.
- Ellis, A., Manuel, C. and Mark, B. C. 2005. *Gender and Economic Growth in Uganda: Unleashing the Power of Women*. Washington DC: World Bank.
- Esuruku, R. S. 2011. 'Beyond Masculinity: Gender, Conflict and Post—conflict Reconstruction in Northern Uganda', *Journal of Science and Sustainable Development* 4 (25): 25–40.
- Finnström, S. 2006. 'Wars of the Past and War in the Present: The Lord's Resistance Movement/Army in Uganda', *Africa* 26 (2): 200–20.
- Gibbins, S. L. 2011. 'No Angry Women at the United Nations: Political Dreams and the Cultural Politics of United Nations Security Council Resolution 1325', *International Feminist Journal of Politics* 13 (4): 522–38.
- Harris, C. 2012. 'Gender–Age Systems and Social Change: A Haugaardian Power Analysis Based on Research from Northern Uganda', *Journal of Political Power* 5 (3): 475–92.

- Heathershaw, J. 2013. 'Towards Better Theories of Peacebuilding: Beyond the Liberal Peace Debate', *Peacebuilding* 1 (2): 275–82.
- Hendricks, C. 2011. *Gender and Security in Africa: An Overview*. Oslo: Nordiska Afrikainstitutet.
- Hudson, H. 2012. 'A Double—edged Sword of Peace? Reflections on the Tension between Representation and Protection in Gendering Liberal Peacebuilding', *International Peacekeeping* 19 (4): 443–60.
- Karugire, S. R. 1980. *A Political History of Uganda*. Nairobi: Heinemann.
- Kizza, D., Knizek, B. L., Kinyanda, E. and Hjelmeland, H. 2012. 'Men in Despair: A Qualitative Psychological Autopsy Study of Suicide in Northern Uganda', *Transcultural Psychiatry* 49 (5): 696–717.
- Lowicki—Zucca, M., Walugembe, P., Ogaba, I. and Langol, S. 2014. 'Savings Groups as a Socioeconomic Strategy to Improve Protection of Moderately and Critically Vulnerable Children in Uganda', *Children and Youth Services Review* 47: 176–81.
- Mama, A. 2014. 'Beyond Survival: Militarism, Equity and Women's Security' in Foeken, D., Dietz, T., de Haan, L. and Johnson, L. (eds), *Development and Equity: An Interdisciplinary Exploration by Ten Scholars from Africa, Asia and Latin America*. Leiden: Brill.
- Mama, A. and Okazawa—Rey, M. 2012. 'Militarism, Conflict and Women's Activism in the Global Era: Challenges and Prospects for Women in Three West African Contexts', *Feminist Review* 101 (1): 97–123.
- Moser, C. N. and Clark, F. 2001. *Victims, Perpetrators or Actors?: Gender, Armed Conflict and Political Violence*. London: Zed Books.
- Mulumba, D. 2002. 'The Women's Movement and Conflict Resolution in Uganda' in Tripp, A. M. and Kwesiga, J. C. (eds), *The Women's Movement in Uganda: History, Challenges, and Prospects*. Kampala: Fountain Publishers.
- Mutibwa, P. 2008. *The Buganda Factor in Uganda Politics*. Kampala: Fountain Publishers.
- Nabukeera—Musoke, H. 2012. 'Women Making a Difference to the Juba Peace Negotiation Process'. Unpublished paper. Kampala: Isis—WICCE.
- Ngoga P. 1998. 'Uganda: The National Resistance Army' in Clapham, C. (ed.), *African Guerrillas*. Kampala: Fountain Publishers.
- Ocheri, E. A. 2011. 'An Exploration of Intra—bush and Post—bush Experiences of Formerly Abducted Child Mothers in Northern Uganda: Issues in Rehabilitation, Resettlement and Reintegration'. PhD thesis, Makerere University, Kampala.
- Okot, A. C. 2010. 'Women and Peacebuilding: The Case of Women Involvement in Peace—building Process in Gulu District'. Master's thesis, Makerere University, Kampala.
- Olonisakin, F. and Okech, A. (eds). 2011. *Women's Security Governance in Africa*. Dakar and Nairobi: Pambazuka Press.
- Pankhurst, D. 2003. 'The "Sex War" and Other Wars: Towards a Feminist Approach to Peace Building', *Development in Practice* 13 (2–3): 154–77.
- Peterson, V. S. 2008. "'New Wars" and Gendered Economies', *Feminist Review* 88: 7–20.

- Pratt, N. and Richter—Devroe, S. 2011. 'Critically Examining UNSCR 1325 on Women, Peace and Security', *International Feminist Journal of Politics* 13 (4): 489–503.
- Pugh, M., Cooper, N. and Turner, M. (eds). 2008. *Whose Peace? Critical Perspectives on the Political Economy of Peacebuilding*. London: Palgrave Macmillan.
- Quinn, J. R. 2009. 'Getting to Peace? Negotiating with the LRA in Northern Uganda', *Human Rights Review* 10 (1): 55–71.
- Richmond, O. P. 2006. 'The Problem of Peace: Understanding the "Liberal Peace"', *Conflict, Security and Development* 6 (3): 291–314.
- Richmond, O. P. 2012. *A Post—liberal Peace*. London and New York: Routledge.
- Sathyamurthy, T. V. 1986. *The Political Development of Uganda 1900–1986*. Aldershot: Gower.
- Saul, J. S. 2004. 'The Unsteady State: Uganda, Obote, and General Amin' in Mohan, G. and Zack—Williams, T. (eds). *The Politics of Transition in Africa*. Trenton NJ: James Currey.
- Scully, P., McCandless, E. and Abu—Nimer, M. 2010. 'Gender Violence and Gender Justice in Peacebuilding and Development', *Journal of Peacebuilding and Development* 5 (3): 3–6.
- Selle, L. 2008. 'Women Participation in Peace Building in Northern Uganda: A Case of Gulu District'. Master's thesis, Makerere University, Kampala.
- Sjögren, A. 2014. 'Scrambling for the Promised Land: Land Acquisitions and the Politics of Representation in Post—war Acholi, Northern Uganda', *African Identities* 12 (1): 62–75.
- Steans, J. 1998. *Gender and International Relations: An Introduction*. Cambridge: Polity Press.
- Tamale, S. 1999. *When Hens Begin to Crow: Gender and Parliamentary Politics in Uganda*. Kampala: Fountain Publishers.
- Tickner, A. J. 1992. 'Hans Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation' in Grant, R. and Newland, K. (eds), *Gender and International Relations*. Milton Keynes: Open University Press.
- Tripp, A. M. 2000. *Women and Politics in Uganda*. Kampala: Fountain Publishers.
- Tripp, A. M. 2004. 'A New Look at Colonial Women: British Teachers and Activists in Uganda, 1898–1962', *Canadian Journal of African Studies/ La Revue Canadienne des Études Africaines* 38 (1): 123–56.
- Utas, M. 2005. 'Victimcy, Girlfriending, Soldiering: Tactic Agency in a Young Woman's Social Navigation of the Liberian War Zone', *Anthropological Quarterly* 78 (2): 403–30.
- Vigh, H. E. 2003. 'Navigating Terrains of War: Youth and Soldiering in Guinea—Bissau'. PhD thesis, Institute of Anthropology, Copenhagen.
- White, C. D. 1973. 'The Role of Women as an Interest Group in the Ugandan Political System'. MA thesis, Makerere University.
- Whitworth, S. 1994. *Feminism and International Relations*. New York: St Martins Press.
- Zaum, D. 2012. 'Beyond the "Liberal Peace"', *Global Governance* 18 (1): 121–32.

6

PRISMA DE LA MARGINALISACIÓN: ECONOMÍA POLÍTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN SUDÁN Y SUDÁN DEL SUR

Fahima Hashim



Introducción

La violencia contra las mujeres es un fenómeno global que se manifiesta de diferentes formas, y las mujeres de Sudán y Sudán del Sur no son una excepción. Han sido objeto de muchas formas de violencia, desde estructural y física hasta mental. Los factores que han contribuido a ello, como la familia, la comunidad local y el Estado, han precipitado la violencia contra las mujeres. Independientemente de las diversas formas de violencia, las mujeres sudanesas alcanzan posiciones que varían en función de sus diferentes antecedentes socio—geográficos, étnicos, culturales y religiosos. Este capítulo pretende identificar los principales factores socioeconómicos, políticos y culturales que contribuyen a la aparición y persistencia de la violencia contra las mujeres en Sudán. Examina el papel del Islam político y del Estado en la justificación y promoción de estas formas de violencia, y también explora las diversas manifestaciones de resistencia y organizaciones contra las políticas y legislaciones que sostienen la violencia contra las mujeres.

A pesar de la gran complejidad y las complicaciones, las diferentes formas de violencia en Sudán y Sudán del Sur han encontrado resistencia en diversas fuerzas, como las organizaciones de mujeres, las mujeres en la política y las mujeres en el exilio. La resistencia ha dado lugar tanto a éxitos como a fracasos, que se abordarán en este capítulo.

Partiendo de las premisas de la economía política feminista que ponen de relieve la naturaleza masculina de la estructura de autoridad política y económica integrada (True, 2010), este capítulo trata de trazar un mapa de las diversas formas de violencia estructural a las que se enfrentan las mujeres en el Norte y el Sur de Sudán¹. Utilizando este marco teórico, la literatura pertinente y mis propias experiencias vividas, el capítulo explora las normas socioculturales, las instituciones patriarcales de la familia y matrimonio y la violencia institucional representada en la fuerza de las leyes y políticas islámicas que obstaculizan las contribuciones económicas de las mujeres, así como la violencia en los conflictos, la violencia sexual, los desplazamientos y el racismo.

Antecedentes: el fracaso del Estado

La violencia, las guerras civiles y la inestabilidad política agravada por las interpretaciones dogmáticas del Islam, han asolado Sudán desde su independencia

de los británicos en 1956. Estas turbulencias son consecuencia directa del Estado poscolonial, que se basó en una historia de explotación colonial de los recursos de la zona en lugar de su desarrollo. Los británicos legaron el poder a una élite que procedía predominantemente de los elementos islamizados y arabizados de los grupos sociales ribereños y diseñaron una forma muy estrecha de identidad estatal basada exclusivamente en su interpretación del Islam y de la cultura árabe. Esta identidad ignoró otros componentes sociales, culturales, religiosos y lingüísticos del país, lo que condujo a su abierta marginación y exclusión de la toma de decisiones importantes. La separación de Sudán del Sur en 2011 no fue más que uno de los resultados de la identidad estatal estrechamente definida y forjada por el Estado centralizado mediante la fuerza física e ideológica. Como resultado, las mujeres de todos los ámbitos de la vida se han visto afectadas negativamente por los fracasos de la formación del Estado sudanés, especialmente bajo el gobierno actual, desde 1989 hasta el presente.

Desde su independencia en 1956, Sudán ha sido testigo de un recrudecimiento de movimientos étnicos y regionales armados que han provocado un sufrimiento masivo y han causado desplazamientos generalizados y un gran número de refugiados en el Sur (Idris, 2013). Las protestas en el Sur desafiaron al recién independizado Estado sudanés, controlado por las élites arabizadas e islamizadas que se esforzaron por definir e imponer una determinada concepción de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía que ignoraba la realidad multicultural y social de Sudán (ibíd.).

Entre 1898 y 1956, Sudán estuvo gobernado por una administración anglo—egipcia. A pesar de ser administrado como un solo país, los británicos siguieron políticas muy divergentes a la hora de gobernar el Norte y el Sur. Este sistema dual “reforzaba el arabismo y el Islam en el Norte y fomentaba el desarrollo del Sur según las líneas africanas autóctonas, mientras que introducía la educación misionera cristiana y los rudimentos de la civilización occidental en el Sur. Para los británicos, Sudán era en realidad dos países en uno” (BAfD, 2011). Además, la concentración del desarrollo económico, político y administrativo en el Norte a expensas del Sur creó graves discrepancias socioeconómicas y políticas entre las dos regiones y afectó la relación entre los pueblos del Norte y del Sur (ibíd.). De hecho, había muchos factores derivados del desarrollo desigual que afectaban a la posibilidad de construir una nación, y la educación era uno de los principales. El acceso a la educación en el Sur estaba restringido a la educación misionera, que “desalentaba a los sudaneses del Sur de participar en la política, en los debates políticos y en la acción”. Por el contrario, los sudaneses del Norte tenían “la oportunidad de tener plataformas políticas y exposición al mundo exterior” (ibíd.).



Hombres armados en Sudán del Sur.

Durante el período de dominio anglo egipcio, las cuestiones relativas al desarrollo de las mujeres en la región del Sur se controlaban y decidían por las normas tribales y las leyes consuetudinarias. Este proceso afectó la escolarización de las niñas. La posición de la mujer estaba determinada por su papel reproductivo y su contribución económica, que se basaban en el trabajo agrícola de la mujer y en el matrimonio. Al llegar a la edad del matrimonio, las niñas en Sudán del Sur se convertían en la riqueza de la familia; por lo tanto, las mujeres no tenían otra opción que seguir la decisión familiar (Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009). Era difícil retener a las maestras para mantener la continuidad de la educación de las niñas en el Sur debido a los matrimonios precoces y forzados. La brecha entre la educación de las niñas en el Norte y en el Sur se vio afectada por la política de ‘divide y vencerás’ de la administración colonial; esto afectó los niveles de educación alcanzados por las niñas en el Sur, que siguieron siendo limitados en comparación con el Norte. En la década de 1940, con el surgimiento de un movimiento nacional que reclamaba un Sudán independiente, se tomó conciencia de ello (Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009). Cuando las mujeres del Norte obtuvieron por primera vez sus derechos políticos, las del Sur seguían teniendo poco acceso a la educación y sufrían la pobreza en una situación de inestabilidad regional, que duró hasta el primer acuerdo de paz en 1972 (Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009).

En la actualidad, Sudán tiene una población estimada de 40 millones de habitantes (casi el 50% mujeres y el 50% hombres), con un 32% de población urbana, un 68% de población rural y 7% de población nómada (SIHA Network, 2015). El Islam es la religión predominante, sobre todo en el Norte, mientras que el Cristianismo y las religiones tradicionales animistas son más frecuentes en el Sur y en algunas zonas del Sur del Nilo Azul y las regiones occidentales. Sudán es una república con un sistema de gobierno federal. Hay múltiples niveles de administración, con veintiséis estados, diez de los cuales se encuentran en Sudán del Sur (ibíd.).

Los elementos que constituyen la identidad nacional en Sudán son complejos. La población está compuesta por una multitud de grupos étnicos y habitantes que hablan más de 130 lenguas y dialectos (SIHA Network, 2015). A lo largo de los años ha surgido una cultura islámico—africana—árabe que se ha hecho predominante en el Norte. La lengua árabe se habla en la mayor parte del país (ibíd.).

Sudán del Sur está formado por más de sesenta grupos étnicos con ochenta lenguas locales. La población es predominantemente cristiana, con unos pocos musulmanes y el número restante practica creencias tribales tradicionales (PNUD, 2015). Los habitantes de las zonas rurales representan el 83% de la población del país, y la cultura ganadera es un elemento esencial de la sociedad. En consecuencia, la propiedad de un rebaño de ganado es un indicador clave de riqueza y el robo de ganado fue el principal catalizador de la violencia intercomunal antes de que estallara el actual conflicto político en 2013 (ibíd.).

En los últimos veinte años, la economía sudanesa ha experimentado una rápida y turbulenta transición hacia una economía de mercado acelerada, apartándose de un legado de control estatal y planificación indicativa (Almosharaf, 2014). Los préstamos de un sector bancario islámico global y la imposición de este tipo de sistema han desempeñado un papel crucial en estos cambios (ibíd.). Esto ha afectado a las mujeres en la economía de mercado y ha llevado a la privatización de la educación y la salud. También ha privado de derechos civiles a la población no musulmana.

Sudán obtuvo una puntuación de 0,490 y se situó en el puesto 165 de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2016. El contexto macroeconómico de Sudán, según el Banco Mundial, es el de un país de ingreso medio—bajo, con un Producto Interno Bruto (PIB) de US\$72.065,90 en 2013, que aumentó a us\$95.585,40 en 2016. Su crecimiento del PIB fue del 4.4% en 2013, aumentando al 4.7% en 2016, y tuvo una tasa de inflación anual del 30.0% en 2013, disminuyendo al 1.9% en 2015. Los

sectores agrícola y ganadero aportan actualmente menos del 40% del PIB de Sudán. Tras el descubrimiento de petróleo en el Sur a finales de 1999, Sudán pasó a depender completamente de los ingresos del petróleo, que aportaban más del 50% de los ingresos del Gobierno y constituían el 95% de sus exportaciones (BTI, 2018).

La tasa de desempleo se estimó en 2016 en el 19.3%. También aparecieron disparidades entre las zonas rurales y urbanas en el nivel de exclusión social, con un desarrollo más concentrado en el centro, mientras que el oeste, el Sur y el este seguían siendo relativamente desfavorecidos (BTI, 2018). ‘Esto ha contribuido y ha fortalecido el crecimiento del conflicto, especialmente en el oeste y el Sur. En Darfur, los movimientos rebeldes han hecho referencia explícita a su exclusión política y económica debido a la discriminación étnica y racial por parte de los grupos étnicos del Nilo central’ (ibíd.).

Como destaca un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI):

Son muchos los factores que explican la persistencia de la pobreza en Sudán, pero los principales son:

- Los largos y prolongados conflictos civiles en el Sur, el oeste y el este de Sudán, que han desviado los recursos del desarrollo a las guerras, han deteriorado el capital social y la buena gobernanza y han destruido el capital humano y físico ...
- El sesgo urbano de las políticas y programas de desarrollo en el pasado que descuidó los esfuerzos para aumentar ampliamente la productividad de los factores de producción rurales, en particular en el ámbito de la agricultura de secano;
- La falta de un esfuerzo coherente de reducción de la pobreza y de una reforma sostenida para promover el crecimiento compartido y diversificar la economía. (FMI, 2013)

Estos factores se vieron agravados por “una deuda externa insostenible [y] las prolongadas sanciones económicas internacionales” (FMI, 2013).

Puede concluirse que la pobreza en Sudán se da predominantemente en las zonas rurales y entre aquellos cuyos ingresos proceden de la agricultura y la ganadería. La incidencia de la pobreza es marginalmente menor (44.2%) entre el pequeño porcentaje de hogares encabezados por mujeres (17.3%) en comparación con los hogares encabezados por hombres, que tienen una tasa de incidencia del 47.2% (BTI, 2018).

La prestación de salud pública es limitada y de mala calidad. Y aunque la oferta educativa para todos los grupos de edad (incluidas mujeres y niñas) se ha ampliado, la calidad ha disminuido. Tanto en la atención de salud como en educación, la oferta es limitada pero costosa, fuera del alcance de la mayoría de la población. Según la

Ronda 2 de la Encuesta de Salud de los Hogares de Sudán (SHHS2) en 2010, la tasa de mortalidad infantil en Sudán era de sesenta por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que la tasa de mortalidad de menores de cinco años era de ochenta y tres por cada 1,000 nacidos vivos durante el período de cinco años anterior a la SHHS2. Las estimaciones de las tasas de mortalidad neonatal/post neonatal y de mortalidad infantil se calcularon utilizando el método directo y fueron de treinta y cuatro y veintiséis por cada 1,000 nacidos vivos, respectivamente (Gobierno de Sudán, 2012).

El número de mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado, aunque esto ha estado impulsado por la necesidad y, en promedio, las mujeres ganan menos que los hombres (BTI, 2018). Las mujeres representan ahora el 29.4% de la fuerza de trabajo y, en algunas universidades, hay un mayor porcentaje de mujeres estudiantes que de hombres. Sudán obtuvo 0.591 puntos en el Índice de Desigualdad de Género de 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aunque se trata de una ligera mejora con respecto a años anteriores, Sudán sigue estando al mismo nivel que Mozambique y la República Democrática del Congo (ibíd.).

El estado de la desigualdad: la posición económica, social y cultural de las mujeres

La situación económica de las mujeres siguió deteriorándose a pesar de que la distribución equitativa de la riqueza y el poder, la justicia social y el derecho a la igualdad de participación en la vida pública estaban consagrados en la Constitución provisional de 2005. Los planes económicos y sociales siguen sin considerar las necesidades de las mujeres y apenas tienen en cuenta su importante participación en la economía (Elrayh, 2014).

La posición de la mujer en Sudán varía en función de las diferencias socioeconómicas, políticas, culturales y geográficas del país, por lo que siempre es difícil hablar de las mujeres sudanesas del Norte y del Sur como un grupo unificado. El patriarcado es el dominio común, mientras que el Estado y la sociedad se ven afectados por la imposición de la política del Islam y la discriminación étnica.

El derecho a la educación está consagrado en la actual carta de derechos de la Constitución provisional de 2005. Aunque se trata de un medio clave para el avance de la mujer, sigue sin cumplirse por falta de compromiso político, lo que deja al 50.6% de las mujeres analfabetas. El deterioro de la situación económica de las familias y las creencias tradicionales sobre los roles de género también han contribuido a negar

el derecho de las mujeres y las niñas a la educación, dado que se da preferencia a los hombres (Elrayh, 2014).

A pesar de los notables avances en la lucha contra la desigualdad de género, las instituciones educativas formales y no formales no promueven sistemáticamente la igualdad de género en todos los aspectos de la vida social, económica y política. Aunque en Sudán las mujeres son económicamente activas y las actitudes de género están cambiando, existen diferencias significativas entre los estados y entre los entornos rurales y urbanos.

La tasa de alfabetización de Sudán es del 58.6%, que es comparativamente baja según los estándares internacionales. Las tasas de alfabetización suelen ser más altas en las zonas urbanas en comparación con las zonas rurales. Aunque la tasa de urbanización es muy alta, se debe principalmente a la capital, Jartum, que en 2008 (último censo) tenía una población de 4.27 millones de habitantes; en comparación, Nyala en Darfur del Sur, la segunda ciudad más grande del país tenía una población de 443,000 personas (ONU—Hábitat, 2014). La tasa de alfabetización de las mujeres es inferior a la de los hombres: 53.1% frente a 64.1%. Sin embargo, ha aumentado el número de mujeres alfabetizadas, lo que ha propiciado una mejora de las condiciones sociales y laborales de las mujeres en los últimos años. La proporción de mujeres y hombres en la enseñanza superior es de 1.1:1.0 (índice de paridad de género), aunque la proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria es de 0.9:1.0. En la educación secundaria, ambos sexos están representados por igual. En general, la tasa de escolarización es baja, aunque ha aumentado el número de estudiantes de educación superior, sobre todo entre las mujeres. Sin embargo, la calidad de la educación en todos los niveles ha disminuido en general, lo que ha fomentado el crecimiento de la educación privada para aquellos que pueden pagarla (BTI, 2018).

En efecto, la ausencia de disposiciones legales para aplicar la cláusula de discriminación positiva de la Constitución es que solo un pequeño número de mujeres asumen altos cargos en las instituciones estatales y el sector privado. Según Elrayh (2014), el porcentaje estimado de mujeres licenciadas en educación superior es del 58%. Sin embargo, solo el 26% de ellas consigue entrar al sector formal. Del 90% de sudaneses que viven por debajo del umbral de la pobreza, el 65% son mujeres (ibíd.).

El espacio entre nosotras

A lo largo de la historia de Sudán, las mujeres del Norte y del Sur no han tenido la oportunidad de reunirse o integrarse para ayudar a construir una nación. A pesar de formar parte de una única nación, han seguido trayectorias diferentes en lo que respecta a la identidad de género, la religión y el patriarcado.

Marginalización de las mujeres sursudanesas

Las mujeres de Sudán del Sur están condicionadas por el contexto social y económico de ser uno de los países menos desarrollados del mundo, devastado por décadas de conflicto (1955—72 y 1983—2005). La población es de un 48% de mujeres y un 52% de hombres; la media mundial es de un 51% de mujeres y un 49% de hombres. La mayoría de su población es muy joven: con un 72% de menores de treinta años. Tiene las tasas de mortalidad materna más altas del mundo: una de cada siete mujeres corre el riesgo de morir durante el parto o el embarazo (Makuei et al., 2018). Las tasas de educación son profundamente bajas, ya que solo el 27% de la población adulta está alfabetizada, y existe una marcada discrepancia de género, ya que el 40% de los hombres pero solo el 16% de las mujeres mayores de quince años están alfabetizados. UNICEF calcula que el 70% de los niños de entre seis y diecisiete años nunca se han escolarizado. Las normas y tradiciones culturales, especialmente en las zonas rurales, marginan a las mujeres para que no participen públicamente ni tengan ninguna actividad política o social (ibíd.).

Antes del acuerdo de paz, durante el conflicto de 1983—2005, la violencia de género, tanto física como psicológica, estaba muy extendida en Sudán del Sur. Se centraba en la violencia sexual, especialmente en la violación de mujeres y hombres, que se producía en un contexto de prácticas tradicionales como la ‘compensación a las niñas’ y la prostitución forzada o la esclavitud sexual, que eran realidades vividas por las mujeres de Sudán del Sur. Además, la violencia doméstica era una norma aceptada en la sociedad. El matrimonio precoz era y sigue siendo una tendencia común, con un 45% de las niñas casadas antes de los dieciocho años y un 7% de las niñas casadas antes de los quince años. La poligamia es otra norma y el divorcio es extremadamente difícil de obtener para las mujeres. Tradicionalmente, solo los hombres pueden pedir el divorcio y la familia de la esposa tiene que devolver el precio de la novia (PNUD, 2015).

Las mujeres de Sudán del Sur, al igual que las del Norte, no son homogéneas y su posición social está determinada por tradiciones culturales étnicas. El lugar

reconocido de la mujer del Sur es el hogar, donde se convierte en esposa y madre. Además, la mujer ideal es aquella que es trabajadora, cuida de su familia y es sumisa (Hall e Ismail, 1981). Sin embargo, las mujeres del Sur no están segregadas de los hombres en su vida social, a diferencia de las mujeres del Norte, predominantemente musulmán. Sin embargo, se enfrentan problemas y retos diferentes, como la falta de educación, la pobreza y los conflictos. A pesar del papel reproductivo de las mujeres en el Sur, representan una importante fuerza económica en la agricultura, la producción de alimentos y la ganadería. Sin embargo, antes de que estallara el primer conflicto en 1955, en Sudán del Sur se habían realizado pocas investigaciones y muy pocos estudios (ibíd.).

Desde la firma del Acuerdo General de Paz (AGP), Sudán del Sur ha reconocido, al menos formalmente, la importancia del papel de las mujeres y su contribución a los procesos de negociación de la paz, aunque sea pequeña. Por ello, el país ha promulgado leyes y políticas explícitas sobre la igualdad de género, y la Constitución de transición y la Carta de Derechos de 2011 garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. En ella se reconocen las desigualdades históricas entre mujeres y hombres en Sudán del Sur y se establece una cuota de acción afirmativa del 25% para las mujeres en los órganos legislativos y ejecutivos y en la participación política. Como resultado, las mujeres representan actualmente el 26.5% de la Asamblea Legislativa Nacional (No Safe Place, 2017).

Mujeres del Norte de Sudán: las privilegiadas

Como muchas sociedades musulmanas regidas por la ley islámica desde el Imperio Otomano (1821—85), Sudán del Norte tiene un carácter fundamentalmente patriarcal y está controlado exclusivamente por los hombres, cuya función clave es mantener el hogar económica y socialmente. Sin embargo, la posición subordinada de la mujer en el Norte comenzó a cambiar cuando los británicos empezaron a reconocer la educación de las niñas durante la década de 1920. Esto se produjo tras los esfuerzos realizados por el jeque Babiker Badri en 1907 para fundar una escuela para niñas que ofreciera educación formal y enseñara a sus propias hijas y familiares (siete niñas), que los británicos se negaron a apoyar. La colonización británica supuso un importante cambio en la economía del país, ya que introdujo el capitalismo y lo transformó en proveedor de materias primas para las industrias británicas y en mercado para los productos manufacturados europeos.

En el Norte, los británicos aplicaban una política educativa discriminatoria en materia de género, formando principalmente a los hombres como trabajadores y educando a

las niñas para que se convirtieran en buenas esposas. Sin embargo, a pesar de ello, la educación de las niñas se utilizó como vehículo hacia la emancipación (Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009; Hale, 1996). En la década de 1920, un número considerable de niñas se matriculó en escuelas con clases que variaban entre cuarenta y sesenta alumnos. En 1925, cinco niñas habían recibido formación en el instituto de formación de maestros de Omdurman, que había abierto sus puertas en 1923, para trabajar en escuelas primarias del Norte (Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009). A principios de la década de 1930, la administración colonial empezó a considerar el trabajo en salud y en la enseñanza como labores femeninas, lo que aparentemente mejoró la situación económica de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres tendían a ser empleadas como enfermeras, parteras y trabajadoras de salud comunitarias. Este empleo se consideraba adecuado y era socialmente aceptable, aunque con ciertas reticencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos necesitaban enfermeras; sin embargo, con las restricciones de las normas sociales sudanesas y del Islam, relativas a mezclar mujeres y hombres en el Norte, las autoridades británicas reclutaron a prostitutas que resultaron ser buenas enfermeras. Esto, sin embargo, hizo que la enfermería no fuera un trabajo bienvenido para las mujeres sudanesas respetables (Spaulding y Beswick, 2016). En 1926 se habían graduado cuatro parteras, cuyas edades oscilaban entre los cuarenta y los sesenta años. A mediados de la década de 1930 se graduaron siete enfermeras, a las que más tarde se unieron dos mujeres del Sur a finales de la década de 1930 (Hall e Ismail, 1981).

Cuando los británicos establecieron la formación de parteras entrenadas a finales de la década de 1920, solo se aceptaba y reclutaba a mujeres mayores (de cuarenta a setenta años), casadas y con hijos. Las mujeres jóvenes, solteras y comprometidas no fueron bien recibidas por la sociedad hasta más tarde y los británicos evitaron reclutarlas, temerosos de que fueran tachadas de ‘pervertidas’ (Brown, 2017). Se reclutó a algunas mujeres del Sur para formarlas como parteras; sin embargo, se las segregó del trabajo con parteras del Norte, dado que los formadores británicos temían que las sudanesas del Sur aprendieran la práctica de la mutilación genital femenina (MGF) (ibíd.).

A finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, el país estaba sumido en la agitación, con llamamientos a la independencia seguidos de la formación de partidos políticos (Ali, 2015). Esto contribuyó a que las mujeres del Norte empezaran a organizarse y a formar sus propios sindicatos; principalmente los sindicatos de maestras y enfermeras, que se iniciaron a finales de la década de 1940 (Ahmad, 2014). A principios de la década de 1950, algunas mujeres empezaron a afiliarse al Partido Comunista, que en aquel momento era el único partido político que abría sus puertas a

las mujeres. Poco después se formó la Unión de Mujeres, que se convirtió en la primera organización que aglutinaba a las mujeres sudanesas para trabajar colectivamente (ibíd.).

Violencia contra la mujer: prevalencia y manifestaciones

La definición de violencia contra la mujer más utilizada es la que proporciona el marco jurídico de las Naciones Unidas establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General mediante la Resolución 48/104 de diciembre de 1993 (True, 2012). Los artículos 1 y 2 definen la violencia contra la mujer como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado una agresión física, sexual o psicológica, daños o sufrimientos a las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. True afirma además que “la definición de la ONU abarca, pero no se limita, a la violencia física, sexual, psicológica/emocional y, más recientemente, a la violencia o explotación económica que se produce en la familia o la comunidad y/o perpetrada o consentida por el Estado” (ibíd.).

Además, subraya que la violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona condiciona el disfrute y el cumplimiento de todos los demás derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo, la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, el agua y la tierra.

En Sudán, la mayoría de las formas y pautas de comportamiento violento han sido arraigadas política, cultural y económicamente por la comunidad, la familia y el Estado. Las leyes islámicas restrictivas, como la lapidación, la flagelación, el velo forzado y la restricción de la movilidad en la esfera pública han impuesto formas específicas de violencia. Otras formas de violencia contra la mujer son el matrimonio forzado, la violación conyugal, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina, así como las relacionadas con el conflicto en curso, del que el Estado es parte integrante, como el desplazamiento, la violación y la violencia sexual utilizadas como arma de guerra, el secuestro, la violencia étnica, la prostitución forzada y la trata de personas, por mencionar solo algunas. El acceso a la justicia es complicado y casi imposible debido al sistema de impunidad, especialmente entre los actores estatales (es decir, la policía, los servicios de seguridad, el ejército y las milicias); la ambigüedad de algunos artículos del Código Penal de 1991; el estigma de la violencia,

especialmente la violencia sexual; la falta de documentación de los casos; y la falta de datos desglosados sobre la violencia contra las mujeres.

Normas socioculturales y violencia estructural

La disparidad de género es bastante perceptible en Sudán, tanto en el Norte como en el Sur. Los hombres son vistos como activos y dinámicos, mientras que las mujeres son consideradas miembros pasivos de la sociedad. Están subordinadas al poder de los hombres y normalmente se les considera más en una capacidad puramente maternal (Ahmad, 2014). Hay muchos factores socioeconómicos y culturales que apoyan la discriminación y la desigualdad de género y que, a su vez, afectan el avance social, político y económico de las mujeres. Estos factores están arraigados en los procesos de socialización, en la educación y en toda la esfera pública. Esta discriminación institucionalizada, que favorece a los hombres en detrimento de las mujeres en el seno de la familia y de la sociedad en general, también lleva a muchas mujeres a considerar que su rol se limita al cuidado de los hijos, a obedecer a sus maridos y a ser buenas amas de casa (ibíd.).

La institución familiar

Es imperativo examinar aquí el papel de la familia extendida en relación con la posición y la situación de la mujer. Aunque como institución ha experimentado cambios, la naturaleza de estos cambios debe considerarse en relación con las diferencias de clase y regionales, y sigue siendo una de las estructuras más dominantes de la sociedad sudanesa (El Bakri, 1995). En el seno de la familia extendida, siguen existiendo marcadas distinciones de roles entre mujeres y hombres. La mayor parte de la vida social y las actividades giran en torno a la familia y son principalmente del dominio de las mujeres. Los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y las circuncisiones son las celebraciones importantes y las mujeres deben contribuir, ya sea económicamente o aportando mano de obra y estando presentes. Si no lo hacen — especialmente las mujeres que trabajan — serán objeto de burlas o perderán el apoyo familiar del que dependen (ibíd.). El Bakri concluye que la familia extendida en Sudán no solo es el lugar de opresión de las mujeres, sino también su apoyo. La familia extendida ha satisfecho muchas necesidades importantes para las mujeres en Sudán; sin embargo, no se sugiere que la familia extendida sea un sustituto de las organizaciones de mujeres (ibíd.).

La institución del matrimonio

El matrimonio es otra institución crucial que frustra la vida de las mujeres sudanesas. Se considera necesario no solo por su valor social, sino también por su impacto en

la estabilidad económica (Gruenbaum, 2006). El matrimonio permite tanto a las mujeres como a los hombres acceder al trabajo del otro dada la división sexual del trabajo, la maternidad, la reproducción social y el reconocimiento y el prestigio social (ibíd.). Además, el matrimonio es la única forma legitimada en que las mujeres pueden ser sexualmente activas y satisfacer sus propias necesidades sexuales.

El Artículo 40, Cláusula 2 de la Ley del Estatuto Personal de 1991 fijaba como edad mínima para contraer matrimonio — diez años — a pesar de que Sudán había ratificado en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el matrimonio infantil (Musawah, 2009). Así mismo, el artículo 75 estipula que “la esposa se declarará desobediente si abandona el domicilio conyugal sin justificación legítima, es decir, si trabaja fuera o visita a sus padres sin permiso del marido” (ibíd.).

Dados los antecedentes expuestos, es obvio que, a lo largo de la historia de Sudán, las mujeres del Norte y del Sur no han tenido ninguna oportunidad de unirse, construir una nación o cuestionar su diversidad e identidad política. Esto se ha hecho difícil y complejo debido a las ideologías y conceptos que conducen a la violencia estructural y a la diferenciación por motivos étnicos, de esclavitud, religión y lenguaje — nosotros contra ellos, como los árabes contra los africanos, el Islam contra el Cristianismo y otras religiones tradicionales, o el árabe como lengua e identidad en el Norte contra lenguas tribales, el juba, el árabe y/o el inglés en el Sur.

Violencia institucional: Islamización, políticas estatales y legislación

Desde 1989, el gobierno islamista se ha embarcado en varias políticas para suprimir el avance de las mujeres en Sudán bajo la bandera de las supuestas exigencias del decoro islámico. Su primera medida fue el despido masivo de mujeres de la administración pública, que afectó a casi el 80% de las mujeres en oficinas gubernamentales, especialmente en las profesiones jurídicas y médicas, el Ministerio de Trabajo y el periodismo (Africa Watch, 1993). Fueron despedidas debido a sus afiliaciones políticas e ideologías laicas, y todas fueron sustituidas por cuadros islámicos. Además, se atacó violentamente a las vendedoras ambulantes del sector informal; se afirmó que afeaban la ciudad de Jartum (ibíd.).

Las medidas normativas que los islamistas impulsaron a principios de los años 90, mediante leyes, políticas, reglamentos estatales, decretos y órdenes, muestran su preocupación por el aspecto, la vestimenta y la conducta de las mujeres (Nageeb, 2004). Instituciones como las mezquitas, los medios de comunicación y el sistema

escolar hicieron hincapié en estas medidas, que fueron aplicadas por los tribunales de orden público, la policía y los servicios de seguridad (ibíd.). Los hombres, como guardianes sociales y religiosos, también tenían derecho a corregir la conducta de las mujeres según las normas estatales o basándose en el sentido ‘correcto’ de los hombres musulmanes (ibíd.).

Además, el nuevo gobierno militar añadió nuevos elementos al conflicto al imponer agresivamente un programa islamizado en el Sur, denominándolo yihad (guerra santa). En consecuencia, formaron nuevas milicias ‘solo árabes’ denominadas Defensa Popular, respaldadas por el ejército (Nageeb, 2004).

Las mujeres partidarias del proyecto islamista apoyaron la yihad proporcionando bienes, como oro y dinero personales, y sirviendo comida a los muyahidines (Hale, 1996). La violencia contra las mujeres por parte de la Defensa Popular, el Ejército sudanés y el Ejército para la Liberación de la gente de Sudán (el grupo de Sudán del Sur que luchaba por la paz y la igualdad) no estaba documentada, y la violencia contra la mujer en el período 1983-2005 no se destacó en los medios de comunicación internacional ni en la agenda internacional, a diferencia de lo ocurrido en Darfur, que se vio desbordado por la publicidad internacional sobre las violaciones generalizadas de mujeres. Sin embargo, esta nueva formación se consideró una amenaza para el tejido social y cultural de los grupos no árabes de Sudán, especialmente en otras partes del país, como Darfur, Abyei, las montañas Nuba y el Sur del Nilo Azul (Kameir, 2012; Tonnessen, 2017).

Aquí sostengo que la fuerza de la islamización, con mayores restricciones para las mujeres, no surgió de un vacío; de hecho, la situación estaba madura para desbaratar la contribución de las mujeres al desarrollo del país y despojarlas de los derechos que habían conseguido en los años sesenta y setenta. Desde principios de la década de 1980, Sudán se reformó con medidas sociales, económicas y políticas restrictivas, con la introducción de las leyes de la Sharia, conocidas como Leyes de Septiembre, en 1983, que pusieron fin al acuerdo de paz de Addis Abeba (1972—83) entre el Norte y el Sur y desencadenaron la guerra en el Sur. Las medidas restrictivas incluían el uso obligatorio del hiyab, el requisito de la aprobación del tutor masculino para que las mujeres viajaran dentro y fuera del país, y un acceso mínimo de las mujeres a la igualdad de beneficios en ámbitos como la vivienda: por ejemplo, independientemente de que una mujer casada trabaje, solo su marido tiene derecho a recibir el subsidio de vivienda, ya que es el sostén económico reconocido. Esto pone en peligro el acceso de las mujeres a algunos de sus derechos económicos.

Regular a las mujeres: prohibiciones de empleo, códigos de vestimenta y tribunales de orden público

En septiembre de 2000, el gobernador de Jartum promulgó un decreto que restringía los derechos de las mujeres al empleo, a pesar de que su derecho al trabajo se había conseguido en la década de 1960, así como el derecho a la igualdad salarial, a la baja por maternidad y a una pensión a principios de la década de 1970 (Ahmad, 2014). El gobernador promulgó un decreto prohibiendo a las mujeres trabajar en hoteles, restaurantes y gasolineras con la recomendación de que ‘[dichos] proveedores de servicios contraten a esas mujeres en otros lugares’, y con directivas claras para las autoridades de asuntos sociales, el gobierno local y las fuerzas policiales y de seguridad ‘para que pongan en práctica esta decisión de inmediato’. Estas instrucciones se distribuyeron a todos los periódicos. La justificación que dio el gobernador fue que se hacía “en consideración al Estado, que busca la dignidad de las mujeres y situarlas en el lugar que se merecen según el proyecto de civilización de la nación y de acuerdo con nuestras tradiciones y los valores de nuestra religión” (ibíd.). Esta justificación socava la posición de las mujeres que son el único sostén de sus familias y pone de relieve la remodelación islamista de los roles de género en el ámbito público. El Grupo de Solidaridad con las Mujeres se creó para apoyar a las trabajadoras despedidas y consiguió llevar el decreto ante el Tribunal Constitucional, donde logró congelar la ley pero no abolirla (ibíd.).

La Ley de Orden Público que se aprobó en el Estado de Jartum en 1996, emblemática de la politización de las identidades étnico—religiosas (Árabe—Islam), es también una declaración autoritaria sobre el estatus de las culturas minoritarias que viven bajo la ley Sharia, así como de las mujeres (Abusharaf, 2009). Esta ley fue aprobada por el gobierno para frenar las prácticas que considera no islámicas, y las personas que no la cumplen son llevadas ante los tribunales. La ley abarca una serie de actividades que afectan al empleo femenino, la imposición de la vestimenta islámica (el hiyab) y la prohibición de la ropa tradicional de las mujeres (ibíd.).

Mis recuerdos sobre la aprobación de la ley son los siguientes:

Recuerdo que cuando se promulgó la ley en 1996, un grupo de amigas y yo estábamos muy enfadadas, sentíamos que habíamos perdido nuestra capacidad de elegir y decidir por nosotras mismas, no solo qué ponernos. Era totalmente inaceptable, nos negábamos a llevarlo [el hiyab]; sin embargo, cada vez que queríamos salir de casa teníamos mucho miedo de ser atacadas o llevadas a los tribunales. Por eso solíamos llevar un pañuelo en el bolso; la mayoría de las mujeres lo llamaban ‘Por si acaso’. Cada vez que salíamos de casa nunca estábamos seguras de que volveríamos a ella; perdíamos nuestra seguridad y nuestra paz interior.

Para garantizar la aplicación de esta ley, el gobierno la incorporó con determinados artículos del Código Penal de 1991 y confirió al Tribunal Supremo, al Tribunal de Apelación y a los tribunales penales generales plena autoridad para encarcelar, multar, azotar, confiscar y aplicar cualquier castigo que considerasen oportuno a los infractores (Abusharaf, 2009). Los artículos del Código Penal de 1991 se refieren principalmente a los delitos contra el honor, la reputación y la moralidad pública. La ley define una serie de delitos relacionados con lo que generalmente se entiende por mantenimiento del ‘orden público’. Esta parte identifica una serie de delitos y penas que regulan la interacción entre hombres y mujeres en los ámbitos público y privado. El artículo 152, ‘Actos indecentes e inmorales’, reza así: Quién cometa, en un lugar público, un acto, o se comporte de forma indecente o inmoral o se vista de forma que cause molestias a los sentimientos públicos, se castigará con azotes que no excedan los 40 latigazos, o con multa, o con ambas penas” (ibíd.).

En julio de 2009, Lubna Hussein, periodista que trabajaba con la ONU en Jartum, difundió públicamente la historia de su juicio con la policía de orden público. Fue detenida junto con otras doce mujeres en un restaurante de Jartum y condenada a recibir cuarenta latigazos por vestir indecentemente; llevaba pantalones. Su caso, que más tarde se conoció como el de la ‘periodista de los pantalones”, fue ampliamente descrito como un ejemplo de la subordinación de las mujeres musulmanas, especialmente por los medios de comunicación del Norte global (Fadlalla, 2011). En Sudán, tras su dimisión de su trabajo en la ONU, el caso de Lubna fue retomado por mujeres, activistas de derechos humanos y políticos que aprovecharon la oportunidad que les brindaba para que el público se opusiera a esta ley opresiva que restringía la vida pública de las mujeres. Aunque fue declarada culpable en el juicio y condenada a cuarenta latigazos, a una multa de 500 libras sudanesas o a un mes de prisión, Lubna no fue azotada. Se negó a pagar la multa y decidió ser encarcelada durante un mes; sin embargo, el sindicato de periodistas pagó la multa en su nombre y fue liberada. Este sindicato es un cuerpo gubernamental no elegido (ibíd.). En el juicio, el testigo masculino de la policía que la detuvo hizo declaraciones contradictorias y describió detalles de su cuerpo. Según relató Fadlalla, “como agentes de policía, que habían jurado decir la verdad, tenían derecho a contemplar el atuendo corporal de Lubna y a describirlo gráficamente al público... [ofreciendo] al público en general la oportunidad de mirar de cerca su ropa interior, el ombligo y el brasier”. El juez declaró que “los pantalones eran ajustados, mostrando sus muslos y su ropa interior”. Fadlalla argumenta que “la descripción gráfica del vestido de Lubna evoca los argumentos clásicos de las antropólogas feministas según los cuales los cuerpos de las mujeres sirven como lugares de debates políticos, conflictivos sobre moralidad, contención, regulación social y la Ley de Orden Público” (ibíd.).

A pesar del éxito de la campaña en torno al caso de Lubna en arrojar luz sobre la Ley de Orden Público en Sudán, y la movilización nacional e internacional durante su juicio, resultó ser un fracaso. Como afirma Fadlalla (2011): “Lubna escribió un cínico contraargumento en el que comentaba cómo su posición de clase y sus alianzas la habían librado de la flagelación y el encarcelamiento”. Fadlalla continúa diciendo que “dos semanas después, tras el segundo juicio de Lubna, dos ingenieras detenidas con ella fueron condenadas a 20 latigazos”. Lubna viajó mucho, hablando de los derechos de las mujeres en Sudán, pero nunca formó parte del activismo femenino en Sudán. Las activistas sudanesas continuaron con su lucha diaria para abolir la Ley de Orden Público.

Según Nuba Reports (2017) sobre los tribunales de orden público, el 70% de los casos afectaban a mujeres. La Ley de Orden Público ha tenido un impacto significativo en la vida de muchas mujeres en Sudán, especialmente en las mujeres pobres y en las que viven en zonas marginadas, así como en las estudiantes de escuelas y universidades. Los tipos de penas impuestas a las mujeres por los tribunales de orden público incluyen castigos físicos, multas y prisión (ibíd.). Los tipos de delitos que llevan a mujeres y niñas ante los tribunales son la vestimenta indecente, la venta de licor y los actos obscenos (figura 6.1). Tras la secesión de Sudán del Sur en 2011, Jartum perdió el 75% de sus ingresos del petróleo y el gobierno sudanés comenzó a ampliar el número de tribunales de orden público en todo el país para aumentar agresivamente la recaudación de ingresos. Un abogado, Sabir Saeed, dijo que ahora hay veintidós tribunales policiales de orden público solo en Jartum y que están en casi todas las ciudades del país (ibíd.).

Violencia, guerra y conflicto

El conflicto Norte—Sur fue el principal catalizador del sufrimiento y el deterioro de la situación de las mujeres en Sudán del Sur, las montañas Nuba, el Sur del Nilo Azul, Abyei y Darfur. Más de 1.9 millones de personas murieron y 4 millones se vieron obligadas a huir del Sur y buscar refugio en el Norte o en países vecinos como Kenia, Uganda y Etiopía. Algunos incluso consiguieron llegar a Europa y Norteamérica. La mayoría de los desplazados y refugiados eran mujeres y niños.

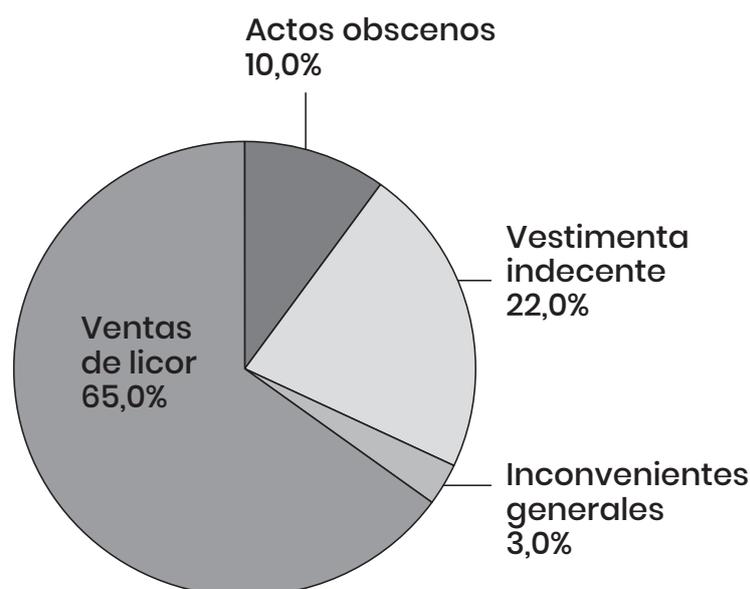


Figura 6.1 Tipos de casos de orden público

Mujeres sur sudanesas: desplazamiento, marginación y guerra

Los desplazados internos de Sudán del Sur, tanto mujeres como hombres, sufrieron múltiples niveles de discriminación, especialmente los que vivían en el Norte. Además de la pobreza, las mujeres en particular se enfrentaban a muchos retos culturales, como la asimilación forzosa, incluida la MGF para ser aceptadas culturalmente hasta cierto punto (Abusharaf, 2009). La mayoría de las desplazadas carecían de muchas de las cualificaciones necesarias para competir en el mercado laboral del Norte de Sudán. En consecuencia, muchas trabajaban en la venta de té y alimentos y en la elaboración de alcohol, que estaba prohibida junto con el trabajo sexual² por la Sharia (ibíd.). No es de extrañar que la mayoría de las mujeres encarceladas en las prisiones del Norte de Sudán procedieran del Sur, de las montañas Nuba, del Sur del Nilo Azul, de Abyei y de Darfur. La ley afectaba a su contribución económica y las exponía al riesgo de ser azotadas, multadas y encarceladas (Clancy, 2012).

Sin embargo, el sufrimiento de las mujeres no las detuvo para establecer la paz como una prioridad en su agenda. Las refugiadas sur sudanesas en Kenia y Uganda consiguieron organizarse y formar grupos que incluían secciones del Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM\A) (Ahmad, 2014). Por primera vez, las mujeres del Sur lucharon en primera línea con los hombres por la independencia de Sudán del Sur. Muchas mujeres también consiguieron colaborar con las agencias de ayuda humanitaria, registrando a mujeres y asegurándose que las familias de los



Aldea nuba cerca de Kau, montañas Nuba, Sudán.

campos de refugiados de Uganda y Kenia tuvieran alimentos suficientes. Con la ayuda de los gobiernos de Kenia y Uganda, se impartieron clases de alfabetización para mujeres y sus hijos. Los desplazados internos del Norte se asentaron principalmente en los alrededores de Jartum, con el apoyo de organismos de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y CARE. El papel de la ONU y de otras organizaciones de ayuda internacional varió desde la distribución de alimentos hasta la construcción de escuelas y campamentos, pasando por la sensibilización, el saneamiento, etc. (ibíd.).

Patrones de subyugación y violencia en Darfur: la violación como arma de guerra

Darfur había sufrido un nivel diferente de conflicto y discriminación a partir de la década de 1980, asociado sobre todo al subdesarrollo y la falta de recursos. Sin embargo, en el conflicto actual, sobre todo entre 2003 y 2005, las mujeres fueron cada vez más víctimas de violaciones masivas y violencia sexual (Fricke y Khair, 2007). Más de 600,000 personas murieron y más de 2,000,000 fueron desplazadas. Amnistía Internacional declaró que las violaciones de mujeres en Darfur eran sistemáticas y se utilizaban como arma de guerra. Una refugiada que vivía en Darfur occidental en mayo de 2004 describió la situación:

Estaba durmiendo cuando se produjo el ataque. Los atacantes me llevaron vestida de caqui y de civil junto con docenas de otras chicas y tuve que caminar durante tres horas. Durante el día nos golpearon y los janjawid (la milicia gubernamental) nos dijeron ‘mujeres negras, las exterminaremos, no tenéis Dios’. Nos llevaron a un lugar en el monte [donde] los janjawid nos violaron varias veces por la noche, durante tres días. No recibimos comida y casi ni agua. (Hashim, 2009)

Muchas víctimas de violación y sus familias están profundamente traumatizadas, ya que la violación tiene como objetivo específico aterrorizar y subyugar a comunidades enteras y afecta a su tejido social. En la cultura conservadora de Darfur, el estigma de la violación es difícil de superar; como señaló una mujer Fur: “Nadie aceptaría casarse con una mujer violada” (Human Rights Watch, citado en Hashim, 2009). Sin embargo, la violencia sexual contra las mujeres en Darfur se ha convertido en algo cotidiano, una mujer del Norte de Darfur lo subraya de forma conmovedora:

Cuando salimos del campamento a buscar leña, preferimos ir como mujeres que enviar a nuestros hombres. Cuando vamos nosotras solo nos violan, pero cuando van nuestros hombres los matan; preferimos que nos violen y volver. (Hashim, 2009)

El tema de las violaciones en el conflicto de Darfur ha atraído la atención de la comunidad internacional y se ha difundido en los medios de comunicación internacionales, a diferencia de la situación en el Sur de Sudán. El gobierno de Sudán no solo ha negado la incidencia de las violaciones en Darfur, sino que algunos miembros del partido gobernante afirman que la violación forma parte de la cultura de Darfur (Fricke y Khair, 2007). El difunto Magzoub Alkhalifa, gobernador de Darfur, afirmó, por ejemplo, que “las mujeres Darfuri son conocidas por ser promiscuas y desvergonzadas”. La negación de las violaciones en Darfur por parte del Estado se ve reforzada por el hecho de que el enjuiciamiento de los casos de violación en Sudán es extremadamente difícil y los tribunales imponen una mayor carga de la prueba en las mujeres más que en los hombres, debido a una ley injusta, especialmente el artículo 149 del Código Penal de 1991, que define la violación como adulterio (Hashim, 2009).

La afirmación de Alkhalifa estaba sin duda relacionada con los prejuicios de muchos sudaneses arabizados del Norte, procedentes del centro, sobre las mujeres de Darfur. Tales prejuicios chocan con su posición económica y sociocultural real y reconocida. Las mujeres de Darfur son conocidas por su importante contribución económica y su activa participación en las economías de mercado y agrícola, especialmente como

vendedoras de artesanía y en trabajos de alimentación y construcción. Las mujeres son las principales proveedoras económicas en muchas partes de Darfur y, por lo tanto, ocupan esferas públicas. Su principal función es alimentar a sus familias, por lo que tienen campos más grandes en los que cultivar (mijo y sorgo) y almacenes de grano más grandes que los de sus esposos (Hashim, 2009). Los hombres, por su parte, solo tienen que aportar la cantidad de grano que necesitan para su propio consumo. Esto les permite cultivar productos comerciales, como cítricos de regadío, para comerciar, o realizar trabajos asalariados, ya que se espera de ellos que paguen todo lo que cuesta dinero, como ropa o utensilios. Para ganar este dinero, los hombres pasan mucho tiempo fuera de sus aldeas, mientras que las mujeres se ocupan de la vida cotidiana dentro de la aldea. Las mujeres son las ‘guardianas de la tierra’ de facto. En la práctica, las mujeres necesitan tener algún ingreso y los hombres no siempre están cerca para proporcionárselo cuando surge la necesidad. Esto ha llevado a los hombres del Norte a pensar erróneamente que los hombres Darfuri no son suficientemente responsables porque no controlan a sus mujeres (ibíd.).

Las organizaciones internacionales fueron la principal fuente de informes y documentación sobre la violencia en Darfur, a través del trabajo de Médicos Sin Fronteras (MSF—Holanda), CARE, el Comité Internacional de Rescate y algunas de las oficinas de la ONU. Proporcionaron servicios médicos y psicológicos a las víctimas de violaciones y la mayoría de sus informes se hicieron públicos, allanando el camino para que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una acusación contra el presidente al—Bashir en 2009. Como reacción a la CPI, el gobierno expulsó a trece organizaciones internacionales y locales sospechosas de contribuir a la decisión de la CPI. Esta reacción creó un enorme vacío en la prestación de servicios a las víctimas de violación. En respuesta a la presión internacional, el Gobierno de Sudán creó un comité, financiado en su mayor parte por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y dependiente del Ministerio de Justicia, para hacer frente a la violencia contra las mujeres en Darfur (Hashim, 2009).

Aprendiendo de las mujeres de Sudán del Sur, las de Darfur mostraron una presencia efectiva en las negociaciones de paz e insistieron en que debería haber una representación real de las mujeres en todos los asuntos que conciernen a sus vidas y a sus familias.

Resistencia y organización de las mujeres en el Sudán moderno: fracasos y éxitos

El éxito inicial de las mujeres en organizarse surgió del movimiento anticolonialista y nacionalista, en el que la independencia y la soberanía del país eran los principales objetivos. El género y los derechos de la mujer no eran el centro de su activismo (Ahmad, 2014). El movimiento moderno de mujeres sudanesas comenzó a finales de la década de 1940, cuando las mujeres empezaron a formar organizaciones, dirigidas en su mayoría por mujeres educadas. En 1952 se fundó la Unión de Mujeres (WU) como parte del movimiento nacionalista. La WU, a pesar de su ideología socialista, pretendía unir a las mujeres en una organización independientemente de sus afiliaciones políticas (Ali, 2015; Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009; Hale, 1996). Al igual que el movimiento nacionalista, la WU era esencialmente urbana, educada y de clase media; las mujeres del Sur y rurales permanecieron en la periferia extrema del movimiento. Sin embargo, esta fue la tendencia de todos los movimientos anticoloniales durante las décadas de 1950 y 1960.

La interdependencia entre el nacionalismo y el feminismo en los países del Tercer Mundo o del Sur Global, destacada por Jayawardena (1986, citado en Ahmad, 2014), confirmó los beneficios que las mujeres podían obtener participando en las luchas nacionalistas. Jayawardena analizó la idea de que los proyectos nacionalistas permitían a las mujeres cierto espacio para la resistencia y reforzaban tanto su capacidad como la confianza en sí mismas al concederles acceso al trabajo y a la educación. Sin embargo, sostuvo que en India y otros países en los que la burguesía local sustituyó a los gobernantes imperialistas mediante un proceso de negociación y reformas graduales, la lucha de las mujeres no fue más allá del ámbito de las reformas limitadas: es decir, la igualdad de la mujer en los procesos legales, el derecho al voto y el derecho a la educación y a la propiedad. En Sudán, como en muchos otros casos de mujeres del Sur Global que participaron en un movimiento anticolonial, las mujeres de estos movimientos nacionalistas no abordaron la cuestión básica de la subordinación de la mujer dentro de la familia y la sociedad (Ahmad, 2014).

Además, estas reformas no tuvieron el mismo efecto en todas las mujeres. Diferencias de etnia, religión y situación geográfica, especialmente en el caso de Sudán, hizo que muchas mujeres se vieran privadas de los beneficios de dichas reformas. Las mujeres de los proyectos nacionalistas expresaron la modernidad ejerciendo sus derechos a través del sufragio, la educación y el empleo; sin embargo, los derechos dentro de

la familia quedaron intactos. La WU fue un claro ejemplo. Cuando sus miembros reclamaron la participación política y el derecho al voto, este paso se encontró con la resistencia de sus hermanas islamistas, que lo calificaron de no islámico. Esta fue la primera escisión dentro de la Unión Femenina, que dio lugar al surgimiento de una nueva organización de mujeres, el Frente Nacional de Mujeres (FNM), que se estableció a principios de la década de 1960 como un ala de la Hermandad Musulmana, que ha gobernado Sudán desde 1989 (Ahmad, 2014; El Bakri, 1995). Hasta la fecha, el movimiento de mujeres sigue dividido en gran medida entre la ideología socialista de la WU y el Islam político del NWF. La organización de las mujeres en Sudán sigue fragmentada, entre los partidos políticos y el feminismo de Estado, y los hechos de la violencia contra las mujeres, la familia y la sexualidad nunca se han convertido en una prioridad (Ahmad, 2014; El Bakri, 1995).

La contribución de las mujeres al movimiento nacionalista está también conectada con las diferencias de género, raza, etnia y religión y con sus intersecciones. Ciertamente, solo las mujeres que pertenecen al proyecto nacionalista dominante se benefician de él. Las mujeres que forman parte de un proyecto nacionalista minoritario dentro del mismo espacio geográfico (es decir, porque difieren en etnia y religión) sufren mayoritariamente la opresión a manos de los hombres y mujeres nacionalistas dominantes. En Sudán, como ya se ha mencionado, la construcción de la nación y la formación del Estado a menudo implicaban fomentar o imponer la hegemonía cultural, como demostraron las élites del Norte de Sudán al imponer la cultura árabe e islámica. Esta estrecha definición del Estado desembocó en el conflicto Norte—Sur de 1955—2005 (Ahmad, 2014).

La década de los sesenta fue el punto álgido de la UMC, ya que las mujeres obtuvieron el derecho a votar y a presentarse en las elecciones. En 1965, la primera mujer elegida al Parlamento fue la presidenta de la WU. En 1968, las mujeres también consiguieron el derecho a la igualdad de remuneración por el mismo trabajo, la formación y promoción, y la abolición de los contratos mensuales para las mujeres casadas (Hall e Ismail, 1981; Badri, 2009; El Bakri, 1995, Ibrahim, 1996). Además, consiguieron que todos los trabajos profesionales estuvieran disponibles para las mujeres. Así, las mujeres pudieron acceder a la judicatura y convertirse en juezas, incluso en tribunales de derecho personal; pudieron servir como diplomáticas, en las fuerzas armadas y en la policía, y pudieron trabajar en hoteles. Hicieron demandas, sobre todo en materia de derecho personal, y consiguieron que las niñas tuvieran derecho a ser consultadas antes del matrimonio y las mujeres el derecho al divorcio en caso de abuso y cuando decidieran no continuar en un matrimonio, siempre que devolvieran la dote.

Abolieron la ley de obediencia y permitieron a las madres la custodia de sus hijos varones hasta los diecisiete años y de sus hijas hasta el matrimonio (Ibrahim, 1996). En caso de divorcio, los hijos tenían derecho a recibir una pensión alimenticia de sus padres, siempre que no superara la mitad de los ingresos del padre (ibíd.). Aunque a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 algunas de las generaciones más jóvenes de la Unión Femenina plantearon algunos temas relativos a la violencia contra las mujeres, como la mutilación genital femenina, la violencia doméstica y los matrimonios forzados, los dirigentes de la Unión se opusieron a ello (El Bakri, 1995).

A pesar de la división entre la WU y la NWF, ambas se enfrentaron al ‘feminismo de Estado’ entre 1971 y 1985 (Tonnessen, 2017). Algunos miembros de la WU se unieron a la recién creada organización Unión de Mujeres Sudanesas (SWU), controlada principalmente por el Estado y que monopolizaba las intervenciones en el ámbito de los derechos de las mujeres (ibíd.). A diferencia de la WU, que dependía económicamente de las contribuciones de sus miembros, la SWU contaba con el pleno apoyo del Estado para todas sus necesidades financieras. Como afirma Khalid (1995), este período de la historia del movimiento feminista “fue testigo de muchos cambios fundamentales en las relaciones sociales, políticas y económicas, que reflejaban más o menos la ideología del Estado”.

El régimen conocido como la Revolución de Mayo (1969 – 1985) terminó con un gobierno elegido democráticamente y lo reemplazó por uno de un solo partido. La WU fue prohibida y pasó a la clandestinidad, junto con el Partido Comunista, (El Bakri, 1995). En la década de 1980, el gobierno se enfrentó a numerosos retos, como la recesión económica en Oriente Medio, combinada con la hambruna en el oeste de Sudán y las políticas de ajuste estructural. Cabe mencionar que el régimen consiguió firmar el primer acuerdo de paz con el Sur en 1972 en Addis Abeba (Etiopía), poniendo así fin al conflicto. Sin embargo, el conflicto estalló de nuevo en 1983 debido a la aplicación de las leyes de la Sharia en ese año bajo la influencia de los islamistas (Khalid, 1995). Durante este régimen, las mejoras en los servicios educativos, especialmente en las zonas rurales y en el Sur, se ampliaron enormemente. Además, las mujeres se convirtieron en ministras y juezas y muchas alcanzaron puestos de dirección intermedios en los departamentos de la administración pública, confirmando la igualdad de oportunidades para acceder a la formación y a la educación superior (ibíd.).

Tras la caída del gobierno militar, el desmantelamiento de las instituciones gubernamentales —incluidas las SWU— dejó un vacío en la representación colectiva

de las mujeres. El auge del Islam político atrajo a muchas jóvenes urbanas. El indicador más grave de lo que El Bakri denomina crisis del movimiento de mujeres sudanesas fue “la incapacidad de las organizaciones de mujeres existentes para tratar los problemas de las mujeres o atraer a suficientes mujeres y transformarse en una masa crítica” (El Bakri, 1995).

Tras el levantamiento de 1985, el gobierno no consiguió aliviar la crisis económica, la inflación siguió disparándose y la escasez de bienes de consumo “se vio acompañada de un floreciente mercado negro” (El Bakri, 1995). No se abolieron las leyes islámicas ni otras leyes represivas. No se levantó el estado de emergencia. No había planes para poner fin al conflicto en el Sur. Las mujeres no estaban representadas en ningún proceso de toma de decisiones (ibíd.). No se derogaron las leyes islámicas de 1983 (las Leyes de Septiembre), que establecían varias restricciones a la condición jurídica de la mujer; en su lugar, se introdujo un nuevo código de vestimenta para las mujeres que trabajaban en el gobierno. Además, las mujeres casadas que trabajan en el gobierno tienen ahora derecho a dos tercios del subsidio de vivienda de los funcionarios varones (ibíd.); esto se basaba en la creencia de que las mujeres casadas tienen una menor responsabilidad económica, ya que tienen un marido que es el principal sostén de la familia. Se creó un comité de mujeres en el Departamento de Pasaportes e Inmigración para hacer cumplir las restricciones impuestas a las mujeres que viajan al extranjero sin la compañía de un familiar varón. El pretexto era impedir que las mujeres que viajaban a los países árabes ricos en petróleo para ejercer el trabajo sexual dañaran gravemente la reputación de Sudán en el extranjero (ibíd.).

Tras la caída de la Revolución de Mayo, la WU reactivó sus actividades y abrió sus puertas a nuevos miembros. Anunciaron que cualquier mujer, independientemente de su ideología política, podía ser miembro siempre que no tuviera mala reputación y no hubiera participado en el régimen anterior (El Bakri, 1995). Para las organizaciones de mujeres sudanesas, la agenda de las mujeres era menos importante que su afiliación ideológica primaria, es decir, los partidos políticos y el Estado, dominados mayoritariamente por hombres.

El NWF surgió tras el levantamiento como uno de los grupos de mujeres más fuertes y mejor financiados. Su posición ideológica es la misma que la de los Hermanos Musulmanes, siendo su principal objetivo difundir el Islam y establecer una nación islámica. El NWF “vigorosamente proclama imágenes del ideal de mujer y familia musulmana” (El Bakri, 1995) a través de los medios de comunicación. También creó una organización de voluntariado, cuyas principales recomendaciones, formuladas en el momento de su fundación, eran luchar contra la discriminación sexual en el empleo;

pedir la ampliación de la licencia maternal a seis meses (en lugar de dos) con sueldo completo; instar a los empresarios a que proporcionen transporte a sus trabajadoras; y organizar a las mujeres del sector informal (ibíd.).

Tras el levantamiento de 1985, el ejército asumió el poder durante un año, preparando el país para las elecciones de 1986. Se eligió un nuevo gobierno, y durante su mandato (1986—89) Sudán firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Sin embargo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) no se firmó ni ratificó, ya que la agenda de la mujer no se consideró prioritaria (El Bakri, 1995).

El movimiento de mujeres se vio atrapado entre el feminismo de Estado y los escasos partidos políticos: por ejemplo, las Hermanas Musulmanas, actualmente denominadas Unión General de Mujeres Sudanesas (SWGU), cuentan con el apoyo del gobierno islamista. La doctrina de la SWGU sobre la mujer se basa en la idea de la equidad de género, pero no de la igualdad, es decir, las mujeres y los hombres no son iguales sino que tienen funciones y responsabilidades complementarias debido a sus diferencias biológicas (Tonnessen, 2017). Por lo tanto, las mujeres tienen que llevar el hiyab y criar a los hijos para construir una auténtica (nación) islámica. El SWGU también afirma que las necesidades sexuales de los hombres son prodigiosas y, por lo tanto, aprueba la poligamia para que los hombres puedan satisfacer sus necesidades sexuales. Sin embargo, también confirma que las mujeres son parte integrante del movimiento islámico (Hale, 1996). Esto coincide con la afirmación de Moghadam:

Cabe suponer que, en la primera etapa del movimiento islamista, la incorporación de las mujeres al mercado laboral suscitó el temor a la competencia con los hombres, lo que dio lugar a llamamientos a la redomesticación de la mujer, como ocurrió en la Revolución iraní. En la etapa actual, en la que la participación de la mujer en el mercado laboral es ya un hecho consumado, los islamistas de Turquía, Irán, Egipto, Sudán y Yemen no piden a las mujeres que se retiren del mercado laboral, de hecho, muchas de sus seguidoras tienen estudios y empleo, pero también insisten en el velo y en la segregación espacial y funcional. (Moghadam, 1999)

Esto concede a las mujeres derechos en el ámbito público para participar en la política, trabajar fuera de casa y recibir educación, a condición de que se comporten piadosamente y vistan de forma modesta. En este sentido, la organización de mujeres musulmanas resulta ser la organización femenina más fuerte, y la política del gobierno hacia las mujeres se mantiene en el período actual (desde 1989 hasta la fecha).

Nuevas tendencias y cambios: organizaciones no gubernamentales de mujeres

Durante los preparativos para la Cuarta Conferencia de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Beijing a mediados de la década de 1990, las mujeres sudanesas experimentaron un nuevo cambio, creando organizaciones de mujeres al margen de los partidos políticos y el Estado, lo que allanó el camino para la aparición de una nueva ola. Empezaron a ocuparse de cuestiones como la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, las reformas jurídicas (incluida la ley personal y el Código Penal de 1991), la asistencia jurídica, la paz, los derechos de ciudadanía, la capacitación, la participación política de las mujeres, la concientización sobre los derechos de la mujer, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por citar algunos (Hashim, 2009). La naturaleza del activismo cambió notablemente durante las décadas de 1990 y 2000, especialmente tras la firma del Acuerdo General de Paz en 2005, que fue testigo de la afluencia de donantes y organizaciones internacionales para apoyar tanto al Norte como al Sur. Las organizaciones de mujeres empezaron a recibir formación sobre conceptos de género, derechos de la mujer, paz y violencia contra las mujeres (Ahmad, 2014). Esto ha contribuido a fomentar el interés por las relaciones de género y a unir a las mujeres para crear alianzas que les permitan alcanzar algunos de esos derechos (Tonnessen, 2017).

Contra viento y marea: las organizaciones de mujeres del Sur de Sudán

La participación de las mujeres sur sudanesas en la esfera pública es un fenómeno reciente. Entre 1960 y 1970, las mujeres del Sur no podían aventurarse en la arena política; los hombres ocupaban principalmente esferas públicas como los negocios y el ejército y asumían cargos políticos. Las mujeres solían quedar relegadas al papel estereotipado de criadoras y cuidadoras. Sin embargo, tras la firma de la paz de Addis Abeba acordada en 1972, aunque la visibilidad de las mujeres en la política era limitada en comparación con el Norte, estaba viva en Sudán del Sur. Además, algunas mujeres del Sur se habían unido a la SWU durante la Revolución de Mayo (Edward, 2011). El mayor avance para la participación y representación política de las mujeres del Sur a nivel gubernamental se produjo entre 2005 y 2011, tras la firma del Acuerdo

General de Paz, que otorgó a las mujeres un 25% de representación en la Asamblea Legislativa. El anterior Gobierno de Sudán del Sur fue testigo de un aumento del número de mujeres en los niveles de toma de decisiones, como gobernadoras estatales, ministras, embajadoras y asesoras presidenciales para cuestiones de género.

Sin embargo, la trayectoria política de las mujeres en el Sur no se produjo sin desafíos, algunos de los cuales surgieron de factores socioculturales: educación, etnia, clase y antecedentes regionales y familiares. Prácticas como los matrimonios forzados y concertados impidieron a las mujeres proseguir su educación y afectaron aún más a su participación política y a sus futuras carreras. El difunto Dr. John Garang, jefe del SPLM/A, fallecido en accidente aéreo en agosto de 2005, fue el primer líder sur sudanés que reconoció el papel de la mujer en la esfera pública. Las leyes consuetudinarias siguen siendo un verdadero reto en la vida de las mujeres del Sur, dificultándoles escapar de la esclavitud de su papel étnico/doméstico, que relega a las mujeres a ciudadanas de segunda clase (Edward, 2011).

Intentos exitosos: Las mujeres sudanesas construyen colectivos

Las mujeres del movimiento islámico siguen apoyando firmemente las políticas del gobierno, incluida la Ley de Orden Público. A pesar de esta compleja y difícil situación, algunas organizaciones de mujeres han sido capaces de elaborar estrategias y establecer conexiones tanto a nivel local como global. Iniciativas como la campaña 149³ Alliance para reformar la ley de violación de 1991, lanzada en 2008 con el apoyo de Women Living Under Muslim Laws (Mujeres que viven bajo leyes musulmanas), triunfó en 2015 tras muchos años de campaña. Sin embargo, el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo difícil.

El Sudanese Women Empowerment for Peace fue otro colectivo creado en 1997 por la embajada de los Países Bajos en Jartum y Nairobi para tender puentes entre las mujeres del Norte, el Sur y las montañas Nuba. Esta iniciativa reunió a mujeres sudanesas y exiliadas para trabajar por la paz. Recibieron una formación intensiva que permitió a algunas del sur sudanesas trabajar en el gobierno. A pesar de sus diferencias, estas mujeres consiguieron unirse y trabajar por la paz, alcanzando una agenda mínima en el año 2000 en Maastricht. Sin embargo, sus contribuciones a la negociación de paz fueron insignificantes.

Conclusión

Es difícil hablar de economía política y de la desigualdad de las mujeres en un contexto como el de Sudán y Sudán del Sur sin tener en cuenta la desigualdad mundial y sus medios y mecanismos neoliberales. Tanto en Sudán del Norte como en Sudán del Sur, el conflicto fue uno de los principales causantes del deterioro de la situación de las mujeres sudanesas, así como el principal instigador de formas específicas de violencia de género. La discriminación legal — ya sea bajo las leyes islámicas o el derecho consuetudinario — controla la movilidad de las mujeres y restringe su vida pública. Esto demuestra claramente que el Islam no es la única herramienta utilizada para discriminar a las mujeres. Está claro que las normas sociales, la familia extendida, las reglas étnicas y el matrimonio son más eficaces a la hora de imponer ciertas limitaciones a las mujeres. Ya sean cristianas o musulmanas, las normas patriarcales tienen más poder sobre la participación social de las mujeres. Estas normas han adoptado diferentes formas, como los matrimonios forzados y los matrimonios infantiles, la preferencia de los hombres sobre las mujeres y el estigma en torno a la sexualidad, violencia sexual y derechos reproductivos, algunos de los cuales nunca han figurado en la agenda del movimiento de mujeres.

A lo largo de su historia, Sudán ha tenido un movimiento de mujeres segmentado. En general, no ha sido independiente y se ha movido entre los partidos políticos y el feminismo estatal. Esto no permitió que creciera un movimiento unido y fuerte, y siguió siendo un ala del patriarcado, permitiendo derechos reducidos y limitando la acumulación de experiencias y retos por parte de las mujeres. Las pioneras que lideraron el movimiento lucharon por algunos derechos de la mujer, como el derecho al trabajo y el acceso a la educación, la igualdad de pago por igual trabajo y el derecho a la participación política. Sin embargo, la nueva oleada de organizaciones independientes de mujeres depende por completo de la financiación de los donantes y se enfrenta a un régimen restrictivo que controla la libertad y la autonomía de las mujeres. Las mujeres pioneras y el trabajo que hicieron no se mantienen en la nueva ola, aunque a veces su sombra o la agenda de sus partidos políticos sigue ahí en espíritu.

En la era del feminismo transnacional, las mujeres sudanesas siguen desconectadas: no están expuestas a las organizaciones de mujeres de otros países de contextos similares para aprender de ellos, como la movilización de las mujeres en Egipto, o los movimientos de mujeres iraníes y pakistaníes.

El decreto de 2000 del gobernador de Jartum fue congelado por el Tribunal Constitucional, no se emitió ningún otro decreto y las mujeres desempeñaron un papel importante en la resistencia contra la policía de orden público. La percepción de los islamistas es favorable a las mujeres, pero el control sobre sus cuerpos, su honor y su moralidad es uno de sus pilares centrales. Hay que garantizar a las mujeres del Sur el compromiso del gobierno con la paz y la seguridad. La política nacional de género y la reforma del derecho consuetudinario deben garantizarse creando alianzas y aprendiendo del fracaso del movimiento feminista en el Norte. Las mujeres tanto de Sudán como de Sudán del Sur tienen que construir un movimiento feminista de base, no solo de mujeres de élite sino de mujeres diversas y jóvenes, y tienen que llevar a cabo más investigación y trabajo en red.

Notas

1- Con respecto a Sudán del Sur, este capítulo cubre el Sur hasta la independencia en 2011 (2005-2011) y no incluye el estallido del conflicto interno en 2013.

2- La prostitución no se penalizó hasta 1983. Durante la colonización turco-egipcia en el siglo XIX, la prostitución y los servicios sexuales por dinero estaban dominados por mujeres en condición de esclavas. Con la disrupción de la economía de mercado, las esclavas fueron utilizadas como una mercancía y un enriquecimiento personal por parte de sus señores. Esta actividad se redujo por los británicos a finales del siglo XIX mediante la abolición de la esclavitud. Durante el período colonial británico, la prostitución estaba regulada y autorizada, con inspecciones médicas periódicas para proteger a las tropas británicas. Posteriormente, comenzaron a regular el consumo de alcohol en los burdeles, lo que se extendió y fue tolerado en casi todas las ciudades y pueblos. Las prostitutas nunca formaron parte del movimiento de mujeres porque se las consideraba inmorales, pero durante mucho tiempo han contribuido a la economía. Incluso después de la independencia, el sistema regulado por los británicos continuó y las prostitutas pagaban impuestos al gobierno. Después de la implementación de la Sharia, la prostitución se criminalizó y se castigó con 100 latigazos, multas o lapidación, pero sostengo aquí que, ya sea criminalizada o no, la prostitución siguió siendo una fuente de ingresos para el gobierno. Las prostitutas también participaron en acciones colectivas: los registros históricos confirman que las mujeres del barrio rojo de Jartum celebraron el Día de la Independencia de Sudán el 1 de enero de 1956 negándose a prestar servicios a hombres blancos durante dos días (Spaulding y Beswick, 2016).

3- La alianza estaba dirigida por el centro de recursos para mujeres de Salmmah, que fue cerrado por el régimen en 2014, el Centro de Empoderamiento de las Mujeres Sudanesas por la Paz, la Organización de Desarrollo de Sudán, el Grupo Al-Mutawinat, el Centro Alalag de Servicios de Medios y la Sociedad Sudanesa de Conservación del Medio Ambiente, así como el Centro Al-Amel para las Víctimas de la Tortura y el Centro de Derechos Humanos de Jartum, ambos cerrados por el gobierno en 2009.

Referencias

- Abusharaf, R. 2009. 'Competing Masculinities: Probing Political Disputes as Acts of Violence against Women from Southern Sudan and Darfur' in Hassan, S. and Ray, C. (eds), *Darfur and the Crisis of Governance in Sudan: A Critical Reader*. New York: Cornell University Press.
- AfDB. 2011. *The Political Economy of South Sudan: A Scoping Analytical Study*. Abidjan: African Development Bank (AfDB).
- Africa Watch. 1993. 'Threat to Women's Status from Fundamentalist Regime in Sudan', *Women Living Under Muslim Laws Dossier* 11/12/13: 40-2.
- Ahmad, M. 2014. 'The Women's Movement in Sudan from Nationalism to TransNationalism: Prospects for a Solidarity Movement'. PhD thesis, York University, Toronto.
- Ali, N. 2015. *Gender, Race and Sudan's Exile Politics*. Lanham MD: Lexington Books.
- Almosharaf, H. 2014. 'The Causes of Sudan's Recent Economic Decline', *IOSR: Journal of Economics and Finance* 2 (4): 26-40.
- Badri, H. 2009. *Women's Movement in the Sudan*. Omdurman, Sudan: MOB Center for Sudanese Studies.
- Brown, M. 2017. *Khartoum at Night: Fashion and Body Politics in Imperial Sudan*. Stanford: Stanford University Press.
- BTI. 2018. *BTI 2018: Sudan Country Report*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI).
- Clancy, D. 2012. *Falling through the Cracks: Reflections on Customary Law and the Imprisonment of Women in South Sudan*. Kampala: Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) Network.
- Edward, J. K. 2011. 'Women and Political Participation in South Sudan', *Sudan Tribune*, 7 September, www.sudantribune.com/spip.php?page=imprimable&id_article=40086 (consultado el 6 de mayo 2019).
- El Bakri, Z. 1995. 'The Crisis in the Sudanese Women's Movement' in Wieringa, S. (ed.), *Subversive Women: Women's Movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean*. London: Zed Books.
- Elrayh, E. 2014. 'Women's Rights in the Constitutional Bill of Rights: Issues of Status, Equality and Non-discrimination' in *The Constitutional Protection of Human Rights in Sudan: Challenges and Future Perspectives*. London: REDRESS, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/140127FINAL%20Sudan%20UoK%20Report.pdf> (consultado el 6 de mayo 2019)
- Fadlalla, A. 2011. 'State of Vulnerability and Humanitarian Visibility on the Verge of Sudan's Secession: Lubna's Pants and the Transnational Politics of Rights and Dissent', *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 37 (1): 159-84.

- Fricke, A. and Khair, A. 2007. *Laws without Justice: An Assessment of Sudanese Laws Affecting Survivors of Rape*. Washington DC: Refugee International.
- Government of Sudan. 2012. *Sudan Household Health Survey 2010: Round 2*. Khartoum: Ministry of Health and Central Bureau of Statistics.
- Gruenbaum, E. 2006. 'Sexuality Issues in the Movement to Abolish Female Genital Cutting in Sudan', *Medical Anthropology Quarterly* 20 (1): 121-38.
- Hale, S. 1996. 'Gender Politics and Islamization in Sudan', *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 14 (2): 51-66.
- Hall, M. and Ismail, B. 1981. *Sisters under the Sun: The Story of Sudanese Women*. London: Longman.
- Hashim, F. 2009. 'Sudanese Civil Society Strategizing to End Sexual Violence against Women in Darfur' in Hassan, S. and Ray, C. (eds), *Darfur and the Crisis of Governance in Sudan: A Critical Reader*. New York: Cornell University Press.
- Ibrahim, F. 1996. 'Sudanese Women's Union: Strategies for Emancipation and the Counter-movement', *Ufahamu* 24 (2-3).
- Idris, A. 2013. *Identity, Citizenship, and Violence in Two Sudans*. New York: Palgrave Pivot.
- IMF. 2013. 'Sudan: Interim Poverty Reduction Strategy Paper'. IMF Country Report 13/318. Washington DC: International Monetary Fund (IMF), www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Sudan-Interim-Poverty-Reduction-Strategy-Paper-41025 (consultado el 6 de mayo 2019).
- Kameir, E. 2012. *Perspectives on the Political Economy of South Sudan*. Abidjan: Fragile States Unit, African Development Bank.
- Khalid, T. 1995. 'The State and the Sudanese Women's Union, 1971-1983: A Case Study' in Wieringa, S. (ed.), *Subversive Women: Women's Movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean*. London: Zed Books.
- Makuei, G., Abdollahian, M. and Marion, K. 2018. 'Optimal Profile Limits for Maternal Mortality Rate (MMR) in South Sudan', *BMC Pregnancy and Childbirth* 18: 278, <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1892-0> (consultado el 6 de mayo 2019).
- Moghadam, V. 1999. 'Gender and Globalization: Female Labor and Women's Mobilization', *Journal of World-Systems Research* 5 (2): 366-89.
- Musawah. 2009. *Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family*. Kuala Lumpur: Musawah, www.musawah.org/wp-content/uploads/2018/11/MusawahHomeTruths_En.pdf (consultado el 6 de mayo 2019).
- Nageeb, S. 2004. *New Spaces and Old Frontiers*. Lanham MD: Lexington Books.
- No Safe Place. 2017. *No Safe Place: A Lifetime of Violence for Conflict-affected Women and Girls in South Sudan*. London: What Works, www.gwu.edu/~mcs/gwi/No_Safe_Place_Full_Report.pdf (consultado el 6 de mayo 2019).

- Nuba Reports. 2017. 'Courts Target Poor Sudanese Women with Extortionate "Morality" Fines', Nuba Reports, 1 December, www.newsdeeply.com/womenandgirls/articles/2017/12/01/courts-target-poor-sudanese-women-with-extortionate-morality-fines (consultado el 6 de mayo 2019).
- SIHA Network. 2015. *Third-class Citizens: A Paper on Women's Struggle for Equal Citizenship in Sudan*. Kampala: Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) Network, www.sihanet.org/publications/third-class-citizens-women-and-citizenship-in-sudan/ (consultado el 6 de mayo 2019).
- Spaulding, J. and Beswick, S. 2016. 'Sex, Bondage, and the Market: The Emergence of Prostitution in Northern Sudan, 1750–1950', *Journal of the History of Sexuality* 5 (4): 512–34.
- Tonnessen, L. 2017. 'Enemies of the State: Curbing Women Activists Advocating Rape Reform in Sudan', *Journal of International Women's Studies* 18 (2): 148–55, <http://vc.bridgew.edu/jiws/vol18/iss2/10> (consultado el 6 de mayo 2019).
- True, J. 2010. 'The Political Economy of Violence against Women: A Feminist International Relations Perspective', *Australian Feminist Law Journal* 32 (1): 39–59.
- True, J. 2012. *The Political Economy of Violence against Women*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- UNDP. 2015. *South Sudan: National Human Development Report 2015*. New York: United Nations Development Programme (UNDP), www.ss.undp.org/content/south_sudan/en/home/library/undp-global-reports/SSNHDR.html (consultado el 6 de mayo 2019).
- UN-HABITAT. 2014. *Sudan's Report for United Nation's Third Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) 2016*. Khartoum: UN-HABITAT and Ministry of Environment, Forestry and Urban Development, <http://habitat3.org/wp-content/uploads/Sudan-National-Report.pdf>



MUJERES POR UN DESARROLLO
ALTERNATIVO PARA UNA NUEVA ERA